

LA PAZ Y SUS MUJERES

LUCHA SOCIAL, RECONSTRUCCIÓN
COMUNITARIA Y EMPODERAMIENTO
DEL PERDÓN



cn

Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior

IGLADA MINEDUCACION

303 - Procesos sociales

Gerardo Andrés Machuca Téllez; Santiago Giraldo Luque;
Andrés Tafur Villareal; Victoria Sandino Simanca Herrera;
Gisela Martínez Fagella; Helena Rodríguez Gómez; Elena Bulet
i Llopis; Laura Casamitjana García; Laura Valentina Meneses
Palma

La paz y sus mujeres. Lucha social, reconstrucción comunitaria y
empoderamiento del perdón

Primera edición, Corporación Unificada Nacional, 2022

Clasificación Thema: JBSF1 - Estudios de género: mujeres y muchachas
JPWS - Conflicto armado

Tamaño: 14,8 x 21 cm

Páginas: 304

Título original: La paz y sus mujeres. Lucha social, reconstrucción comunitaria
y empoderamiento del perdón

© Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN
Bogotá, Colombia, diciembre de 2022

ISBN: 978-958-8191-82-9

Primera edición: diciembre de 2022

Escrito por: Gerardo Andrés Machuca Téllez
Santiago Giraldo Luque
Andrés Tafur Villareal
Victoria Sandino Simanca Herrera
Gisela Martínez Fagella
Helena Rodríguez Gómez
Elena Bulet i Llopis
Laura Casamitjana García
Laura Valentina Meneses Palma

Corrección de estilo: Coordinación de Publicaciones

Diseño de la cubierta: Jonathan Zambrano / Chaos Creativo

Diseño y diagramación interna: Jonathan Zambrano / Chaos Creativo

Fotografía de portada y contraportada con Licencia Creative Commons (2022)

Todos los derechos reservados

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

TABLA DE CONTENIDO



Prólogo	13
Introducción	23
Capítulo 1. Leo. “Si usted no tiene salud, educación, una buena productividad, una vivienda... pues no va a haber nunca paz en la vida”	31
Capítulo 2. Yuliana. “Si el gobierno hubiera tenido en cuenta a toda la población, la guerrilla no hubiera existido”	53
Capítulo 3. Norby. “No. La historia no ha sido verdaderamente contada”	73
Capítulo 4. Nancy. “Cuando se habla con claridad y responsabilidad, lo quieren callar a uno”	93
Capítulo 5. Adonai. “Ser líder social es como un delito para el Estado”	107

Capítulo 6.

Luz Ángela. “Llegó la hora de que la verdad sea contada por nuestros propios abuelos y abuelas” 123

Capítulo 7.

Heidi. “Estoy dispuesta a luchar, porque sé que lo que yo haga va a ser un ejemplo para muchas mujeres” 153

Capítulo 8.

Ángela Patricia. “La paz no es del gobierno, es de la comunidad que ha vivido en carne propia la violencia” 181

Capítulo 9.

Flor. “La gente aquí no está pidiendo plata, la mayoría de gente está pidiendo verdad” 197

Capítulo 10.

Venus. La hija de la guerra que educa para la paz..... 223

Capítulo 11.

Mujeres en pie de paz. La construcción de paz y memoria de las mujeres supervivientes del conflicto armado colombiano desde sus territorios..... 241

PRÓLOGO



Cada sendero del Sur del Tolima guarda en su huella la historia de comunidades enteras, de pueblos indígenas y campesinos: hombres y mujeres que abrían trochas huyendo de la violencia; que cabalgaban en el espinazo de la cordillera central, la subían y bajaban, la atravesaban de un lado a otro; que se trasladaban del departamento del Tolima al Cauca, de allí al Valle, al Huila o al Quindío en un santiamén. Anclada en el centro de Colombia, custodiada por la cordillera central, rica en aguas de lagunas, páramos, ríos, tierras fértiles, con un arraigo campesino y comunidades indígenas, se encuentra ubicada la región del Sur del Tolima, corredor estratégico importante de nuestro país.

En tiempos de La Violencia, en 1948, ante la represión oficial del Partido Conservador y de la policía contra las comunidades, muchos campesinos en solitario, con sus familias o en pequeños grupos, se desplazaban de un lugar a otro de la cordillera. Así llegaron y se armaron las resistencias campesinas contra La Chulavita, policía paramilitar de esos tiempos, que penetraba los territorios y asesinaba a los hombres. Dicen las abuelas y mayores del territorio que a las mujeres embarazadas les hacían abortar sus hijos, bien por el susto o bien por el maltrato; a otras las violaban.

Por aquellos tiempos llegó a la región, huyendo de la violencia, Pedro Antonio Marín, procedente de Ceilán, un corregimiento del municipio de Bugalagrande en el departamento del Valle del Cauca. Marín se convertiría en Manuel Marulanda Vélez, el más

legendario líder guerrillero fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, en 1964, quien murió naturalmente en 2008, siendo su comandante en jefe.

Según narra Marulanda Vélez, en su libro *Diario de la Resistencia*, a los campesinos se les acusaba de “nueve-abrileños”, “chusmeros”. Esto se convertía en razón suficiente para que se fraguara “la persecución política en las veredas, pequeños poblados y ciudades. Bastaba con que una región fuera señalada de resistencia de los “collarejos” o “comunistas”, para que la policía y los conservadores armados la arrasaran matando parte de sus habitantes” (Marulanda, 1964, p 8).

De esta forma, desde 1948, luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, toda esta región del Sur del Tolima fue centro de operaciones de las incursiones de la policía y los conservadores armados, así como de resistencias armadas de campesinos liberales que se movilizaban de un lugar a otro con sus familias. Después de un ataque aéreo y por tierra de las Fuerzas Militares, ordenado por el presidente conservador, Guillermo León Valencia, contra una comunidad que se había fundado en un sitio llamado Marquetalia, perteneciente a Planadas, se constituyó la incipiente guerrilla de las farc. Este sería el momento en que la resistencia campesina adquiere la modalidad de guerrilla móvil. El Tolima ha representado históricamente una región de resistencias. Es también el epicentro de las distintas voces que surgen desde el dolor de las víctimas, desde la rebelión de mujeres que se atrevieron a empuñar un arma, de las lideresas comunitarias de ayer y de hoy, que han tenido que hacer frente a la violencia, reinventar formas para continuar construyendo y creciendo con sus comunidades. Estas voces encuentran su cauce en las narrativas que se tejen alrededor del conflicto armado y particularmente desde las mujeres víctimas

sobrevivientes, presentes en el libro 2 de esta investigación: La paz y sus mujeres. Lucha social, reconstrucción comunitaria y empoderamiento del perdón.

Allí se refleja una historia de vida en cada uno de sus capítulos, de mujeres que han vivido y padecido la violencia en carne propia, en sus cuerpos, en sus vidas, de forma desproporcionada. También de cómo muchas mujeres fueron las que constituyeron comunidad en los territorios más profundos, luego de ser expulsadas de su viviendas y fincas, fundadas por toda la familia con hacha y machete, después de que muchos hombres fueran asesinados, perseguidos y desterrados. Así fue como un pequeño grupo de familias organizadas, militantes comunistas en su mayoría, llegaron a constituir la emblemática región de Marquetalia.

La historia de la Leona de Gaitania es la historia de dolor y también de la esperanza en un lugar que parece la tierra del olvido, salvo a la hora de sufrir la violencia de manera consecutiva. Leo se resiste a no seguir trabajando por su familia, aunque ha perdido a cinco de sus miembros. Tal vez por sus vivencias, las mujeres de esta región no desisten, sino que insisten en trabajar en y por la región. Algunas se vuelven lideresas como Leo; otras se aferran a seguir sacando el fruto de las entrañas de la tierra, que pareciera, en contraste con todas las violencias vividas, sigue siendo productiva. Es en esta tierra que se cosecha uno de los mejores cafés del mundo, crece plátano, yuca, maíz, fríjol y muchos otros alimentos que abastecen a la región.

El haber vivido la violencia durante tantas generaciones, enfrentar el miedo y tener la esperanza de continuar luchando, ha puesto a estas mujeres del Sur del Tolima con mucho entusiasmo en la defensa del Acuerdo de Paz, incluso cuando todavía no se tenía la certeza de que este se alcanzaría. Durante los diálogos de La

Habana, cerca de 500 mujeres que bajaban de la cordillera desde distintos puntos se dieron cita en Planadas para hablar de paz. Como esos milagros que suelen ocurrir en ese territorio, lograron la conectividad estable para intercambiar sus opiniones con la subcomisión de género de La Habana. Expusieron sus peticiones: querían que la tierra se titulara a su nombre, porque eran ellas las que habían permanecido en el territorio, lo habían trabajado y porque como sus madres, abuelas y bisabuelas nunca habían sido dueñas de esta, a pesar de que sí la habían hecho parir los frutos para el sustento de sus familias. Ese día se conversó del lenguaje del olvido y la exclusión contra campesinas, indígenas y guerrilleras, pero también del lenguaje que cargan ellas: el de la esperanza.

Un capítulo en esta historia lo constituye la vivencia de las mujeres insurgentes, quienes tuvieron que empuñar un arma, bien porque fue lo único que conocieron, bien porque era la única opción de futuro con la que se contaba en el territorio, o por la misma violencia que las empujó a defender sus vidas. El 27 de mayo de 1964, cuando comienza el ataque contra la comunidad de Marquetalia, donde arrancó la resistencia guerrillera, hicieron frente 48 hombres (eso dicen los textos). Pero, indagando en conversaciones en La Habana con los marquetalianos que sobrevivían (Miguel Pascuas, Jaime Guaraca, Fernando Marquetalia), reconocieron que entre los 48 iban cuatro mujeres: Judith Grisales, Miryam Narváez, Georgina Ortiz y una cuarta de la que no recuerdan su nombre.

Georgina murió el 18 de julio por un tiro de una Punto 50, que ametrallaba el territorio desde un helicóptero; Judith y Miryam firmaron el Programa Agrario de los guerrilleros del 20 de julio de 1964. Pero, un año después, Miryam fue asesinada en una emboscada tendida por el ejército en Río Chiquito, cerca a los

límites del Cauca y Huila. Judith, por su parte debió retirarse en 1970 de las filas guerrilleras, a causa de la llegada de varios hijos en medio de la confrontación.

Fueron muchas las mujeres que se incorporaron a las filas guerrilleras. Se considera que llegaron a constituir el 35 por ciento de la fuerza. Al momento de la firma del Acuerdo Final de Paz, arribaron a los campamentos más de tres mil mujeres, quienes hacían parte de los más de 13 mil insurgentes que se reincorporaron (incluyendo a quienes se encontraban en la cárcel). Así que, desde Marquetalia, un territorio que la guerrilla nunca abandonó, fueron muchas las mujeres que hicieron trocha al andar, quienes en un primer momento marchaban con vestidos, con sus hijos y familias. Muchas de ellas fueron quedando en las comunidades por las que pasaban, o bien embarazadas o bien con sus hijos para continuar criándolos. Muchas de esas mujeres o sus hijas son las que habitan esos poblados; otras hijas y nietas continuaron los pasos de sus ancestras y fueron guerrilleras. Otras, como Yuliana, tomaron la decisión de vincularse a la insurgencia porque les producía admiración observar la fuerza de las mujeres guerrilleras, conocer su dignidad y libertad.

La vida guerrillera trajo a las mujeres unos niveles de igualdad relevantes, comenzando por el rompimiento de los roles tradicionales asignados a mujeres y hombres, labores que en la génesis de la insurgencia continuaban siendo las mismas, la de preparar los alimentos, lavar y remendar la ropa, curar los enfermos. Solo hasta 1970, en la 4ª Conferencia Guerrillera, las mujeres que permanecían en filas fueron consideradas como guerrilleras con los mismos deberes y derechos que los hombres.

Ese paso les dio a las mujeres un rol importante en la guerrilla. Tal como lo menciona Yuliana, las mujeres guerrilleras se veían ante

la comunidad y las demás mujeres, como fuertes, autónomas, empoderadas. Además de portar un arma, usar un uniforme, las pecheras o fornituras ajustadas a la cintura, sus botas pantaneras y un equipo o morral a la espalda en el que colgaban innumerables moños de colores que adornaban la cabellera de cada guerrillera, generalmente larga, su presencia era motivo de admiración para las demás mujeres jóvenes de las comunidades que, en la mayoría de los casos, decidían ingresar a filas por las razones ya expuestas.

Al ingresar a la insurgencia, además de conocer y estudiar los estatutos y reglamentos de la organización, se insistía mucho en la formación política, en aprender a leer y escribir para quien no supiera, y se iniciaba un proceso de educación en varias áreas, las más tradicionales: historia de Colombia, geografía y cartografía (había que conocer el territorio); enfermería, comunicaciones (manejo de códigos y radios Hf), talabartería, sistemas, entre muchas otras actividades. También estaba el estudio de la cartilla militar y el entrenamiento de la gimnasia guerrillera y maniobras militares de guerrilla móvil.

Todas estas actividades daban un mundo de posibilidades a las mujeres que en su mayoría no habrían tenido en sus comunidades. Esto sin desconocer las vicisitudes de la vida guerrillera que afectaba de manera particular a las mujeres. Acciones como la obligatoriedad de la planificación familiar se tomaba como medida necesaria en el contexto de la guerra, que sin una buena pedagogía se convirtió en una medida de fuerza que afectó emocionalmente la vida de las mujeres.

La vida de Yuliana bien puede entrelazarse con la de Norby Pulido Robayo, lideresa que se encuentra al otro extremo del Tolima. Si se trepa al cucurucho más alto de la cordillera central, puede

distinguirse una inmensa estepa verde que se extiende hasta el otro lado del río Magdalena para estrellarse con la cordillera oriental, donde está enclavado el municipio de Villarrica y sus treinta y tres veredas. Allí se dio la misma historia de lucha, de violencias, pero también de resistencias. A pesar de que las mujeres padecieron de forma desproporcionada el conflicto, también tuvieron la osadía de enfrentar esas condiciones de exclusión y violencia con acción comunitaria, con organización social, con militancia política.

Esa es su historia: las mujeres construyen procesos, contribuyen a reconstruir el tejido social, pero no son ellas las alcaldesas, las concejales y mucho menos son las gobernadoras de sus departamentos. Normalmente, aquellas que logran ubicarse en esos puestos, casi que la absoluta mayoría que logra trascender a esos escaños, no son mujeres populares, menos las que han sido víctimas; casi siempre son fichas o familiares de los gamonales de las regiones, de los políticos que han ejercido el poder y promovido la violencia en los territorios, quienes las desplazan y despojan de sus parcelas, de sus fincas, de sus tierras.

Junto a ellas, las mujeres berracas que construyen la cotidianidad colombiana y que han superado las múltiples violencias pueden encontrarse en todo el universo rural y campesino del país:

Nancy Arias, desplazada, víctima del conflicto en una incursión militar de las farc-ep contra los paramilitares ocurrida en Puerto Saldaña, violada y perseguida por los paramilitares en Chaparral. Adonai Rincón, lideresa comunitaria, víctima del conflicto a quien la insurgencia le asesinó varios familiares, quien reconoce en el Estado el principal responsable de la victimización contra las comunidades y mujeres, de la pobreza y el abandono en el que viven esos territorios. Es responsable por acción u omisión,

porque sus gobernantes nunca han defendido los intereses de las grandes mayorías. Ellas están convencidas de que solo la lucha salva al pueblo, o, en palabras de Adonai, “si los de abajo se mueven, los de arriba se caen”.

Luz Ángela Yate, gobernadora del resguardo Chenche Balsillas, perteneciente a la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, acit, quien ha dado una lucha por la tierra y el territorio contra terratenientes, arroceros y ganaderos del Tolima que no escatiman esfuerzos por despojarlos de sus territorios colectivos, bien a través de la acción paramilitar, que sentó bases de operación en el territorio, o por la pobreza que vive su pueblo pijao, especialmente sus niños y niñas.

Heidi Johanna Rojas, mujer campesina, trabajadora en la tierra de sol a sol, con sueños, anhelos de superación, de estudiar, no importa la edad, lo que sí quiere es aprender y tener todos los elementos para montar su asociación de productoras de aguacate.

Esas historias se entrelazan con la de Ángela Patricia y las mujeres de Ataco, Tolima, que, en medio del conflicto, en su calidad de mujeres víctimas, están dispuestas a aportar a la paz y han entendido que solo a través de la organización, del trabajo entre mujeres, harían una apuesta por proyectos productivos que les pueden garantizar una autonomía económica tan urgente para ellas en estos territorios.

Flor Múnera, enfermera, durante el conflicto, se convirtió en defensora de Derechos Humanos y de los prisioneros políticos, absolutamente comprometida con la paz y la verdad. Venus Quiroga, convencida de la paz, trabaja por la reconciliación que para ella va de la mano del perdón. Todos estos relatos culminan con la puesta en escena de la obra *La Comadre*, como puerta de

entrada a la explicación de la lucha de las mujeres colombianas para ser reconocidas como actores de paz. Una obra de teatro, cuyo telón representa los episodios de dolor del conflicto, de las mujeres sobrevivientes de la guerra, pero también expresa las narrativas de esperanza que trae la construcción de paz.

Todas estas historias de vida nos recuerdan el ímpetu y fuerza de mujeres que desde su diversidad luchan por no enterrar su historia en el olvido, por recuperar la memoria colectiva de la violencia padecida por las comunidades, por sacar a flote a sus familias; porque, al rescatar la historia de la región, esa que no está en los libros oficiales, rescatan su propia memoria. Ellas, que pese a ser lideresas y haberlo arriesgado todo, de resurgir entre las violencias que les ha tocado enfrentar, continúan sus liderazgos en el silencio; que aun con el grito incesante de sus voces y el lamento de sus llantos, siguen invisibilizadas por un sistema patriarcal que insiste en negarle la existencia a las mujeres.

Este libro busca hacer oír esas voces, sus voces, sus historias, las de sus territorios, que se resisten a vivir en la tierra del olvido, en el silencio y que, por el contrario, se empeñan en transitar los caminos de la reconciliación y del perdón, recordando siempre que las mujeres son fuerza y lucha por la vida y la paz. La memoria de las mujeres, su sentir, sus vivencias y esperanzas consignadas en estos relatos son alimento para perseverar la búsqueda de la profunda transformación social que ellas han perseguido. Las siguientes páginas están llenas de potencia y de fuerza para tejer nuevas realidades en nuestro país.

Victoria Sandino Simanca Herrera
Senadora de la República de Colombia
Julio de 2021

INTRODUCCIÓN



Berracas: mirar al futuro desde el territorio campesino y el liderazgo de las mujeres tolimenses

Colombia lleva, por lo menos, seis décadas de conflicto armado interno; prácticamente cuatro intentando hacer la paz y ya casi dos, oficialmente, en transición. Si se parte de la periodización de la Comisión de la Verdad, creada con ocasión del Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las farc, el conflicto armado interno tuvo sus inicios en la década de 1950, cuando se gestaron las condiciones para que un pequeño grupo de campesinos comunistas de la región del Tolima diera el salto a la guerra de guerrillas a mediados de los años 60. Fue en esa época, y producto de ese proceso, que emergieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), en 1964. Estas se desmovilizarían 52 años después, gracias a la negociación política que desembocó en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, en 2016.

El proceso de paz con esa guerrilla, la más antigua y poderosa de América Latina, no fue el primer emprendimiento estatal para dar fin a la confrontación armada por la vía negociada; probablemente, por la tradición que el país tiene en diálogos de paz con actores armados, no sea el último. En los últimos 30 años, cinco grupos guerrilleros y un ejército paramilitar se desmovilizaron a través de acuerdos en distintas mesas de negociación.

No obstante, el relativo éxito de la vía negociada para la terminación del conflicto armado, la ilusión de la transición de la guerra a la paz

no termina de materializarse, especialmente en algunas zonas del país, como el Tolima, en donde las violencias estructurales, simbólicas y directas, insurgentes y contra-insurgentes, estructuran de forma continua el escenario de lo social y lo político.

Este departamento, ubicado en la región centro-sur de Colombia, fue el escenario de varios periodos de intensa violencia. En los años 1930 y 1940 del siglo xx se desarrollaron conflictos entre indígenas, campesinos y hacendados por la tierra. Una década después, campesinos liberales y comunistas se refugiaron en las montañas en donde constituyeron organizaciones de autodefensa para enfrentar a los conservadores en el gobierno. En los años 50, tras el ofrecimiento de amnistía de la dictadura militar (1953-1957), los grupos ligados al partido liberal se desmovilizaron, mientras que los comunistas decidieron seguir en la resistencia.

Estos grupos marginados, conocidos como comunes, fueron percibidos como una amenaza por los sectores de campesinos más prósperos, conocidos como Limpios, integrados al partido Liberal, a quienes el beneficio de la amnistía les había permitido ocupar cargos de autoridad local, nombrados por el gobierno. La alianza entre los Limpios y el Ejército se legalizó en 1965, cuando el presidente Guillermo León Valencia expidió el Decreto 3398, "Por el cual se organiza la defensa nacional". El Decreto señalaba que la "movilización y la defensa civil (...) corresponden a la Nación entera" y obligaba a los particulares a participar en la defensa del país. El mismo año, Valencia ordenó la operación militar a Marquetalia en el sur del Tolima, zona de control de los comunes, quienes, tras la arremetida del Estado, se convirtieron en las farc.

De manera que, en este territorio, el paramilitarismo nacía a la par con la guerrilla que, en teoría, debía confrontar. Como era de

esperarse, al fortalecimiento progresivo de estos grupos, le siguió el recrudecimiento de la guerra, paradójicamente, en medio de negociaciones de paz. Es en la década de 1980 cuando la confrontación armada en el país alcanza las dimensiones de una guerra civil propiamente dicha. Es en esta misma década cuando los gobiernos nacionales se abren al escenario de la paz negociada. De los diálogos de La Uribe (1984), el primer acercamiento oficial con la guerrilla de las farc, hasta La Habana (2016), cuando se cristalizó el Acuerdo de Paz con esta guerrilla, Colombia vivió una tragedia que superó con creces el horror de otras guerras civiles.

Para diciembre de 2018, al menos 7,4 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares y 267 mil fueron asesinadas, según ha documentado el Registro Único de Víctimas, creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Otras cuarenta y siete mil personas desaparecieron sin dejar rastro y sin que sus familias sepan qué les sucedió. Treinta y dos mil fueron secuestradas, veintiséis mil fueron violentadas sexualmente, once mil fueron mutiladas por minas antipersonas y otros artefactos explosivos improvisados. Diez mil fueron torturadas y siete mil quinientas fueron reclutadas a la fuerza por grupos armados ilegales cuando eran menores de edad.

En Tolima, la guerra entre la guerrilla de las farc, la Fuerza Pública y los paramilitares produjo todas las consecuencias humanitarias ya descritas, más la afectación a las relaciones sociales y un reordenamiento demográfico y territorial que significó la huida de miles de familias a causa del desplazamiento forzado.

A pesar de lo incontestable de los impactos de la guerra, no es menos cierto que la población civil también resistió y que logró forjar un espacio autónomo frente a los bandos que se enfrentaron. En este asunto reside el interés de nuestra investigación. Somos

conscientes de que más allá del rol pasivo que constantemente se asigna a los civiles en los relatos periodísticos y en los informes institucionales, existen casos —como en el departamento del Tolima— en los que las comunidades emprendieron iniciativas de paz que buscaron neutralizar la acción de los grupos armados, y, en ocasiones, negociar con ellos la convivencia.

En esa perspectiva se destaca el papel de las Juntas de Acción Comunal, los resguardos y cabildos indígenas, como mecanismos de regulación de la vida social que, con vocación civilista y de autonomía, disputaron con los armados la representación de las comunidades y sirvieron como estrategia de resistencia frente al conflicto. También ha sido fundamental la constitución de asociaciones para la producción y comercialización de cafés especiales, el surgimiento de organizaciones lgtbi, la conformación de plataformas de mujeres campesinas que le apostaron a la paz en medio de la guerra, y, en general, distintas formas de cooperación social que lograron oponer los intereses comunitarios a los cálculos y acciones de los grupos armados.

Este libro, el segundo texto, fruto de la investigación “Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional”, recoge algunos de estos relatos, particularmente, los de las mujeres quienes, desde distintos roles y plataformas organizativas, han asumido un proceso de liderazgo y de reconstrucción social, muchas veces invisible, pero que reflejan, en su función de espejo, las historias de millones de mujeres colombianas, principalmente campesinas. Ellas, que han sido víctimas del conflicto, relatan en cada uno de los capítulos del libro su propia experiencia de victimización. Pero, sobre todo, cuentan el siguiente paso que dieron: cómo, a pesar de ser afectadas de forma vital por la guerra, decidieron asumir un compromiso con su comunidad, con su

territorio, con sus vecinas y tomaron las riendas de procesos participativos, productivos y de reconstrucción social para convertirse en líderes de sus comunidades.

La voz de las diez mujeres protagonistas de las historias contenidas en el libro demuestra, por una parte, su capacidad y fortaleza para superar situaciones adversas. Con un mensaje contundente sobre la búsqueda de la verdad y sobre la construcción de una memoria histórica del conflicto que incluya sus relatos, sus historias campesinas, sus voces desde territorio, no dudan en apostar por un camino que supere la violencia, que desmonte los antagonismos del pasado —motivados generalmente por fuerzas externas al propio territorio— y por evitar, sobre todo, la repetición de las condiciones que generaron, hace más de medio siglo, la violencia en Colombia.

Por otra parte, sus relatos y sus vivencias motivan la construcción, en la que ellas mismas trabajan, para un mejor futuro. No se detienen ni reiteran sus experiencias como víctimas a pesar de serlo. Fueron desplazadas, acusadas como cooperadoras de grupos armados, sufrieron delitos sexuales; sus hijos, hermanos, padres fueron asesinados, sufrieron el exilio (interno y externo), fueron humilladas... Pero sus voces no miran al pasado, ni se centran en una venganza o en una revancha sobre los victimarios que les causaron mucho dolor. Como mujeres, mantienen la vista hacia adelante, hacia el mañana. Un mañana que imaginan para sus hijas, para su comunidad. En paz.

Las Berracas

Las mujeres protagonistas de las historias de liderazgo, resistencia y coraje representan los cuatro puntos principales del territorio tolimense. En ellas se refleja el Sur, el Norte, el Centro

y el Oriente del Departamento, zonas por las cuales transitó la guerra en Colombia durante décadas, pero que han sido poco estudiadas o exploradas por la actualidad de los relatos sobre el conflicto colombiano.

El sur del Tolima fue el escenario en el que se originaron las farc y el norte se convirtió en un territorio en disputa muy importante con el advenimiento y el crecimiento de los grupos paramilitares, a partir de los años ochenta. Asimismo, el Oriente tolimense ha sido siempre un corredor estratégico, pues comunica, por una parte, con la capital del país, Bogotá, por otra, con la entrada a los llanos orientales y la vertiente sur oriental del país, que vio crecer y expandirse a diferentes grupos guerrilleros y paramilitares principalmente en los departamentos del Meta y Caquetá.

Las historias de Leo, Yuliana, Norby, Nancy, Luz, Adonai, Heidi, Ángela Patricia, Flor y Venus convergen en su identificación con el Tolima como territorio de desarrollo del conflicto y en su vivencia directa con múltiples tipos de violencia. Son reflejo de al menos dos generaciones de mujeres afectadas por el conflicto en el Tolima y que cuentan sus vivencias con dos propósitos principales: construir un relato polifónico de la guerra, sin señalar o centrar su punto de vista en los victimarios, como una forma de contribuir a la verdad plural, y mandar un mensaje que se convierte en la necesidad urgente de los territorios: la no repetición. Cada una de ellas, desde sus veredas o municipios rurales o desde la capital del departamento, Ibagué, mantiene la vigorosidad y cohesión de su mensaje coral: necesitamos saber la verdad como una forma de no repetir la violencia que hemos sufrido.

Así, el libro, realizado a través de reportajes periodísticos, utiliza la comunicación y la divulgación de sus historias como la principal herramienta de multiplicación de sus mensajes. Cada capítulo

cuenta la historia de una mujer valiente, una mujer luchadora, una mujer *Berraca*, como ellas mismas se definen. Después de los primeros 10 capítulos, centrados en la vida de cada una, el libro se cierra con un reportaje en profundidad sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz. En el reportaje se cuenta la lucha histórica de las mujeres colombianas por ser incluidas en las mesas de negociación y pone en evidencia el peligro que sufren actualmente las defensoras de la vida, del territorio y de la reconciliación.

El texto es el resultado de un proceso de investigación minuciosa realizada por un equipo internacional de profesores y periodistas de la Universidad del Tolima, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, cun, representada por el Grupo de Investigación Paz, Desarrollo Territorial e Innovación Educativa; por el Observatorio Colombiano de Innovación Educativa y Construcción de Paz, Inconpaz, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña. La investigación inició en noviembre de 2019 y el recorrido por el Tolima fue desarrollado en febrero y marzo de 2020, bajo la producción y la asesoría de la Universidad del Tolima y su Centro de Estudios Regionales, CERE.

Andrés Tafur Villarreal
Director – Centro de Estudios Regionales (CERE)
Universidad del Tolima
Noviembre de 2021

CAPÍTULO 1

LEONORICEL VILLAMIL

TORO: LA LEONA DE GAITANIA

“SI USTED NO TIENE SALUD, EDUCACIÓN, UNA BUENA PRODUCTIVIDAD, UNA VIVIENDA... PUES NO VA A HABER NUNCA PAZ EN LA VIDA”



Los arbustos de café mezclados con los plátanos perfilan el color rojizo de las carreteras, aplanadas solo de vez en cuando. Al girar la ladera, por encima del camino, un cartel estampado con numerosos logos institucionales da la bienvenida con el mensaje “Planadas, Municipio de Paz”. Asu lado, diversos plafones publicitan la calidad de los cafés especiales de Planadas, ganadores de la Taza de la Excelencia, en varias ocasiones. Anuncios que resumen toda una declaración de intenciones de una localidad con más de 50 años de conflicto en su historia, cansada de que únicamente se la conozca como “la cuna de las farc”

El municipio cafetero está ubicado en la cordillera Central, a unos 1 500 metros de altitud, y dista unos 230 kilómetros de

Ibagué, la capital del departamento tolimense. Precisamente los planadunos cierran por el sur el Tolima, en frontera con los departamentos del Cauca y del Huila. La situación geográfica del municipio no es baladí: la zona suroccidental del Tolima es un corredor estratégico que articula la región Oriental del país con la cuenca del Pacífico. Un territorio estratégico que, en tiempos de guerra, es sinónimo de territorio de conflicto.

Añadido a su interés operacional, la ausencia del Estado junto con la pobreza y la falta de oportunidades supusieron y suponen una alfombra roja para una mayor presencia de grupos armados y estructuras de poder alternativas a las estatales. Según relatan los lugareños y recogen informes de diferentes organismos defensores de derechos humanos, como el reporte *Una paz estable, duradera y sensible a niños, niñas y adolescentes*, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones, oim, “la subregión Sur del Tolima debía atender a un sistema de regulación de las relaciones sociales impuesto por las farc, similar al implantado en el Caquetá”. En las laderas cubiertas de cafetales, plátanos y cabañas, la amnesia obligada y el silencio preventivo fueron durante décadas estrategias de supervivencia.

Una de las mujeres supervivientes y resistentes a la violencia es Leonoricel Villamil Toro. En 2020 desarrolla su tercer período como concejal en Planadas por el Partido Verde, en representación de Gaitania, uno de los dos corregimientos rurales del municipio. Leo, como se le conoce en toda la región, ejerce de segunda vicepresidenta del Concejo, siendo ella la única mujer en una asamblea compuesta por doce varones. En 2015, después de asistir a un encuentro de Mujeres por la Paz en Bogotá y darse cuenta de que las demás participantes estaban organizadas con sus vecinas y podían hablar en nombre de su comunidad, vio claramente lo que tenía que hacer. “Me tomé el atrevimiento

de vincularme, participar y representar a la mujer planaduna. Empecé a ir a las veredas a decirles cómo debíamos comenzar a articularnos, mostrar que sentimos un dolor, pero que ya debemos dejar los miedos y hemos de reclamar los derechos que tenemos según la constitución”, declara Leo, al recordar sus primeros pasos en la organización de mujeres.

Además de dedicarse a la función pública y al trabajo por la comunidad, Leo también se hace cargo de la finca y los cafetales familiares: “En este plano tenemos árboles frutales, tenemos maíz y tenemos este cafecito que estamos empezando a levantar, abonándolo cada dos meses como debe ser para que tenga buenos frutos”. Enfundada en sus botas de flores —impermeables, a prueba de campo— y caminando entre las matas de café, Leo recorre la finca paterna a la vez que repasa su dura historia familiar, ligada al devenir del conflicto.

“Nos ha afectado muchísimo el conflicto y no solo por lo que me ha ocurrido a mí. Cuando a una le tocan es cuando siente y sabe el valor de las demás mamitas”. Después de tomar aire, Leonoricel continúa: “Me he visto afectada tanto, tanto y de tal manera que... una de ellas fue la terminación de mi familia, que constaba de cinco hermanos varones y mi persona. De ellos ya no queda ninguno”.

Parir en medio de la guerra

Con dolor y determinación en los ojos, la campesina continua su relato: “Llegué acá de la edad de tres años y desde ese entonces aquí me formé, me crié y me eduqué. Formé mi hogar con Afranio Enciso, con el cual tuve tres hijos, de los cuales solo me quedan dos. Desafortunadamente también el hijo me lo asesinaron en el 2015, el 27 de septiembre, a la edad de 28 años, junto con mi

hermano y otro campesino”. Pese a lo trágico de sus palabras, la concejal y lideresa social de Gaitania no muestra sombras de desánimo. Prosigue con su relato, con la historia de su querida tierra en medio del conflicto armado colombiano.

“A nosotras nos tocó parir a los hijos en medio de la guerra. Con lo que vivimos acá en la región —porque nosotros vivimos tomas guerrilleras—, nos ha tocado salvar vidas, intermediar por personas, enterrar gente que quizás su familia nunca supo qué pasó... Pues asimilamos eso y con mucha prudencia y cautela hemos aprendido a vivir en esta región donde nos hicieron mucho daño a mí y a las demás mujeres de Planadas, y más que todo en la vereda Marquetalia, que fue en la que nacieron las farc”.

Según recoge la historiografía fariana, los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacidas en 1964, fueron “48 campesinos que habitaban en la región de Marquetalia, una colonia agrícola fundada por ellos mismos, 10 años atrás, a principios de los cincuenta”. Leonoricel narra que en 1948 llegaron 45 familias desplazadas a la histórica vereda. Entre los desplazados de esas primeras guerras de la Violencia en Colombia, estaba Pedro Antonio Marín, que años después se hizo llamar Manuel Marulanda Vélez, igual que el líder sindical antioqueño asesinado por el Estado colombiano en 1953. De él, Leo recuerda que se presentó como ingeniero y que fue el que trazó la vía hacia el municipio de Neiva: “ese señor ya tenía también unas ideologías buenas, tampoco era todo malo”.

Como las otras zonas de colonización de mediados del siglo xx ubicadas en Planadas, “las colonias agrícolas fundadas por el campesinado desterrado de sus zonas de origen pasaron a ser consideradas Repúblicas Independientes a las que había que aniquilar”, según recoge la página web de la organización

guerrillera. El relato de las farc continúa: “el Ejército Colombiano, bajo la orientación de la misión militar yanqui”, lanzó la Operación Soberanía u Operación Marquetalia, con la que combatió el comando guerrillero que dirigía el propio Marulanda, alias *Tirofijo*, quien después sería Comandante en Jefe de las farc.

El también fundador de las farc, Jacobo Arenas, explica en el libro *Diario de la resistencia de Marquetalia* que “es de esta agresión contra las colonias de Marquetalia, el Pato, Riochiquito y El Guayabero que nacen las farc como respuesta armada”, fundadas oficialmente en mayo de 1966. En el Programa Agrario de los Guerrilleros, proclamado el 20 de julio de 1964, los campesinos revolucionarios justificaban su lucha explicando que se alzaron en armas, porque en Colombia estaban cerradas las “vías de la lucha política legal, pacífica y democrática”.

Más allá del mito fundacional

La historia aún sigue viva en la memoria de los y las habitantes de las veredas y casas de Planadas. “Aquí hay gente todavía que vivió y vio la Operación Marquetalia —remarca Leo— y hay gente que combatió obligatoriamente contra la guerrilla, porque en ese entonces prestaban su servicio militar y todavía están acá”. Pero esta historia, narrada desde la distancia y la falta de empatía, se ha convertido para muchos en una marca que desean olvidar. “Aún hoy día todavía sigue el estigma de que aquí nació la guerra... Y eso es lo que nosotros estamos tratando de borrar”, dice Leo, a la vez que su mano derecha hace un gesto de borrar una pizarra.

Pese al mito fundacional de las farc, el conflicto en los montes del sur del Tolima venía de antes. De hecho, cuando hablan del conflicto armado en el Tolima, los expertos del Centro Nacional de Memoria Histórica, cnmh, y de las instituciones académicas

locales, como la Universidad del Tolima o la Universidad de Ibagué, hablan de “una estructura endógena de largo aliento” y unos “orígenes asociados al período de La Violencia (1946-1958)”. En ese periodo, el conflicto armado era entre liberales y conservadores. En la terminología local, Gaitania se clasificaría como un “municipio rojo”, aludiendo a su composición mayoritariamente liberal, en términos del bipartidismo tradicional.

Una composición liberal que no era de extrañar, teniendo en cuenta los orígenes de la localidad. La semilla de lo que sería Gaitania la plantó en 1920 el entonces Gobernador del Tolima, Luis V. González, quien estableció una colonia penal y agrícola en la región denominada Sur de Atá. Hasta allí eran enviados quienes cometían delitos de contrabando de licores y tabaco, junto con presos políticos miembros del Partido Liberal, en la última década de la “hegemonía conservadora” (1900 – 1930), según se recoge en el apartado de historia de la web oficial del municipio de Planadas.

“Fue primero Gaitania que Planadas, porque la colonia penitenciaria era en el Sur de Atá. Allí era donde pagaban cárcel todos los presos”, recuerda Leo, que destaca que en 2020 el corregimiento celebra sus 100 años de historia. Un siglo cargado de acontecimientos que, pese a tener lugar en esta pequeña población rural, tendrían repercusiones en toda Colombia. Desaparecida la colonia penal, mediante ordenanza 72 de 1931, fue creada la inspección departamental de policía, en aquel incipiente caserío. Al año siguiente, en 1932, el misionero jesuita español Fermín Larrazábal aconsejó a un grupo de expedicionarios asentar un caserío en las riberas del río Atá, donde se ubica hoy en día la cabecera municipal de Planadas. Al cabo de tres años, en 1935, se nombra a Planadas como cabecera de la inspección departamental de policía de Sur de Atá, colonia

que trece años más tarde su propia población rebautizaría como “Gaitania”, en honor al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. Su asesinato levantó revueltas populares en todo el país; entre ellas, la de la capital colombiana es conocida como ‘el Bogotazo’. Eran los inicios de más de una década de enfrentamientos entre liberales y conservadores, conocida en Colombia como el período de La Violencia. Tal y como recoge el historiador y politólogo Eduardo Pizarro Leongómez, en su libro *Las farc (1949-1966): De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha* (1991), el impacto del asesinato de Gaitán tuvo un amplio eco en todo el departamento del Tolima. De inmediato se conformaron juntas revolucionarias en varios municipios, incluida su capital, Ibagué. El Ejército reprimió estos levantamientos y, al mismo tiempo, grupos de conservadores, llamados “bandas de pájaros”, también tomaron las armas y se enfrentaron a los liberales.

Paralelamente, la familia de Marulanda (liberal) se escondió en las montañas del norte del Valle del Cauca y, junto con otros exiliados, formaron un grupo de unos 30 hombres que se trasladaron al sur del Tolima, donde ya existían núcleos de autodefensa liberal medianamente organizados. Según escribe Pizarro Leongómez, de 1950 a 1953 fueron constituyéndose guerrillas comunistas en Chaparral, Rioblanco, Ataco y Ortega, con el comando central en El Davis (Rioblanco). Marulanda fue a parar a estas guerrillas y después se trasladó a la zona de Gaitania y Planadas, controlada por el núcleo de resistencia liberal de Gerardo Loaiza. A pesar de la existencia de comandos conjuntos, liberales y comunistas lentamente se fueron separando. Tal y como recoge Rafael Pardo Rueda en el libro *La historia de las guerras* (2004), ya a principios de los 50 los liberales, conocidos como ‘Los Limpios’, desconfiaban de los comunistas, llamados ‘comunes’.

Las distintas normas de los destacamentos y, sobre todo, el sentido de la guerra los diferenciaba: los limpios querían combatir al conservatismo para ser ellos el poder dominante; los comunes buscaban la revolución social. En el momento en que el movimiento insurgente comunista estaba en su mayor auge, especialmente en los Llanos Orientales de Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado (13 de junio de 1953) y puso fin al impulso de los guerrilleros al proponerles una amnistía.

‘Marulanda’ y Fermín Charry, conocido como Jacobo Prías Álape o Charro Negro —que había sido comandante de las autodefensas comunistas organizadas en Marquetalia junto con ‘Marulanda’—, no se acogieron a la amnistía y se refugiaron en el nevado del Huila. Durante dos años se dedicaron a establecer núcleos comunistas por la región limítrofe entre Huila y Cauca. Hacia finales de los años 50, en Marquetalia, con asistencia de un miembro del comité central del Partido Comunista, “se determinó por mayoría absoluta la desmovilización del cuerpo armado en los tres departamentos y su rápida conversión en grupos de autodefensa, conformados por los campesinos y por los excombatientes que decidieran trabajar en paz, colonizando la selva”, según las palabras de Jaime Guaracas —uno de los fundadores de las farc—, recogidas por Pardo Rueda. Hasta el propio Marulanda se reinsertó a la vida civil. Pero en el año 1960, Charro Negro fue asesinado en Gaitania por hombres enviados por Jesús María Oviedo, alias General Mariachi, jefe de las también desmovilizadas guerrillas liberales. La guerra comenzaba de nuevo.

En las décadas que siguieron, la violencia entre grupos paramilitares, guerrilla y fuerza pública continuó. Tal y como recoge el Centro Nacional de Memoria Histórica, cnmh, en su informe de 2017 “De los grupos precursores al Bloque Tolima (auc)”, los

grupos de autodefensa civiles del Tolima se organizaron en diferentes grupos paramilitares: Los Limpios, el Rojo Atá, Convivir y finalmente el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, auc. Estos grupos paramilitares tuvieron vínculos con miembros de instituciones estatales y actores económicos, según documenta el cnmh. Además, también se dieron dinámicas de conflictos y rencores entre clanes familiares en la disputa por el territorio. Posteriormente, a finales de los noventa, el conflicto se recrudeció, con la pugna entre guerrilla y paramilitares por el control de las explotaciones de amapola y sus derivados, según el informe “Dinámicas del conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario”, realizado en 2013 por la USAID, la oim y la fip.

Sobrevivir a las violencias

Lejos de los hechos fundacionales y aún más distantes de la pugna política colombiana centralizada en las principales ciudades, los habitantes de Planadas sobrevivieron durante décadas a la violencia cotidiana y al control de la vida del municipio por parte de la guerrilla, así como a las actuaciones de los grupos paramilitares, las operaciones militares y estrategias contrainsurgentes de los diferentes gobiernos nacionales. Mientras clava la mirada en las montañas lejanas que los cafetales pintan al estilo puntillista, Leo habla del “temor de la gente a venir” durante años y años, y recuerda “cuando los helicópteros pasaban por encima de nuestras cabezas y el Ejército por tierra, y uno no sabía a quién ponerle cuidado; estábamos en medio de las balas, pero se seguía recolectando café”.

Según rememora la campesina: “Aquí caminaban los guerrilleros, y ellos eran los que tenían el mando y daban las órdenes. Yo no era porque quisiera, era porque tenía que cumplir. O era la vida, o era hacerlo. Y pues, ¿quién no quiere vivir?”. Leo cuenta que, durante

el dominio territorial de las farc, se levantaba a las 7 de la mañana. Si no escuchaba un tiro, salía tranquila. Pero si lo escuchaba, se preguntaba a quién habían matado esta vez y, con dolor y temor, salía a escuchar las malas noticias, porque casi siempre era gente que conocía. “Este río que baja aquí, el río Atá, es testigo de muchos muertos”, lamenta Leo. De hecho, aún no se han recuperado todos los cuerpos, un punto decisivo en la reparación a las víctimas del conflicto recogido en los Acuerdos de Paz de 2016.

“Hubo muchas incoherencias, porque también le quitaron la vida injustamente a gente que no debió pagar. Dañaron y destruyeron hogares, hubo muchos desplazamientos y eso provocó descomposición social, descomposición de familias”, recuerda Leo, citando precisamente el principal hecho victimizante que el conflicto armado colombiano ha provocado: el desplazamiento forzoso. Con datos de abril de 2020, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, uariv, arroja una cifra de 6058 víctimas de desplazamiento forzado que, de acuerdo con la última ubicación conocida, residen en Planadas. La cifra muestra que el 90 % del total de víctimas registradas (6682) en el municipio son víctimas de desplazamiento forzado, y que representan alrededor del 20 % del total de la población de Planadas, que se estima alrededor de los 30 000 habitantes.

Según los informes de la oim, precisamente entre 2000 y 2012, se reportaron un total de 201 479 víctimas de desplazamiento forzado en Tolima, siendo el sexto departamento con mayor número de desplazados en Colombia. Secuestros, homicidios, extorsiones, amenazas de muerte, reclutamientos forzados y abandono de tierras alargan la lista de las afectaciones del conflicto que han tenido que resistir los y las habitantes de Planadas.

“Aquí tildaron, aquí juzgaron. Aquí señalaron, pero ellos nunca supieron cuál era verdaderamente el conflicto, y nadie sabe por

qué nació verdaderamente la guerra”, prosigue Leo, que corrobora que “no fue solamente la guerrilla”. La represión de las fuerzas militares, los falsos positivos y los montajes contra campesinos para ganar unas recompensas por haber capturado a unos supuestos guerrilleros atemorizaron también a la población civil, tal y como recoge el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos. “Nos tocó vivir una etapa muy dura porque tanto el gobierno como las Fuerzas Militares causaron también mucho daño”, enfatiza Leo.

Por este motivo, Leo celebra que hoy el alcalde de Planadas, Jhon Jairo Hueje, (Partido Alianza Social Independiente, así) sea alguien que “vivió su propio estigma, su propio dolor: a él lo cautivaron, a él lo acusaron de algo que nunca hizo, y pagó una prisión injustamente, y así como le pasó a él le ha pasado a muchísima gente acá en Gaitania, que se la han llevado y le han privado de la libertad”.

Planadunas organizadas por la reconciliación y la vida

Pese a toda la violencia sufrida, Leo no duda que “hay que seguir, hay que dejar esos resentimientos, esos dolores, y hay que tratar de reconciliar. Ese es el ejemplo que tenemos que dar nosotras como mujeres, que somos las que generamos vida, que somos las que procreamos, las que parimos hijos. Ninguna madre quiere perder a un hijo ni quiere seguir trayendo hijos a este mundo para una guerra”, recuerda la concejala. Precisamente, fue en septiembre de 2015, después de la muerte de su hijo, cuando Leonoricel dio el paso de organizarse y luchar por los derechos de sus vecinas y vecinos, especialmente por las mujeres víctimas del conflicto.

“Cuando perdí a mi hijo, dije: ‘¿Qué está pasando? Ya no más’. Sentí en carne propia lo que vivía la otra mujer, la otra mamá... Y entonces hice un llamado, las recogí y les dije: ‘Bueno mujeres, aquí nos toca empoderarnos, participar, incidir, insistir y darnos a conocer para que nos visibilicen y sepan cuál es la vida y qué es lo que nos ha tocado vivir’”. “De ahí, —continúa Leo— ellas me acogieron y me escucharon, y hemos participado en todo el proceso de paz de nuestro territorio, al que nos vinculamos sin miedo, porque los miedos ya los vivimos en la guerra”.

En el primer encuentro que organizaron participaron más de 500 mujeres e hicieron una videoconferencia con Victoria Sandino, directora de la Subcomisión de Género de los diálogos de Paz de La Habana, Cuba, durante la cual todas las mujeres de las veredas presentaron una propuesta. De esta forma es como nació el Consejo de Mujeres por la Paz de Planadas. Según reporta Leo, actualmente hay otras ocho asociaciones de mujeres, dentro de las que destaca la Asociación de Mujeres Víctimas Cafeteras. “Todas sus integrantes tienen su Registro Único de Víctimas, porque en el municipio de Planadas todos somos víctimas. Lo que hemos vivido aquí nadie lo sabe, sólo nosotros que hemos estado acá”, afirma la lideresa.

Es por este motivo que Leo se muestra “agradecida con el gobierno de Juan Manuel Santos, que, en medio de las discordias, y pese que a muchos no les gustó, se puso los pantalones y tuvo ese Acuerdo de Paz en el cual los que nos hemos visto beneficiados somos los campesinos, los que vivimos la guerra. El que está en la ciudad no sabe qué es una guerra, no sabe qué es un conflicto y qué es vivir en el campo”.

Como paradoja, dentro de lo que García Márquez describía como Macondo, al referirse a casi cualquier pueblo en Colombia, en

el plebiscito de octubre de 2016, los planadunos votaron “No” a los Acuerdos de Paz. Mauricio Buildes, periodista y profesor de EAFIT, señalaba que, como en muchas partes de Colombia, en Planadas “la gente no sabe con certeza en qué consisten los acuerdos logrados en La Habana”. El plebiscito volvía a enfrentar a dos bandos: “las discusiones giraban alrededor de Santos versus Uribe y no de la posibilidad real de ponerle punto final a las farc como organización armada”, señalaba el también premio nacional de periodismo Simón Bolívar, en un artículo publicado en el portal Pacifista.

José Funor Dussan García, alcalde del municipio entre 2016 y 2019, denunció días antes de la votación que grupos armados ilegales pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, realizaron llamadas a los líderes comunales y habitantes de las zonas veredales para advertirles que dejaran de apoyar los Acuerdos de Paz, al tiempo que amenazaban a la población para evitar que saliera a votar en el plebiscito, según recogía el periódico El Olfato.

Construir paz de mujer a mujer

En Gaitania el trabajo por la paz sigue siendo hoy igual de necesario. Planadas es uno de los cuatro “municipios pdet” del sur del Tolima, junto con Rioblanco, Ataco y Chaparral. Es decir, una de las localidades donde se implementan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, pdet, y se priorizan estrategias y programas para superar el conflicto armado. Durante los últimos 5 años, las mujeres de Planadas han interactuado con las mujeres del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, etcr, de El Oso, la zona veredal para el proceso de desmovilización de la guerrilla de las farc ubicada dentro de la jurisdicción de Planadas. Según cuenta Leo, ella trabajó con las mujeres que habitan en

el campamento de excombatientes “para que conformaran su propia asociación y pudieran participar e integrarse en todos los proyectos que llegan a la región”.

Sobre las mujeres de la zona veredal, Leo destaca que ve cómo ellas “hoy en día tienen sus hijos, quieren que estudien, que se formen, y no quieren que vuelvan a la guerra”, y eso para ella es todo un triunfo de la paz. Por otra parte, afirma que las excombatientes también dicen que el gobierno les está incumpliendo, y delante de las evidencias que las respaldan, Leo no puede más que responder que es verdad y denunciar con ellas el incumplimiento de lo acordado. “Por eso nosotras tenemos que aprendernos bien los cinco puntos, los puntos recogidos en los Acuerdos de Paz para uno poder hacer un reclamo”. Esos puntos a los que la concejala hace referencia son la implementación de una política de desarrollo agrario integral, la mejora de la participación política, el fin del conflicto con el cese de hostilidades bilateral, la solución al problema de las drogas ilícitas y la reparación de las víctimas, más un sexto punto referente a los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

En Planadas, al igual que en muchos otros municipios rurales de Colombia, las mujeres participaron y participan desde las bases, desde los hogares, los barrios, los resguardos indígenas y las organizaciones sociales en la construcción de paz territorial. Leo explica que en su municipio las mujeres hicieron parte de unas mesas de trabajo que llevaron a la firma de lo que llamaron el “Tercer Acuerdo”: “se llamó así porque el primer acuerdo fue el que hizo el resguardo indígena con las farc, en julio de 1996. El segundo fue el que hizo el gobierno con las farc y el tercero es donde nos articulamos la población, los cafeteros, los excombatientes, el resguardo indígena Paez y los comerciantes

como tal para nosotros incidir”. La marca “Tercer Acuerdo” fue establecida junto con la Universidad de Ibagué, y las mujeres diseñaron su logo. “Si miran los colores, las montañas... es lo que está alrededor de nosotros. Fue un trabajo muy bonito”, recuerda Leo, junto al verde de los alargados maizales.

A su vez, las mujeres organizadas de Planadas hacen parte de Voces de Mujeres a nivel nacional. “De hecho —comenta Leo— la semana pasada tuve una reunión vía *Skype* con Juntanza, de Bogotá. Representé a las mujeres de Voces de Mujeres a nivel nacional de nueve departamentos e hicimos una agenda de trabajo donde estamos mirando cómo vamos a participar y seguir trabajando en los diálogos de paz, tanto con el eln como con todas las personas que se presten a dialogar”. Sobre todo, hay una cosa que Leo y sus compañeras quieren evitar a toda costa: “Que no vayamos a retroceder [en la paz] por nada en el mundo, aunque nos toque intermediar a nosotras. Estamos acá paradas, con la frente en alto, para que no vuelva a ocurrir”.

En busca de la verdad reparadora

Pese al reconocimiento de la fortaleza que les ha supuesto que los Acuerdos de La Habana hayan incluido en uno de sus principales puntos la equidad de género, Leonoricel opina que ellas, las mujeres víctimas supervivientes, sólo están representadas en parte. “En parte sí, porque hemos trabajado para que la paz continúe, y la inclusión de la equidad de género ha sido vital para nosotras salir a reclamar y mostrar que lo podemos hacer. Pero en parte no, porque nosotros también hemos sido afectados por el gobierno nacional, y en eso uno no ve justicia, uno no ve nada. Por eso, nosotros hacemos parte y reclamamos el esclarecimiento de la verdad, que tanto los Acuerdos como la jep [la Jurisdicción Especial para la Paz] recogen. Si usted

cuenta la verdad, está sanando. Y a eso es a lo que nosotros hacemos un llamado. Queremos hablar y decir la verdad, pero también queremos tener una respuesta a la verdad», insiste Leo, que entrecierra los ojos de forma incisiva mientras sus manos refuerzan su gesto.

A su vez, la lideresa denuncia que hay gente que aún vive con temor, porque “todavía siguen los señalamientos”, que “la gente no sabe por qué fue víctima de la guerra” y que “todavía después de este Acuerdo de Paz, hay muchas irregularidades”. La realidad da peso a sus palabras. No fue hasta mediados de febrero de 2020, casi cuatro años después de la firma de los acuerdos, que la Comisión de la Verdad instaló la primera Mesa Técnica de No Repetición, como recogen los documentos publicados por la propia alcaldía de Planadas.

Una vida digna, requisito indispensable para la paz

Dentro de la finca de Leo, los retratos familiares, las vírgenes, los diplomas académicos y las estampitas religiosas comparten pared con un armario de madera brillante a rebosar de bandejas plateadas, vasijas pulidas y copas listas para el aguardiente. “La casa sigue estando igual que la dejó mi papá”, explica Leo, mientras se recoge el pelo. Sin buscarlo, una vez está sentada en un sillón y la cámara también está instalada, el tono de Leonoricel se vuelve más institucional, más político, más formal. Un tono que, de cierta manera, a Leo le resulta bien familiar pues su padre, Tirso Antonio Villamil, también fue un destacado líder social que participó en las Juntas de Acción Comunal y, según recuerda orgullosa su hija, “trabajó mucho por la educación, la salud y las vías”.

En estas tierras alejadas de las capitales, las infraestructuras y los focos, uno de los clamores que más se escuchaba en los tiempos de Antonio Villamil y que aún resuena con fuerza es el de ser

visibles para el gobierno y que el gobierno cumpla lo que les promete. Porque Leo lucha por la vida y por la paz, pero no por cualquier vida ni por cualquier paz; por una vida digna, que valga la pena vivir, y una paz reparadora. Con su palabra determinada y su mirada desafiante, sin temor a incomodar a nadie, Leo exige:

Que el gobierno cumpla, que esos proyectos productivos y todo lo que está recogido en el acuerdo de paz se haga realidad, para que la gente pueda medio subsistir, porque con hambre, nadie está contento. Si usted no tiene salud, no tiene educación, una buena productividad, comercio, una buena vivienda... pues no va a haber nunca paz en la vida.

Tal y como denuncian los y las líderes de los diferentes corregimientos de Planadas, como Willington Gutiérrez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Bilbao, aún hay un considerable número de los habitantes de las veredas que no cuentan con luz eléctrica. En 2014, sólo el 41 % de la población tenía acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto —al agua corriente—, el 33 % al alcantarillado y el 70 % a electricidad, según los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, igac. A su vez, el pobre acceso a la salud también es una de las carencias acuciantes del municipio. En algunas veredas, el puesto de salud más cercano está a 7 horas en coche. Además, el municipio presenta amenazas por deslizamientos y frecuentemente los habitantes de la zona se quedan aislados debido a las malas condiciones de las carreteras.

Pero si hay una necesidad que Leo destaca por encima de las demás es la de fortalecer la educación y ampliar la oferta formativa, para que los niños y niñas del municipio puedan acabar sus estudios de bachillerato y tengan la oportunidad de acceder a carreras universitarias. Cuando trabaja por la paz, más que en las propias mujeres y hombres víctimas y supervivientes del conflicto, Leo piensa en los jóvenes, en el futuro:

A nosotros ya nos tocó perder, pero no queremos que ellos lo vuelvan a repetir, porque ellos tienen una perspectiva totalmente diferente de la guerra. Queremos que estos nuevos niños que están viniendo al mundo puedan correr tranquilos, sin miedo de minas quiebrapatas, sin miedo de una explosión de un cilindro, ni de unos disparos ni nada de eso. Sino que crezcan sanos con una diversidad de la naturaleza, en una paz que nos lleve al encuentro, al diálogo.

De hecho, según los datos del DANE, el departamento del Tolima tiene una pirámide poblacional ancha de base, bien nutrida de niños, niñas y jóvenes que miran hacia el mañana, y esto es latente en el caso de Planadas, con más del 40 % de la población entre los 0 y los 14 años, tal y como lo señala el IGAC. Por eso, y por su alma de madre que sabe que no va a poder recuperar a su hijo, Leo repite con contundencia que quiere “que las mamitas puedan disfrutar de sus hijos”.

Una entre doce

Cuando conversa de manera informal con los y las vecinas sobre la situación del municipio, centenares de cifras de los diferentes contratos y licitaciones en trámite salen en torrente desde la mente de Leo hasta su boca. Si está contenta, hablando no hay quien la pare. En la finca cafetera de su padre, colgado en una de las paredes interiores de un establo, una pancarta horizontal con el nombre y el rostro de Leo recuerda su campaña de las últimas municipales para el Concejo de Planadas (2020-2023), por las listas del Partido Verde.

En su acción política, Leonoricel denuncia especialmente las condiciones de empobrecimiento en las que viven muchas de las campesinas de Gaitania:

Si ustedes se van aquí hacia arriba, y miran dentro de las casas, aún hay mujeres maltratadas, que son reprimidas, ermitañas —por decir así— porque no salen al pueblo. Mujeres deterioradas de pie a cabeza. Sin dentadura, mal vestidas, mal alimentadas, no tienen una cocinita apta para hacer sus cosas, no tienen un baño, ni una habitación.

Por eso, Leo reclama que las mujeres “que se levantan a las 3 o 4 de la mañana y son las últimas que se acuestan, pero no tienen remuneración ni una vivienda digna, ni tampoco una unidad sanitaria ni tienen ese reconocimiento”, sean reconocidas, recompensadas y visibilizadas, “porque en el campo y en el hogar lo fundamental es la mujer”.

Pese a su fortaleza externa, Leonoricel reconoce que no es fácil ser lideresa y no es fácil ser una concejal entre doce varones:

Cuando una mujer toma el empoderamiento, se siente capaz de liderar, saca su potencial y sale a flote, pues obvio que a nadie le va a gustar, porque el machismo todavía sigue reinando en Colombia y en todo el mundo, y creen que las mujeres no somos capaces de administrar y manejar. Pero se equivocan, porque las mujeres somos más conscientes y más organizadas, y lo hemos demostrado”. Con una sonrisa pícara en los labios y un destello inteligente en las pupilas, Leo sentencia: “Un hombre sin mujer no vale nada.

El rugir del café

Además de ser lideresa social, Leo es también el alma de “La Leona”, la marca cafetera que impulsó su difunto hijo y que hoy en día gestiona su hija, Laura Sayleth Enciso Villamil, quien sigue las directrices de la agricultura ecológica para producir café. La familia de Leo cultiva grano de alta calidad, lo recolecta, lo

despulpa —o, como ella dice, hace el “beneficio”—, lo lava, lo seca, lo almacena y después lo vende directamente al consumidor final, en un Planadas que se ha convertido en uno de los principales municipios productores de café especial del Tolima. El departamento es el tercer productor de café a nivel nacional y uno de los territorios que conforman el “nuevo eje cafetero” de Colombia, junto con el Huila y el Cauca, líderes en la elaboración de café especial en el país.

Leonorcel, igual que la mayoría de sus vecinos y vecinas, saca pecho por tal desarrollo: “Hoy en día este es un territorio de paz, del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Le decimos el mejor vivero del mundo, y hacemos el mejor café del mundo”.

En las calles de su núcleo urbano, compuesto mayoritariamente por casas y algún apartamento, se perciben aires de pujanza mezclados con el ajetreo del comercio y el aroma del café. Esa riqueza proviene de los campos del municipio, pero que, tal y como denuncia la Leo concejal, no necesariamente llega a los campesinos que los cultivan.

Según los datos del Comité de Cafeteros del Tolima, más de 60 000 familias se dedican al cultivo del café en el departamento y para miles de familias en Planadas este es su principal sustento. Un café planaduno 100 % arábigo que tiene un perfil de taza que “se caracteriza por su cuerpo cremoso y acidez cítrica brillante, con notas de naranja, albaricoque y avellanas, así como un *post-gusto* dulce y duradero”, tal como se puede leer en los empaques del café de la zona. El sabor cítrico recuerda a los albaricoques y naranjos que se erigen entre las matas de café del patio de la finca paterna de Leo, quien destaca el trabajo y el talento de otras compañeras cafeteras.

“Aquí en Gaitania la ganadora de la ‘Taza de la Excelencia’ en el 2006 fue una mujer, Edith Enciso, en medio del conflicto. No pudo visibilizar su café ni lo pudo mostrar, porque aquí tocaba que estar escondidas y al territorio no podía entrar cualquiera. Las personas tenían horarios que cumplían con temor”, recuerda Leo. Pero no fue la única vez que Planadas se alzó con dicho galardón: en 2015, otra mujer de Gaitania, Astrid Medina Pereira, fue la ganadora de la Taza de la Excelencia, certamen organizado cada año por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Fedecafé) y la organización internacional The Alliance for Coffee Excellence. “Mi hijo, con el café La Leona, ganó el octavo lugar en la Copa de la Taza de la Excelencia también en 2015. Fue el cafetero más joven de Colombia en lograrlo”.

Ese mismo año fue asesinado.

Una paz incierta

Pese al floreciente “grano de la esperanza”, la paz en Planadas no está libre de riesgos. “Hay mucha incertidumbre, no sabemos lo que está pasando”, explica Leo, que habla de la amenaza de los llamados “grupos posdesmovilización”: “hablan de disidencia, de grupos que no sabemos quiénes son, de dónde son, cómo son... Con la guerrilla se sabía quién era el guerrillero, pero uno ahoritica no sabe quién es quién”.

“158 armados con fusiles en Ataco-Planadas. ¿Y eso es delincuencia común?” Ironiza la concejala, mientras conversa con vecinas. “El último que mataron fue dentro, aquí en el pueblo, en plena calle, y las mujeres no nos estamos escapando de la muerte, lo asesinan por callarlo o callarla a uno”, lamenta Leo.

“Temores tenemos —continúa la lideresa— porque aquí controlaba la guerrilla, pero hoy en día tenemos fuerza pública, y tenemos harta”. Planadas también aloja una gran base militar del Ejército, en medio del casco urbano. A diario, los campesinos y campesinas se cruzan con los soldados en las cafeterías y bares. “Y no sabemos cómo es el control de estas Fuerzas Militares, ya que no sabemos ya ni a qué atenernos. Porque hasta miedo tenemos: usted sabe que en el huerto de papá puede haber una papa podrida, y eso puede pasar en el gobierno”, reflexiona Leonoricel.

Por ese motivo, la concejala cree que es primordial que se apliquen realmente los acuerdos de paz y el esclarecimiento de la verdad. Reclama capacitaciones para poder llevar a cabo los proyectos de desarrollo planteados para el pueblo y recoge el llamado de las mujeres a “que el gobierno cumpla”. Para lograr esa paz tan ansiada para las mujeres, Leo resume en una palabra qué es lo ellas más necesitan: educación. “La educación es fundamental. Charlas y capacitaciones de equidad de género y empoderamiento, pero no solamente a la mujer, sino a las familias. Esto es lo que más reclaman las mujeres. Que lleguemos a las veredas, a las zonas más alejadas”. La Leona tiene clara cuál es su perspectiva de futuro en cuanto a la organización de las mujeres en Planadas: “Las quiero ver bien, viviendo bien, educadas y empoderadas como mujeres».

CAPÍTULO 2

YULIANA CEPEDA: “SI EL GOBIERNO HUBIERA TENIDO EN CUENTA A TODA LA POBLACIÓN, LA GUERRILLA NO HUBIERA EXISTIDO”



Yuliana está un poco molesta. “Yo soy una de las que tiene una carpeta así de grande”, arguye mientras señala el grueso de su carpeta con las manos. Está repleta de diplomas y certificados obtenidos en los cursos que se han hecho en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (etcr), Marquetalia Cuna de la Resistencia. Hace tres años que Yuliana vive allí con su familia. Habitar en el etcr es complicado. Formarse en el etcr, también: “Se dan unas capacitaciones, pero la gente guarda su papel y lo archiva, porque no van a servir de nada. Si se enseña a criar a un marrano, pues que nos den el marrano. La gente del campo necesita teoría y práctica inmediatamente”.

Yuliana Cepeda (pseudónimo) es una exguerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) en proceso de reincorporación. Tras los Acuerdos de Paz de La Habana, en 2016,

entregó las armas. Los miembros de las farc se disponían a iniciar el proceso de reinserción en la sociedad y a fundar su partido político. La firma de los acuerdos supuso la constitución de veinte Zonas Veredales de Transición y Normalización (zvtN) repartidas por el territorio colombiano, que más tarde se convertirían en los etcr. En la actualidad, los 24 etcr existentes se han incorporado a los centros poblados o forman parte de extensiones de corregimientos y veredas y acogen a 3296 hombres y mujeres de la antigua guerrilla, según las cifras presentadas por la *Revista Semana* en su artículo “Las farc llegó para quedarse”.

En el espacio territorial, Marquetalia Cuna de la Resistencia, (oficialmente etcr El Oso), viven aproximadamente 160 personas, 70 de las cuales forman parte del proceso de reincorporación. El campamento es reducido y está todavía en construcción. La naturaleza de su entorno es exuberante. Grandes cerros verdes enmarcan las casas amarillas del campamento. La parte inferior de las viviendas está pintada de tonos pastel: los hay azules, rosas, naranjas, rojos y verdes. La vivacidad de los colores aporta pizcas de alegría al ambiente pesado de las callejuelas del lugar.

La convivencia no es fácil. En cada casa viven tres o cuatro familias que comparten un solo baño y una sola ducha. Muchas también tienen que comer en la misma pieza donde duermen. “Nos trasladaron desde el Valle del Cauca. Ha sido muy complicado vivir porque estamos todos muy condicionados. Tampoco teníamos las mejores formas de subsistir dentro de la selva, pero al menos existían espacios privados”, explica la exguerrillera del Frente 21.

“Todos los guerrilleros y guerrilleras fuimos arrastrados a ingresar”

Yuliana ingresó a las farc cuando tenía quince años. “Ingresé en un pueblito que se llama Bilbao, en el sur del Tolima. Esta parte de la región siempre ha sido catalogada como zona roja”, señala. Yuliana es muy expresiva. Se muerde el labio según las preguntas que escucha y sus rasgos se endulzan cuando recuerda experiencias: “La mayoría de los hombres y mujeres ingresamos a la guerrilla, porque nacimos y nos formamos en medio de las farc. Entonces uno se llenaba de inquietudes: ¿Cómo será una mujer en la guerrilla? ¿Qué hará un hombre en la guerrilla? ¿Cómo duermen? ¿Cuáles son sus actividades? Yo me hacía esos interrogantes y no encontraba respuesta”.

En cierto modo, los integrantes de las farc le despertaban admiración. “Uno los miraba y decía: ¡Tan chévere que viven ellos!”, recuerda Yuliana, que los observaba en el cafetal, en los ríos o en los caños de su pueblo. Sentía que tenían una cultura diferente. “Su modo de vestir de camuflaje, las mujeres con las orejas llenas de aretes, los muchachos con chaquiras que les colgaban de los hombros...”. Yuliana decidió ingresar y la aceptaron. Aunque no solamente la apariencia fue lo que la condujo a las farc. En el campo, los jóvenes se encuentran con muchos condicionantes que favorecen su ingreso. La falta de referentes y la pobreza de sus familias los llevan a encontrar en las farc una manera de luchar por el cambio. “Yo pienso que, de cierta manera, todos los guerrilleros y guerrilleras fuimos como arrastrados a ingresar. Debido a la falta de oportunidades”, reflexiona Yuliana, que participó durante 10 años en la lucha armada.

Para ingresar en las farc la persona tiene que cumplir ciertos requisitos, aunque eso no fue obstáculo para Yuliana: “cuando usted está como una mula, le pueden poner mil obstáculos

que así no sepa cómo, usted los salta”. Una vez es aceptada, la persona dispone de un tiempo para pensar si verdaderamente quiere partir con la guerrilla. “Yo ingresé y me fui. Empecé mi vida de guerrillera, aprendiendo la rutina que teníamos dentro de la organización, preparándome y conociendo mucho territorio, porque nosotros nos íbamos moviendo. Si anochecíamos en un espacio, no amanecíamos allí y si amanecíamos pues no anochecíamos”, describe Yuliana. Por su forma de hablar es palpable el orgullo que emana de su relato. Además, Yuliana tiende a reiterar elementos en las frases para enfatizarlos, también dobla siempre los sujetos al masculino y al femenino. Su discurso se teje con diversas frases del campo que le brotan de manera fluida en los distintos temas de conversación.

Las farc nacieron como ejército guerrillero organizado en 1964, tras el ataque militar realizado contra los campesinos organizados en Marquetalia (corregimiento de Gaitania, en el municipio de Planadas, Tolima) y otros territorios del sur del Tolima. Las farc fueron formadas por campesinos de diferentes orígenes y orientaciones políticas que se habían organizado previamente en autodefensas, como respuesta a la violencia bipartidista de finales de la década del cuarenta y los años 50, y de los fracasados procesos de amnistía promovidos por el dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953-1958). De acuerdo con el artículo “La ‘operación Marquetalia’ en 1964”, publicado por el portal *Señal Memoria*, “en un contexto de guerra fría y de miedo al comunismo, el Estado interpretó la organización campesina en torno a propiedades colectivas como una amenaza al monopolio de la fuerza y como una alineación con el comunismo”, así que decidió su exterminación enviando 16 000 efectivos de las fuerzas armadas, según cifra de El Espectador, en el artículo “Operación Marquetalia, 53 años de un mito fundacional”. Pero la Operación Marquetalia no logró terminar con las organizaciones

campesinas, que se reagruparon en guerrillas móviles, bajo la dirección de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, uno de los fundadores y líderes de las farc.

“Éramos una ley ilegal, como nos decían a nosotros. Pero éramos ley”, comenta Yuliana con una sonrisa. “Eso es lo que más le molestaba al gobierno y a las instituciones de la región. Si la policía llamaba a una reunión, pues muy rarito el que va. Pero si nosotros convocábamos, fuera por lo que fuera, la gente estaba ahí”, describe. Las farc actuaban como autoridad local del territorio donde estaban y promovían el orden y la buena relación entre comunidades, explica Yuliana. “Si estábamos en Gaitania y había guerrilla, nosotros hacíamos lo que hace hoy en día la policía. Entrábamos en los establecimientos públicos y el que estaba armado con una peinilla o con una navaja, todo eso iba para afuera. Y a nosotros nunca nos ponían problema. De cierta manera, nos habíamos ganado el respeto de la gente”, declara la excombatiente.

Yuliana está sentada junto a uno de los muchos murales que decoran el etcr. En él se ven dos campesinos con rasgos indígenas y la piel del color de la tierra. A la izquierda, un hombre sostiene una mazorca, a la derecha, una mujer anciana usa su bastón mágico, símbolo de sabiduría, de experiencia, para guiar a su comunidad. Mientras Yuliana conversa, su hija Laura revolotea alrededor de la silla. Tiene apenas dos años. Juega con las piedras y, de tanto en tanto, reclama un poco de la atención: “¿Qué quieres amor?”, le pregunta Yuliana con ternura. En el antebrazo, Yuliana luce un tatuaje con el nombre de su hija unido de principio a fin por una línea que dibuja un infinito. Laura pide agua. Su madre va a buscar una botella, le da delicadamente de beber a su hija y, tras tomar un par de sorbos, ella también. Luego prosigue su discurso.

“Pues para mí que estuve allá, que compartí, que viví, que sufrí... Es una historia... un momento muy agradable. Distinguí personas que si no hubiera ingresado no las hubiera podido conocer. Las experiencias que vivimos allá nunca más se vivirán del mismo modo. También la formación que teníamos en su momento, la ideología y la política es algo que le motivaba a uno. Nosotros no ganábamos un sueldo, estábamos a conciencia”, describe Yuliana. La exguerrillera siempre llevaba su fusil, razón por la cual entiende que “una no puede estar obligada en la organización, pues tiene su arma”. Siente que aprendió mucho en las farc: “se hacían cursos de enfermería o de política”, cuenta. También se enseñaban distintos valores, como a hablar sin miedo apropiándose de lo que uno sabe o bien a respetar a toda clase de persona. “La formación de nosotros siempre fue enfocada a la pelea por el bienestar de todas las comunidades, sobre todo las más desfavorecidas y olvidadas por el Estado”, añade la exguerrillera.

Yuliana subraya que estar en la selva también lleva al límite a las personas: “A veces, sufríamos más de lo que estábamos bien. Pero teníamos claro que dimos la palabra y que debíamos enfrentar la situación”. Aun así, el miedo era un sentimiento recurrente: “¿Cómo no le va a dar miedo si uno estaba preparado para que en cualquier momento lo intentaran matar?”. La sensación de incertidumbre se apoderaba de las combatientes “en un bombardeo o cuando capturaban a una guerrillera o guerrillero y no se sabía lo que iba a pasar. Muchas veces había muertos y nos tocaba cargar con ellos. Pero eran etapas a las que uno se iba acostumbrando y sacaba el valor, la adrenalina del momento para reaccionar rápidamente”. Para superar el miedo, “la manera es saberlo controlar. Nosotros teníamos unos reglamentos, las guardias, la disciplina... Y eso era como nuestro escudo. Si uno los cumplía, vivía bien”, explica la exguerrillera. Además, durante la guerra Yuliana se sentía en consonancia con sus compañeros, pues todos estaban en la misma situación.

El antes y el ahora. La vida después de las armas

El etcr El Oso se encuentra cerca de la selva de Marquetalia, el mismo lugar donde surgieron las farc. Por eso los habitantes de El Oso rebautizaron el espacio como etcr Marquetalia, Cuna de la Resistencia". Para llegar a la vereda que da origen al grupo guerrillero, hay que cruzar el río Atá y adentrarse en las montañas de la Cordillera Central. Según la información de *Radio Nacional*, en la crónica "Marquetalia, el paraíso que vio nacer una guerrilla":

Uno camina rodeado de cultivos de café y de frijol hasta el Vallecito, una pequeña colina donde está el rancho que habitó Manuel Marulanda, también conocido como Tirofijo. La casa albergó campesinos liberales con ideas comunistas, que posteriormente vendrían a ser los máximos dirigentes de la guerrilla de las farc. Las farc llegaron a tener más de 20.000 hombres en sus filas. 7 bloques, 64 frentes, presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia y presencia a través de campamentos en Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil.

Yuliana está orgullosa de haber pertenecido a la organización: "Muchos dicen que éramos malos y que no teníamos futuro, pero las farc arraigaron en todo Colombia".

Laura vuelve a reclamar la atención de su madre. Esta vez quiere mamar. Yuliana la recuesta en su regazo y le da pecho. Es una estampa dulce. Laura es uno de los motivos principales por los que la exguerrillera lucha a diario. "Tenemos nuestra familia y tenemos nuestros hijos, que antes no podíamos tener por las circunstancias", señala Yuliana. Durante el conflicto armado, muchas guerrilleras daban a luz hijos que no podrían cuidar y debían dejarlos con otros familiares para seguir en el frente.

Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, han nacido muchos niños y niñas fruto de la nueva estabilidad de los exguerrilleros. En el espacio territorial Marquetalia Cuna de la Resistencia viven

50 de ellos. Yuliana denuncia que tampoco se han tenido en cuenta las necesidades de los más pequeños, pues no cuentan con un espacio específico para ellos: “Ni siquiera un columpio para que se distraigan, un espacio para recrearse, para hacer manualidades. Así como me ven ahorita con la niña, así me tengo que ir a trabajar, así me tengo que ir a estudiar, así me toca participar en reuniones, con ella así o durmiendo en el coche”.

En el etcr, Yuliana ha adquirido nuevos roles, distintos a los que tenía en la selva. “Ahora, estamos encargadas de una casa, de un niño, de atender reuniones... Pero bueno, también es una oportunidad de conocer grandes personas, hacer contratos, canalizar en cierta manera recursos...”, sopesa la exguerrillera. Yuliana asegura que en las farc siempre se han respetado a las mujeres y que en la guerrilla vivían en condiciones de igualdad en relación a los hombres. “El hombre hacía de comer y la mujer también. La mujer iba al combate, el hombre también iba al combate. La mujer iba a remolcar, el hombre también iba a remolcar. Las tareas eran iguales”, explica.

“Éramos unas heroínas. A diario la historia ha querido mostrar a la mujer como víctima, la mujer que dejó a su hijo para irse a alguna organización armada, o la mujer que desplazaron, violaron o asesinaron... Pero dentro de organizaciones que en su momento se alzaron y fueron como esa piedrita en el zapato del gobierno, hubo mujeres valientes, berracas, muy echadas *p’alante*, que lo dieron todo y pelearon”, relata Yuliana. Del mismo modo, también reconoce la importancia de las mujeres que pertenecen a asociaciones y que tienen un rol de liderazgo social. “Nosotras estábamos en el monte, estábamos armadas. De cierta manera teníamos un respaldo muy grande, estábamos en la organización. Pero también hay muchas mujeres que hoy en día pertenecen a asociaciones, son profesoras, presidentas de juntas... Eso hace que la mujer juegue un papel importante, termine más arriba y se

vaya empoderando con todo lo que tiene que ver con un nuevo y un mejor vivir”, observa Yuliana.

Según Yuliana, los reglamentos de las farc eran drásticos y se obligaba a “respetar la integridad física y moral de todos los guerrilleros y guerrilleras y miembros de la población civil. Que un hombre pegara o tratara de hacer cosas no debidas a una mujer dentro de la organización, eso era peor que un delito. Mejor dicho, como dice el campesino, era mejor tocarle las huevas a un muleto que ir a tocar a una mujer”, describe Yuliana. La exguerrillera también explica cómo esas mismas doctrinas las imponían a la población civil. Relata la excombatiente que:

Por ejemplo, en muchas experiencias que viví de hombres que pegaban a las mujeres, se les sacaba a la calle todo el día a recoger basura y se le daba la vuelta a todo el pueblo con una cartelera atrás: ‘Me tienen por pegar a mi mujer’. Se hacía algo público para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y eso en cierta manera aquietaba a la gente. Para un ladrón, lo cogían y se hacía una reunión con la comunidad. Entonces se le decía: se va, se muere o cambia. Porque así eran las cosas. Así hablábamos nosotros, era la verdad.

Organizaciones como SISMA Mujer, onu mujeres y la Ruta Pacífica de las Mujeres afirman, sin embargo, que la violencia de género en el conflicto armado no excluye a las farc de responsabilidades. Además, esta violencia también ocurrió dentro de la misma organización. Lo demuestran revelaciones como las que Elda Neyis Mosquera García, alias Karina, ex comandante del Frente 47 de las farc, hizo a la Fiscalía acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz. Karina aceptó su participación “en 218 crímenes, algunos de ellos contra mujeres, al tiempo que ha detallado políticas de la guerrilla que incluyen el aborto y la planificación forzada”, según el portal *Verdad abierta*, en el artículo “No es cierto que las farc son un abortadero todo el tiempo”.

En el mismo texto del portal informativo se incluyen algunas puntualizaciones de Victoria Sandino, exguerrillera de las farc que trabajó para incluir la perspectiva de género en los Acuerdos de Paz: “No digo que no se presenten cosas hacia la población. Es posible que se hayan presentado cosas, porque en todos los grupos sociales y humanos hay ese tipo de fenómenos. Nuestro comportamiento no es homogéneo, pero para eso hay las reglas internas”. En relación con la violencia de género dentro de las farc, Sandino matiza que seguramente “hay expresiones machistas” pero que a las farc se las cuestiona como si fueran ajenas a la sociedad colombiana, lo que en realidad no es cierto. En este sentido, las Naciones Unidas, señalan en el estudio “Poner fin a la violencia contra la mujer” que “la violencia contra la mujer no es el resultado de la falta de ética personal u ocasional, sino que está más bien profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre el hombre y la mujer”.

Marquetalia Cuna de la Resistencia, un espacio de trabajo en comunidad

La entrada del etcr Marquetalia Cuna de la Resistencia está custodiada por dos militares. Yuliana explica que padecen problemas de seguridad, porque vienen desde fuera a atacar a los excombatientes. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz se han asesinado 198 personas en proceso de reincorporación, según datos que la Misión de Verificación de la onu en Colombia emitió en un comunicado el 9 de mayo de 2020.

Algunas de las palabras de Yuliana son engullidas por el ruido de los Jeeps que circulan por la carretera. La excombatiente se encuentra cerca de la entrada del campamento, al lado de la carretera que ella y sus compañeros han limpiado esta mañana, como parte de los trabajos comunitarios que hacen cada viernes.

“Normalmente no hay tanto tránsito. Pero el sábado y el domingo suben unos carros donde escasamente se ve el parabrisas del conductor. Están así de gente, mire...”, responde mientras hace un gesto de abundancia con la mano. Entre los dos palos que enmarcan la modesta entrada al campamento se extiende una tela blanca resquebrajada. En cierto modo, actúa como insignia de paz, un nexo entre el pasado y el presente. Un antes y un después en el conflicto armado.

La hija de Yuliana se ha dormido en sus brazos. Ella la acuesta suavemente en el cochecito y se dispone a hacer un paseo por el etc. “Aquí los viernes es el día de trabajo colectivo. Por la mañana se abona, se limpia y se coge el café de las plantas que tenemos. También se limpia conjuntamente la carretera. Las mujeres hacemos aseo en los sitios donde se hacen reuniones o eventos. Por ejemplo, el restaurante, el economato, donde se guarda la remesa que nos llega, y tenemos también el matadero, que es donde se sacrifica la res”, describe. Uno de los primeros cobertizos que se divisan desde la entrada es el restaurante. Tiene los bordes rojos y el logo de las farc estampado en la pared. Las mesas de billar tapadas y las colillas que llenan los ceniceros improvisados con botellas de plástico desvelan que el espacio también funciona como sitio de reunión y ocio. Ahora está desierto, pero durante la noche se debe llenar de vida. Antes de continuar, Yuliana se detiene en su casa para pedirle a alguien que cuide de Laura. Los caminos irregulares de tierra del campamento hacen imposible caminar más de doscientos metros con el cochecito.

Unos sacos de tierra apoyados contra un muro indican que el campamento todavía no está terminado. Yuliana protesta, porque siente que el gobierno no hace todo lo que está a su alcance para mejorar la situación de las comunidades campesinas: “Hay una

frase muy bonita que dice: 'el campo es nuestro motor'. Pero en el campo no invierten. Entonces, pues ahí estamos. Al gobierno le falta voluntad de que verdaderamente esto cambie. Todo está en sus manos". La excombatiente destaca la necesidad de que les concedan proyectos colectivos para poder tener una economía solidaria. Pero por el momento solo les llegan proyectos individuales. Sentencia Yuliana:

Por ejemplo, si tu proyecto lo vas a invertir en ganado, te dan 8 vacas. Pero si me van a dar 8 vacas, yo necesito dónde meterlas, cómo tecnificarlas en cierto modo. O bien, las ayudas que le llegan al campesino son de 10 gallinas, cuando tal y como está el precio de la cubeta de alimento para ellas, es más caro lo que invierten criando la gallina que lo que van a obtener de la venta de sus huevos. Eso no es una reincorporación como la que se firmó. No estamos pidiendo todas las ayudas y que seamos la niña de los ojos del gobierno, no. Solamente que cumplan los acuerdos.

Entre las casas del etcr también se aprecian algunos espacios comunes señalados con un cartel en la entrada: el puesto de administración, el área de salud, el aula... Este último llama especialmente la atención. Su entrada está coronada por un colorido mural con una guitarra, cuya madera se funde con el tronco de un árbol del que crecen unas hojas de plátano. Como fondo, las montañas verdes de la Cordillera Central en un día resplandeciente. En primer plano, las manos de los niños y niñas que habitan el etcr. Este espacio funciona como el colegio de Marquetalia Cuna de la Resistencia. Es una construcción humilde que cuenta con una sola pared hecha de madera. El resto del espacio queda limitado por una sutil barandilla.

El aula habla por sí sola. Repartidos por el espacio hay varios carteles que incitan a apagar los móviles y también algunos lemas para promocionar el estudio: "Las mentiras ofenden a los

inteligentes, a los ignorantes les da esperanza”, o bien: “La mente es el mejor activo. Inviértele”. En ambas esquinas de la pared hay una pequeña biblioteca y en el centro una tela pintada a mano. Se trata de un mapa del municipio de Planadas, donde se encuentra el etc. La silueta está repleta de la realidad de los pequeños del campamento: familias, pájaros, naturaleza, música, montañas, animales del ganado... En la tela también hay escritas tres palabras: “Reconciliación, Amor, Paz”. En la pizarra del aula permanecen los apuntes de la última clase que se dio: “La problemática de la vivienda: el presente ensayo habla sobre la problemática del acceso a la vivienda digna en Gaitania”. Ese día los alumnos también se llevaron como deberes hacer un escrito sobre la economía campesina. “Aquí también se estudia”, recalca Yuliana:

Tenemos un programa donde colaboran el Consejo Noruego para Refugiados, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Fundación Colombiana de Excombatientes y Promotores de Paz, que son los que nos están dando el estudio en cierta manera. Ya vamos a completar dos años y algunos nos hemos graduado estando acá.

Al salir de la escuela, en uno de los cobertizos que da a la calle principal, se divisa un cartel de “Felicidades”. El ambiente es festivo, suena música y madres y padres se reúnen alrededor de la casa del cumpleaños. Parece que se celebra una fiesta. “Morir matando es la ley, así comienza el corrido. Así lo dijo Miguel, cuando iba a ser detenido. Prefiero, morir matando, antes que me hagas cautivo...”, proclaman desde el altavoz Los Tigres del Norte, con su canción “Morir Matando”. El tema narra la historia de Miguel, que dispara a un teniente y termina desaparecido. Yuliana cruza la fiesta para dirigirse a la parte baja del campamento, donde los excombatientes tienen un proyecto piscícola. La sigue un perro de pelaje claro llamado Tyson, que reclama la atención de todos para que le lancen palos o piedras para correr tras ellas.

En medio de un terreno arenoso, cinco estanques cubiertos con una capa de plástico amarillo emiten ruidos de agua en constante movimiento. Las tilapias rojas son una de las grandes apuestas productivas de la población excombatiente del etcr El Oso. Muchos de los participantes del proyecto reciben un mensaje de WhatsApp en la noche: “Los peces están sin novedad”. Yuliana explica que se informan por los celulares sobre las últimas noticias: “Hacemos guardia a los pescados, porque el oxigenador tiene que estar funcionando todo el rato. A veces, también reportamos bajas de pescados”. Según el diario El Cronista en su artículo “Mujeres excombatientes de las farc impulsan proyecto piscícola en Tolima”, “El proyecto consiste en producir 17 000 unidades de tilapia para comercializar como consumo doméstico (...) se espera una producción de 1200 a 1500 unidades que serán comercializadas a partir del mes de abril [de 2020] en mercados locales”. El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid (España), el ministerio de Agricultura, la Fundación Futuro y Desarrollo Comunitario (Fudesco), la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local en Colombia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (arn) y la Alcaldía Municipal de Planadas. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, fue el encargado de dar las capacitaciones a la población excombatiente para mejorar la producción y la calidad de las tilapias.

Al lado de los estanques se encuentra un humilde campo de fútbol. El desgaste del suelo es resultado de los muchos partidos que se han jugado en ese espacio. Dos pequeñas porterías blancas y dos más grandes marrones situadas en perpendicular completan el terreno de juego. “Esa es la cancha que tenemos nosotros. Ahí jugamos a micro, a mí me gusta mucho. Cada sábado hacemos deporte con las comunidades en la escuela que hay más arriba del etcr. Hombres, mujeres, todos ahí jugando”, relata Yuliana. La exguerrillera sigue su ruta, ya de regreso a la

entrada del campamento. Cuando se cruza con alguien conocido, lo saluda amigablemente.

Las pisadas de Yuliana quedan amortiguadas por el roce de las hojas de plátano que decoran la carretera. Un poco más lejos, Yuliana señala unas plantas de café. “Todo este café nosotros lo sembramos”, explica. Las tilapias no son el único proyecto productivo de los habitantes de Marquetalia Cuna de la Resistencia. También han desarrollado una marca colectiva de café con miembros del cabildo indígena Nasa Wes’x y familias caficultoras de la región: el Tercer Acuerdo. En julio de 1996, los indígenas Nasa y las farc firmaban entre ellos el primer acuerdo de paz. El segundo acuerdo fue el de la terminación del conflicto, firmado con el Gobierno. La nueva marca de café simboliza un ‘tercer acuerdo’, que recupera el tejido social entre indígenas, comunidades campesinas y excombatientes. Distintas asociaciones aportan café para la fabricación de la marca y desde el etcr se empaca y se vende.

Tras el fin del conflicto, las farc han estrechado lazos con las comunidades de Gaitania. “Yo pienso que tanto incumplimiento que ha habido por parte del gobierno, nos ha llevado a que nosotros vayamos construyendo alternativas. La integración con las comunidades también ha crecido, pues tenemos las mismas necesidades de estudio, de seguridad, de salud, la sensación de olvido...”, matiza Yuliana. La excombatiente hace balance de cómo se ejecutan las medidas de los acuerdos: “Creo que por el afán de participar en la política se cometió un error muy grande en hacer la dejación de armas en una sola etapa. Eso hizo que hoy no estén cumpliendo el acuerdo”. Yuliana siente que las farc, han perdido autoridad: “Cuando estábamos aquí armados, a nosotros nos cumplían. Pedíamos agua y nos llegaba agua. Ahora, pedimos agua y no nos mandan nada”, se lamenta la madre de Laura, con un dejo de tristeza en los ojos.

Los excombatientes pusieron confianza en sus superiores para finalizar la lucha: “éramos una organización subordinada y decíamos que tras 52 años de la organización en armas había que dejar hacer a nuestros jefes. Pero fuimos muy ingenuos porque depositamos un grado de confianza en personas que no lo saben valorar”, concluye Yuliana. La excombatiente duda sobre el camino que ha seguido la organización desde sus inicios. Así reflexiona la excombatiente:

La verdad, el camarada Manuel Marulanda Vélez, el fundador de las farc, tenía unas ideas claras. Pero cuando un camarada falta, inmediatamente viene un reemplazo. Y muchas veces el reemplazo no sigue con el mismo alineamiento. Yo pienso que, si el camarada Manuel hubiese estado vivo, o el camarada Alfonso, o el camarada Jorge Briceño, nosotros no estaríamos acá. De pronto sí hubiera habido unas conversaciones y un diálogo. Pero no serían así como las estamos viviendo.

A pesar de todo, “también son oportunidades que a uno le da la vida y que hay que saber aprovechar”. Tras los acuerdos, la respuesta que generan en las comunidades con las que conviven es distinta. Antes, según describe Yuliana:

la gente se mantenía tensionada. Había esa zozobra, no porque llegó la guerrilla sino porque en algún momento se venía un combate. Muchas veces la misma gente de la comunidad informaba al ejército por plata. El gobierno tomaba la necesidad del campesino y la utilizaba como método de guerra contra nosotros. En las farc lo entendíamos, pero también manejábamos nuestra seguridad.

Ahora, por el contrario, han recibido agradecimientos de estar en la vereda. Dice Yuliana:

Nos dicen que gracias a que nosotros estamos acá viven una tranquilidad. Que no están pensando que un helicóptero va a rafaguear, que va a haber un tiroteo mientras recogen el café, un falso positivo, un muerto... Eso hace que nos sintamos aceptados dentro de las comunidades.

“La paz es posible, pero hay que construirla”

“Allí está el caserío y la parte de Campohermoso...”, señala Yuliana mientras sube la por la carretera. “La verdad es que por la montaña usted se trasladaba fácilmente de un pueblo a otro pueblo. De Herrera a Bilbao, de Bilbao a Planadas y de Planadas a veredas, a Chaparral... Todo eso a pie, por la montaña y los páramos. Ahora amanecemos y anohecemos y miramos lo mismo, pero al menos no nos hemos quedado quietos”, sonríe la excombatiente. De regreso a la parte principal del etcr, la fiesta todavía sigue. Al observar con más detenimiento, en algunas paredes aparecen murales antes desapercibidos. “Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de combate”, se lee en un muro junto al nombre de muchos excombatientes fallecidos. En otra pared hay una frase de Alfonso Cano, dirigente de las farc tras la muerte de Marulanda: “Como revolucionarios y luchadores de la causa popular estamos obligados a buscar las vías menos dolorosas para alcanzar el poder”.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, las guerrillas son responsables de 36 682 ataques contra la vida y la integridad física durante el conflicto armado. Se trata del 17 % del total de este tipo de violencia. Los paramilitares son responsables del 43 % de los ataques y los agentes del estado del 4,5 %. “Se dice que se perdona, pero no se olvida”, afirma Yuliana. “Muchas veces se perdieron vidas y si a uno le mataron un familiar, ¿decir que lo perdona y que cuando lo ve no se acuerda de ello, no es una mentira?”, reflexiona la excombatiente.

El etcr El Oso ha funcionado como espacio de reconciliación entre las farc y las comunidades. Por ejemplo, acogió la primera Mesa Técnica para la No Repetición, donde víctimas y victimarios se encontraron en un mismo lugar. “Es muy duro sentarse en una mesa y que haya la madre de un muerto. Uno piensa que, aunque lllore y se arrodille ante esa persona, esta no va a quedar satisfecha. Una forma no tan extrema que tiene que ver con el perdón es la reconciliación. Por lo que nos han dicho, en lo relacionado con la búsqueda de desaparecidos y la Comisión de la Verdad, la gente quiere saber qué pasó: ¿Por qué lo mataron? ¿Cómo? ¿Quién lo mandó matar? Cuando se comparten historias se llega a un diálogo y se produce un acercamiento”, analiza Yuliana, que pone énfasis en la importancia de la narración como herramienta para la construcción de paz.

“Pienso que la paz es posible, pero la paz hay que construirla. Hay que poner mucho compromiso de todas las partes. Tanto el campesino, como el concejal, como las fuerzas militares, los medios de comunicación...”, afirma. Según la excombatiente, las farc esperan oportunidades y espacios de participación política, donde puedan hablar y dialogar con sus opositores y mostrar su pensamiento. “Hay gente que no nos conoce y nos odia, porque los medios de comunicación dijeron que nosotros éramos terroristas. Sencillamente así.”, dice con contundencia Yuliana. “De nada sirve que yo en mi territorio esté trabajando por la paz, cuando un medio de comunicación está diciendo que, en el sur del Tolima, todos los combatientes se fueron para la disidencia [grupos residuales de las farc que han continuado con la lucha armada]”.

No hay una única perspectiva bajo la cual analizar el conflicto armado que ha vivido Colombia. Victimarios y víctimas se intercambian papeles según el testigo que narra la historia. “Yo me considero víctima, porque si tal vez el gobierno hubiera

tenido otras prioridades, como tener en cuenta toda la población, tal vez la guerrilla no hubiera existido. La guerrilla existió por la desigualdad. Lo que pasó en el 64 todavía persiste: la gente quería una escuela y una vía, un camino, una carretera. Y en vez de ayudarlos les metieron armas y bombas y aviones. Y por eso surgió. Fue como el principio de la organización. El gobierno tiene todas las herramientas para que no solamente cambie la forma de vivir de nosotros como excombatientes, sino también la de la comunidad”, concluye Yuliana.

La excombatiente regresa a su casa y lo primero que hace es preguntar por su hija: “Nené, ¿con quién quedó la niña?”. Su cobertizo está repleto de ropa azul, rosa y blanca que cuelga de todos los hilos y estructuras existentes. Mientras habla, el rostro de Yuliana se esconde por momentos entre las cortinas tricolores. “Pero saben qué, hay un historiador que dice que nadie nace aprendido, que todos los días aprendemos. Aquí los saberes han sido muy importantes para ir relacionándonos, logrando nuevas oportunidades y conociendo nuevos terrenos. Yo pienso que alrededor de la comunidad también se pueden lograr muchas cosas”, concluye Yuliana con un destello de esperanza en los ojos. Luego va a sentarse con sus compañeras con quienes ultima los detalles de la reunión que tienen en unas horas.

CAPÍTULO 3

NORBY PULIDO ROBAYO: “LAS MUJERES SOMOS MÁS LÍDERES QUE LOS HOMBRES. TENEMOS MÁS ESPÍRITU DE TRABAJO EN COMUNIDAD”



En Villarrica, el sol es agradable y trasluce una espléndida primavera. Brillante. Es domingo y la plaza está llena de voces. La gente sale de misa, hace sus compras, saluda al vecino. Con los amigos, se reúnen en las tiendas para tomar una, dos o tres cervezas antes de volver a almorzar a sus casas. Todo se mueve. Cientos de personas llegan al pueblo desde ciudades pequeñas y grandes, mientras los buses que los traen se llevan a los que ahora van a esas ciudades a trabajar durante la semana. Un hombre mayor camina lentamente por la esquina de la plaza con su burro que transporta una carga de caña. Los domingos, el pueblo está en esplendor.

Cientos de campesinos bajan de sus veredas a vender su cosecha, a negociar el transporte de su carga, a pasear por la plaza principal en la que un grano de café gigante señala el kilómetro

cero de todas las direcciones. Bajan también a hacer gestiones en la alcaldía, que estrena un nuevo horario de atención: los fines de semana.

Es el primer domingo que trabajamos. Fue algo que propusimos a los candidatos a la alcaldía en las elecciones de octubre de 2019. Queríamos que el campesino fuera tenido en cuenta y para tenerlo en cuenta toca atenderlo. Y si no lo atiende la primera autoridad del municipio, estamos fregados. Entonces logramos que la alcaldía abriera los sábados todo el día y el domingo en la mañana. Es la única forma de que los campesinos sean escuchados, porque en Villarrica somos 33 veredas y las veredas quedan muy lejos.

En 1976, en una de esas veredas a más de una hora de camino en coche o autobús desde el pueblo de Villarrica, nació la impulsora de los nuevos horarios. Es Norby Pulido Robayo, la nueva coordinadora de juntas de la alcaldía de Villarrica. Allí en su vereda, en La Colonia, el clima es diferente. La primavera da paso al otoño. Llueve y el viento exige buscar algún abrigo para librarse del suave frío que anuncia la montaña. El punto es estratégico. Fue, durante muchos años, un paso casi obligado entre el sur del Tolima o el Caquetá y las importantes zonas de El Delirio, La Caucha, Ucrania y La Uribe, en el trayecto del descenso del Río Duda desde su nacimiento, en el Páramo de Sumapaz. Quizás los nombres de esos municipios o veredas de pocas o ninguna casa son desconocidos, pero es la zona en la que se instaló, desde 1965, el cuartel general simbólico de la guerrilla hasta la década del 90, el campamento de Casa Verde.

Nací en La Colonia, una vereda histórica

Norby Pulido se presenta a sí misma y hace, en 30 segundos, un resumen muy completo de su vida: “Norby Pulido es nacida y criada en La Colonia, una vereda de aquí de Villarrica, Tolima. Soy

hija de líderes del Partido Comunista. Mis padres habían vivido en La Colonia toda su vida, pero por motivos del conflicto tuvieron que irse, y nosotros, también nos fuimos. Viví veinte años fuera y hace tres años volví. Me di cuenta de la importancia de nuestra región y de que es fundamental llevar la historia a otro lado, de contarla de una forma diferente a como lo han hecho normalmente”.

Es la segunda de siete hijos y trabaja en la gestión municipal con el objetivo de articular procesos de organización comunitaria en Villarrica: “trabajo con los líderes”, señala mientras guarda silencio y espera, ansiosa, una nueva pregunta. En La Colonia también es domingo, pero la actividad mermó desde hace más de medio siglo. En la vereda hasta el silencio parece que se quedó congelado después de que entre 1955 y 1956 la región de Villarrica fuera declarada “zona de operaciones militares” y, por tanto, azotada duramente por el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. Para entonces, La Violencia en Colombia había recién empezado después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. En la zona, como consecuencia de las diferencias entre las milicias liberales —Limpios— y comunistas —Comunes— en el sur del Tolima, grupos que hacía apenas algunos años se habían aliado para protegerse de los asesinatos ordenados por el gobierno conservador, se concentraron algunos de los grupos comunistas y sus familias y comenzaron a trabajar la tierra, al tiempo que adelantaban, con la población, un trabajo político que preocupaba al gobierno militar de la época.

El gobierno no dudó en demostrar su poder en su intención de eliminar la disidencia política que no se había sumado a las amnistías concedidas en los primeros años de Rojas Pinilla (1953 y 1954). Villarrica fue señalado como un territorio comunista. Después de perseguir, evacuar a la población y capturar a cientos de personas por sus vínculos con las agrupaciones políticas de

izquierda, el mando militar decidió bombardear la zona. Arrasarla. Envío aviones de combate y, bajo el toque de queda permanente de la época, lanzó decenas de bombas contra los poblados. Testimonios de la época, recogidos por diferentes investigadores a lo largo de los años, indican que muchas de las bombas utilizadas eran incendiarias (Napalm). “El gobierno gastó más plata en destruir La Colonia que lo que gastó en fundarla”, señalaba el investigador Alfredo Molano en su libro *Trochas y fusiles*.

Norby señala a esos primeros años de La Violencia como los detonantes del conflicto en Colombia:

Esa época fue dura, es lo que cuentan nuestros padres. La guerra de los liberales y conservadores fue dura para ellos. De ahí fue que surgió como tal el conflicto entre el Estado y las farc. Más de 50 años de conflicto. En esas guerras nos involucraron mucho a nosotros, los campesinos, a las personas con un partido diferente. Fue una guerra de la población civil, de los campesinos, con el Estado.

Los bombardeos obligaron a muchos de los grupos políticos y a sus familias a desplazarse hacia otros municipios. Icononzo, Galilea, las zonas del oriente, sobre el Páramo y, poco a poco, hacia el cañón del Río Duda, a la entrada de los llanos orientales. Desde allí, reunidos, algunos de los grupos desplazados, junto con otros cientos de familias llegadas de otras guerras (del llano, del Santander, del Norte del Valle), decidieron distribuirse hacia cinco rutas que utilizarían, ellos mismos, para asentarse nuevamente en zonas adecuadas para desarrollar su vida, poder cultivar su alimento e intentar vivir en paz: El Pato, Guayabero, Riochiquito, Sumapaz y Marquetalia.

Cuenta Carlos Pulido, padre de Norby, que hubo efectivamente un periodo corto de tranquilidad, entre 1958 y 1960, justo cuando

Rojas Pinilla dejaba el mando y se consolidaba el pacto político entre los líderes de los partidos Conservador y Liberal. Pero que a partir del 60 la guerra empezó de nuevo con algunos asesinatos de los colonos asentados, lo que propició que surgiera la autodefensa campesina en los territorios. Los nuevos disparos se hicieron eco en el Congreso en 1961, cuando el líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, denunció la presencia de

repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde el Ejército Colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes... Hay la República Independiente de Sumapaz. Hay la República Independiente de Planadas, la de Riochiquito, la de este bandolero que se llama Richard...

Tan solo un año más tarde, el primer gobierno conservador del Frente Nacional, en cabeza del presidente Guillermo León Valencia (1962-1966), decidió afrontar de lleno el problema señalado por Gómez Hurtado. Enmarcado en un clima de anticomunismo continental y con el Plan laso aplicándose en toda América Latina como consecuencia de la Revolución Cubana, se dio inicio al plan de recuperación y sometimiento de los territorios "independientes". En 1964 se desarrolló la Operación Soberanía en la que hasta 16 mil soldados con apoyo aéreo, según el diario El Espectador, terminaron por desplazar, de nuevo, a quienes se habían organizado en Marquetalia: apenas 48 combatientes agrarios, de acuerdo con múltiples fuentes y documentos. Ellos, como autodefensa y con bajas, se dieron a la fuga y volvieron a juntarse en Riochiquito en donde decidieron conformar, como guerrilla, el Bloque Sur. Un año más tarde, en una nueva huida, el movimiento se refugia una vez más al otro lado de la cordillera oriental. Regresaron al cañón del Río Duda. En 1966, tras la celebración de la II

Conferencia Guerrillera, el Bloque Sur asumió el nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc.

El movimiento guerrillero estuvo, por tanto, ligado a la región de Villarrica desde su fundación y hasta la firma de la paz, en 2016:

En este sector nosotros crecimos con la imagen de las farc. Siempre. Yo, por ejemplo, conocí las farc cuando tenía unos 7 añitos, aunque nuestros padres siempre tuvieron mucha prudencia en el tema de la guerrilla. Mi padre y sus hermanos fueron líderes de partido de izquierdas y fueron señalados de que era el partido de la guerrilla, de que ellos eran personas que trabajaban con la guerrilla. Siempre existía entonces ese conflicto y ese temor. Pero tenerles miedo a las farc, no. Porque nosotros crecimos con ellos. Le teníamos más miedo, en esa época, a la misma fuerza pública que a las farc. A pesar de que no vivieran aquí todo el tiempo, esta zona era un camino para ellos, encontrarlos en la carretera era para nosotros muy normal.

De acuerdo con el documento “Panorama actual de la región del Sumapaz”, elaborado por la Vicepresidencia de la República en 2002, la zona del Sumapaz fue un escenario muy importante para la expansión de las farc. El informe señala que el territorio se caracterizaba por

un enraizado apoyo a la izquierda, que se relaciona con los otros procesos históricos de la región, con la lucha agraria y con la violencia y que además permite entender la vulnerabilidad de la zona como escenario del conflicto y a sus habitantes como sus víctimas.

Fui, pero me devolví rápido

Villarrica y su vereda La Colonia, así como todo el Sumapaz, fue un paso obligado de las trochas y de las luchas del conflicto armado en Colombia. Era un corredor entre los departamentos

del Tolima, Cundinamarca, Huila, Meta y Caquetá. Su ubicación estratégica concedía, además, un paso cercano, tan solo cien kilómetros, para mantener en alerta a Bogotá, la capital del país.

La presencia de las farc en Villarrica se intensificó en la década de los ochenta y, particularmente, a partir de 1986. El testimonio de Evaristo Castro, campesino de la vereda San Joaquín de Villarrica quien vivió de niño la Guerra de Villarrica (1955-1956), recogido por el trabajo de investigación de Sara Prada Herrera, indica que en la zona

empezó a verse por ahí gente armada. Primero, por el lado de La Colonia y avanzaron”. Sara Prada señala que “en los primeros años de presencia de las farc en Villarrica el grupo armado no desplegó acciones de peso, sino que aprovechó el municipio como corredor y como zona de acampada.

Nadie en la zona logró mantenerse al margen y la guerra y sus acciones tocaron completamente a Villarrica en muchos periodos. A Norby Pulido el conflicto le cambió la vida: “Mucho. El conflicto armado me afectó mucho”. Norby hace una pausa y levanta la mirada hacia su propio pasado mientras se toma las manos y piensa en sus propias palabras. Sonríe y abre sus ojos negros. Está a punto de contar un secreto, de hacer una confesión.

“Cuando tenía 15 años... yo me fui para las farc”. La lluvia que cae sobre su casa en La Colonia toma protagonismo durante algunos segundos de silencio.

Fue precisamente por ese mismo tema de la persecución del Estado a mis padres, porque ellos tenían una forma diferente de pensar. Uno como que se va involucrando, porque yo soy la segunda hija de mi padre y siempre viví como untada del tema del partido. De todas maneras, duré sólo 2 años allí. A los 17 años deserté de las farc.

Norby no encontró en las farc la política transformadora que le habían prometido.

Quando nosotros estábamos aquí en el campo uno escuchaba maravillas. Hablaban de la igualdad de condiciones, que no deberían existir colores políticos, sino que siempre todos deberíamos de tener las mismas oportunidades. Pero cuando uno llega allá se da cuenta de que todo es diferente. Ya el tema es más militar, y en esa época la persecución de la fuerza pública era mucho más fuerte.

Además, recalca, la situación de las mujeres en las farc tampoco era la mejor:

en todo lado hay machismo y la mujer siempre es cohibida de muchas cosas. Siempre, en todos lados. Quizás, en la época en la que yo estuve, que ya fue prácticamente lo último, ya empezaban a tener en cuenta a la mujer. De pronto ya se daban cuenta de la importancia de las mujeres en un grupo, de sus liderazgos, de lo importante de la voz y del voto de una mujer.

Las consecuencias de su corto paso por la guerrilla fueron importantes. Sus padres sufrieron una persecución política y “les tocó prácticamente abandonar la región”. A su regreso, tuvo que marcharse porque “ya todo el mundo tenía conocimiento de quién era Norby Pulido”. Como muchos colombianos que huían de la persecución, de las múltiples violencias, se fue para la ciudad y allí formó una familia:

Conseguí esposo, tuve tres hijos y formé una familia. Ya después de 20 años fue cuando decidí volver a mi región. Nunca la abandoné. Siempre venía a Villarrica, Tolima, porque aquí están mis raíces, mi familia. Es que como el lazo que hay con el sitio donde uno nace es tan fuerte, como que uno viene con más empuje para hacer las cosas, para trabajar con más fuerza.

Pero con la experiencia asimilada: “Ya hemos aprendido la lección. Ya no vemos un color político. No es bueno estar detrás de un color político sino todo lo contrario, hay que pensar en toda la comunidad”.

A pesar de que es un tema del que normalmente no habla, Norby asume por completo su decisión:

Yo pensé que nunca les iba a contar esa historia, a veces quiero tapar esa historia, pero me es imposible. Porque si lo hago hay una mentira. Ustedes me van a decir, bueno Norby vivió 15 años en La Colonia y cuando tenía 17 se fue para la ciudad... ahí hay un lapso en el que debe haber una historia. Pero normal, fue algo, una decisión que tomé y que, al cabo de un corto tiempo, pues la eché para atrás. Y aquí estoy, trabajando para la comunidad.

Norby vuelve a reír. Rápidamente regresa a su rol de mujer, de madre, de lideresa: “siempre fue mi sueño volver a intentar ayudar a la gente porque yo escuchaba y veía a mis padres trabajar por la comunidad. Uno quiere siempre hacer parte de un grupo de personas líderes que quieren un cambio general”. Por eso volvió a Villarrica y se ha dedicado a eso, a liderar procesos de transformación social en su entorno.

No soy una lideresa

Para llegar a Villarrica hay que seguir una ruta marcada por la propia historia de la violencia. Entre el Carmen de Apicalá —a sólo 10 kilómetros de Melgar, uno de los municipios en los que miles de bogotanos pasan sus fines de semana cuando deciden ir a “tierra caliente” por unos días— y Villarrica hay solo 50 kilómetros de distancia. Pero las condiciones de la carretera hacen que el trayecto pueda alcanzar las tres horas, siempre

y cuando no llueva. Si hay temporada de lluvias, el camino se vuelve intransitable.

Al salir del Carmen de Apicalá y antes de llegar a Cunday, se asciende al Alto de los Peligros, desde donde, según el libro histórico *La violencia en Colombia*, escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, se lanzaron los cuerpos sin vida de cientos de presos políticos. En Los Peligros paraban las

volquetas oficiales con su carga fatídica de hombres sacados de la cárcel para fusilarlos sin fórmula de juicio. Esto, que ocurrió en casi todas las poblaciones afectadas por la violencia, constituye uno de los más importantes capítulos de destrucción del orden jurídico del país

señalan los autores del libro fundacional de los estudios sociológicos e históricos sobre la violencia en el país.

Pasados Los Peligros, se llega a Cunday. Si Villarrica fue considerado como un bastión del liberalismo, e incluso del comunismo en la mitad del siglo xx, Cunday era visto como el centro de operaciones del conservadurismo. Según los estudios de los investigadores Miguel Ángel Beltrán Villegas y Darío Villamizar Herrera, en Cunday fueron confinadas en “centros de concentración” más de 250 personas entre 1954 y 1955, detenidas en las acciones militares llevadas a cabo en Villarrica. “Sí. La Colonia ha sido azotada por muchas violencias”, comenta Norby. “La violencia del 55, la violencia con las farc... Pero también muchas otras veredas. Villarrica entera fue el centro de muchas violencias”.

A partir de Cunday, el camino es completamente de tierra y contrasta con la majestuosidad de la vista que domina el Tolima en su inmensidad. Los nombres de las veredas toman voz en los

libros de la historia de la propia violencia: la vía a Icononzo, El Edén, Los Alpes, el Tesoro, el camino hacia la vereda Mercadilla. Después de casi tres horas y 50 kilómetros de recorrido, una avenida de palmas que conduce a la iglesia y a la plaza central da la bienvenida a Villarrica, un municipio de casi 6000 habitantes.

Norby saluda a casi todos los villarricenses que se cruzan con ella en la calle. Para todos tiene tiempo y mucha atención:

Yo no me siento como una líder, pero la gente sí me ve como líder. Creo que es precisamente por mi forma de ser y por mi forma de pensar. Igualdad, tratar a todos en igualdad de condiciones, no ver estratos sociales ni nada de eso, sino tratarlos a todos de la misma forma. Yo creo que todos merecemos ser tratados igual.

Como una mujer nacida en el campo, asume la humildad como la única forma de ejercer su liderazgo social, un rol que, según ella misma, debe estar alejado del reconocimiento:

La sociedad necesita muchas mujeres líderes, pero que se entreguen totalmente a un pueblo, no que únicamente digan como “mírenme, yo estoy acá, soy una líder”, sino que lo sientan de corazón para que traten a la gente con respeto, con cariño, hasta con el mismo amor.

Mientras recorre la ruta hacia su casa en La Colonia, Norby no deja de saludar a quienes pasan por el camino o a las que, desde las ventanas o puertas de sus fincas, le agitan la mano al verla pasar.

Es que la gente del campo tiene más nobleza. Es mucho más fácil que, por ejemplo, tratar con el choque de culturas que hay en una gran ciudad. Aquí tenemos la misma cultura y, aunque aun así hay algunos choques, por lo menos la gente del campo aprende a escucharlo a uno y, por lo tanto, uno también los escucha.

dice al intentar, con sorpresa, explicar una práctica cotidiana en su comunidad.

Como funcionaria municipal, Norby vive ahora en el casco urbano del pueblo, a pesar de que prefiere vivir en su finca de La Colonia, a 12 kilómetros del centro de Villarrica, a donde vuelve varias veces al mes. “La Colonia tiene la suerte de tener cosas que muy pocas veredas tienen por aquí. Tenemos una montaña cerca, y si una se cansa de estar en el campo, pues el pueblo está a una hora de aquí”.

Ser líder en Villarrica

La finca de Norby Pulido en La Colonia se sitúa casi un kilómetro antes de llegar al centro administrativo de la vereda, donde se concentran una veintena de casas, una tienda de barrio desde la que suena música popular a alto volumen y en la que dos campesinos pasan la tarde con unas cervezas, un polideportivo con la palabra “Bienvenidos” escrita en letras rojas en el centro de las dos gradas de cemento que limitan el campo de juegos, una caseta central con las banderas de Colombia, Tolima y Villarrica y, al fondo, detenida en el tiempo, la fachada de la iglesia en la cual aún son visibles las marcas del bombardeo de los años cincuenta.

Hace tres años, Norby decidió volver porque “empecé a ver que Villarrica iba cada vez de mal a peor. Comencé a ver que necesitábamos un cambio y que ese cambio tenía que empezar con nosotros mismos, así que volví”. Pero las marcas de la guerra, aún visibles en los edificios y en la memoria de las personas, hacen que ser lideresa en Villarrica sea más complejo.

Para la población es duro porque aquí aún se mueve mucho el color político. Todavía hay personas reaccionarias, que sienten que las cosas deben ser

como ellos digan. Ha sido difícil, pero no es imposible». Norby menciona que, en esas condiciones, la organización social tiene más obstáculos que vencer: “aquí todavía existen colores políticos. Hay diferencias en ese tema, y se nota porque vamos a organizarnos, a proponer cosas, y la gente no cree. La gente no cree en una organización. Por el pasado, por la mentira, por la persecución. Entonces la gente como que todavía siente ese temor.

En esa memoria, Villarrica no solamente lleva el peso de la guerra del inicio de La Violencia. También está en su recuerdo ser testigo de la conformación de las farc, organización armada que dominó el territorio durante muchos años. Según relata Norby, “durante el conflicto, desde el 85 y como hasta el 94 o 95, los que llevaban las riendas en este sector eran las farc. Todo marchaba según las reglas de ellos”. Además, en la memoria reciente, el pueblo aún recuerda la toma guerrillera de noviembre de 1999. Varios de los edificios que destruyeron las farc en ese ataque aún están sin reconstruir, como la mismísima estación de Policía o la sucursal del Banco Agrario que, desde entonces, nunca regresó al municipio. Entre 1999 y 2003, la presencia del Estado fue inexistente. La Policía abandonó el municipio y la alcaldía despachaba desde Ibagué, a más de 130 kilómetros del pueblo.

A partir de 2000, con la operación Aniquilador II —durante la presidencia de Andrés Pastrana (Partido Conservador) y en el curso de los fallidos diálogos de paz entre el gobierno y las farc de El Caguán—, se traza una estrategia para recuperar militarmente los territorios del Sumapaz y el corredor del Río Duda. En 2001 se funda el Batallón de Alta Montaña que se sitúa en las montañas de Cabrera, a muy pocos kilómetros de La Colonia y el pueblo de Villarrica. En 2002 se implanta en toda Colombia la política de Seguridad Democrática y mano dura del presidente Álvaro Uribe Vélez, para noviembre de 2008, el Frente 25 de las farc, responsable de la toma de Villarrica en 1999, queda completamente debilitado tras las acciones del ejército colombiano.

Según el testimonio de César Lozano al portal de información *La Silla Vacía*, la última vez que Villarrica supo de las farc fue en enero de 2014. Lozano, que en 2017 ocupaba el cargo de Personero Municipal, señalaba que en ese mes se oyeron los últimos disparos. El recuerdo latente de la guerra impuesta por las guerrillas y por el Estado en la región fue decisivo para que el municipio se manifestara en contra del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y las farc, en septiembre de 2016. Con 1070 votos por el NO y 671 votos por el SÍ, Villarrica fue uno de los municipios que le dijo NO al Acuerdo en el plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016. Según la investigación de Sara Prada Herrera, los diálogos de paz entre el Gobierno y las farc, en 2012, nunca generaron confianza en los villarricenses. De hecho, “la elección de Villarrica como una de las zonas veredales transitorias de normalización —las denominadas zonas de concentración para los ex combatientes de las farc— fue rechazada por la mayoría de los habitantes del municipio”, señala Sara Prada.

Ante la presión de la misma población, la zona de concentración fue trasladada a Icononzo, una región que, dada su cercanía a Bogotá es, sin duda, la zona veredal transitoria más visitada y mediatizada del país. Según Sonia Prada, “la Zona Veredal de Icononzo se ha convertido en el ejemplo de mostrar. Construcciones rápidas, carreteras que garantizan el fácil acceso a la zona, convivencia tranquila y visitas frecuentes de universidades”.

Pero la salida completa de las farc de la región, hace más de cinco años, no implicó una mayor presencia o la actuación inmediata del Estado para mejorar las condiciones de vida de la población en Villarrica y mucho menos la de sus veredas. Para Norby, la lucha de sus padres fue la misma. Hoy se repite. Trabajar para la mejora de las condiciones de la vida de las comunidades en Villarrica, como una región olvidada, fue su sueño y hoy se traza un objetivo:

Que nos tengan en cuenta para muchas cosas, que no nos tengan tan abandonados en el tema de oportunidades agropecuarias, estamos hablando del campo. Nosotros siempre hemos estado como abandonados y la idea es salir, sacar esto a flote y decir “miren: existimos y queremos un cambio”. Ha sido duro, pero hemos tratado de seguir luchando.

En su labor de líder, el trabajo de Norby Pulido se ha centrado en la construcción de proyectos que mejoren las condiciones de los campesinos. Es otro de los puntos en los que es difícil encontrar una respuesta institucional. Al respecto, Norby explica:

Nosotros solamente formamos proyectos para que el campo tenga como más desarrollo, aunque no hemos sido escuchados todavía. Pero seguimos luchando para que los campesinos tengamos más oportunidades, para que tengamos una mejor vida. Porque la vida aquí sigue siendo difícil

Al preguntarle por las principales necesidades de Villarrica, Norby no duda en responder: “¡De todas!: educación, salud, agricultura... De todas, de todas. De todas las necesidades que ustedes se puedan imaginar”. Su descripción es fácilmente contrastable. Para Sonia Prada, en Villarrica no ha cambiado nada en las últimas décadas:

La carretera de acceso sigue siendo una trocha que, desde hace más de 50 años, cada invierno se convierte en la pesadilla de los viajeros y de los campesinos que intentan sacar sus productos. El hospital fue reubicado y ahora funciona en las instalaciones del Comité de Cafeteros, en arriendo. El principal colegio del municipio ha sido afectado por una falla geológica que amenaza a la población. Los más de 5.800 habitantes de Villarrica siguen sin servicio de agua potable. La asistencia técnica a los campesinos es precaria.

El tiempo de la mujer es ahora

“Un olvido total y pocas oportunidades. Las mujeres aquí en Villarrica nunca nos preparamos por ser campesinas, por falta de recursos económicos, de oportunidades para prepararnos”, responde Norby Pulido, cuando se le pregunta por la situación de las mujeres en el municipio. Pero ella misma señala, mientras sonrío, que ahora “las mujeres estamos resultando ser más líderes que los mismos hombres. Tenemos como más espíritu de trabajo en comunidad”.

La situación de liderazgo femenino reconocido, como en casi todo el mundo, es nueva.

En Villarrica, Tolima, no. Las mujeres no han tenido un rol destacado en la zona. Estuvieron ahí, como siempre, aisladas. Aquí todavía existía el machismo. El hombre era como el que llevaba las riendas. Hasta ahora es que las mujeres están empezando a ser escuchadas y a tener participación en las decisiones. Estamos empezando.

Según cuenta Norby, las mujeres tienen una visión diferente a la de los hombres:

No sé, somos normales, campesinas comunes y corrientes, pero tenemos como más voluntad, como más entrega, creo yo. Tenemos más sentido de pertenencia, quizás también porque somos madres y hacemos las cosas más de corazón. Tratamos como de no ver condiciones económicas, sino que nos entregamos totalmente a trabajar por las personas.

Quizás por el hecho de que siempre ha visto la situación igual en Villarrica y de que tomó la decisión de volver para cambiarla, la esperanza de transformación no se aleja del pensamiento de Norby, sobre todo cuando habla del papel transformador de la mujer en este tipo de situaciones. Para ella organizarse entra-

ña “una fortaleza”. Su propia experiencia es sinónimo de la insistencia. Por eso confía en que “sí se pueden cambiar las cosas, sí podemos. Hubo mucho tiempo que estuvimos sometidos, pero ahora tenemos voz y voto, podemos opinar y ayudar para que todo esto cambie”.

En su trabajo comunitario, como líder de las Juntas de Acción Comunal de Villarrica, las mujeres y su bienestar son una preocupación constante. Por ello se ha priorizado la presentación de proyectos que afectan directamente a las campesinas de la región. Norby explica que hay iniciativas pensadas para el grupo de mujeres cabeza de hogar o ideas productivas como la crianza de gallinas ponedoras:

Son proyectos que pretenden facilitar la vida de nosotros porque aquí todo es pobreza. Yo, como empleada de la alcaldía, lo que hago es formar los proyectos y esperar a ver si se pueden desarrollar, pero como apenas estamos empezando, vamos a ver qué pasa en el transcurso del camino.

Norby define a las líderes en Colombia como “mujeres pujantes, soñadoras y que quieren ayudar a las personas”, características importantes para desarrollar una labor que, en el país, se ha vuelto de alto riesgo a partir de 2017. A pesar de la situación de persecución que sufren muchos líderes y líderes sociales en Colombia, en la región no se han visto amenazados por nuevos grupos armados organizados que han aparecido en el país. Norby se siente tranquila y con fuerza y dice que:

Hasta el momento no hemos recibido ninguna amenaza, pero aquí siempre ha existido el temor de que vuelvan grupos organizados. Se habla de panfletos, pero no han llegado a nuestras manos. De todas maneras, sí está ese temor de que lleguen a casa por el simple hecho de pedir un cambio. A mí personalmente no me ha pasado, pero ese temor sí existe.

Víctimas, paz y memoria

A pesar de tener que huir de su tierra y de que toda su familia, principalmente sus padres, sufrieron persecuciones durante años, Norby Pulido no se considera una víctima del conflicto. Relata:

No tanto como considerarme una víctima, yo no. Mi familia sí. También otras personas que son más mayores sí son víctimas del conflicto armado. Para mí una víctima es una persona que ha sido perseguida por tener un color político. Eso es ser víctima del conflicto.

Para ella, uno de los puntos fundamentales para que la paz pueda ser posible en Colombia es que se cumplan los acuerdos de paz firmados y que, en el mismo sentido, se restituyan los derechos de las víctimas. Norby critica que las víctimas del conflicto no hayan recibido atenciones adecuadas: “En absoluto, la mitad de las víctimas no han sido favorecidas por el Estado. Son como pañitos de agua tibia, pero no se ven esos frutos, de que estén haciendo algo por las víctimas”.

Por eso, a pesar de que celebró los acuerdos de paz porque “en la mesa de diálogos de Cuba se daban oportunidades y se tenían en cuenta muchos puntos a favor de los campesinos”, Norby es hoy escéptica sobre la posibilidad de alcanzar la paz en Colombia:

En estos momentos no. No veo posible la paz. Hace un año atrás, sí, porque todo estaba muy reciente y decíamos que si cumplían los acuerdos de paz, maravilloso. Pero ahora que se están volviendo a organizar las guerrillas ya una lo ve como imposible.

Norby Pulido es certera cuando menciona lo que hace falta para que se pueda pensar en una región en paz:

Los acuerdos de paz son buenos siempre y cuando sean cumplidos. Como campesina me siento representada por los acuerdos, pero hasta el momento esos compromisos no han sido desarrollados. Por eso lo único que hace falta es cumplimiento. ¡Qué cumplan! Porque si no cumplen, entonces ¿cuáles son las garantías que están dando a los puntos acordados?.

De hecho, uno de los elementos centrales del punto 5 de los Acuerdos de Paz, dedicado a las víctimas, señala la necesidad de construir y preservar la memoria histórica y:

Lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad, sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición.

En la propia falta de cumplimiento de los acuerdos, Norby subraya que “la historia no ha sido verdaderamente contada”. Al mismo tiempo, menciona que las personas que conocen la verdadera historia, los adultos mayores, ya se están acabando:

Nosotros podemos hablar de historia, pero no puede ser la verdadera. Siempre vamos a omitir o vamos a aumentar algunas cosas. Pero ellos no han hablado por temor a la persecución, y la historia contada no ha tenido en cuenta a los verdaderos historiadores. Hay personas mayores que tienen mucho que contar, aunque siguen hoy en día temiendo represalias.

A Norby le preocupa que esa historia propia, como memoria, esa historia real, sea también parte de los relatos que se cuentan y se distribuyen. Por eso piensa que sería “maravilloso” que la historia fuera dada a conocer “por las organizaciones nuevas que están saliendo” pues, para ella, “la verdadera historia no ha sido contada hasta ahora”.

CAPÍTULO 4

NANCY ARIAS: “CUANDO SE HABLA CON CLARIDAD Y RESPONSABILIDAD, LO QUIEREN CALLAR A UNO”



“El Chaparro es un árbol áspero, pareciera de piedra y viento”, dice un antiguo poema latinoamericano. El árbol maderable es reconocido por sobrevivir en condiciones extremas y se caracteriza —sobre todo en los ejemplares más añejos— por sus retorcidos troncos. Su contorsionado aspecto es la imagen de la pericia obtenida con el paso del tiempo y la lucha contra los temporales y las ventiscas. La predominante presencia del chaparro en la zona fue lo que dio nombre a Chaparral, en el sur del Tolima, lugar que —al igual que el árbol que le bautiza— ha resistido a violentas tempestades. No restan vestigios de aquel pasado en el que el municipio era asentamiento indígena y tierra marcada por conquistadores: “Del antiguo Chaparral no queda nada, se hundió por estar encima de una falla geológica”, dice doña Amalia mientras saca una botella de Colombiana bien fresca.

Con el gesto curtido y la sabiduría otorgada por el paso de los años, la mujer señala las zonas del cerro más azotadas por el conflicto armado y explica por dónde creaban sus clandestinos corredores montañosos los distintos grupos activos. Ella es una

de las integrantes de las veintidós familias beneficiadas por un proyecto de desarrollo productivo para personas desplazadas en el municipio, en concreto en la hacienda Igualara. “Aquí tenemos cerdo, gallina, cultivo”, cuenta la campesina. “Gracias a ella que se encarga de buscar estos proyectos, conseguirlos y que sigan adelante”, dice mientras dedica una sonrisa cómplice a Nancy Arias, la lideresa del proyecto o, mejor dicho, la que se ha encargado de todos los trámites y procesos complejos para conseguirlo; la persona que ha luchado frente a la pesada burocracia y la administración. La experiencia de una larga trayectoria de trabajo social le ha concedido a Nancy los galones necesarios para ser representante legal de la Asociación de Desplazados del Sur del Tolima, Asodesur, y hacer presencia en el lado más institucional de la representación de las víctimas: es la coordinadora municipal de la Mesa de Víctimas Departamental (Tolima) y tiene un cargo como delegada en la Mesa de Nacional de Víctimas.

Es bueno conocer los avances que las mujeres hemos venido realizando desde el conflicto, cómo hemos podido salir adelante con nuestros trabajos, nuestros hijos. Sin educación, sin conocimiento y aun así hemos progresado. En la Mesa Departamental le digo a las muchachas que peleamos por tres cosas: educación, generación de ingresos y empleabilidad. Si a mí me dan cinco minutos en un escenario no me los voy a gastar en pedir ayuda humanitaria, no vale la pena.

Precisamente el estilo directo de Nancy para “exigir recursos y no limosna” es lo que tanto gusta a un sector y tan poco a otro: “Usted mismo sabe que cuando se habla con claridad y responsabilidad, lo quieren callar a uno”. Imagen de ello es el guardaespaldas que ampara discreto la escena desde la media distancia.

“La guerra es un monstruo que cuando llega, ataca a cualquier sector”

El 9 de mayo de 2000 una trágica noticia cubrió la cabecera de la prensa colombiana: “Saldaña, arrasada por las farc”, publicó el diario El Tiempo.

El número de muertos llegó a 23, las casas incineradas fueron 94 [;] las destruidas, 13[;] las dañadas parcialmente, 145. El número de desplazados de Puerto Saldaña y sus veredas superó los mil, entre ellos 191 niños y [5] discapacitados, informó la Comisión Mediadora de Rioblanco. Las autoridades de Rioblanco, preocupadas por la guerra sin cuartel entre las farc y los paramilitares, pidieron ayuda al Gobierno Nacional.

La toma de Puerto Saldaña venía precedida por varias intrusiones previas de la guerrilla que fijó el territorio como objetivo y no dejó de atacar hasta devastarlo. Tres años antes de la gran toma del pueblo, en el 2000, Nancy fue testigo de aquel momento en el que el grupo armado iniciaba su acometida.

La primera intrusión que hicieron las farc en el corregimiento de Puerto Saldaña fue en el 97. Siempre escuchábamos “que viene la guerrilla”, pero nosotros ya lo tomábamos como algo deportivo. Y llegó el día en que sí. Ellos entraron, pero solamente hostigaron, no pasó nada. Al día siguiente estábamos todos debajo de la cama preguntándonos cuántos muertos habría, nos preguntábamos cuántos cuerpos encontraríamos al ir hacia la policía. Solo dispararon a las puertas de tres personas que sabían que eran paramilitares. En el 98 es cuando las farc comienzan a tomárselo en serio: en las veredas en Maracaibo, San Isidro, era donde estaban las famosas Convivir. No hay que negar que en nuestro territorio había paramilitares y había guerrilla; eso no lo podemos esconder. Cuando lo ocultamos estamos sujetos a repetir todo lo que hemos vivido.

Nancy rememora:

Puerto Saldaña era un corregimiento con 45 veredas y un lugar con un gran auge económico, había mucha plata. Todo lo que se producía era muy comercializado, cualquier persona que llegaba a ese pueblo salía adelante. Era un sitio tranquilo —a pesar de que se escuchaban rumores—, había gente muy trabajadora, resultaba un pueblo muy bueno para el comercio

Quizás por eso nunca le hizo falta “saber demasiado de nada”, aprender labores para su autonomía era algo que sonaba aburrido. Prefería salir a hacer deporte, dormir y socializar: su don de gentes reafirma el último punto. Como buena puertosaldañesa, Nancy tiene la propensión a ejercer de relaciones públicas, a ser una comerciante innata: en su veintena ya tenía una carnicería propia y administraba un depósito de cerveza y gaseosa con un mayorista.

A principios de octubre de 1998, la comerciante se acercó a Rioblanco a cobrar unos cheques. Fue el mismo día en el que las farc hicieron una nueva incursión en Puerto Saldaña:

Volviendo iba por La Cascada y vi a unos niños en pijama, otros en calzoncillos y descalzos. Reconocí a varios de los pequeños por haber tenido contacto en la carnicería. Paré un momento y les pregunté que dónde estaban sus familias, a lo que me respondieron que había venido la guerrilla.

Ese mismo día a las seis de la tarde Nancy emprendió su marcha forzosa de Puerto Saldaña: “Me llamó mi hermano y me dijo que sacara a nuestros padres y a los niños de allí. Que ya hablaríamos después sobre lo que estaba pasando”. La lideresa rememora el desconcierto del momento. No fue fácil conseguir un transporte con la presión añadida de ver cómo: “La guerrilla venía bajando por la derecha”. Nancy y su familia lograron partir, pero el turbio camino no había hecho más que empezar: la llegada a Rioblanco fue todo un golpe de realidad. “Así que la guerra es esto”, pensó

cuando vio la escuela del municipio llena de gente que, como ella, huía de la violencia. Nancy conocía a muchas personas con las que se encontraba en ese espacio de tragedia. Tras hablar con más y más de sus vecinos, se dio cuenta de que ella tenía recursos para comprar una cobija a sus hijos, para arrendar una habitación. Pero una gran parte de los desplazados no.

Precisamente Rioblanco, municipio en el que se encuentra el corregimiento de Puerto Saldaña, fue el lugar en el que los limpios y los comunes unieron sus fuerzas contra el ejército. A mediados del siglo xx se refugiaron en la finca El Davis, hasta que liberales y comunistas encontraron mayor enemistad entre ellos que la que tenían en común contra el Estado. El día en el que rompieron la alianza se dio el primer paso para la creación de lo que serían las incipientes autodefensas y guerrillas campesinas; Rioblanco sería, desde entonces, un lugar con una gran carga simbólica. Pero las farc tenían otro gran motivo para ser tan insistentes en la zona. Como explica el portal *Hacemos Memoria*, Puerto Saldaña era un corredor estratégico para la guerrilla: conecta el océano Pacífico con los Llanos Orientales, una ruta cardinal para mover tropas y traficar tanto insumos como armas.

El municipio de Rioblanco volvía a convertirse en refugio medio siglo después. Esta vez era la población civil de Puerto Saldaña la que escapaba de la violencia de aquellos grupos que algún día compartieron trincheras en El Davis. “Para la guerra no se está preparado. Eso no tiene edad, ni para eso tiene usted estatus, ni plata. La guerra no mide todo eso. La guerra es un monstruo que cuando llega, ataca a cualquier sector”, concluye Nancy.

En 2019 se inició la recuperación del corregimiento de Puerto Saldaña. La Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas publicaba el 22 de septiembre su comunicado “Avanza

la reconstrucción del tejido social en Rioblanco (Tolima)”, que supuso la oficialización del inicio del proceso:

Construir nuevos los lazos de confianza y consolidar la construcción de liderazgos comunitarios es una de las tareas que adelanta el equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas. Puerto Saldaña ha recibido más de 800 personas retornadas en los últimos años, nuevos pobladores que se encuentran en veredas como Cambarín, San Isidro, Placer, Ocasión y el centro poblado, víctimas principalmente de desplazamientos forzados masivos.

“¿Cómo es posible que un hombre se sienta capaz de violar a una mujer?”

Las estructuras patriarcales y la cultura machista trascienden las dinámicas bélicas y establecen sus lógicas y mecanismos transversales en los cuerpos de las mujeres, reducidas a una unidad territorial conquistable: paralelamente al conflicto armado, existe una guerra particular contra las mujeres.

El 26 de marzo del 99 fui a trabajar y vi unos tipos que tomaban y entraban y salían, pero una cosa así sin más. Ese día salí de trabajar a las dos de la mañana. Era una noche muy oscura. Yo vivía cerca de un club, donde tenía una pieza, estábamos todos ahí. Estaba ya en la vuelta de la esquina del club y me cogieron dos tipos. Iban con armas largas y de ahí me arrastraron a la puerta del local. Esos fueron momentos difíciles: estaba embarazada de mi hija, estaba de cinco meses. Abusaron de mí. Cuando les daba el reflejo de la luz se notaba que tenían puro corte militar.

Justo a los tres meses del desplazamiento que la llevó hasta Rioblanco, Nancy —viendo cómo persistía e incrementaba el conflicto en su corregimiento— tomó la decisión de marcharse hacia Chaparral. En enero de 1999 llegó a su nuevo pueblo, un lugar

al que se aventuró a ir pese a no conocer a nadie. Esto supuso un nuevo escenario para emprender y dar una nueva vida: Nancy se fue de Rioblanco en embarazo. Sin dinero ni contactos, preñada y con familia a su cargo —con el peso de haberse separado y ocuparse íntegramente del cuidado de sus hijos—, encontró trabajo en “El Delfín”, un local que describe como “un tomadero”. En ese lugar le tocó enfrentarse con un grupo de personas —paramilitares y personas afines a ellos— que siempre venían y se iban sin pagar. Un día Nancy les plantó cara, la situación se descontroló y acabó con la intervención de la policía. El señor agente que tomó declaración a Nancy, le dijo que cómo podía trabajar en un antro de ese tipo, “es lo que nos deja la guerra”, le contestó ella. “Los vamos a encerrar, pero tenga claro que esto no quedará así”, le advirtió el policía, señalando así que los detenidos u otros compañeros paramilitares volverían para vengarse.

Tras la agresión pasé tres días sin levantarme. Sí señora, no señora. Eso es todo lo que me comunicaba con mis padres. Ya en abril vino el dueño del negocio a verme, preguntando qué me pasaba y diciéndome que volviera: ni dije nada ni volví.

El silencio, que forma parte de la revictimización, fue el modo en el que Nancy canalizó su ira reprimida.

Yo vivía con rabia con los hombres que se me atravesaban. Por la forma que yo me preguntaba... ¿Cómo es posible que un hombre se sienta capaz de violar a una mujer?

...

Quince años después, hablé por primera vez sobre mi caso de violación. Decidí declarar los hechos ante la personería. Narrar lo sucedido me hizo enfrentarme al dolor y la rabia que seguía sintiendo. Progresé, y ya no dejé de contar: incluso participé en un taller y círculos de estudio para mujeres víctimas de agresión sexual.

“Usted lo hace porque quiere a su gente, pero ándese con cuidado”

La implicación incansable de Nancy con la reparación integral de las personas afectadas por el conflicto la han catapultado — con una larga trayectoria de por medio— a la Mesa de Víctimas Departamental del Tolima. Ese camino de años forjando conocimiento y emprendimiento para contribuir a la comunidad empieza a tomar un matiz más formal con la aparición de la Ley de Víctimas:

Quando sale la ley 1448 cambia todo el escenario en el tema de convocatorias y procesos. Empecé a leer y ver qué riesgo tenía al manejar un recurso mal ejecutado: empecé a analizar y a aprender a protegerme a mí misma... Ver hasta dónde podía apoyar a una persona, porque si no, puede que no estuviera aquí, contándole esto a ustedes.

Los primeros proyectos que Nancy obtuvo con la Asociación de Desplazados del Sur del Tolima fueron impulsados sobre todo por la ilusión —e incluso la ingenuidad—, que con el paso de los años se ha traducido en firme compromiso: “Las líderes tenemos esa voz para replicar y juntarnos para salir adelante. Pero también tenemos un gran reto”. Le tocó comprobar bastante rápido ese desafío del que habla. Las amenazas no se hicieron esperar.

El 1 de abril de 2000 en Puerto Saldaña se efectúa la cruel toma del poblado y con ella se desencadenan desplazamientos masivos. Paralelamente, en Chaparral brota la semilla del liderazgo social. Nancy ya había pasado por la marcha forzada, y tras haber concatenado distintos tipos de violencia y hechos victimizantes, “empezaba a ver las cosas de un modo distinto”. Su espíritu resiliente se mantuvo firme, e incluso después de la agresión sexual, siguió asistiendo a los talleres y capacitaciones de la Cruz Roja, en los que “mantenía el silencio, pero escuchaba y apuntaba”. La

joven había obtenido un trabajo como empleada doméstica de una señora, a la que tiempo después le administró diversos negocios: Nancy nunca perdió su empuje como comerciante. Ese 1 de abril de 2000, ella recibió desolada la noticia de lo que sucedía en su Puerto Saldaña natal: “vaya y haga algo por su gente”, le dijo la patrona.

Junto a otras personas afectadas por el nuevo éxodo causado por la toma guerrillera, Nancy impulsó la Asociación de Víctimas del Sur del Tolima, Asodesur. Con el nacimiento de la organización, en noviembre de 2000, emergió la lideresa social: Nancy fue la secretaria de la entidad durante tan solo un año. Al siguiente, la eligieron representante legal de la Asociación. El alcalde de Chaparral pidió a la lideresa que le acompañara a una reunión con la Fundación Panamericana para el Desarrollo. De ese encuentro realizado en el 2001, salió adelante el primer proyecto que consiguió Asodesur por el que, inesperadamente, acabaron “inundando el pueblo de pollo”. Nancy explica que el problema fue causado por desconocer los procesos y por no haber hecho un estudio de mercado previo. De todo se aprende. Al tiempo llegó el siguiente proyecto que funcionó con éxito y que presentó resultados de producción en seis meses. Pero la alegría se truncó: la lideresa se enteró de que algunos de los favorecidos por el plan venían de filas paramilitares.

El afán de los grupos victimarios por entrometerse, manipular y beneficiarse de proyectos destinados al fortalecimiento de las víctimas es recurrente. Los paramilitares querían el control total de la granja y Nancy era una traba en su propósito: “me vinieron dos tipos en moto, yo les decía que no era la ejecutora de la iniciativa, pero ellos me mostraron el papel del proyecto”. Los victimarios infiltrados informaban a sus compañeros y tachaban a Nancy de tener nexos con la guerrilla. Así creaban la premisa

perfecta para increparla y forzarle a apartarse del proyecto. Con los paramilitares de la moto empezaron las amenazas: “usted lo hace porque quiere a su gente, pero ándese con cuidado”.

“¿Y quién me cuida de usted?”

Pasaron dos semanas desde el intimidatorio encuentro y empezó el calvario:

Yo le pagué mucha vacuna a la guerrilla, pero nunca me hizo pasar lo que me hizo pasar la fuerza pública. En esa época estaba el coronel Dumar, ¡ese señor hizo tanto conmigo!... Que hasta me tiró al sillón poniéndome un arma en la boca diciéndome que me iba a matar. Este tipo me quería llevar por delante por la misma información de las personas de la granja, me decía que era una sapa de la guerrilla.

Víctima de violencias causadas por las farc y los paramilitares, Nancy tiene claro que la hostilidad que más le dolió fue la que vino por parte de la fuerza pública, con el añadido del especial interés del coronel en degradarla tanto como pudiera:

Si quiere grandes guerrilleros váyase arriba a la montaña, no conmigo que soy una mujer desarmada. Ese tipo —el coronel Dumar— me humilló las veces que fue necesario: cuántas veces le daba la gana sacarme de la casa venía y me sacaba, mandaba una gran cantidad de tipos a sacarme como si fuese la peor delincuente. Ese momento para mí fue mucho más difícil, porque se supone que la Fuerza Pública está para apoyar al ciudadano. Pero en mi caso no, eran los que más me estaban atropellando.

Un día Nancy se presentó en la granja y cogió a tres de los infiltrados de los grupos paramilitares para darles un mensaje claro: “Dejen de joderme. Aquí no estamos en el Puerto, donde ustedes me exigían plata, aquí hay que meter el culo para comer, mijo”.

La última vez que el ejército sacó a la lideresa de su casa, fue al cabo de poco, una mañana a primera hora: “Esta *gonorrienta* quítenmela porque yo la mato”, gritaba el coronel. Tras el suceso, un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr) que bajaba por la zona vio a Nancy parada en una esquina. El coche se detuvo, los delegados internacionales se acercaron a ella y, en ese momento, decidió contar lo que le pasaba: le tomaron datos, le hicieron muchas preguntas. Ella no sabe lo que pasó después entre el cicr y la fuerza pública, pero a los quince días le picó en la puerta un hombre del Ministerio de Interior. Con él venía una camioneta en la que estaba el coronel Dumar y, en ese momento, Nancy solo pudo sentir terror:

—No sabía que era víctima de desplazamiento —le dijo el militar intentando excusarse, la voy a proteger.

—¿De quién me va a proteger? —preguntó Nancy, incrédula ante las palabras que acababa de escuchar.

—De los grupos armados ilegales.

— ¿Y quién me cuida de usted?

“Lo único que no tiene precio es la tranquilidad”

Las vistas desde la hacienda Igualara, en Chaparral, podrían hacer pensar que la finca está en el paraíso, hasta que las picaduras del jején obligan a salir de la fantasía y a reubicarse en el marco terrenal. No será el paraíso, pero sí un humilde jardín del Edén particular: una amplia variedad de ganado y cultivo forman el sustento que veintidós familias reubicadas se encargan de desarrollar y cuidar. En este lugar, lo más parecido a un fruto prohibido es el odio. Nancy se alimentó de rencor mucho tiempo, tanto como para terminar aborreciéndolo.

Mi padre trabajaba mucho con hierbas medicinales. Él nos crio con unos principios muy claros de trabajar para conseguir las cosas. Es duro ver que otra vez se vuelve a dañar tanto nuestro territorio. Es duro ver tanta muerte. Hay personas que fueron asesinadas por el chisme de la misma gente, simplemente porque tenía alguna cuenta pendiente con esa persona y se la quería quitar de encima. ¡Qué tan dañinos somos en nuestra sociedad! A veces con una palabra le hacemos daño a cualquiera. En el acuerdo se minimizaron mucho los enfrentamientos, pero ahora se vuelve a escuchar la zozobra.

En un paraje idílico, Nancy tiene la capacidad de convertirse en la protagonista de la bucólica escena. Firme y sosegada explica su día a día: además de ser líder de Asodesur y de la Mesa de Víctimas Departamental, trabaja para el sustento económico de su familia, estudia psicología y recursos humanos, y va a clases de inglés. “Mis hijos están mayores, pero igualmente me llaman para darme quejas y ahí estoy yo”, dice entre risas. Compatibilizar todo —incluido el papel de madre— se le hace complicado. Pero Nancy, como una gran parte de las mujeres, se ha visto obligada a desarrollar la capacidad de la omnipresencia.

Cuando salimos de nuestro territorio, las mujeres fuimos madre, padre, buscamos nuestros trabajos. Éramos todo. Si usted mira el registro de víctimas, son muchas las madres que aparecen encabezando el hogar. La mujer es quien anda más con los pies en la tierra, viendo lo que se quiere y para dónde se va. Nosotras hemos cogido un empoderamiento en todo el sentido: en el tema de emprendimiento, de los negocios, hasta en el manejo de la plata.

La capacitación y la obtención de trabajo y sueldo son ejes sobre los que Nancy insiste en la Mesa de Víctimas. El estigma sobre la población desplazada y afectada por la violencia es una barrera para la empleabilidad, elemento que a su vez fomenta las dificultades para acceder a la educación.

En mi familia nunca hemos podido lograr un crédito o una beca. Para los estudios de mi hija, tocó pagar su curso en una escuela privada. Pagábamos 4 millones de pesos por el semestre. Cuando ella estudiaba, nunca le concedieron una ayuda por ser víctima. Pero a su lado estudiaron tres exguerrilleros y ellos no pagaban ni cien pesos.

La humedad en la finca hace que la sensación térmica se sienta más elevada de lo que realmente es, y la botella de Colombiana que estaba fría ahora empieza a sudar. La lideresa sirve la bebida y toma un panecillo dulce. “Como Nancy Arias, ese acuerdo no me cobija. Aun así, voté un sí en el plebiscito, pero a mí el acuerdo, como víctima, no me representa”. Va más allá: ni le representa el acuerdo ni ser considerada víctima. Es útil reconocerse como tal en aspectos legales, pero para Nancy el término desprende un matiz pasivo con el que no se siente cómoda.

Hay muchas cosas que no comparto con la palabra víctima. A mí esa palabra no me gusta. Me vienen y me dicen: ‘Ay pobrecita...’ Pues no. Me muevo, tengo pies y manos para volver a hacer. No me puedo dejar revictimizar. Perdí una condición económica con el desplazamiento, pero ahora tengo conocimiento, que vale más. Hay que tratar de empezar a cambiar la connotación de víctima, no puede seguir siendo la que es. Si nos dan la oportunidad de hacer algo, utilicémoslo para avanzar.

Nancy, como lideresa, afectada por el conflicto y puerto-saldañesa, pone especial empeño en la verdad como aliciente y objetivo de progreso.

Estamos apostando al tema de la verdad, de la búsqueda de personas desaparecidas, dando impulso a la Comisión de la Verdad. Más que darme un recurso yo tengo que saber la realidad. Desde los territorios que fueron tan afectados, desde Puerto Saldaña, queremos conocer por qué. Hay muchas personas que todavía no saben por qué nos eligieron. Por qué nos tuvimos

que ir. Si uno no conoce la verdadera historia, esa se va a quedar atrás y seguimos con supuestos. Si usted va a fondo, la realidad es otra. Que se cuente la verdad y qué querían de esos territorios. Nosotros sufrimos un desplazamiento sin saber. Nos dedicábamos a pagar y a trabajar.

La verdad como revulsivo para seguir adelante, para cerrar capítulos y heridas. “Saber la verdad para continuar y prosperar. No es solo dinero, capacitación o vivienda: Queremos tranquilidad, libertad”. En una zona roja, las respuestas se cotizan al alza. Para Nancy, cada elemento se retroalimenta del otro. En este caso, la libertad radica en poder estar en calma y sin miedo en tu propia casa, en tu propia tierra. En saber la historia para no repetirla. Nancy da el último sorbo de la ahora tibia bebida refrescante antes de recuperar su posición firme en la silla. “Lo único que no tiene precio es la tranquilidad”, concluye la lideresa.

CAPÍTULO 5

ADONAI RINCÓN: “SER LÍDER SOCIAL ES COMO UN DELITO PARA EL ESTADO”



La Virgen de Guadalupe ampara desde el lugar más privilegiado entre las cuatro paredes que conforman el salón, como si de la cima de un cerro se tratara. La vista panorámica de la que goza le permite que el sutil hilo de humo aromático que desprenden los inciensos —estratégicamente colocados— invadan su figura, pero que jamás tapen su mirada. Su ceremoniosa ubicación sirve también para recordar que es omnipresente y que está allí para amparar y guiar a los residentes del hogar. Quizás por eso Adonai Rincón le regala una mirada cómplice a la Virgen antes de empezar su narración.

“Mis hijos y yo somos víctimas del conflicto”, dice la lideresa social:

Mi familia como tal lo es. Tengo dos hermanos que fueron asesinados por el Frente 21 de las farc. A mi hermana la mataron en El Líbano, donde operan los bolcheviques del ELN y a mi hermano lo asesinaron en Charral, también los del Frente 21. Nosotros somos víctimas. Víctimas de desplazamiento, víctimas de despojos.

Adonai es la menor de veinte hermanos y hermanas, y entre ellos hay afectados, de diferentes hechos victimizantes, de práctica-

mente todos los grupos armados que participaron en el conflicto armado colombiano. Oriunda de Chaparral, donde aclara que el conflicto “tiene los mismos actores y componentes”, Adonai se declara “rioblancuna orgullosa”. Tanto así que se ha convertido en líder de la Mesa de Víctimas de Rioblanco.

El incienso embriaga el espacio con su fragancia y Adonai, con el aura de misticismo que le rodea, enciende una vela para hacer del escenario un lugar aún más espiritual. En la pared de enfrente, a la altura de la vista, está colgada una orla: “Universidad del Tolima. Licenciatura para la educación básica en Ciencias Naturales y Educación Ambiental”. De entre el alumnado con birrete, destaca la sonrisa de Adonai. Se da cuenta de la atención que despierta la imagen: “la primera necesidad de las mujeres en Rioblanco es la capacitación”, dice con un tímido gesto orgulloso. “No contamos con una educación superior buena, no hay diversidad. La Universidad del Tolima oferta ciencias naturales y yo soy licenciada en ello. Sería bueno que trajeran otras cosas”, prosigue antes de dar una humilde lección —sin pretenderlo— que hace comprensible su liderazgo natural:

Rioblanco tiene 105 veredas, el 80 % de las mujeres son de la población rural. Es bueno que las capaciten, al menos que les den la opción de capacitarse en la gestión de una microempresa agrícola. Que les den los insumos. Es triste: acá viene gente del campo a vender una libra de Maracuyá y uno va y se la compra al que la trae de Bogotá en tres mil pesos. Si el señor del campo la ofrece por dos mil, ya aquí les parece mucho, muy cara.

Vuelve a sentarse en la silla del salón, al lado de la vela. A unos metros, en el sillón —tan atento a su madre como a las redes sociales— está Ricardo, el hijo mayor de Adonai. El veinteañero levanta la vista del móvil cuando se da cuenta de que su madre se refiere a él:

He sido desplazada tres veces. Dos veces por la guerrilla y una por los paramilitares. El primer desplazamiento fue por los paramilitares, me acusaron de ser la novia de un guerrillero y que tenía un hijo de ese guerrillero, que es él —en alusión a su primogénito, al cual señala—. ¡Pero nunca jamás! Este pueblo es así, lo acusan a uno de cualquier cosa... y me tocó correr por eso.

El pueblo, ese lugar que le ha causado tanto dolor, el dolor que ella persevera en sanar.

Frente y trinchera —y los que quedaron en medio—

“Aquí se gestaron las farc”, espeta con media sonrisa Adonai Rincón. No le falta razón: la trayectoria del conflicto colombiano no se entendería sin el recorrido de los distintos actores armados por el sur del Tolima. Era el año 1949: liberales y comunistas se aliaron para defenderse de los ataques de los conservadores y centenares de familias llegaron a vivir en comunidad en El Davis, una finca ubicada en Rioblanco y propiedad del campesino liberal Gerardo Loaiza. Si algo de especial tiene este municipio, es que por él pasaron los que se convertirían en principales exponentes de los distintos grupos victimarios: el primo de Loaiza, Pedro Antonio Marín —alias ‘Tirofijo’—, llegó a la comunidad al huir de los Chulavitas que arrasaron el norte del Valle del Cauca. En El Davis, a principios del año cincuenta, se afincó el ‘Mayor Líster’, que conducía a decenas de familias de influencia comunista, según relatan historiadores como Alfredo Molano, o como especifica el portal de información colombiano *Rutas del Conflicto*.

El comunismo y el liberalismo han demostrado ser ideologías que no se prestan para una sana convivencia. Así que la unión artificial —y por conveniencia— entre los comunistas y liberales

que buscaban resistir la presión armada conservadora, auspiciada por los gobiernos nacionales en el sur del Tolima, se quebrantó rápidamente. De El Davis salieron dos grupos muy definidos: los limpios —tal y como se llamaba a los liberales— liderados por Loaiza y Jesús María Oviedo, más conocido como ‘Mariachi’; y los comunes, cuyo liderazgo se fijó en las figuras de ‘Tirofijo’, el ‘Mayor Líster’ y ‘Charro Negro’. Lejos de poder entenderse como “comunistas de libro”, defendían un incipiente sistema más comunitario: unas ideas de resistencia, asentamientos campesinos y de organización social que estaban, en el montañoso e inaccesible sur del Tolima, en el abandono del Estado.

El espíritu de las farc se gestó en el humilde municipio del sur del Tolima, en Rioblanco, y le tocó a toda la población pagar las consecuencias de la guerra abierta que se empezaría a librar pocos años después, cuando el ejército colombiano emprendió duras ofensivas contra El Davis. Tras más de medio siglo de violencia, el pueblo sufría aún el castigo de haberse convertido, desde mediados del siglo xx, en tierra hostil. La entrada del nuevo siglo tampoco parecía mucho más esperanzadora para los rioblancunos.

Haber sido frente y trinchera durante tanto tiempo ha causado importantes estragos en Rioblanco que, además de haber sido victimizada de forma transversal, no se vio respaldada por ninguna normativa hasta 1997, con la promulgación de la Ley 387, que reconocía la situación de desplazamiento y la condición de desplazado. Una legislación, sin embargo, totalmente insuficiente y que solo estimaba uno de los delitos de guerra cometidos de forma sistemática durante décadas en ese municipio del sur del Tolima.

“El primer victimizante es el Estado”

Adonai considera que, para los rioblancunos, azotados por todos y cada uno de los hechos victimizantes de la guerra colombiana, la legislación impulsada en 1997 y nada eran lo mismo:

Cuando se promulgó la Ley 387 se tenía en cuenta solamente el desplazamiento forzado. Entonces las personas que habían sido víctimas de violación, de despojo, de homicidios, no figuraban dentro de esa norma. Gracias a Dios, apareció la Ley 1448 —que a los señores del Estado les dio por hacer casi quince años después— y con ella ya tenemos más hechos victimizantes que fueron reconocidos a nivel nacional. Esos hechos victimizantes, todos, han pasado en el municipio de Rioblanco: el secuestro, la desaparición forzada, el abuso sexual....

Al ser ignoradas por las instituciones que deben garantizar su integridad y bienestar, las víctimas son revictimizadas. Por eso, Adonai no duda un segundo en afirmar con contundencia que “el primer victimizante es el Estado”. Para ella, la desatención, la falta de implicación que históricamente ha habido en favor de los afectados por las violencias, ha creado en la población una aflicción colectiva ratificada por las mismas instituciones:

si usted mira el proceso para ser atendido por una entidad promotora de salud... es lo peor. Tiene que estar usted muy grave para que lo atiendan. Las mujeres víctimas del conflicto armado tocan puertas a un lado y al otro, pero todo el mundo nos estigmatiza: ‘Ah, es que esos son desplazados...’. Pero no hay ninguna ayuda ni solución.

La propia desatención estatal hacia los habitantes de Rioblanco ha sido lo que ha fomentado que el peso de decenas de procedimientos legales recaiga sobre líderes como Adonai. Los vecinos del pueblo recurren a ella para saber lo que pueden hacer con su situación:

En el municipio la gente acude mucho a mí para que yo les ayude a hacer derechos de petición o hasta las tutelas, y no soy abogada. Pero acuden a que les ayude en todo esto y me gusta que la gente sepa cuáles son sus derechos. Así como tenemos unos deberes, tenemos unos derechos. Que cuando una mujer es maltratada tiene derecho a saber lo que tiene que hacer y cuál es la línea a seguir.

Apoyar a sus conciudadanos es uno de los ejes sobre los que se basa su espontáneo liderazgo social y es también un motor que le obliga a continuar su formación:

A raíz de todo lo que me ha pasado leo mucho, leo y me instruyo en todo lo que nos den de derechos humanos. En las capacitaciones que nos brindan, allá estoy aprendiendo más. No aprendo solamente para mí, sino también para las personas a las que pueda ayudar.

La lideresa social interrumpe sutilmente la conversación para saludar con la mirada y la mano a un vecino que se asoma brevemente a su casa. Hoy toca reunión de la Mesa de Víctimas, en una sala cercana a la alcaldía —donde Adonai trabaja—, en la plaza central. Su hijo mayor, Ricardo, la llevará hasta el lugar en moto. “Todo el mundo nos conoce”, dice en referencia a ella misma y a su primogénito. Si algo une a los rioblancunos es la propia historia de las violencias en su pueblo. De igual forma, también les une la lucha por la reparación, impulsada por las personas que se reúnen para mejorar la calidad de vida de sus paisanos y encabezada por Adonai a nivel del municipio. Ricardo trastea su apreciada moto, aparcada delante de la casa de los vecinos, quienes venden productos cosechados en su parcela de tierra. En la ventana principal los pequeños agricultores exhiben un cartel a modo de reclamo para sus clientes: “Aquí hay huevos”, dice. Sin letrero que lo especifique, la solemne presencia de Adonai grita en silencio: “¡Ovarios también!”.

Cada muerto tiene una historia

El vínculo entre Adonai y Rioblanco se remonta a 1994, cuando la lideresa llegó como una joven agente de tránsito que se encargaría de regular el tráfico en una zona roja donde, tal como afirma, “mandaba la guerrilla y el paramilitarismo”. Rememora cómo en aquel momento no imaginó que su trabajo también consistiría en devolver su nombre a las personas asesinadas en el municipio. En Colombia, los n.n., “Ningún Nombre”, suponen un drama que tiene al conflicto armado como factor exponencial. Las dos letras se refieren a los cadáveres hallados y enterrados por años en fosas comunes, a los restos desfigurados, por lo que son imposibles de reconocer; a los cuerpos inertes deformados que bajan por el río Magdalena. Personas que quedaron sin vida por la cruenta hostilidad y que además fueron despojadas de su memoria, de su relato de vida y de su identidad componen un grupo importante de anónimos enterrados en los cementerios bajo el mismo pseudónimo.

La agente de tránsito lidió una y mil veces con los distintos grupos armados que actuaban en Rioblanco. Una tarea complicada para una muchacha recién llegada. Pero la tenaz novata no se amedrentó. Al caer el sol, Adonai debía convertirse en el amparo de los ejecutados: “Yo recogía a los muertos. Suena feo, pero era la realidad. Recogía a los muertos... Y cada uno de ellos tiene una historia. Yo fui muy acuciosa, recogía un cadáver e indagaba, porque... pueblo pequeño, infierno grande”. Levantar cuerpos, en su mayoría por muertes violentas, y el impacto emocional que ello conlleva se acentuaba aún más en Adonai cuando se encontraba que los cadáveres eran de mujeres a las que les habían robado la vida y la voz:

Cada muerto tiene una historia. Y sobre todo cuando yo recogía mujeres. Por eso que somos del mismo género, pues a mí me dolía más. Recoger a

una mujer para mí era traumático, yo terminaba llorando recogiénola. Una vez que mataron a una prostituta, una señora me dijo que la mujer tenía ocho hijos, y yo solo podía pensar: ¿Qué van a hacer esos ocho hijos?....

“Nosotros hablamos de lo que hemos vivido”

Por haber visto en primera persona casos como el de la prostituta asesinada —una más de todas esas víctimas empujadas al abismo de la irrelevancia por parte del Estado—, Adonai apuesta por el ejercicio de la narración como herramienta crucial para preservar la memoria: la retentiva de las cosas que sucedieron durante tanto tiempo y que no se cuentan en el discurso oficial de los hechos. La lideresa lo tiene claro: “Hay que contar la historia para que no se repita”, asegura. Para la ex agente de tránsito, hay que alzar la voz y contar todo aquello que nunca se tuvo en consideración.

Atestigua Adonai:

No están siendo contados los abusos sexuales. Aquí a muchas mujeres les tocó acostarse con un tipo para sobrevivir. Hubo un guerrillero que disfrutaba matando a las mujeres: primero las hacía tener relaciones sexuales con él —de las maneras que él quisiera— y siempre terminaba asesinandolas. Eso no lo saben los que están detrás del escritorio. La ley y muchas personas hablan del conflicto armado a partir de lo que han leído. Nosotros hablamos de lo que hemos vivido.

Para reivindicar los hechos victimizantes, la voz de la mujer tiene para Adonai un papel trascendental: “Hay que contar las cosas a través de nosotras, las mujeres, que las hemos sentido más. ¿Los hombres? ¡Obvio!, también han sentido. Pero por su machismo esconden muchas cosas”. Porque para la líder no cabe duda de que las historias de las mujeres han sido invisibilizadas, como “el

tema del abuso sexual y el desplazamiento, que a las mujeres nos duele más. Nos duele dos veces más”.

Si algo caracteriza a Adonai es la serenidad con la que habla. Sus palabras relatan los hechos que han marcado su vida y la de tantas otras personas, palabras que se convierten en su mejor bálsamo contra el olvido y la repetición.

Hay que contar la historia para que nuestros jóvenes y nuestros niños — yo ya tengo nietos— sepan que hubo un conflicto, quiénes lo ocasionaron y por qué. Yo le digo a mis hijos que uno no debe meterse en cosas donde persista el hacerle daño a alguien, no. Eso no hay que hacerlo. Y sobre todo ellos saben bien que a mí me han hecho mucho daño y que uno debe tener la capacidad de perdonar.

Polvo eres y de la ceniza resurgirás

La iglesia de Rioblanco no deja de recibir a gente dispuesta a marcar su frente con la cruz que pesará sobre sus hombros durante más de un mes. Hoy es miércoles de ceniza, el punto de origen del viacrucis íntimo que cada devoto hará durante los siguientes cuarenta días. Se trata de un período en el que los fieles recordarán que su paso por la tierra es temporal — como dice la misa de este día especial: “Polvo eres y en polvo te convertirás”—. El tiempo de preparación de la Pascua es una oportunidad que los adeptos deben aprovechar para redimirse y obtener el perdón de Dios por todos sus pecados. El miércoles de ceniza supone el arranque de una liturgia constante que cada uno deberá llevar en sus entrañas para obtener la expiación, una penitencia a la que los cristianos católicos rioblancunos parecen dispuestos —unos más que otros, teniendo en cuenta que el ayuno forma parte del ritual y el bar de delante de la iglesia está concurrido—.

Para Adonai la religión también es importante. La ubicación de la silla en la que está, le hace quedar justo debajo de una representación de “La Última Cena”, en forma de pequeño cuadro de cerámica, ubicada en una estantería por encima de su cabeza. La escena se ha convertido en un vaticinio de las palabras que saldrían de su boca: “Yo fui un falso positivo y fui capturada durante cuatro meses”. Entró a la cárcel por el soplo de un Judas inexistente, la tapadera de alguien probablemente motivado por una compensación económica. La acusaban de guerrillera bajo un pretexto tan carente de sentido que ella misma desmontó:

Quando se crearon aquí en Rioblanco las prebendas, les daban dinero a los militares por capturas. Aquí hubo muchos falsos positivos, yo fui un falso positivo y fui capturada durante cuatro meses. Estuve encerrada en Bogotá, en los calabozos de Puente Aranda durante dos meses y medio, y un mes en la cárcel distrital. Pero ¡Gloria a Dios!: yo salí de eso; pude demostrar que no era cierto. Además, todo era a raíz de un informante anónimo, que hizo el escrito —y no está ni firmado—, pero así me capturaron. Después de que salí en libertad pude demostrar que ese informante anónimo nunca existió. Le dieron preclusión al proceso y regresé a mi trabajo.

La manga ancha que se dio al ejército, sobre todo a partir de la época de Guerra Sucia —entre mediados de los ochenta y los noventa— parece haber calado en el imaginario de la Fuerza Pública: si en el año 1963 aparecía el primer “Manual de la contra-insurgencia”, que apuntaba abiertamente a la población civil como objetivo, entrados los ochenta se dispone con detalles la necesidad de erradicar las ideas disidentes. Las fuerzas de seguridad inauguran una fase que ellos mismos denominan “Guerra psicológica”, con capítulos dedicados a ello, en la edición del manual de 1979. Todo vale.

A mediados de la primera década del siglo xxi aumentan exponencialmente las bajas civiles de la mano de los militares:

incentivar el número de “guerrilleros” abatidos o arrestados fue una de las principales —y más éticamente cuestionables— praxis ocultas que alimentaron la sed de los soldados por obtener más y más trofeos de caza. El asesinato o captura sistemáticos de civiles, que después se presentaban como combatientes de las farc, azotó Rioblanco de un modo particular, reitera Adonai, siendo ella misma una de las afectadas por la problemática.

Según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, el fenómeno de los falsos positivos en el país alcanzó su máxima expresión entre el 2004 y 2008, y añade que algunos interlocutores le afirmaban que se debía a que los falsos positivos ya eran “política de Estado”. La Corte Suprema de Justicia falló en 2015 a favor de los que reclamaban justicia por tres civiles asesinados en Herrera, corregimiento de Rioblanco. Dos de las personas muertas eran menores de edad cuando sucedieron los hechos, en 2006. Justo en ese año acababa el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez, que salió reelegido presidente para cuatro años más. El presidente colombiano había impulsado desde 2002 la cuestionada “Política de Seguridad Democrática”, bajo la cual se enmarca el escándalo de los falsos positivos.

Los acuerdos de paz fueron un soplo de aire fresco para los habitantes del municipio del sur del Tolima, tal y como Adonai explica, pero también afirma que el miedo vuelve a acechar en el ambiente. Si bien el arbitrario paso por prisión de la lideresa se dio en un espacio temporal cercano a los acuerdos del 2016, la paz —que en realidad resultó ser tregua— a la que los vecinos se habían acostumbrado tambalea.

En mayo de 2019, el New York Times publicó un artículo —que trajo consigo un gran revuelo— en el que se afirmaba que los

incentivos para aumentar las bajas de “grupos armados” habían vuelto: se pidió a los cincuenta generales y coroneles principales del país que rellenaran un documento con las bajas que habían llevado a cabo durante operaciones, y luego debían firmar comprometiéndose a doblar la cifra durante el siguiente año. Además del temor por una nueva oleada de falsos positivos, Rioblanco se enfrenta una vez más a la sombra de la guerrilla. Como Adonai dice, el municipio es un enclave decisivo:

Rioblanco es estratégico para todos porque estamos en el macizo, en la cordillera central. Duramos del 2016 al 2019 con una tranquilidad hermosa, todo el mundo quería ir a los páramos y acampar, ahora ya no se puede hacer eso. Vuelve a haber miedo porque se vuelve a hablar de gente armada en la zona rural, entonces ya no vamos por allá. ¿Y por qué hay armas? Muchos dicen que son guerrilleros que los estigmatizaron. No hubo trabajo ni fuentes para sobrevivir, entonces tomaron sus armas —algunos—. A otros les gusta tener mando, y para tener mando, deben tener las armas.

La pérdida de tranquilidad es uno de los motivos que provocan inquietud a Adonai, que por desgracia ve la concordia que se inició con los acuerdos cada vez más difusa:

Colombia puede tener la paz, pero debemos ser conscientes de qué paz queremos. La paz que en este momento es estable y duradera, parece que ya no es estable y que ya está terminando. Si en Rioblanco está llegando gente armada debemos tratar de ver quiénes son y por qué nos volvieron a escoger a nosotros. Por qué no van hacia otro lado. Si ustedes tienen algo que hacer contra el país, por qué no lo hacen en otra parte. Arreglen con el Estado en otra parte... ¿por qué nos escogen a nosotros? Ya lo hemos vivido muchísimo en Rioblanco y Chaparral y es lamentable las muertes que hemos puesto, la tranquilidad que hemos perdido... para que vuelvan a escogernos a nosotros.

Como lideresa social y patriota de su querido municipio, la situación para Adonai no es fácil. Pero sabe que ahora no es momento de echarse hacia atrás, ni mucho menos. Ahora tiene más impulso que nunca para apostar por el diálogo, por los acuerdos y por la construcción comunitaria. Si el paso por la cárcel pudo haberla devastado para siempre, Adonai tuvo la capacidad de planteárselo como un punto de inflexión. Ese punto límite que le hizo convertirse en la lideresa que es:

Allí la sobrevivencia es tan terrible que uno sale más fuerte. Los que no somos nada y llegamos allá por nada, salimos más fuertes. Y los que están muy dañados y llegan allá por dañados salen más dañados. Pero sí, la cárcel me enseñó a no quedarme callada. Desde ahí como que salí con que las cosas que viví, las tengo que contar. Salí más fuerte, ese daño me hizo más fuerte. No quiere decir que esté en contra del Estado, porque he trabajado con él, pero cuando las cosas están mal hechas, hay que decirlas y no participar de ellas. Ni se participa ni se queda callado, porque si me quedo callada estoy participando con el silencio.

La fuerza resiliente que emana de Adonai le permitió empoderarse a partir de algo tan perverso como la reclusión injusta como falso positivo. Su penitencia no duró cuarenta días ni fue una catarsis voluntaria por devoción. Fueron cuatro meses de privación de libertad —y de dignidad, de derechos humanos— por algo infundado, arbitrario. Por alguien motivado en truncar una vida a cambio de reputación o dinero. Por un Estado que incentiva y premia prácticas delictivas. Pero, pese a ello, en lugar de convertirse en polvo, Adonai renació de sus cenizas.

El alegato de Adonai: “si los de abajo se mueven los de arriba se caen”

Adonai es gran conocedora de la historia del conflicto en el sur del Tolima. Forma parte de ella. Una de sus labores —y pilar de su trabajo social— es preservar la memoria, por eso le gusta mantener un vínculo estrecho con la juventud de Rioblanco y narrar todo lo que pasó, “para que las siguientes generaciones conozcan los hechos y no repitan los mismos errores”, explica. Ve en sus hijos el futuro de Colombia, un futuro basado en la paz y la reconciliación. Con todo su bagaje, narra su propio relato sobre el conflicto, su aporte para la juventud en la que tantas esperanzas deposita:

El conflicto armado viene de la desigualdad social. Colombia tiene pocas familias ricas y millones de familias pobres. La guerrilla exigía el derecho a la vivienda —los primeros guerrilleros, porque los últimos perdieron su esencia—, tenían la idea de que debía haber una igualdad de derechos y condiciones. Recuerdo que el M-19 llegó a Herrera, saqueó la Caja Agraria y se fue a los barrios vulnerables a distribuir “esto por acá y esto por allá”. Sabían que esas personas a las que les estaban repartiendo no tenían nada, así que robaron para regalar. Luego empezaron a conseguir la plata para ellos. Algunos le daban al campesino... pero esos eran de cada cien, uno.

Los partidos políticos fueron los que alimentaron y continuaron el conflicto que nacía por la desigualdad. Se dividieron entre liberales y conservadores, comenzaron a pelear puramente por un color partidista. Así fue como los de arriba se acomodaron mientras los de abajo se estaban agarrando: ahorita la izquierda y la derecha andan peleando y siempre los de abajo somos los que terminamos colocando los despojos y los muertos. La desigualdad social y la ignorancia han sido las que han generado un conflicto que no se ha acabado, sino que ha cambiado de nombre. Los señores de las farc hacen su dejación de armas, pero a ellos no les cumplen, entonces algunos están retornando a ellas. Cuando hicieron la

dejación los paramilitares, tampoco les cumplieron. El conflicto sigue, pero ya con otro nombre.

Hasta que el Estado no cumpla siempre va a haber conflicto, porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. La paz es posible, sí. Claro que es posible. Ahorita con el acuerdo con las farc se vio la posibilidad. Pero ese acuerdo se está deteriorando porque hay unos intereses. Los de abajo nos damos cuenta. El hecho de que estemos abajo no quiere decir que seamos brutos; siempre nos estamos dando cuenta. Son los de arriba. Ellos están moviendo intereses personales y nos están poniendo a pelear. Pero si el pueblo fuéramos conscientes y dijéramos vamos a cambiar el país... lo cambiamos. Y no lo vamos a hacer con las armas, lo vamos a cambiar si no nos dejamos manipular. Que no nos manipulen más, que nosotros seamos capaces de decir ¡usted será el representante! Alguien que venga de abajo y sepa las necesidades que tenemos. Pero no, los grandes nos muestran “este va a ser el presidente” y nosotros votamos. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen.

Si la élite ayuda a los que están haciendo daño, entonces no vamos a tener paz. Si nos siguen mirando como un corredor, un lugar estratégico, de pronto no la vamos a tener. Si los líderes y lideresas sociales seguimos contando la historia, de pronto no vamos a sobrevivir: somos conscientes de ello. Va a haber un momento que de tanto que contamos, no vamos a sobrevivir, porque a alguien no le va a gustar. Pero vamos a continuar hacia adelante, hay que enseñar a la gente a hablar, porque la primera causa para ser nosotros un municipio de guerra, de zona roja, es que todo el mundo calló. Todo el mundo se quedaba callado, entre ellas, yo. Nos quedamos en silencio para sobrevivir y porque el miedo insuperable — entre otras cosas— hizo que enmudeciéramos. Ahora que tenemos la oportunidad de decir las cosas, pues las contamos.

Ser líder social es como un delito para el Estado. A quienes lideramos socialmente nos ven como si fuéramos de extrema izquierda: “Ese no

quiere trabajar”, dicen. Y si uno pide los derechos de los demás, peor. En el Cauca ha habido muchos asesinatos... a nosotros aquí, en Rioblanco, de momento no nos han dicho nada, pero ya nos acechan con intención de intimidar. Nos dicen también que nos metemos en lo que no nos importa, “ese problema no es suyo, no se meta...”. Hemos tenido muchos conflictos. Yo tengo muchos conflictos por eso, pero sigo ahí.

Hay que generar un cambio. Un señor una vez me dijo “Es que usted pelea y discute muchas cosas” y yo le contesté: “Es que discutir no es pelear, es arreglar las diferencias. Usted tiene su diferencia, yo tengo la mía, escuchémonos. Si nos sabemos escuchar, las podemos cambiar”.

CAPÍTULO 6.

LUZ ÁNGELA YATE: “LLEGÓ LA HORA DE QUE LA VERDAD SEA CONTADA POR NUESTROS PROPIOS ABUELOS Y ABUELAS”.



“Mi nombre es Luz Ángela Yate. Soy la gobernadora del resguardo de Chenche Balsillas, y esta es mi comunidad”.

Hace escasos minutos que Luz se ha retocado el rímel de las pestañas y se ha arreglado su trenza morena sobre el hombro derecho preparándose para la entrevista. Es la primera vez que habla delante de una cámara, pero ya tiene experiencia en defenderse con la palabra. Desde que se convirtió en la gobernadora de su comunidad, Luz Ángela se ha reunido con el Gobernador del Tolima, Carlos Guillermo Ospina, y con la Agencia Nacional de Tierras, así como con otras muchas instituciones en su lucha por la mejora de las viviendas de su resguardo, para conseguir el saneamiento básico de servicios públicos y la instalación de gas. “Si tenemos que pararnos en la minga para que nos vuelvan a poner el wifi, pues lo hacemos”, anuncia la gobernadora.

La conexión pública a Internet solo funcionó un mes en la comunidad indígena que lidera Luz Ángela y, desde entonces, a los habitantes de Chenche Balsillas les toca ir a Coyaima, el municipio donde se inscribe su resguardo, para conectarse a la red. A una media hora en coche del resguardo, cruzando llanuras de pastos, cañones amarillentos y chabolas esporádicas, se encuentra el centro urbano del pueblo.

Coyaima forma parte de la cuenca baja del río Saldaña, sobre el flanco derecho de la cordillera central, al sur del departamento del Tolima. Lo rodean las localidades de Chaparral, Ataco, Natagaima, Prado, Purificación, Saldaña y Ortega. En la plaza principal coyaimuna, la mirada penetrante de un indígena saluda al visitante y toma el protagonismo del mural que señala el centro del municipio. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en junio de 2015, en Tolima, había 80 resguardos; 75 de ellos estaban localizados en Coyaima, Natagaima y Ortega, con casi el 90 % de la población indígena del departamento. En uno de los extremos de la misma plaza principal, la iglesia roja y blanca de San Roque, de puro estilo colonial, se erige como recuerdo presente de los efectos de la cristianización española. En la esquina perpendicular al templo, un supermercado D1 hace competencia al mercadeo local. Al cruzar la calle, las colas en el puesto de venta de lotería dan la vuelta a la esquina.

El rostro de un indígena también ocupa el centro de la bandera del municipio que, de acuerdo con el sitio web oficial de Coyaima, está habitado por un 84 % de población descendiente del Pueblo Pijao, quienes históricamente han mantenido una lucha continua por la recuperación de su tierra y de su cultura. Según recoge la Defensoría del Pueblo, la lucha por su territorio y su identidad representa también “el principal factor de vulneración

de sus derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el sur del departamento”. Los últimos sesenta años, en el marco del conflicto armado colombiano, no han sido una excepción pese a que los Pijao ya lleven siglos de resistencias a diferentes violencias.

Siglos atrás, la tribu de los coyaimas tenía su asentamiento en esta región cálida y aurífera y conformaba uno de los núcleos de la nación Pijao. En los convulsos tiempos de la conquista española, la corona envió al militar Juan de Borja y Armendia para declarar la guerra a los Pijaos que, en el siglo xvi, vivían en ambas riberas del río Magdalena desde el bajo Saldaña, según recoge la historiografía local. La historia se volvió aún más cruel, cuando el conquistador, al darse cuenta de las rivalidades existentes entre los pueblos indígenas Coyaimas y Pijaos, utilizó a los primeros como aliados a su favor.

“Perdimos nuestra lengua. Estamos intentando recuperarla con los abuelos, pero ya está perdida”, lamenta Luz. De hecho, antropólogos plantean que los indígenas pijaos que existen actualmente son una reconstrucción, porque fueron todos asesinados. Según recoge el Centro Nacional de Memoria Histórica, cnmh, “del pueblo pijao existen varias hipótesis sobre sus orígenes. Sin embargo, son pocos los estudios arqueológicos realizados para sustentar los análisis antropológicos sobre los orígenes y migraciones que determinaron el proceso de poblamiento de estas comunidades del sur del Tolima”.

Debido a la sombra de duda que los acecha, los Pijao ponen mucho esmero en reconstruir su memoria y enseñan a estudiantes e investigadores que vienen de las capitales cuáles son sus sitios sagrados, su historia y sus costumbres. Pero en sus escenificaciones protocolarias la mujer suele estar relegada a un segundo plano.

Los hombres están delante, en línea y erguidos. Mientras, Luz, la gobernadora del resguardo, la líder, la luchadora, se encuentra en un extremo del pabellón, apartada de la institucionalidad y del saludo oficial. El ambiente en la ceremonia y los parlamentos de bienvenida son solemnes y defensivos, cargados de lo que se entiende como “masculinidad”. En el aire cálido pegado de tierra amarilla resuena durante varios minutos el grito de los guerreros: “¡Guarda siempre y si es posible hasta la muerte!”.

En el recorrido por su territorio, los Pijao suelen llevar a los forasteros a visitar la Cueva del Mono, denominada así por el efecto óptico que provocan sus tres salidas al exterior, dispuestas de tal manera que recuerdan a la faz de un simio. Enfrente de una de sus entradas, los rituales del “Taita” impregnan el aire con el olor a tabaco que fuma y exhala. La Cueva es un lugar sagrado para el pueblo Pijao. Según cuentan, muchos de ellos se refugiaron en ella durante las masacres cometidas por los españoles y, pese a que muchos murieron enterrados allí dentro, los indígenas afirman que alguno logró sobrevivir. Por este motivo, la Cueva del Mono es considerada uno de los lugares de rescate del pueblo Pijao.

Después de la colonización española y la guerra fratricida entre Coyaimas y Pijaos, Juan de Borja y Armendia fundó en 1608 el poblado indígena de Nuestra señora del Carmen de Coyaima. Pero no lo constituyó en el lugar que ocupa hoy en día. El caserío fue trasladado a su ubicación actual en el margen del río Saldaña el 1 de agosto de 1778. Desde entonces, “la población tuvo su época de desarrollo hasta el 10 de septiembre de 1857, en que fue totalmente destruida por un voraz incendio”, tal y como recoge la información histórica de la página oficial de Coyaima. Seis años más tarde, cuando el pueblo se recompuso un poco del desastre, la Asamblea Legislativa del Tolima elevó Coyaima a categoría de municipio el 21 de febrero de 1863.

Pero si hubo un momento en la historia del municipio que puso Coyaima en el mapa fue el 1 de mayo de 1931. Centenares de indígenas y campesinos dirigidos por Ismael Diógenes Contreras ocuparon el casco urbano del pueblo y declararon un soviét en el municipio después de años de luchas agrícolas, según recoge el historiador Pierre Gilhodes, autor de numerosas obras sobre la cuestión agraria en Colombia.

Indígenas organizados en la lucha por la tierra

En una de las calles colindantes a la plaza principal de Coyaima, se encuentra la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, acit, de la cual tanto Luz Ángela como el resguardo de Chenche Balcillas hacen parte. “Llevo aproximadamente diez años trabajando con ellos, a nivel interno. Pero ahorita llevo 2 años que empecé a mostrar mi fuerza, porque se trata de seguir luchando”. Cuando Luz dice *fuerza*, lo hace con robustez y serenidad. Un equilibrio que se resume en el silencio posterior a la firmeza de su voz, transformada ahora en la sonrisa bondadosa de su boca y sus profundos ojos indígenas. “En este momento soy la encargada de derechos humanos y estoy muy orgullosa, porque he ido a muchos departamentos. He sido delegada para contar lo que nos sucede en cada comunidad”.

Por dentro, la sede de la acit está decorada con murales del suelo al techo realizados por los mismos miembros de la organización. Las pintadas de la oficina representan el paso del día. Al entrar, la pared que queda atrás es el anochecer, a la izquierda está la noche y justo enfrente se encuentra el amanecer. Toda la pared restante es el día. La alegoría del amanecer incluye un gran dibujo de un grupo de campesinos y campesinas indígenas en marcha, enarbolando banderas. Debajo de la composición que representa los campesinos en

lucha, una pizarra blanca sin borrar devela algunos de los temas tratados en la última reunión de la Asociación: la Ley 21/1991, la Ley 89/1890, cuestiones de gobierno propio y objeción cultural; pero también, barrer y ordenar la oficina.

La acit fue fundada en 1993, impulsada por el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Como organización indígena ha reivindicado activamente una repartición justa de la tierra y la recuperación de sus territorios ancestrales. “Los persiguieron mucho debido a sus tierras y a su pensamiento”, según explica José Luis Ruiz, investigador de la Universidad del Tolima, experto en el conflicto armado en la región y ex coordinador del programa de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, regional Tolima. “Ellos hacen parte de una herencia histórica indígena del cacique Eutiquio Timoté, natural de Coyaima, que fue el primer candidato indígena a la Presidencia de la República en 1934”, explica Ruiz. A día de hoy, la acit representa a 24 000 habitantes de 27 cabildos indígenas, según las cifras proporcionadas por su presidente, Darío Fernando Botache.

El cabildo es la organización política de las comunidades indígenas, mientras que el resguardo es la materialización legal de su territorio. Según recoge la Constitución Política de Colombia en sus artículos 63 y 329, los resguardos son “terrenos de propiedad colectiva, inalienables, imprescriptibles e inembargables”. En la región, las figuras de organización político-administrativa se encuentran agrupadas en la acit y en otras tres asociaciones de cabildos indígenas: el Consejo Regional Indígena del Tolima (crit), que concentra 19 cabildos, y la Federación de Cabildos Indígenas del Tolima (ficat), que une a otros 11, según datos del Plan de Ordenación Territorial de Coyaima (pbot) del año 2000—el último realizado—. Además, también existe la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima (arit), aunque no se encuentra reflejada en

el antiguo plan de ordenación. Pese a que el municipio cuenta en total con 55 comunidades indígenas organizadas, sólo 21 son resguardos legalmente constituidos. Orgullosa, Darío Fernando Botache afirma: “Cuando nos reunimos todas las organizaciones hacemos sentar el Estado”.

El espejismo de Zanja Honda

Una vez Luz Ángela toma de la oficina uno de los sombreros de palma que ellas mismas producen, echa la llave a la sede de la organización y emprende rumbo al resguardo de Chenche Balcillas, ubicado “allá donde está la laguna”, y que recibe su nombre del río Chenche. De camino, Luz comenta por teléfono con un compañero de la comunidad que por la mañana ha tenido que actuar con la guardia indígena y la policía, porque había un señor con un fusil enfadado por desacuerdos territoriales.

Luz explica que aquella laguna, que parece un oasis en medio del calor aplastante, es la presa Zanja Honda, un pantano artificial que crearon al juntar quebradas afluentes de ríos como el Saldaña y el Chenche con el propósito de “controlar inundaciones y lograr la regulación de caudales para el riego, dentro del proyecto denominado Triángulo del Tolima”, según recoge el pbot. En sus inicios, el proyecto se auguraba muy beneficioso para toda la comunidad, tanto a nivel agropecuario como hasta a nivel turístico, o al menos así lo promocionaban las autoridades. Hoy, sin terminar y sin funcionamiento oficial, es utilizado principalmente para regar cultivos de arroz. Los habitantes de los resguardos colindantes también lo utilizan para pescar, bañarse y lavar la ropa. “Esta presa pertenece a nuestro territorio, pero la quieren privatizar”, denuncia Luz, que se pregunta si tendrán que comprarle el agua a la multinacional para el ganado y para bañarse.

Según rememora la gobernadora, se eligió construir la Zanja Honda en los años ochenta, cuando se hizo la consulta previa del Triángulo Sur del Tolima. Después, en 1993 se constituyeron los cabildos con la organización, y posteriormente “vinieron unos japoneses para negociar la zona del embalse”. Luz dice japoneses, pero según explicaba en diciembre de 2004 el entonces ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, el gobierno colombiano dialogó con el gobierno chino para conseguir un crédito que financiase el 65 % del valor de la obra, calculada en 340 mil millones de pesos, tal y como recogía el diario *El Tiempo*.

En 2016, el Ministro de Agricultura, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, Aurelio Iragorri, comparó esta obra con el Triángulo de las Bermudas, pues “los recursos que se destinan para avanzar se desaparecen”, tal y como recogía el periódico tolimense *El Nuevo Día*. En una audiencia pública de la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la República en noviembre de 2017, el alcalde de Coyaima, Oswaldo Alape, cuestionó los elevados costes y las contrataciones firmadas en los últimos años por el Consorcio Obras Triángulo y la Contraloría identificó más de 10 delitos penales y fiscales, e incidentes disciplinarios en relación al contrato de limpieza de la presa.

En 2020, el proyecto de riego aún está inconcluso y, de acuerdo a la hoja de ruta del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, la meta de finalización es el 2025. Por eso, tanto la Contraloría y la Procuraduría, así como resguardos indígenas, como el de Chenche Amayarco, han pedido en diversas ocasiones a la Agencia de Desarrollo Rural respuestas concretas sobre el Triángulo del Tolima, debido a que puede generar desventajas a las comunidades indígenas. Según recoge *El Nuevo Día*, aún existen indígenas dueños de predios a los que el Gobierno nacional no les ha terminado de pagar la tierra expropiada.

De acuerdo con el mismo diario, a finales de 2017 el alcalde de Natagaima, Jesús Alberto Manios, estaba “revisando la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que existiría un detrimento que perjudica directamente a la población indígena”.

Es una problemática que nosotros tenemos actualmente —explica Luz—, porque en un principio teníamos la visión que el embalse nos iba a garantizar una calidad de vida estable para las familias, pero los acuerdos nunca se cumplieron, nunca se socializaron, no se dieron como debe de ser. Es una lucha que viene de muchos años atrás y como líder, este año, la quiero retomar.

Tras bordear el polémico espejo de agua, se llega a la reserva que Luz gobierna, una comunidad de 270 núcleos familiares y unas 1500 personas. La mayoría de ellas viven en casas de barro, equipadas con mesitas y sillas de plástico en el cobertizo de caña que las preside. Mañana es día de mercado y, al atravesar el resguardo, es fácil toparse con furgonetas cargadas de plátano cachaco. Precisamente, una de las principales ocupaciones de los habitantes de Chenche Balcillas es cultivar la hoja del cachaco, que se utiliza para envolver el tamal, plato típico del Tolima. Los coyaimunos son los que surten Bogotá de cachaco: según recoge la página web oficial de Coyaima, semanalmente salen del municipio unas 300 toneladas de la hoja de plátano hacia la capital colombiana. En el territorio indígena hay también varias chicherías, que están a reventar. Es este el lugar donde nació la “Chicha Tolimense”, una bebida tradicional fermentada, producida a base de maíz, y durante siglos perseguida y estigmatizada. Las comunidades indígenas producen chicha en su territorio y después la venden en el municipio, así como cultivan algodón, arroz, azúcar; y crían ganado, mayoritariamente cerdos y ovejas.

Luz explica que frecuentemente sus paisanos empiezan a tomar chicha a las 2 de la tarde y no paran hasta la madrugada, bailando todo tipo de músicas populares. Es una leyenda tolimense que los Pijao “toman y bailan que da miedo”. Riendo, Luz recuerda aquella única vez que se emborrachó. Lo pasó mal, pero lo recuerda con una sonrisa. En las orillas de las carreteras de tierra se ven muchas bolsas de basura y otros desperdicios arrojados directamente sobre un terreno muy seco. Luz cuenta que pidió al alcalde Alape que hicieran recolecta de basura de casa en casa, “pero no resultó”.

El trayecto termina en la sede de la gobernación del resguardo, ubicada en una casa de paredes hechas de cemento y ladrillos a medio pintar. El edificio donde se hacen las reuniones es, de hecho, el hogar de una familia. En uno de sus muros se ven garabatos hechos por los niños, entre los cuales se puede distinguir algún ojo. Probablemente, alguno de esos trazos esté hecho por la niña pequeña que una joven de 16 años sostiene entre sus brazos. La joven mamá estudió hasta tercer grado de secundaria y afirma que le gustaría seguir estudiando, pero no puede por su hija. Tiene la esperanza de retomarlo más adelante, pero “será difícil, porque el papá no se hace responsable”.

La guerra en los cuerpos territorio

En el patio trasero de la sede de la gobernación del resguardo, Luz empieza a contar la historia de su comunidad—y su historia—con el conflicto armado. Un espacio abierto, al aire libre, con una hamaca deshilachada balanceándose ligeramente con el viento.

“Mi comunidad fue azotada del 2000 al 2005. Entonces, hubo muchas mamitas que se tuvieron que ir. Acá tuvimos primero la

entrada de la guerrilla y luego vinieron las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares”, recuerda Luz. Según recoge el cnmh,

en la década del noventa, las farc aumentaron su presencia y acciones de control, a través de los Frentes 21, 17, 25 y el Joselo Lozada; junto con las columnas móviles Jacobo Prías Alape y la Daniel Aldana. Además, por su parte, el Bloque Tolima intensificó el conflicto en la zona a raíz de su expansión en esos territorios desde el año 2001.

Disputas territoriales, intereses económicos y conflicto político se entrecruzan en este plano árido mantenido con vida gracias a los ríos. Como subraya el informe elaborado por el cnmh, “De los grupos precursores al Bloque Tolima (auc)”, las tres bases que los paramilitares instalaron en la zona fueron situadas, intencionalmente, sobre el macroproyecto de riego del Triángulo del Tolima, que “ha llevado como resultado desde finales de 1999 un avance intensificado del paramilitarismo, (...) dejando un crecido número de víctimas”. En la zona indígena, el Bloque Tolima mantuvo el control territorial desde su incursión en 2001 hasta su desmovilización en 2005.

“Ellos [los paramilitares] violentaron muchas mujeres, nos violentaron, porque yo soy una víctima más de eso”, explica Luz, que cierra sus ojos y posa su mano sobre el pecho. “Y por eso me siento fortalecida...”. Luz hace una pausa, sus ojos se pierden en el vacío y mira hacia un lado en busca de las palabras que no le salen. Su mano sigue en su pecho. Su mirada vuelve, junto con las palabras:

En mí, como mujer, el miedo que tenía ya... ya se me fue, aunque es algo por lo que una queda marcada como mujer. Así, esa es la idea mía para este año como gobernadora: buscar la forma de hablar con esas mamitas que tuvieron ese tipo de problemas, impulsar que ya no tenemos que tener

ese miedo por eso que nos sucedió, sino que hay que comentarlo, ir a los entes en donde nos escuchen, si es que nos escuchan... Sea como sea, siempre seguir buscando la forma de lucharla.

La relación cuerpo-mujer-territorio es clave para comprender los efectos del conflicto armado en la mujer víctima-sobreviviente. Según recoge el mismo cnmh en el libro *Expropiar el cuerpo. Seis historias sobre violencia sexual en el conflicto armado* (2018), al cuerpo de la mujer se le ha otorgado un significado de “botín”, lo que implica que las lógicas de poder en los territorios físicos se trasladan a concebirla como un cuerpo-territorio objeto de conquista y usurpación. Es el fenómeno que los académicos llaman “territorio corporalizado” o “cuerpo territorializado”. Tal y como recogen las investigadoras Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez, en el conflicto armado colombiano la violencia sexual como estrategia de guerra fue usada como una práctica extendida, sistemática e invisible. La propia Corte Constitucional de Colombia, en su Auto 092 de 2008, indicó que todos los grupos armados ilegales enfrentados, “y en algunos casos aislados, agentes individuales de la Fuerza Pública” hicieron uso de la violencia sexual, la explotación y el abuso como armas en el conflicto.

Además, las mujeres sufren otras violencias sobre sus cuerpos vulnerados: silencios, vergüenzas, señalamientos, culpas, justificaciones. Según cuenta la líder indígena “Hay muchas compañeras que fueron víctimas de acceso carnal y que tienen ese miedo a contar. Siempre hemos tenido ese miedo a contar. Miedo a, entre nosotras mismas, contar la agresión”. Un miedo que se deriva del temor a ser estigmatizadas por un hecho sobre el cual ellas no tenían responsabilidad, según explican Fernández-Matos y González-Martínez (2019) en el artículo “La paz sin las mujeres ¡No va! El proceso de paz colombiano desde la perspectiva de género”.

Además, durante mucho tiempo, la naturalización de la violencia sexual fue tan fuerte que llegó a impedir verla como un delito, de acuerdo a las denuncias realizadas por numerosos informes de derechos humanos. El miedo y la naturalización alimentan la ausencia de datos sobre la magnitud de los casos de violencia sexual cometidos contra las mujeres.

La gobernadora también comenta que hay mujeres que cuentan con el apoyo de sus compañeros, pero hay otras que más bien todo lo contrario. “A veces nos vulneran más de lo que ya el Estado nos vulnera”. Armada de valor, Luz combate el silencio y hace el esfuerzo de escalar las mayores barreras sociales e institucionales que las mujeres tienen que superar para participar políticamente. No se quiere callar. “En este momento yo estoy luchando por hacer parte de una asociación de víctimas, estoy en ese proceso”.

El rostro de la victimización

Sentada al cobijo de la sombra, la gobernadora indígena deja espacio para que respiren las ideas que explica. “Yo, como víctima que fui, a pesar de que no me desplazé —y lo acepto, no me fui de mi comunidad—, me refugié en otra comunidad mientras pasaba el conflicto”. Aunque Luz no considere que el hecho de tener que refugiarse en otra comunidad fuera un desplazamiento forzoso para ella, sí ve la fuerza con la que les ha afectado el conflicto: “Como comunidad indígena nos ha afectado mucho, porque aquí en mi censo hay muchos compañeros que están desplazados”.

Según recogen los informes de esclarecimiento de la verdad, una de las mayores afectaciones del Pueblo Pijao ha tenido que ver con el desplazamiento forzado. De acuerdo con el informe de la Defensoría del

Pueblo Delegada para los indígenas y las minorías étnicas, publicado en 2012: A raíz del accionar de distintos actores armados, entre los años 2003 y 2008, se registraron 92 409 casos de desplazamiento en municipios del Tolima donde habita parte de la población Pijao, lo que equivale al 26 % en relación con el total de desplazamientos del departamento según los datos del cnmh. Este hecho se reconoce a nivel nacional como uno de los procesos de desplazamiento indígena de mayor impacto, tal y como se expone en el diagnóstico de la situación del pueblo indígena Pijao realizado por el Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y dih de la Presidencia de la República, elaborado en 2013. Huir del territorio fue una de las únicas maneras a través de las cuales las familias indígenas podían evitar el reclutamiento forzado, entre otros hechos victimizantes.

Además, las acciones del Bloque Tolima en los municipios indígenas, basadas en un modus operandi que utilizaba repertorios de violencia asociados al terror como medio para controlar la población, “contaron con el apoyo o la omisión de la Fuerza Pública.

La actuación de los paramilitares “no derivó solo en la adquisición y apropiación de tierras sino en la desaparición y el homicidio selectivos y sistemáticos de la población indígena”, bajo la denominada “limpieza social” dirigida contra indígenas supuestamente colaboradores de la guerrilla, según recogen diferentes sentencias judiciales citadas por el informe del cnmh. El mismo documento explica que aún no se ha identificado la cifra exacta de desapariciones forzadas de indígenas.

Las cifras que sí se han registrado, de acuerdo con la Vicepresidencia de la República, indican que son 81 los casos de indígenas del sur del Tolima a quienes se les habían violado sus derechos humanos, solamente entre 2002 y 2003. De los 81 casos observados, 11 fueron clasificados como homicidios;

otros 11 como amenazas; 2 como desapariciones forzadas; 47 como desplazamientos forzados; 1 como tortura, otro más como atentado; y 8 como detenciones arbitrarias. De acuerdo a las cifras de la Vicepresidencia de la República, citadas por el cnmh:

93 % de las víctimas de estas violaciones se registraron en Coyaima y 7 % en Natagaima. El 64 % de los crímenes fue atribuido a las autodefensas, 25 % a autores desconocidos, 9 % al Ejército y 2 % a las farc.

“Un falso positivo de una niña de tan sólo 13 años. Eso sucedió acá en mi comunidad”, denuncia Luz, de nuevo con la mano en el pecho. “Pero a nosotros como comunidad nos da miedo salir y denunciar porque no nos van a creer”. También en Chenche Balcillas se dieron casos de jóvenes asesinados por los militares o los paramilitares, a quienes vestían de combatientes y los hacían pasar por guerrilleros muertos. Un modus operandi que popularmente se ha conocido como “falsos positivos”.

El informe de la visita que hizo la Defensoría del Pueblo a Coyaima y Natagaima en 2012 era alarmante:

(...) La violencia que afecta a las comunidades indígenas del sur del Tolima está amenazando su existencia como pueblo indígena puesto que los actuales pobladores no conservan muchas de sus costumbres culturales y su territorio se ha visto reducido significativamente, factores que facilitan el actuar de los actores armados debido a la fragilidad de las organizaciones indígenas —permeadas por el miedo que generan los actores armados al margen de la ley— y por la eliminación sistemática de los líderes y mayores de cada una de las comunidades.

Luz tiene conciencia plena del problema y sabe lo importante que son las abuelas en su comunidad: “Nuestras abuelas han sido las que nos han protegido y nos protegieron en las guerras que

hubo anteriormente”. Tiene la determinación de defenderlas, de protegerlas, porque considera que ellas son clave para hablar del pasado, de las madres que han marchado, desplazadas, y para saber la verdad. La voluntad de defender a las vulnerables y de esclarecer el pasado llevaron a Luz a implicarse en la vida social y política de su comunidad.

Defender la comunidad

Para Luz, ser líder significa “defender la comunidad”. La gobernadora se apresura a especificar:

Aunque esa palabra de *defender* la comunidad pueda parecer muy insignificante o vacía, para mí es muy significativa. No es solo quedarme acá hablando con los compañeros, solucionándoles los problemas internos. Ser líder es buscar mejorar la calidad de vida de la comunidad en pleno, gestionarles proyectos y salir y buscar formas y entidades, porque yo sé que hay muchas oenegés que impulsan las comunidades.

En su comunidad nunca hubo luz hasta hace pocos meses y, en su casa, la gobernadora no tiene gas. Cocina con leña, como el resto de los habitantes del resguardo, que tampoco disponen de un sistema de saneamiento básico y suministro de agua potable. Ella quiere lograr que el Estado los escuche. Que sus niños tengan una mejor educación, porque ella se quedó “estancada”. Hoy su hijo mayor cumple 18 años. “Irás a la universidad”, dice orgullosa Luz Ángela.

La casa donde vive junto a dos de sus cuatro hijos se ubica al lado de la escuela de la comunidad, la Institución Educativa Chenche Balsillas, que acoge cerca de 500 estudiantes que caminan durante horas para llegar al colegio. Cuando llegan, en medio del calor sofocante propio de la zona, los niños y las niñas se enfrentan

al principal problema del resguardo: la ausencia de agua. Según informaba en enero de 2020 el portal de noticias RCN, la situación ha empeorado en los últimos años con la crisis climática, ya que los pozos o aljibes se secan por las altas temperaturas —hasta 40 grados en las zonas rurales— que se registran en la región.

Antes no teníamos que perforar por el agua, pero ahora sí, hasta 15 metros de profundidad”, lamenta la gobernadora, que se pregunta: “Si con la minería envenenan el agua del río, ¿de qué forma nos benefician a nosotros estos proyectos? Nada. Con eso nos engañan.

Luz se refiere a los megaproyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos que ponen en peligro los ecosistemas locales. Como comunidad, se han pronunciado en contra del proyecto de minería de Ataco. “Si hay que salir a protestar, se saldrá”, afirma con la potencia calmada que la caracteriza.

Existe en la región un fuerte movimiento ciudadano, articulado en el Comité Ambiental del Tolima, que ha sostenido posturas muy críticas sobre proyectos como el de la Colosa, una mina a cielo abierto de extracción con cianuro; o el Triángulo del Saldaña, según recoge el informe “TOLIMA: Análisis de conflictividades y construcción de paz”, elaborado en 2015 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). El documento también menciona la preocupación que genera en los líderes y lideresas locales el aumento de la exploración petrolera, sumada a una concesión relevante para actividades de exploración y explotación minera, y afirma que “una decisión que ordena el territorio y promueve cambios de manera inconsulta siempre generará conflictos”. Tal y como recuerda el pnud, las comunidades indígenas tienen derecho a una consulta previa sobre los megaproyectos, según recoge el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit).

Mingas por el territorio, la vida y la paz

En un contexto de pugna por la articulación del territorio y de la paz, los indígenas del sur del Tolima han salido reiteradamente a marchar juntos en mingas durante los últimos años de “posconflicto”. *Minga* es la palabra de origen quechua que utilizan los pueblos originarios para referirse a las marchas y los paros de protesta, y que inicialmente designaba una forma de trabajo comunitario.

A finales de marzo de 2019, pueblos indígenas de ocho departamentos del país se sumaron a la minga social iniciada en el Cauca. Así, según informaba el portal de noticias Contagio Radio, diversas comunidades de los departamentos de Chocó, Nariño, Valle, Huila, Tolima, La Guajira, Amazonía y Putumayo se movilizaron para “exigir que se cumplan los acuerdos que por más de 30 años han sido incumplidos por el Gobierno”.

En el departamento del Tolima, alrededor de mil indígenas Pijaos y Nasa de organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Tolima (crit), la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima (arit), la Federación Regional Indígena del Tolima (ficat) y también de la acit, hicieron parte de la minga. Un mes más tarde, las protestas continuaban y Claudio Poloche, representante de la ficat, declaraba el 26 de abril de 2019 a Econoticias que estaban “en Minga Permanente por el Derecho al Territorio, a la Vida, y a la Paz”. En las imágenes de los bloqueos parciales de carreteras que realizaron se puede ver una pancarta turquesa en la que, en letras anchas y mayúsculas, se lee: “RESGUARDO INDÍGENA CHENCHE BALSILLAS PRESENTE”.

Allí estaba Luz Ángela. Exigía el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron con el Estado en el 2014 y 2017, para brindar

garantías de paz y desarrollo a las comunidades indígenas. Según también recoge el portal RCN Radio, a la concentración se sumaron comunidades campesinas, miembros del sindicato de maestros y los transportadores de las empresas de taxis de Coyaima y Natagaima. Después de semanas de minga, el sábado 4 de mayo de 2019 secretarios de despacho de la Gobernación del Tolima firmaron acuerdos finales con las organizaciones participantes en la Minga Indígena, en materia de cultura, educación, salud, deportes, infraestructura, ambiente, desarrollo agropecuario y gestión del riesgo. Según RCN Noticias, con los pactos “se dio cumplimiento a las exigencias, quedando pendientes temas del orden nacional”.

En julio de 2019, las organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación (mpc), entre las cuales está la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic) y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, denunciaron ante la opinión pública y los organismos nacionales e internacionales de monitoreo de los derechos humanos el incumplimiento de los acuerdos tras la publicación del capítulo Étnico del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Los indígenas habían aceptado levantar las mingas, porque los acuerdos se incluirían en el Plan de gobierno; pero, una vez más, el Estado incumplió su palabra.

Luz se lamenta hoy de haber dado por finalizadas las protestas y denuncia que las comunidades indígenas siguen en peligro. De hecho, unos meses después del fin de las mingas, a mediados de agosto de 2019, el portavoz de la acit, Edwin Conde, denunciaba que en unos panfletos que empezaron a circular se declaraba “como objetivo militar a todos los gobernadores y gobernadoras por participar en la minga”.

El peligro de ser la cabeza visible

Luz sabe que el rol que ejerce no está libre de riesgos: “Aquí hemos tenido nuestros líderes asesinados y también por eso hay ese miedo de que nosotras busquemos ese rol, porque siempre que sale uno del territorio siente miedo por las familias que se quedan en casa”. Uno de los líderes indígenas asesinado en Coyaima es Ramiro Culma Capera, fundador del cabildo El Rosario, miembro de acit y militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Según recogió el diario *Tercera Información*, Ramiro fue asesinado el 17 de septiembre de 2016 cuando se dirigía a su casa, atacado con una ametralladora.

Quando uno es líder, a quién primero miran, es a la cabeza visible. Entonces ahí es cuando uno dice que, a veces, asumir el liderazgo es muy duro, pero a la vez fortalecedor, porque uno siente que las cosas que uno hace llegan a un fin.

En 2002, otro de los líderes asesinados fue un compañero de Luz perteneciente a la acit, de su propia comunidad. En la tabla de víctimas que recoge el cnmh está clasificado de la siguiente manera: “Fecha: 8/02/2002 Ubicación: Coyaima. Tipificación del hecho: Homicidio/desaparición forzada. Víctimas esp.: acit. Ubicación específica: Chenche Balsillas”. El Bloque Tolima buscaba quebrantar los procesos de organización social y política de los pueblos indígenas y la organización social más afectada por la violencia de los paramilitares fue la acit. La asociación concentra el 70 % de los 43 casos de violaciones graves contra los pueblos indígenas de la zona registrados por el cnmh, ocurridos entre 1998 y 2003.

“A nuestros compañeros los asesinaron, les hicieron un falso positivo sin saber por qué. En este momento, como gobernadora de mi comunidad, quiero que sea reparado todo lo que se hizo en el conflicto armado», insiste Luz Ángela. Pese a que

las cifras presentadas dan cuenta de un número considerable de homicidios, este podría ser aún mayor. Según recoge la Defensoría del Pueblo, “acit reportó ante la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior el asesinato de por lo menos 150 indígenas en el periodo 2001 - 2003 y el desplazamiento de cerca de 800 familias pertenecientes a esta asociación”. Tal y como destaca el informe del cnmh:

Estas cifras reflejan la dimensión de la violencia ejercida contra esta organización indígena que podría catalogarse como exterminio o etnocidio; además, hecho agravado si tenemos en cuenta que la acit guarda relación con el ataque sistemático que se registró nacionalmente contra el pcc [Partido Comunista Colombiano] y la up [Unión Patriótica].

La persecución a los rostros del cambio se ha dado a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano. Tal y como recoge el portal periodístico Verdad Abierta, “según la organización Somos Defensores, entre 2002 y 2017 en Colombia fueron asesinados 664 líderes sociales”. El peligro continúa. Desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, 442 personas que defendían derechos humanos o lideraban procesos comunitarios han sido asesinados, de acuerdo a las cifras de Somos Defensores publicadas en marzo de 2020. Según los datos más recientes, publicados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) a mediados de mayo, más de cien líderes habían sido asesinados en 2020.

Sin variar la calma que proyecta la voz que sale de sus labios perfilados, Luz denuncia que, en la actualidad, están amenazados: “En este momento estoy amenazada. Estamos amenazados como organización, pero en la comunidad tenemos nuestros guardias y aquí me siento segura y protegida porque ellos están alrededor mío”.

Aunque se siente protegida gracias a la guardia indígena, Luz siente una indefensión total por parte de las instituciones gubernamentales: “Muy frecuentemente no nos escuchan, no nos creen, y por eso nos da miedo salir a denunciar. Es muy difícil contar estas cosas, porque al Estado no le interesa mucho lo que nosotras podamos decirle”. Luz habla con conocimiento de causa:

Yo he estado en consejos de seguridad en los cuales he denunciado que llegaban panfletos para mí, y ellos decían que no era verdad. O sea, no nos creen. Nos dicen ‘que les vamos a hacer unas pautas para que denuncien acá o allá’, pero qué pasa, si yo voy y denuncio allá, tardo más en hacer esa denuncia allá, que en que vengan a hacerme algo. Entonces, también existe ese miedo.

Un miedo que proviene de las formas de amenazas implícitas con las que el Bloque Tolima de las auc imponía una forma de control social en la comunidad. Bajo esa vigilancia, los resguardos estaban obligados a renunciar a su derecho de pedir protección de las autoridades y la justicia, según el citado informe “De los grupos precursores al Bloque Tolima (auc)”, elaborado por el cnmh.

El 15 de agosto de 2019, RCN Radio alertaba que indígenas del Tolima denunciaban la presencia de actores armados en sus territorios. Además, según declaraciones del portavoz de la acit, Edwin Conde, los mismos individuos que repartieron los panfletos impusieron toques de queda, a la vez que se produjo “tránsito de sujetos armados en plenas horas del día y sin portar ningún tipo de uniforme”. Según explicó Conde, una de las situaciones que generó mayor preocupación fueron los documentos que aludían a la organización criminal Águilas Negras, que restringían el tránsito de los ciudadanos en determinadas zonas y horas del día.

En este contexto, Luz explica que “cuando sucede algo, como una persecución”, como comunidad lo han sabido llevar, “porque

irlo a contar allá es venirse en contra de nosotros mismos”. Al ser un resguardo indígena, disponen de una jurisdicción especial y tienen su propia autoridad. “Autoridad que en este momento está en cabeza mía, en mi asamblea”, explica Luz, quien confiesa que no le ha sido fácil tomar el liderazgo: “a nosotras como mujeres nos tildan de que no podemos llegar a realizar nuestras metas”.

La emancipación de la lideresa

“A mí me gusta liderar. Para mí como mujer, ser líder me hace feliz, me siento orgullosa, y tengo mi familia que me está ayudando. Pero hay mucho machismo”, dice, sin pelos en la lengua, la gobernadora. La luz resbala sobre su piel canela brillante, mientras explica, llena de entereza y dignidad, la discriminación que sufre por parte del resto de líderes:

Aquí, en esta sede, hubo gobernadores que, físicamente, me gritaron. Eso es muy doloroso, pero para mí eso no fue un obstáculo, porque antes me llené de fortaleza, para decir ‘sí puedo hacerlo’, y les voy a demostrar con hechos que esta ‘vieja’, de la que dicen, ‘esa mujer se la pasa sin oficio por allá, no tiene más que hacer...’ Sí, sí tiene algo que hacer: traer beneficios para la comunidad. Y lo he hecho bajo la organización a la que yo pertenezco y a la que pertenecemos, y ahora como gobernadora, mucho más.

La historia de empoderamiento de Luz Ángela, la joven gobernadora indígena, comenzó con el proyecto Mamitas en Acción. Entonces, se dio cuenta de que “la mujer puede ser protagonista para el cambio y para el ejercicio del liderazgo”.

Fui madre consejera un año y ahí es donde yo me di cuenta de que como mujeres también podemos llevar un rol, que junto con la mano de nuestros compañeros podemos ayudar a impulsar. Fue muy difícil en un principio, porque yo veía mucho maltrato, conozco muchos compañeros

que maltrataban mucho a las compañeras, y yo dije, pero porqué tiene que existir eso si nosotros, ahorita con la ley que salió, somos iguales, tenemos la misma igualdad, para hablar, para no solamente quedarnos limpiando y barriendo.

Al organizarse después de las violaciones de derechos humanos que sufrió, Luz logró acceder a espacios sociales y a roles nuevos con alta responsabilidad. Su liderazgo le ayudó incluso a cumplir su sueño de viajar en avión y de dar a conocer su comunidad. En Pasto, ciudad a la que llegó por los aires, y en todos los Congresos a los que asiste, Luz asume su papel como embajadora de Chenche Balsillas y, como representante, trabaja por su comunidad y busca apoyo para mejorar las condiciones de vida de su resguardo. Igual que ella, otras mujeres “entraron en contacto con organizaciones, grupos y personas que además de darles apoyo, las acercaron a otros modos de entender el mundo y de comprometerse contra la injusticia y en defensa de los derechos humanos”, tal y como recoge el informe elaborado en 2013 por la Ruta Pacífica de las Mujeres “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”. Estas interacciones, poco a poco, han representado para ellas “adquirir conciencia del hecho de ser mujeres y dar un significado político a su experiencia y a su compromiso”.

Para Luz y muchas otras mujeres, organizarse con otras víctimas en defensa de sus derechos también les ha supuesto experimentar una toma de conciencia feminista que “les ha abierto posibilidades de acción en espacios cada vez más amplios”, de acuerdo a las conclusiones del documento elaborado por la Ruta Pacífica de las Mujeres:

Para mí era muy importante estar en la comunidad —explica Luz— pero más importante fue poder estrecharle la mano al presidente y decirle: ‘Vea,

en mi comunidad... Quiero que vaya a mi comunidad, que se dé cuenta de cuál es la problemática que tenemos...' Y él dijo: 'Sí, sí', pero nunca vino.

La valentía de unas pocas mujeres que se atreven a dar el paso a participar en la esfera política repercute positivamente en todas las demás mujeres, porque con ellas se empiezan a incorporar a la agenda pública las necesidades y los intereses de la mitad de la población que durante tanto tiempo ha sido invisible. Luz ejemplifica la inclusión de nuevos temas en la agenda política:

Especialmente tengo un niño, que es especial, también por base al conflicto, y por eso fue que yo tomé esa decisión: dije ¡no más! Hay que buscar la forma de ayudar a aquellas mamitas, madres cabeza de familia, porque hay mucha madre cabeza de familia, y es tan triste que nuestros niños crezcan en malas condiciones. Entonces se trata de buscar la forma de que estos niños tengan y se les hagan valer sus derechos. Porque todos tenemos derechos y a veces son vulnerados.

“Para nosotros es muy importante contar”

Más allá de querer mejorar las condiciones de vida de su comunidad, Luz cuenta que se hizo líder para “ayudar a que la verdad se sepa”, ya que considera que contar lo que pasó es una necesidad indispensable para reparar a las víctimas. Narrar, según recogen diferentes académicos y académicas, se convierte en un acto de resistencia frente al olvido y una manera de construir memoria colectiva.

Para nosotros es muy importante contar —explica Luz— porque, aunque a veces decimos que las heridas sanan, no es verdad, se mantienen ahí con nosotros. No es un secreto que siempre la violencia nos ha dejado mucha tristeza, y para no tener tristeza, necesitamos saber la verdad, la verdad contada de nosotros mismos.

Precisamente, para Ledis Bohórquez y Yuber Hernando Rojas “el reto de la Víctima como Sobreviviente está en el *deber ser* y su transformación en sujeto-productor-de-narrativa que contribuye a la reconstrucción de la Memoria histórica”, según recogen en el artículo “De víctimas a supervivientes: el reto de la reconstrucción de la memoria histórica en Colombia”. Según los investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana, la víctima que sobrevive “tiene una responsabilidad: hacer memoria, no huirle al recuerdo”. De esta forma, poco a poco se subvierte la historia escrita desde la visión del victimario, la tradicional y hegemónica historia de los vencedores sobre los vencidos, si bien el pasado nunca se pueda restituir de manera perfecta.

Aún y así, muchas veces, aunque cuenten, “la narración de las víctimas no se traduce en justicia oportuna, reducción de la impunidad o mejoras en sus condiciones de vida”, según reconocía el cnmh en el texto *La guerra inscrita en el cuerpo* (2017). Pero, de todas formas, las víctimas anhelan contar para pasar de la voz pasiva de “víctimas de violencia sexual” —y del resto de violencias— a una voz más protagónica, como sujetos activos y narradores de su propia historia.

Necesitamos saber quiénes y por qué —prosigue Luz—, porque nosotros y nosotras somos conscientes de que alguien atrás está buscando que vengan a asesinarnos. Yo creo que llegó la hora de que la verdad sea contada desde nuestros propios abuelos y abuelas, porque ellos son los que saben y con ellos vivimos la violencia y ellos fueron quienes nos protegieron en algún momento. Sí, para la paz necesitamos que se sepa la verdad. Porque nosotros estamos viviendo una guerra que no entendemos, ni la estamos generando.

Por eso la lideresa ha buscado la forma para reparar a las víctimas mediante espacios de sanación y escucha activa, y cree que no se dan suficientes recursos para sanar ese dolor que siente que

aún persiste en sus mentes. “El año pasado yo busqué la forma por medio de la organización para que vinieran a orientarnos... Que vinieran personas que nosotros pudiéramos tener la suficiente confianza para contarles lo que sucedió”. En la misma línea, la gobernadora se queja de los errores en el proceso de esclarecimiento de la verdad. Relata:

Donde yo he ido siempre he expuesto la verdad, y la tristeza más grande es que a veces el Estado ha ayudado a personas que no han tenido este tipo de violencia. Entonces allí hay una falencia del Estado porque no ha sabido llegar a donde de verdad ha habido violencia.

Tal y como reclama Luz, el profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, Juan David Villa Gómez, considera que el acto de escucha es esencial en el proceso de reconstrucción de memoria y acción psicosocial: “

Cuando se comprenda, como lo buscan los hombres y mujeres víctimas y sobrevivientes, cuando salen a marchar, cuando hacen un ritual o un acto simbólico, cuando se quedan en silencio performativo en un lugar público, cuando el resto de esta sociedad logre comprender, quizás se puedan dar las condiciones suficientes y necesarias para hacer la paz en Colombia.

“La paz es vivir en comunidad, pero también ser escuchados”

Luz juega con el sombrero de palma entre las manos. Los detalles azules de la cinta que rodea la artesanía hacen juego con el azul de la pulsera ancha de estampados étnicos atada al brazo izquierdo de la gobernadora. A la vez, su mirada, su voz y toda su persona andan al mismo compás de las palabras que pronuncia y del mensaje que defiende: Reconciliación, perdón, respeto, fortaleza, comunidad y paz.

Ahorita asumí el rol de líder, de buscar la forma de que esa paz que tanto nosotros necesitamos llegue en algún momento, en el que podamos respirar tranquilamente sin estar preocupados de que van a venir por nosotros o por nosotras. Más que nada la infancia, la adolescencia, nuestros abuelos.

Una tranquilidad, una paz que para Luz “será que vivamos todos en comunidad, en unión. Tener una unidad en la que nosotros y nosotras podamos contar con nuestras compañeras y compañeros en todo momento. Pero también ser escuchados para que cuando nosotros tengamos algún tipo de problema violento que vengan a mediar, a intermediar por nosotros».

Luz, orgullosa de su organización, también destaca la participación de la acit en los diálogos de Paz de la Habana de 2016.

Durante el proceso de paz, la acit estuvo sentada en La Habana. Fueron tres representantes de la asociación de acá de Coyaima, para que quedáramos reflejados en el Punto 5 del Acuerdo de Paz, donde hay muchas estructuras y derechos que no se han cumplido. El acuerdo recogía muchos beneficios, pero ahorita con este nuevo presidente [Iván Duque], se nos han negado esos derechos. Hemos ido a muchas mingas y en ellas siempre sale el acuerdo de paz (como garantía), porque como mujeres nos sentimos muy dolidas. Nosotras como madres somos las que sentimos ese dolor, que no lo dejamos notar, pero que está ahí con nosotras.

La lideresa cree que esa sanación, esa paz y esa unidad “sí es posible cuando nosotros decimos: ‘Ya basta, ¡no más violencia!’”. Pero matiza que “también tiene que salir de nosotros mismos, de cada uno de nosotros”. Con la tranquilidad que la caracteriza, Luz recuerda el momento en que su agresor se acercó a pedirle perdón.

A mí ya me pidió perdón cierta persona, que yo no voy a decir quién, pero esa persona llegó a mí y me dijo: ‘yo necesito hablar con usted’, entonces

yo le dije, ‘no hay problema’. Él me preguntó: ‘¿usted se acuerda de mí?’, y yo le contesté que no me acordaba de él. Y él dijo, ‘pero yo sí me acuerdo de usted, y yo hice algo terrible, y yo necesito que me perdone...’ Uno lo duda mucho, pero dice, sucedió, pero que no vuelva a suceder, está perdonado, y todo debería ser así en el entorno, buscar esa forma de perdón. De perdonarnos entre nosotros mismos. Porque de pronto en algún momento uno comete un error, y también necesita que lo perdonen.

CAPÍTULO 7

HEIDI JOHANNA ROJAS: “ESTOY DISPUESTA A LUCHAR PORQUE SÉ QUE LO QUE YO HAGA VA A SER UN EJEMPLO PARA MUCHAS MUJERES”



Lo primero que hace Heidi Johanna Rojas al levantarse es sintonizar la radio. “Esto se lo debo a mis padres”, explica mientras prepara el primer tinto de la mañana. Es temprano, huele a café y en radio Mariquita suena cumbia colombiana. Al sonido de la música, se le suman los cacareos de los pollos de la familia, que revolotean alrededor de la casa en búsqueda de las sobras de la cena de ayer. Heidi vive con su familia en una finca de la vereda La Cabaña, en el municipio de San Sebastián de Mariquita, al norte del departamento del Tolima. Tras tomar el tinto, a veces acompañado de pan dulce, Heidi se pone a preparar el caldo del desayuno. Sus manos muestran las durezas de quien ha trabajado mucho la tierra, pero aun así trazan movimientos gráciles mientras pone a hervir las verduras, casi de manera inconsciente. Luego se dirige a la casa de enfrente a saludar a su madre. Desde la terraza de la señora María, todavía se oye la cumbia.

La familia Rojas vive en un sitio tranquilo en lo alto de la vereda. Para llegar hay que subir en Jeep desde el casco urbano de Mariquita, por un camino agreste durante más de una hora. Aun así, no se hace pesado. Unas cortinas de inmensos paisajes verdes amenizan el trayecto. La finca pertenece a la señora María, que cada mañana también prepara tinto. Mientras se lo toma y habla con su hija, también hierve su caldo. “Cuando nos vinimos a vivir a la finca, esto era zona roja”, comenta. La familia se vino en 1992 y en esos tiempos las farc dominaban el territorio. Antes tenían una tienda en Bogotá, pero el padre de Heidy se cansó de las duras condiciones en las que vivían en la ciudad y quiso apostar por el negocio de una finca en el campo. “Por aquel entonces se molía mucha caña aquí. Esto es zona panelera”, recuerda Heidi. La economía de la vereda de La Cabaña se basa en la agricultura, sobre todo en el cultivo de caña para producir panela. Heidi conoce el proceso de memoria pues ha trabajado desde niña en él. Su padre murió cuando ella tenía 14 años:

—Tocó empezar a las duras y a las maduras a seguir adelante sola —recuerda la señora María— Tenía cinco criaturas, de 2 a 16 años. Cuando quedé viuda, en el 98, la finca estaba pelada, hipotecada y sin plata. Tuve que empezar a trabajar para salir adelante.

—El campo es muy bonito por su tranquilidad. Pero, así como se vive de tranquilo, así es tranquila la economía —ironiza Heidi—. Si uno no se mete de siete de la mañana a cinco de la tarde a jornalear, uno no tiene derecho a comer. Y el salario de la mujer es más bajo que el del hombre. Para nosotras fue muy duro. La opción que tuvimos fue encontrar marido y crear nuestro hogar. Alrededor del 2000, llegaron los paramilitares a la vereda. La señora María explica que aparcaban los carros en su finca. Se trata de un lugar estratégico, pues es el punto intermedio entre

La Cabaña y las veredas del Pomo y Carrizales. Heidi se fue de la finca a sus 16 años. Vivía en la misma vereda, pero con su pareja y la familia de él. Un año después quedó embarazada y en ese momento empezó a comprender todo por lo que había pasado su madre: “Me tocó tomar el rol de mi mamá y ahí yo pensaba, ¿cómo le voy a dar mi niño tal cosa si no tenemos nada?”.

Los paramilitares que llegaron a La Cabaña pertenecían al Frente Omar Isaza (foi), comandado por Walter Ochoa Guisao, alias *El Gurre*. Según se documenta en el portal Verdadabierta.com, el foi formaba parte de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (acmm), creadas en los años 90 por Ramón Isaza Arango, en respuesta a la llegada de las farc al oriente antioqueño. Los paramilitares se caracterizaron por imponer un régimen de “limpieza social” y, bajo esa premisa asesinaban, secuestraban, torturaban y extorsionaban a su antojo.

—Nosotras no podíamos ni siquiera hablar en la casa. A partir de las seis de la tarde, cada quien para su cama y no pregunte, pues mandaban a la gente a investigar por las noches —narra Heidi, dándole el último sorbo a su tinto—. Más arriba, tuvieron un enfrentamiento con la guerrilla. Como yendo hacia Caldas se encontraron. ¡Fue horrible en ese entonces!

A una media hora de La Cabaña se encontraba la guerrilla liderada por la comandante Karina, de nombre real Elda Neyis Mosquera: “Como esto había sido zona guerrillera, se decía que Karina venía a tomarse el territorio que siempre había sido suyo”, explica Heidi. La comandante llegó a la región en el 2000 enviada por el Estado Mayor de las farc porque, según contó en varias versiones libres ante Justicia y Paz, los frentes 47 y 9 se encontraban “en desorden” tras la captura del jefe de estos grupos. A Karina, junto con otros comandantes, se le responsabiliza de haber cometido más de

un centenar de delitos, entre los que se incluye la desaparición, el desplazamiento forzado, el secuestro, la violencia sexual y el reclutamiento forzado de menores, según recoge la Fiscalía General de la Nación.

Heidi regresa a su casa a buscar el caldo de verduras. Tanto su casa como la de la señora María están pintadas de color azul turquesa con matices rojos. A pesar del poco tiempo que Heidi y su familia llevan allí, el espacio se ha impregnado de su personalidad. Las cañas de bambú, los listones de madera y las planchas de hierro que conforman la casa albergan pequeñas reliquias, como la biblioteca de Heidi. En ella hay varias enciclopedias, libros de español, de matemáticas, varios módulos pedagógicos y también libros autodidácticos de conocimiento general. Heidi cuenta que algunos de los ejemplares fueron rescatados del colegio de Tomás, su hijo mayor, porque los iban a tirar.

En realidad, la casa donde vive Heidi es de su hermana. Su sueño siempre ha sido construir un hogar, pero la economía nunca le ha alcanzado para eso. Como la mayoría de los habitantes de la vereda, Heidi tiene deudas con el Banco Agrario. Invirtió en cosecha, pero no obtuvo los resultados esperados. Le prestaron 10 millones de pesos a pagar en 10 años que, con intereses, se convertirán en 22 millones. Ella ya ha pagado una parte, pero a costa de estar endeudada con otro banco. “Dos personas de la región ya se han suicidado porque no tienen cómo pagar las deudas”, explica.

El tono de voz de Heidi es suave y a veces monótono, por lo que no siempre es fácil interpretar sus emociones. Pero su mirada transmite la intensidad de lo que cuenta. “Siempre he trabajado en lo que sea. Yo empecé empacando panela en la enramada. Luego metía caña en el trapiche, cortaba caña, hacíamos contratos... Aunque Bonifacio, mi pareja, me colabora, yo pienso

que una mujer debe tener su fondo”, sentencia. Otro elemento que anuncia su emocionalidad son los silencios entre frases que articulan sutilmente su puntuación. “Yo quisiera ver muchas mujeres de acá trabajando. Tener una economía mejor. Que no tuvieran que irse. Algún día vamos a tener la forma de ir a trabajar y volver a la casa con un sueldo”.

Las mujeres de la familia se sientan en la terraza de la señora María. Ahora se les une Mónica, la mujer de uno de los hermanos de Heidi, con su hija Saray y también Emily, la hija menor de Heidi. A pesar de no hacer un sol radiante, el calor empieza a percibirse en el ambiente. El caldo se pasa entre bromas, regaños y felicitaciones a las pequeñas, en función de cómo desayunan. Mientras recogen, doña María mira el cielo: “Hoy es un buen día para sembrar café”.

El campo: vivir libre pero falta de oportunidades

El grano de la finca de la señora María saldrá en un año. Pero ahora es el momento perfecto para sembrarlo. “Ella solamente salió a trabajar hoy por esto, por la sembrada del café”, describe Heidi. En un laberinto de cañas, árboles de aguacate, plátanos y cacao, las dos se ponen a cultivar. Mientras hace los agujeros en el suelo para sembrar la mata del café, Heidi reflexiona sobre lo que le gusta del campo.

—Del campo me encanta la libertad. La tranquilidad de cuando uno sale a pasear. Acá, cuando uno ve una fruta tirada en el suelo, uno mira por lado y lado y, si nadie está mirando, se la come. Es lo bonito del campo. En la ciudad, en cambio, desperdician muchas cosas. Si no reluce, no se vende. Y a veces, lo mejor que se consigue es en las segundas o terceras cosechas. Productos de buena calidad, pero no salen porque tienen algunas pequitas.

—¿Dónde va hija? —grita desde lejos doña María—. Ahí lo que toca es apretar bien la mata, porque las gallinas la sacan.

—¡Me falta plantar desde el plátano hasta el otro lado! —contesta Heidi alzando la voz. Luego continúa su relato—. Antes nos tocaba trabajar muy duro para poder comer. Me da pesar con mi mamá. Hay días que ella trabaja y en la noche no se puede poner en pie. Le toca hacer mucha fuerza con la cadera y ella tiene osteoporosis y reumatismo.

Doña María vierte una taza de cal en cada mata de café para neutralizar el aluminio del suelo. Mientras espolvorea las matas de manera mecánica, recuerda su historia: “Yo nací en Boyacá. Allí se siembra papa, arveja y se cuida ganado. Me fui a la ciudad a los 8 años porque no quería estar con el hombre con el que me iban a prometer”. La madre de Heidi se cambió varias veces de casa, antes de llegar a la vereda La Cabaña. Tras pasar un tiempo en Bogotá, se dio cuenta de que la señora con quien se alojaba también quería comprometerla a cambio de dinero. Huyó otra vez dentro de la misma ciudad. Al cabo de un tiempo se fue a vivir con un hombre de quien se había enamorado y que además prometió conseguirle trabajo.

La plantación tiene una pendiente muy pronunciada, pero doña María pisa fuerte y segura. Muestra la destreza de quien ha caminado 64 años por todo tipo de terrenos.

En ese entonces, en la ciudad, había empezado a trabajar en casa de una señora que me dio la oportunidad de mudarme a vivir con ella y poder estudiar, pero no acepté por el capricho de vivir junto a ese hombre... Todo lo que yo quería ser se perdió allí. El encierro lo vuelve a uno tonto.

Años después, se separaron y la señora María conoció al padre de Heidi. Fue con él con quien se vino a Mariquita.

Si pudiera elegir, Heidi estudiaría derecho. “Creo que el abogado, por estudiar tanto, tiene la facilidad de tener mucho conocimiento de todo”, relata. “Seré loca, porque yo a mis 35 años quiero tener una carrera. Y acá en el campo es difícil, te dicen que mejor que te dediques a hacer tus matas y ya”. Heidi dejó de estudiar a los 14 años. Cuando murió su padre, le tocó trabajar para sustentar la familia. “Nos dedicamos más a la vida de adultas siendo pequeñas”, confiesa. Más tarde retomó sus estudios y consiguió hacer el icfes, el examen para poder entrar a la universidad. Pero todavía no ha conseguido que la acepten en los centros de educación superior. La mayoría de las veces la rechazan por su edad. “La verdad, me parece discriminatorio. Porque de pronto uno quisiera aprender y valora más la oportunidad que hasta los mismos muchachos”. Aun así, Heidi explica con ilusión que ahora estudia un curso de contabilidad.

Muchas mujeres expresan el deseo y compromiso de realizar estudios como una forma de mejora personal, de proyección profesional y también como una vía de intervención para hacer justicia o ayudar a los demás. Así lo recogen las mujeres participantes de la asociación Ruta Pacífica de las Mujeres en su libro *La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia*. En el caso de Heidi Johanna, su propósito es crear una asociación de mujeres para producir guacamole. Muchas veces, proyectos de este tipo no proliferan, porque el estudio ha sido negado a las mujeres colombianas por considerar que no correspondía a su papel en la sociedad patriarcal.

De vuelta a la casa junto a Heidi, la señora María demuestra su dominio del machete y con lances certeros retira las malas hierbas que crecen junto al café: “este pasto es el que nos perjudica las matas”.

El Aguacatal. Una fuente de empoderamiento colectivo

—¿Puedo moverte estos platos? —le dice doña Georgina a la señora María.

—¡Sí claro, haga lo que tenga que hacer!

—¿Qué peso tenía el aguacate? —pregunta Natalia—. Dependiendo del peso del aguacate irán los otros ingredientes.

—Hay que aprender a lavarlo —indica doña Georgina, que confiesa haber estudiado para ser chef. Luego se vino al campo y lo dejó, pero todavía conserva la destreza y la autoridad para dirigir un proceso de cocina.

La cocina de la señora María está repleta de actividad. Producir guacamole es una tarea que requiere de varias acciones precisas y no todas las asistentes conocen la receta. Solo la conocen las que la inventaron e iniciaron los procesos de constituir la asociación de mujeres. Esta tarde también deben discutir los estatutos de su organización. Heidi hace días trabaja en los documentos. Declara con ilusión;

Yo era una de las que pensaba que no era necesario que las mujeres se organizaran. Pensaba que podía hacer sola las cosas, porque en las asociaciones surgen más conflictos... Pero en estos momentos me doy cuenta de que sí, de que la unión hace la fuerza. Y más siendo mujeres. Nosotras tenemos un impulso que el hombre no tiene, somos más apasionadas en lo que hacemos. Le metemos el alma.

Con ganas de propiciar un cambio, Heidi explica su nueva iniciativa: "Si hoy tenemos un kilo de aguacate, por caro nos lo pagan a 1500 pesos (0,34 euros) siendo de primera calidad. Si es de segunda, a la mitad y si es de tercera, a la mitad de la mitad. Es mejor ya ni llevarlos, porque toca pagar el precio del transporte

hasta el pueblo y a veces allí le tiran a uno la fruta”. Heidi Johanna no dejó un instante de hacer números y de pensar cómo podía comercializar el aguacate de la finca de su madre. “Es por eso que siete mujeres de la vereda hemos optado por tratar de procesar el aguacate. Queremos transformarlo en distintas variedades de guacamole”, explica. Sus ojos almendra brillan de emoción. Hace un año que las siete mujeres se unieron y aunque ya tienen la receta y han participado en distintos eventos para dar a conocer su producto, todavía se encuentran en vías de constituirse como asociación. “Vamos lentas, porque todo cuesta. Pero es algo que se nos metió en la cabeza y pues vamos a ver si logramos sacarlo. Esperemos que con esto logremos apoyar los hogares y a nosotras mismas para un mejor futuro”, afirma Heidi.

—¡Hay que usar cuchara de palo! La otra puede dar óxido. El metal es metal...—sigue la señora Georgina.

—Este es el guacamole natural, más suavcito. Pero nosotras también hacemos uno que lleva ají. Hay gente a la que le gusta más picante —explica Heidi a las mujeres nuevas que han venido a conocer el proyecto.

Las mujeres veteranas preparan el aguacate delante de uno de los ventanales de la habitación. La luz que se filtra desde el exterior enmarca cada uno de sus movimientos. Normalmente, el “Aguacatal” (así han nombrado a su producto) no se prepara en la cocina de la señora María. Siempre lo hacían en otro lugar, pero esta cocina es la que está más cerca de cumplir las condiciones higiénicas para poder certificar el producto. Aun así, le faltaría tener el techo de madera cubierto y eso supone una inversión económica que por el momento no pueden realizar.

Heidi y la hija de doña Georgina, Natalia, terminan de preparar la receta mano a mano. Recuerdan riendo otras veces que han

hecho guacamole, cuando se les sobrecalentaban los motores de las licuadoras o se quemaban las uñas al sellar las bolsas de la pasta de aguacate con un encendedor. Las dos comparten mucho. Natalia tiene un carácter fuerte y una determinación admirable. Hay personas que se sienten amenazadas por la seguridad con la que habla, pero eso forma parte de su sinceridad. Cuando van a eventos a dar a conocer su guacamole, Natalia también trae una muestra de las artesanías que hace por encargo. Mientras va a buscar su teléfono móvil para mostrar fotos de las pulseras que elabora, cuenta anécdotas de la asociación: “Ahora ya nos entendemos, ¿cierto Johanna? Nos ha tocado correr detrás de buses o apretarnos todas durmiendo en la misma habitación cuando vamos a los eventos de Ibagué. Nos vemos ya como empresarias y pensamos en un futuro en el que la empresa les dé trabajo a más personas”. Al mismo tiempo que ellas ríen, sus madres conversan al otro lado de la cocina.

—¿Qué le está molestando? —pregunta la señora María a la madre de Natalia, que confiesa estar enferma.

—El pulmón...

—¿Por qué no coge sábila y le saca el yodo? No lo deje caer. Le quita la cáscara, se licua el cristal y se lo toma todos los días. Lo puede tomar con jugo si quiere —recomienda la señora María—.

—Si lo he probado todo... —el ruido de la licuadora ahoga el final de la respuesta de doña Georgina. Cuando para, la señora María continúa su diagnóstico ancestral.

—¿Sabe qué le está perjudicando? El humo del fogón de leña. Cuando yo lo prendo a mí se me ponen los ojos... Y me coge asfixia en el pecho. La semana que yo no cocino con fogón, permanezco bien.

—Téngalo por seguro. Eso es más fijo que el desayuno —responde doña Georgina. El sonido de la licuadora vuelve a invadir

la cocina por unos segundos.

—Le toca cuidar la salud, porque si no se cuida usted, nadie la cuidará —termina la señora María.

—¡Ya está! La primera prueba del que prepara algo es tener que comérselo —dice Heidi.

—El que prepara y no prueba, no sabe lo que es comer —manifiesta su madre.

Las mujeres prueban el guacamole. Terminan de ajustar su sabor y separan una parte. Luego le añaden ají para hacer la variedad de guacamole picante. Mientras tanto, la señora Georgina ya vislumbra los siguientes productos a comercializar: “Detrás de eso uno puede aprender a preparar otras cosas. Puede venir el champú de aguacate, por ejemplo”.

Las mujeres salen al porche para terminar el proceso de sellado de las bolsas y discutir sobre las bases de la asociación. Antes de salir, Natalia afirma con claridad: “Yo no quiero depender de un hombre”. Fuera, las mujeres pesan y sellan las bolsas con el producto final.

—Ojo, ¿cuál era el picante? —pregunta Mónica, que está a punto de marcar las bolsas.

—Esos son los naturales —contesta la señora Georgina—. Póngale rápido el lápiz al picante.

—¡Me estoy quemando! —protesta a su turno Heidi, que con una pequeña selladora cierra las bolsas que faltan—. ¿Alguien tiene una candela?

—Sí, mejor con una vela, como en la vieja escuela —añade doña Georgina.

—Normalmente siempre las pegamos así. Este era un intento para no sufrir tanto, pero falta práctica, porque la máquina sí funciona —contesta Heidi.

La asociación del “Aguacatal” ha hecho esta tarde cuatro bolsas de guacamole, dos naturales y dos picantes. Es mucho menos de lo que suelen producir, pero la prioridad de la tarde era compartir aprendizajes. Normalmente tratan de sacar unos 15 kilos cada vez, repartidos en bolsas de 100 o 250 gramos. De momento no tienen prisa, porque fabrican por encargo o para presentar su producto en ferias. También intentan comercializar el guacamole en algunos supermercados del pueblo. La reacción de la gente que lo degusta ha sido muy buena, pero el precio (6000 pesos la bolsa grande, casi 1,38 euros o bien 4000 pesos la pequeña, aprox. 0,95 euros) no acaba de convencer a una región en la que los recursos no abundan.

Ahora, sentadas en el porche de la señora María, y mientras la anfitriona se dispone a hacer tinto para todas, Natalia pregunta a Meri, Jéssica y Mónica, las chicas nuevas, por qué quieren formar parte de la asociación.

—Yo pienso que es bueno para uno saber qué es capaz de hacer.

Y si llega a avanzar, hay que pensar en grande. Uno tiene que buscarse sus cosas y no vivir esperanzada por lo que le dé a uno el marido —declara Jéssica, la última mujer en incorporarse al grupo y que ha venido acompañada de su hija pequeña.

—Es una forma de tener empleo que no sea cortar caña o estar todo el día cocinando —añade Mónica.

—La idea es sacar el proyecto adelante para que muchas más personas puedan generar empleo y tener algo de presupuesto —completa Meri, que ha venido a informarse del proceso de creación de la asociación.

Heidi actúa de moderadora y conduce la reunión para tratar todos los aspectos urgentes. Explica que la idea es formar una

empresa entre ellas, pero que va a ser complicado conseguir los recursos. Habla de que se necesitan 10 millones de pesos (más de 2000 euros) para poder empezar a funcionar. “La idea de asociarnos fue mía. Pienso que podemos beneficiarnos todas y, de paso, también la comunidad”, asegura Heidi.

Crear emprendimientos económicos es una forma de empoderamiento de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, donde los marcados roles de género las encorsetan en trabajos reproductivos no remunerados y labores domésticas. Según la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, “cuando se visibiliza a las mujeres en la economía salen a la luz también las bases de la desigualdad sobre las que está construido el sistema económico”.

—Por el momento, las personas que entren van a tener que aportar dinero, igual que el sacrificio que hemos ido teniendo nosotras. Pero económicamente eso hace que nos vayamos fortaleciendo más —Heidi introduce el tema delicadamente. Sabe que siempre es difícil pedir dinero y más cuando uno no lo tiene todavía.

—Yo les diría que, si se van a meter, háganlo con mucho ánimo —las alienta Natalia—. Uno entiende que las dos señoras no estén siempre, porque ya han camellado mucho. Está su apoyo y su conocimiento, porque saben más que nosotras. Pero las demás, tienen que comprometerse. Ahora vamos a sufrir, pero más adelante vamos a estar en un futuro mejor. Uno tiene que ser realista, pararse y decir: “sí, soy capaz”.

—Me gusta el modo de hablar suyo —apunta la señora María— porque no tiene tapujos.

—Ahora sacamos un kilo en una hora y antes nos demorábamos el doble —añade Heidi.

—Este proyecto es como tener un hogar. Como cuando te nace

un niño y tienes que cuidarlo para verlo igual de grande que tú —detalla doña Georgina.

“Necesitamos mujeres berracas”

La reunión está a punto de alcanzar su punto álgido. La señora María reparte tinto entre las asistentes mientras se disponen a hablar de la independencia económica que tiene cada mujer en su casa. Los espacios de encuentro son un ejemplo de empoderamiento femenino. Sobre todo para todas aquellas mujeres que se han visto afectadas por el conflicto armado. Mediante reuniones y proyectos como el del Aguacatal, las mujeres contribuyen a alterar las relaciones de poder existentes en las sociedades agrarias más tradicionales.

Además, como sugieren las economistas Carmen Diana Deere y Magdalena León (2000), en su estudio *Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina*, el empoderamiento asociativo de la mujer está relacionado con la acción colectiva que se convierte en poder al multiplicar los poderes individuales. Para las autoras, un grupo que actúa coordinadamente logra más que las personas aisladas y su poderío puede expresarse en la capacidad del propio colectivo para presentar soluciones comunes a sus problemas, a partir de la expresión de todas las potencialidades en una agenda grupal que también se asume de forma individual.

- En el hogar, quiera o no quiera, uno siempre va a tener que comentar con la pareja. Pero dentro de las decisiones que se tomen en la asociación, no se va a tener en cuenta ni la voz ni el voto del hombre — manifiesta Heidi con firmeza.
- Yo trabajo y entro mis recursos a mi casa. Lo de la asociación lo hago como independiente. Yo digo blanco, porque es

blanco. Ya tomé la decisión y se la comuniqué a mi pareja —afirma Natalia.

—Yo no apporto recursos a la casa, pero no soy de pedir permiso. Yo me mando sola —explica Mónica.

—Yo en mi casa tampoco apporto, porque lo poquito que consigo es para mí. Pero en mi hogar la cosa es distinta. Yo estoy interesada y en la asociación mi compañero no va a tener ni voz ni voto. Pero tengo que hablar con él y ver si está de acuerdo. No puedo tomar esta decisión sola —argumenta Jéssica.

Natalia bromea al explicar cómo hace las cosas en su casa y la manera como resuelven los conflictos con la pareja. Todas ríen, el carácter beligerante de Natalia combina bien con su sentido del humor. “Necesitamos mujeres berracas que se quieran unir”, las anima ella. Ser ‘berraca’ es una expresión del lenguaje popular colombiano que se usa para decir que una persona es muy luchadora. Que tras las dificultades que ha tenido en la vida es “una persona echada para adelante”, define Heidi.

—Ahora estamos hablando en poquito, pero luego vamos a hablar en grande —continúa con ánimo Natalia.

—Lo que pasa que todo niño que da un paso pequeño llega a grande. Y esto estamos empezando aquí —la acompaña la señora María.

—Yo solamente quiero decir que estudio los sábados. Para mí ese día es sagrado, porque el estudio es lo más importante —matiza Mónica, la cuñada de Heidi.

—Se les va a decir con tiempo. A Johanna se le respetan los miércoles, a ti los sábados... —responde Natalia.

Heidi repasa los aportes que debe realizar cada persona que quiera formar parte de la asociación y el plazo que tiene para

comunicar su decisión. “Inscripción y cuotas no se devuelven, pero sí que se devuelve lo que cada persona haya invertido. Yo tengo cita el lunes con los abogados de la Cámara de Comercio para consultarles nuestras inquietudes”, informa Heidi.

En cuanto a la recogida de fondos para la compra de materia prima y el registro Invima, que verifica la calidad y las garantías sanitarias del producto, para mí sería más fácil si entre todas hacemos tamales y los vendemos juntas, por ejemplo, (...) Piénsenlo, méditenlo y la próxima vez que nos veamos, firmamos estatutos.

Anochece en la finca de la señora María. Poca luz, pero mucho sonido. Las canciones infantiles que Emily escucha desde el celular de Heidi actúan como banda sonora de la velada. Algunas niñas llevan horas a la espera de sus madres, aún en asamblea. La conciliación familiar también es un tema que preocupa a las mujeres de la asociación, que asumen la responsabilidad del cuidado total de sus hijos.

—En los viajes, uno se las puede llevar, ¿no? Yo no tengo con quien dejarla —pregunta Mónica.

—Eso es responsabilidad suya, se la carga en el hombro o como sea —responde Natalia, que no le da más vueltas al asunto.

—Muchas gracias. Yo soy feliz viendo estas reuniones. Vamos a sacar adelante todo esto —afirma la madre de Natalia, levantándose y dando por concluido el encuentro. Durante la reunión, ha confesado que se planteó dejar la asociación por su enfermedad. Pero ahora sigue con ánimo.

—Muchas gracias, que Dios las bendiga. ¡Consúltenlo con la almohada! —dice Natalia levantándose para irse con doña Georgina para la casa.

—La idea es que quede como un grupito bueno. Esta vez, nosotras las invitamos. Después nos buscan a nosotras para comunicarnos su decisión —concluye Heidi con una sonrisa.

Después de la reunión, vuelve el silencio a la finca de la señora María. El turquesa ha desaparecido dando paso a un cielo azul oscuro que también ha engullido el rojo de las paredes de la casa. La señora María se sienta en la entrada de la casa de Heidi. Junto con Bonifacio, que acaba de volver de las molindas de panela, contemplan la calma del exterior. Entre las sombras se distingue un aguacate que ondea sus ramas y se deja mecer por el viento tranquilo del campo. De lejos, se oye el rumor del noticiero de Caracol TV.

—Bonifacio, ¿me ayudarás a amarrar un pollo? Quiero matarlo mañana para la comida —le pide la señora María a su yerno.
—No hay problema, voy ahora —Bonifacio se levanta y desaparece en la oscuridad azulada de la finca de la señora María

Memorias que no son fáciles de narrar

Como cada sábado, Heidi vuelve al colegio de su infancia. Su hijo Tomás la lleva en la motocicleta. Si no llueve, estos vehículos se convierten en el medio de transporte más práctico y común de la vereda. Casi todos los jóvenes tienen una. A veces, también se pueden observar niños y niñas en las motos, que se suben de a tres para ir al colegio. Como la mayoría de las motocicletas no tienen papeles, no son excesivamente caras de conseguir. Los caminos de La Cabaña y sus alrededores son impracticables si uno no sube a pie o en un vehículo todoterreno y los habitantes ya perdieron todas sus esperanzas de que arreglen las carreteras. Los habitantes cuentan que se desviaron los fondos municipales para asfaltarlas. En el camino, a lo lejos, centenares de texturas verdes se mezclan entre los cerros. Casi al tocar de las manos distintas plantaciones de cacao, plátano o caña, fruto de la agricultura familiar de los habitantes de la vereda.

“La escuelita de toda la vida. Aquí estudiábamos, corríamos...”, suspira Heidi, mientras pasea por el patio del colegio. Hace un día grisáceo, aunque las gradas de color amarillo, azul y rojo aportan un toque de vida al lugar de recreo de los estudiantes. “Algunas cosas han cambiado. Después de que salimos del colegio se creó el comedor. Pero se tiene por tener, ya que acá no llegan almuerzos. Como mucho llega el refrigerio de la bolsita y las galletas”, explica Heidi Johanna. Caminar por el patio le trae recuerdos de cuando ella era pequeña. Memorias que no siempre son fáciles de volver a narrar. Explica Heidi con tristeza:

Estábamos todos acá reunidos cuando llegó la camioneta. El muchacho venía bastante aporreado de antes. Era un chico de por acá de la vereda. No sabíamos si era o no cierto, pero la madrastra decía que había tratado de abusar de ella. Los paramilitares decían que eran los encargados del orden, aunque en esta vereda no se les tenía mucho miedo o respeto. Ese día trajeron al chico, lo llevaron hasta la entrada y le dieron un disparo en la cabeza delante de toda la comunidad.

A continuación, señala una parte del suelo un poco agrietada:

El piso está ya muy gastado, pero durante mucho tiempo se podía ver la marca del disparo. Desde ese día, se vivió una zozobra constante. Cuando la gente les veía, sabía que debía tenerles miedo. Me los cruzaba y no sabía si tirarme al monte o qué hacer. También los animales de uno, si les ladraban, ellos los mataban. Era algo muy escalofriante.

Una de las formas de coerción de las acmm de Ramón Isaza, según la información del portal Verdadabierta.com, fueron las reuniones forzadas con las comunidades, en las que el grupo paramilitar buscaba infundir temor al punto de que los pobladores se percibieran como futuras víctimas y optaran por tenerles lealtad. Las acmm también amenazaban a las personas

que tenían un comercio en la vereda, para obligarles a entregar una parte de sus ganancias.

En el tiempo en el que los paramilitares estaban en la vereda, alrededor del 2000, Heidi recuerda la poca libertad de movimientos que tenía la población. Los paramilitares andaban con radios y habían instaurado distintos puntos de control. Paraban los carros para controlar quién entraba y salía de la vereda. “Ellos nos ordenaban salir, nosotros salíamos. Decían ‘usted hace esto, tiene que responder por esto’”, explica Heidi cuando detalla el orden social que los paramilitares habían impuesto en la zona. Cinco años después de que los paramilitares del Frente Ramón Isaza llegaran a la vereda, acusaron a Heidi.

“Yo salí desplazada en el 2005. Me hicieron ir porque decían que teníamos que ver con la guerrilla”, narra Heidi. Desde hacía unos años Heidi vivía con su pareja y los padres de él. A medida que avanza en su historia, su suave tono de voz se va entrecortando. Heidi se fue para Bogotá con su hijo Tomás y allí se encontró con su pareja, a quien habían desplazado antes. “Mi estadía en Bogotá fue dura. Me tocaba trabajar y dejar al niño con personas que me lo cuidaran, pero que en realidad me lo maltrataban. Entonces también me separé del papá del niño”. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Heidi explica que su pareja la maltrataba y que esta realidad ocurre en muchos hogares de la vereda, pero que es muy duro imponerse, porque dependen económicamente del hombre y además sienten que tienen que aguantar por los hijos. “Por eso también quiero sacar adelante mi autonomía”, afirma.

El empeño de Heidi en capacitarse para conseguir su independencia no se quedó en su propio espacio personal. Ella misma impulsó la idea de que otras personas de la vereda tuvieran la posibilidad de estudiar el bachillerato los fines de

semana. Ahora hay dos aulas repletas de estudiantes, una de adultos y otra de jóvenes que entre semana trabajan, o son madres o no quieren estudiar tantos días. “Me tocó ir casa por casa a explicar cómo funcionaba”, recuerda alegre Heidi. En un proyecto social conoció al profesor del proyecto Idear, que le dijo que si completaba un grupo de 15 personas, él traía a sus docentes. Pero muchos habitantes de la vereda desconfiaban del proyecto “porque sentían que se iban a aprovechar de la gente del campo para sacarles plata”, explica Heidi. Al final, consiguió formar el grupo de adultos. El proyecto fue tan bien que ahora ya hay dos líneas de estudio. Lo complicado es conseguir el dinero para pagar la mensualidad de las clases: “Acá hay muchas mujeres y muchos hombres que ni siquiera tienen la primaria. La idea era que aquí lo pudieran terminar, pero muchos se desmotivan porque no tienen los recursos suficientes para poder pagarlo”.

Tras el conflicto armado, se han resignificado los lugares y espacios sociales del territorio. Muchos, marcados por la violencia, se han convertido en una fuente de peligro. También la inseguridad y el miedo han contribuido a generar desconfianza entre los habitantes de la zona. Este hecho impide tejer relaciones sociales o de apoyo. La Cabaña es un claro ejemplo de ello. “Lo que tiene esta vereda es que llegarle al corazón de las personas es muy complicado. La comunidad es muy esquiva”, razona Heidi. Aun así, su perseverancia hizo que muchas mujeres de la vereda se implicaran en diversos proyectos.

En unos meses se va a graduar la primera generación de estudiantes y Heidi lo siente como un logro. Nadie la entiende del todo. Creen que le pagan por venir al colegio los fines de semana a gestionar los recibos. Pero Heidi se siente complacida con verlos estudiar, así les cueste comprender por qué realiza acciones de las cuales no se beneficia. “Me dicen: ‘usted parece boba, ahí

matándose para la comunidad, cuando ellos no agradecen'. Pero así no me agradezcan, eso me hace feliz. Me motiva", sonrío Heidi. El colegio está sumido en silencio a pesar de tener dos aulas en funcionamiento. Los alumnos de la primera promoción hacen una prueba preparatoria para el icfes, porque por la tarde viajan para Ibagué: mañana presentan el examen. La profesora les da los últimos consejos: "No olviden administrar el tiempo durante el examen. Deben centrarse en sus puntos fuertes y no entretenerse tanto en aquello que les cueste más".

El año pasado, Tomás dejó de estudiar. Quería trabajar y aportar en la casa. También anhelaba crear un hogar. Heidi se vio reflejada en su hijo. Se dio cuenta de que, en vez de pensar en su futuro, tomaba el mismo rol que ella había tenido de joven.

Le decía Heidi a Tomás:

Ahora le toca estudiar, y si por eso yo tengo que volverme dos, me volveré dos. Pero usted tiene que terminar de estudiar, hacer una carrera, lograr lo que yo no he podido hacer, disfrute su vida. Es lo único que le queda a uno para contar.

A Heidi le marcó mucho lo que le dijo un amigo suyo en Bogotá, cuando trabajaba en un almacén.

—¿Para qué se va a devolver a su casa? —le decía su amigo, con una mezcla de rabia y de cariño.

—Quiero estar con mi mamá —contestó Heidi, que la echaba de menos. Hacía años que no la veía. Después del desplazamiento no había vuelto a la vereda.

—Si usted quiere ayudar a su mamá, primero surja usted y luego ahí sí le ayuda. Pero si usted va a ir a echarse encima de su mamá, ni surge usted ni la deja surgir a ella.

—¡Ay! ¿Sabe qué? No me vuelva a hablar —le soltó Heidi, enfadada.

Reflexiona Heidi:

Hoy me doy cuenta de que tenía toda la razón. Si le hubiera hecho caso, yo podría estar ayudando más a mi mamá y viviría un poco mejor. Me he dado cuenta de que en el campo hay muchas cosas por las que luchar por el otro, mientras que en la ciudad uno vive para sí mismo. Eso mismo quiero que aprenda mi hijo. Que conozca más personas, que disfrute, que se dé cuenta que la vida no es solamente un cajoncito ahí. Que viva, que logre muchas cosas. Aunque yo todavía aspiro a hacerlas, me enfoco en él, porque es todavía joven..

Las paredes de la entrada de las aulas están decoradas con recortes de colores que dan la bienvenida a los más pequeños. Tienen el poder de abrir la mente a las futuras generaciones de la vereda, de romper con los roles de género y con los estigmas hacia las personas campesinas. Heidi ansía que el colegio prospere, pero el centro educativo no es propiedad del municipio. “Mientras sea de un privado, la administración no lo va a cuidar”, lamenta. Entre las decoraciones destaca una que describe el significado de los colores de la bandera: amarillo por la riqueza de las tierras, azul por el mar y los dos océanos que rodean Colombia y el rojo por la sangre que los patriotas vertieron en los campos de batalla para conseguir la libertad.

Cocinar con fogón es símbolo de comunidad

La señora María ha cumplido su palabra. Hoy hay pollo para toda la familia. Los Rojas almuerzan en la terraza de ella, la cabeza de familia. Carne, arroz, plátano y jugo, ingredientes esenciales en toda comida de campo. Además, hoy también quedan los restos

del guacamole que prepararon ayer con la asociación. Cada vez llegan más comensales y esto hace que las sillas estén en constante movimiento para hacerse sitio las unas a las otras. Es buena señal. La familia está reunida.

Mientras comen, la señora María cuenta anécdotas de la infancia de sus hijos: “Víctor siempre le movía la mesa a Heidi cuando comía carne. Ella no se daba cuenta, pero hacía ver que ya no quería más carne, porque le daba vergüenza no poder cortarla”. Víctor quiere mucho a su madre. Si no fuera por la señora María, él no viviría en la vereda. De joven entró a trabajar en el ejército, para poder contribuir mejor a la economía familiar. Pero a los 22 años le explotó una mina y perdió su pierna derecha y parte de la izquierda. Ahora camina gracias a una prótesis y “tiene una pensión, pero no es suficiente para todos los gastos que tiene uno. A veces, sale a trabajar y a deshierbar, pero es poco lo que él puede hacer en el campo”, describe Heidi.

A Heidi no le gusta el pollo criollo, porque el animal come de todo lo que encuentra en el campo: “Antiguamente, cuando no había letrinas, la gente hacía sus necesidades en cualquier lado y las gallinas se lo comían. También se alimentaban de culebras, sapos o ratones...”. En el almuerzo, Heidi come un pollo blanco que le trajo Bonifacio cuando volvió del trabajo. “Supuestamente estos son limpios”, se justifica. Aun así, su predilección es la pasta con leche y pollo. Mónica y Víctor son de los primeros en levantarse de la mesa. Tienen que bajar a Mariquita, pues hoy en la tarde Mónica viaja a Ibagué para hacer el icfes. No parece nerviosa, ha repasado todo lo que ha podido y ya no se puede exigir más.

Después de comer, Heidi y su madre pasean hasta un campo en lo alto de un monte, desde donde se pueden contemplar otras veredas. Durante el camino, ambas identifican las enfermeda-

des de las plantas. Se paran a examinar el cacao, las ramas de los árboles... Hace ese sol que lo baña todo en oro y el cielo está despejado. El campo a donde llegan es idílico. Los ojos no consiguen abarcar todo el paisaje que ofrece el lugar.

“Acá era”, dice Heidi a los segundos de llegar. Se queda unos instantes contemplativa y recuerda. Explica:

Acá era donde enterraban a los muertos. Como se trata de un punto tan alto, tenían una vista panorámica de todos los movimientos de su alrededor. También disponían de acceso a la carretera. Aquí estuvo la Fiscalía sacando los cuerpos que había enterrados.

El terreno ha cambiado mucho desde que lo frecuentaban los paramilitares. Antes era más boscoso y había plantación. En uno de sus extremos, los paramilitares tenían un tanque con gasolina con el que recargaban los carros. “Cuando se hicieron los levantamientos, uno no sabía de qué vereda eran esas personas. Pero es mejor no preguntar, por la seguridad de uno y de la misma comunidad”, afirma Heidi de manera prudente.

“Es muy duro acordarse, ¿cierto? Son momentos que uno ya pasa, pero que le tocan cuando los vuelve a narrar”, explica Heidi. Recuerda perfectamente el miedo que sufrió al agarrar su maleta para partir carretera abajo. Aun así, decide contarlo: “Pienso que estas vivencias son lo que hace que la historia se cuente”. Heidi lo narra con la voluntad de que pueda llegar a más personas y se den cuenta de lo que pasó, del sacrificio que les ha tocado vivir a las mujeres y de su empeño de salir adelante: “Que no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que podemos mucho más”.

Uno deja de vivir muchas cosas cuando sufre un desplazamiento forzado. Yo me considero víctima. Mi hijo creció sin tener una niñez al lado de su

abuela, de sus tíos... En ese entonces, yo vivía bien acá. Éramos pobres, pero no nos faltaba comida o un techo bajo el que dormir.

En Bogotá, Heidi decidió denunciar los hechos que le obligaron a desplazarse para conseguir una ayuda económica:

Yo declaré el 25 de marzo del 2005. Hacía 8 días que me había ido de la vereda, me acuerdo perfectamente. El juez me pidió que mostrara algo de dónde venía y le enseñé el tiquete del transporte. Me dio ayuda para la alimentación y el arriendo, pero eso no era suficiente. La plata que le puedan dar a uno nunca le va a sanar lo que vivió.

Para Heidi, no hay bastante con hacer la declaración y que le den ayudas humanitarias. “No llegó una ayuda real en sí, ni ayuda psicológica, ni capacitaciones, ni un puesto de salud, ni arreglar las carreteras bien... No, no hay ayuda”, reivindica Heidi, que anhela estabilidad para poder prosperar en la vereda.

Heidi es una lideresa social: valiente, luchadora, segura y con ambición para crecer. Pero no siempre se ha reconocido así. Hace apenas una semana fue la primera vez que se pensó como líder. Estaban en un evento en el que enseñaban el guacamole y todas las mujeres de la asociación enviaban a los interesados a hablar con Heidi. Aun así, asumir el rol de lideresa social es difícil. Declara Heidi:

Sinceramente me da miedo, me da mucho miedo. Mi mamá me dice que tocar tantas puertas después de que hayan matado a tantos líderes sociales no es bueno. Pero yo siento que Dios me trajo acá para grandes cosas. No va a ser fácil, y de pronto cuando uno toca tan alto es cuando empieza a hacerse notar y a temer por su vida. Pero estoy dispuesta a luchar, porque yo sé que lo que yo haga va a ser un ejemplo para muchas mujeres y sobre todo para mi hija.

Heidi y su madre bajan de la loma, mientras observan las terneras que rondan el campo. Lo que antes el sol teñía de dorado, ahora comienza a arder. Heidi valora mucho a su familia. Gran parte de la fortaleza de Heidi surge de la voluntad de ser un modelo para Tomás y Emily, sus hijos. De acuerdo con el libro *La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia* (2013), ellas:

sienten un compromiso tan grande de sacar adelante a sus criaturas que a veces lo hacen a costa de ellas mismas. Pero también los y las hijas son expectativa y esperanza de futuro. Se proyecta en ellas y ellos la posibilidad de una mejora, de una hipotética realización de lo que a ellas no les fue concedido. En cierta medida también constituyen una esperanza de sentido, de que el propio sufrimiento no haya sido en vano, que haya servido para otros.

Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se desmovilizaron en el 2006 tras dejar un rastro de violencia en gran parte de Colombia. Según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe ¡Basta ya!, los paramilitares cometieron atrocidades, asesinatos, masacres, desapariciones y violencia generalizada. Cuatro de cada diez asesinatos selectivos de los 23 154 documentados entre 1981 y 2012 fueron perpetrados por las autodefensas.

Heidi volvió a la vereda en 2011. “Era bonito volver a ese tiempo de antes, donde uno se sentaba al lado del fogón a tomar tinto y a hablar de todo lo que había pasado”, recuerda.

Me di cuenta de que habían sucedido muchas cosas desde que no estaba. Personas que se habían ido, personas que habían pasado por prisión injustamente... Era difícil comunicarse entonces, porque para ello la familia tenía que bajar al teléfono público del pueblo y llamarme donde estuviera.

Cuando Heidi y su madre llegan a la finca ya ha oscurecido. Concluye Heidi:

Si le va a servir a alguien contar lo que me pasó, con gusto lo volvería a hacer porque, aunque fue duro, sé que son cosas de las que aprendí mucho y si no las hubiera vivido... No seré la más madura, pero no tendría la madurez que tengo ahorita y la firmeza para salir adelante.

La señora María se ha adelantado un poco. Entra en el hogar y calienta el caldo que ha cocinado con las sobras del almuerzo. Es para sus perros, a quienes de vez en cuando les cocina. Quizás los perros no lo distinguen, pero el caldo de hoy tiene sabor a fogón. De tanto en tanto, para no gastar gas, la señora María enciende su cocina de leña. Así el humo del fogón no sea bueno para sus pulmones, simboliza que ha preparado una gran comida para la ocasión. Ocasiones, como la de hoy, en las que se junta la familia, ocasiones en las que se teje comunidad.

CAPÍTULO 8

ÁNGELA PATRICIA Y LAS MUJERES DE ATACO: “LA PAZ NO ES DEL GOBIERNO, ES DE LA COMUNIDAD QUE HA VIVIDO EN CARNE PROPIA LA VIOLENCIA”



Dicen que el oficio se lleva en la sangre: “le puse camomila para sanarle el cabello y además se le puso más clarito”, comenta Ángela Patricia mientras rehace la coleta a su hija Wanda. La niña sonrío. Parece que su nuevo color de pelo le agrada más que los huevos revueltos que su madre le ha pedido para desayunar en el bar.

Ángela Patricia nació en el Huila y se crio con padres adoptivos. Abrió una peluquería en Santiago Pérez, frente al parque, donde ejercía su profesión: el estilismo. Allí tuvo que atender a muchos militares, pero para ella y su carácter extrovertido, eso no era ningún problema: “siempre he sido muy sociable, hablo con todo el mundo”. Por allá en el 2012 “boletearon” —las denuncias

de pertenencia a un grupo armado eran tan recurrentes que hasta las bautizaron con un verbo coloquial— a una compañera y la chica tuvo que marcharse. No pasó mucho más tiempo hasta que le sucedió lo mismo a Ángela Patricia: “Pensé que alguien me tenía envidia, que se estaba haciendo pasar por un grupo armado y no me lo creí”. La valentía y el escepticismo se convirtieron rápidamente en miedo y huida. “Me tocó irme como a las doce de la noche y lo más lejos que llegué desde aquí fue a Ataco. Me marché con mis hijos y algunas cosas... tuve que empezar de cero”.

El desplazamiento se convirtió en el prefacio de la mujer que es actualmente, “los colombianos nos caracterizamos por tener una energía muy positiva y, por muy crítica que sea la situación, encontramos una salida”. Como buena colombiana, Ángela Patricia encontró en el liderazgo esa salida de la que habla: “a mediados de 2013 se trataba ya el tema de los acuerdos de paz. Empecé a asistir a talleres, a meterme en el asunto y me fui enamorando de la labor”. Ahora es la presidenta de Agromujervic, asociación que fundó en Ataco junto a otras víctimas. En el corregimiento de Santiago Pérez, un grupo de once mujeres muy unidas se encarga de llevar a cabo las labores de la organización. La finca en la que la lideresa y sus compañeras desempeñan su proyecto de desarrollo productivo está a las afueras del corregimiento, pero se puede acceder a ella andando. En el plato aún restan los huevos que Wanda se niega a terminar. Ángela Patricia se da por vencida y emprende el camino hacia la parcela donde están ya todas las socias —y amigas— reunidas.

Educación y erradicación de la pobreza: el mástil de la bandera blanca

Lo primero que se vislumbra al terminar de subir la difícil cuesta que lleva hasta la finca es un grupo de radiantes mujeres

vestidas de blanco impoluto. Repartidas por todo el espacio, las compañeras de Ángela Patricia hacen cientos de labores mientras charlan y ríen. “Se pusieron de blanco”, dice la joven lideresa al llegar al lugar —mientras observa su camiseta verde y se da cuenta de que ha roto el protocolo—. Ríe ante la situación y rápidamente se pone a saludar a cada una de sus amigas.

La escena recuerda al tradicional festival de los farolillos japonés, que se celebra desde tiempos inmemorables en el país nipón. En la festividad se honra a los ancestros y por ello es una celebración con un fuerte carácter familiar, de convivencia, de amistad. La última noche de conmemoración, miles de farolillos blancos se elevan hasta el cielo: simbolizan las almas de todos aquellos antepasados a los que se les agradece su legado. Ángela Patricia es una mujer joven, pero su carisma la ha empujado a ser un referente de su comunidad. Pese a su corto recorrido de vida, ha tenido un largo trayecto hasta ser una lideresa consolidada:

En Ataco surgió una idea con algunas compañeras, ya que vimos la necesidad de organizarnos. El planteamiento fue hacer una asociación y ver cómo íbamos a trabajar para cerrar el ciclo de violencia y aportar nuestro granito de arena en la paz en el municipio. Decidimos que la mejor forma era a través del asociacionismo. También vimos que era muy importante que la asociación fuera de mujeres víctimas del conflicto armado. Fue un proceso difícil, empezamos de cero, sin dinero, solamente con los conocimientos básicos. Hicimos tamales, rifas, hasta que logramos constituirnos. A partir de ahí empezamos a gestionar proyectos.

Para aportar lo mejor a su comunidad, la joven decidió que no era suficiente con los conocimientos básicos, así que, durante el proceso de creación de la organización, se formó: tiene un diplomado en derechos de las víctimas de la Universidad del Tolima y ha estudiado temas de enfoque de género con la

Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, Codhes. Tras la fundación oficial de Agromujervic, llegaron los primeros proyectos basados en la cría de cerdo.

Ángela Patricia saluda y charla animosamente con una mujer de su misma edad. Se palpa una complicidad especial entre ellas. Mientras se ponen al día, la lideresa introduce a su amiga: “tras los primeros proyectos, conocí a Yasmin. Ella es de acá. Yo sé que es berraca, luchadora; tiene ganas de trabajar y salir adelante. Necesitamos mujeres berracas, que digan ‘vamos a salir adelante, entre todas podemos’. Le conté sobre la organización y dijo que sí quería participar. Ahora es la coordinadora del comité de acá, que se llama ‘Mujeres Víctimas Santiago Pérez’. Están mujeres muy cumplidoras, con ideas claras de lo que quieren en el tema asociativo. Llevamos como año y medio. La idea de la fundación es dar a las mujeres las herramientas básicas para que ellas también tengan su manera de trabajar y sean un ejemplo de que sí se puede avanzar en equipo.

La construcción de la paz es la base de todo para el grupo de mujeres berracas. Se mueven alimentadas por el mismo motor: trabajar por la concordia y el futuro del país. Han encontrado en la educación la herramienta clave para su cometido. La fundación ha impulsado el Proyecto de Educación Rural (PER) en su región, un plan que forma parte de una iniciativa del gobierno para facilitar el acceso de los jóvenes agrarios a la formación. La brecha entre el campo y la ciudad es uno de los problemas estructurales, que en Colombia se podría considerar prácticamente un mal endémico, que aboca a los sectores rurales a una pobreza sistémica. Paliar la situación de raíz implica mejorar la vida de las generaciones venideras:

Aportarle a la paz no es solamente decir quiero paz y la apoyo, sino empezar trabajando en erradicar la pobreza. Fue uno de los factores por los que se dio la violencia y muchos de nuestros jóvenes tomaron las

armas por falta de oportunidades. No queremos que nuestros hijos tengan que vivirlo, queremos que tengan oportunidades de estudiar, de tener mejor futuro, de ser personas de bien.

En la finca se encuentran mujeres de diversas edades, procedencias, estatus y, con toda probabilidad, ideologías. Como si estuvieran unidas por un hilo rojo, se han encontrado las unas a las otras para formar una alianza que trasciende la asociación. Su labor —siempre con una visión de futuro—, su fuerte vínculo espiritual y su amistad son los ingredientes de la solidez del tejido comunitario que las caracteriza. Quizás algún día la generación de sus hijos y nietos las recuerde como esos ancestros a los que honrar para agradecer su legado.

De la violencia a la paz

La Violencia se compone como nombre propio en Colombia. Años de movimientos políticos, asesinatos a líderes y polarización ideológica derivaron en una tensión insostenible en la sociedad colombiana. Paralelamente a los movimientos en la élite gubernamental, se gestaba el paramilitarismo y la guerrilla como respuesta a la situación. En 1949, campesinos liberales y comunistas se aliaron para defenderse de los ataques de los atropellos conservadores dirigidos, desde la ciudad lejana, por Laureano Gómez. Los bandos hermanados que nacieron de un mismo seno y que se defendían entonces del mismo enemigo, terminaron como Caín y Abel. Años más tarde, divididos también por órdenes de poderes políticos centralizados en las ciudades, “Mariachi”, uno de los líderes liberales, ordenó el asesinato de “Charro Negro”, su homólogo en el lado comunista. El fratricidio fue el nuevo catalizador de una interminable espiral de venganza.

Doña Paula vivió la época dura del conflicto en Santiago Pérez. El bagaje aportado por la experiencia de los años hace de la mujer la representación de aquella generación que atestiguó la gestación y el estallido de la hostilidad. Recuerda a Jesús María Oviedo, “Mariachi”, mientras ejerce el rol de matriarca sirviendo la comida en los platos:

Un sábado por la noche, al frente del parque, Mariachi conversaba con los amigos. Aparecieron dos tipos. Estaba de espaldas y le dispararon. Me acuerdo de eso porque mi esposo era el inspector de las fuerzas militares y le tocó hacer el levantamiento. Mariachi apareció acá en 1976, que me acuerde que puede ser más antes o más después. Pero desde ese año lo tengo en la mente. Lo mataron en 1978, el 18 de septiembre. Hay una placa al lado de una puerta de un comercio del parque donde lo asesinaron.

La perspectiva histórica, en este caso de una historia que ha curtido sus propias pieles, convierte a las víctimas y supervivientes en la personificación de la memoria histórica del corregimiento y, en consecuencia, de su país. Con el establecimiento oficial de las farc, en 1966, cuando Doña Paula ya había nacido y otras mujeres de Agromujervic no, se daba inicio al conflicto armado: un constante enfrentamiento entre Fuerza Pública, paramilitares y guerrilla. La población civil, exhausta por el panorama —en especial los ciudadanos del campo, lugar que fue el principal escenario bélico— veía la entrada al nuevo siglo con ganas de dar paz a tantos años de guerra.

Así fue como a finales de los noventa, tras años seguidos de duro enfrentamiento, el conservador Andrés Pastrana, postulado para la presidencia, se adentró en territorio hostil para mantener una conversación con el líder fariano, Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”. A raíz del encuentro el jefe guerrillero hizo público que si Pastrana llegaba al Gobierno, las farc estarían dispuestas a negociar con él, como especifica la revista Semana.

Paralelamente, en esa misma década, Santiago Pérez, conocido como fuerte liberal, se convertía en punto de ebullición de “estructuras de seguridad privada” que no llegaron a legalizarse, como las Convivir, pero que ejercían funciones similares. Sus acciones evidenciaron que el corregimiento del sur del Tolima era un lugar vital en la estrategia del paramilitarismo.

La esperanza de acordar una solución al conflicto dio la victoria al conservador, lo que dio inicio a los conocidos “Diálogos del Caguán” (1999-2000), un proceso de negociación totalmente fallido. De hecho, mientras se vendía la idea de poner fin a la hostilidad a través de las mesas de diálogo, ambos bandos reforzaban sus posiciones. En Santiago Pérez fueron testigos de ese reforzamiento de filas clandestino enmascarado en un proceso de paz. En el año 2000, mientras cada vez se evidenciaba más el estrepitoso fracaso de los diálogos del Caguán, el Frente 21 de las farc entró en Santiago Pérez y cometió una masacre que, por su atrocidad, marcó con fuego a los habitantes del pueblo. Los guerrilleros, al igual que en el caso de Puerto Saldaña, buscaban terminar con la presencia del Bloque Tolima y otros grupos paramilitares con tal de hacerse con el control total de la zona: tanto Santiago Pérez como Puerto Saldaña son puntos de paso obligado que comunican la parte alta de la Cordillera Central con el Valle del Magdalena. La ausencia de policía en el corregimiento —puede que como estrategia interesada por parte del Estado, como señalan algunos analistas políticos— propició que los grupos armados proliferaran con gran rapidez en la zona y que se convirtiera en blanco de las farc, de los paramilitares y, también, de una dura ofensiva militar por parte de las fuerzas armadas colombianas.

Ángela Patricia y Yasmin han vivido la guerra, pero su juventud y su empeño se palpan cuando, al explicar la historia de lo que vivieron, ambas se enfocan en una perspectiva de futuro:

Vivimos con mucho aguante y mucho miedo. Quien tiene las armas es quien manda. Uno no veía, no oía, callaba todo, con tal de poder estar en casa con sus hijos. Eso fue demasiado duro. Daba pánico hablar. Igual que anteriormente uno no podía decir nada, tenía que vivir humillado a toda hora. Ahora una se siente más tranquila, con más alegría y ánimo para trabajar y afirmar las cosas.

Continúa Ángela:

Ha cambiado mucho el pueblo. Ahora hay gente que quiere venir a invertir, a poner negocios, porque ya todo es tranquilo. Aquí se respira mucha paz. Todo el pueblo se distingue el uno por el otro. Usted sale y no tiene peligro. Todo el pueblo se conoce, todo el pueblo es como si fuera toda una familia. Si usted necesita algo y el otro lo tiene pues le sirve, le hace el favor a uno y no tenemos quejas. Pero entonces no daba la misma confianza, no era lo mismo, cuando eran las seis de la tarde, ya todos estaban acostados. No se podía estar hasta tarde. Hoy en día no, hoy en día uno llega a las diez de la noche, los jóvenes van tranquilos a la discoteca. En otro tiempo no lo pudimos vivir. En otro tiempo era encerrarse a las seis de la tarde, nadie salía y no se enteraba de lo que había pasado hasta el día siguiente. Ahora vivimos en una completa libertad. Muy chévere, sobre todo por los niños, que pueden empezar a tener una vida muy diferente a la nuestra.

El alegato por el futuro que han hecho las amigas genera un gesto de orgullo en las más adultas. La retroalimentación generacional las enriquece, y las que hoy luchan a capa y espada por el porvenir de sus hijos heredan esa fuerza de sus mentoras más experimentadas. Puede que, entre todas, algún día consigan que La Paz se instaure como nombre propio de Colombia.

Mujeres, sancocho e inquietudes

Yasmín se siente muy orgullosa de haber iniciado la producción de pollo: “de momento tenemos poquito, alimentarlos es caro”. De la modesta cría que tienen, hoy han destinado las gallinas más grandes para preparar un succulento sancocho. Es 27 de febrero, se palpa una energía especial, están todas las mujeres reunidas y es el cumpleaños de Rocío. Hace los honores y bendice la mesa, con ese nudo en la garganta de haber transformado todo el entusiasmo en emoción.

En un ambiente de júbilo, las amigas comparten sancocho de gallina e inquietudes a partes iguales. “Siempre hay asociaciones donde hay hombres, pero de mujeres hay pocas. Hoy en día las mujeres tenemos más liderazgo que los hombres” dice la cumpleañera. “Nosotras somos mujeres berracas porque afrontamos todo lo que fue la violencia. Vimos morir familiares. Porque en ese tiempo a mí me mataron dos hermanos. Mi familia se fue y la única que quedé acá en el pueblo fui yo”, explica, alentadora, Yasmín. “Y de aquí me iré al cementerio” añade entre risas. “Debería narrarse la historia desde el punto de la mujer, porque las mujeres casi no tenemos participación. Nosotras vamos atrás de lo que diga el marido, papá, patrón y ya...”, responde Mónica Andrea.

Tal vez tengo temores aún a la hora de hablar, pero me parece muy importante contar nuestras historias. Que el mundo sepa, que la ciudad sepa lo que vivimos nosotras, las personas del campo. Soy orgullosamente campesina. Siempre han tenido la idea de que en el sur del Tolima somos guerrilleros. Y no lo somos. Somos campesinas y campesinos. Nos apasiona el campo y eso no quiere decir que seamos guerrilleros.

El almuerzo juntas es especial para el grupo de compañeras y amigas. Durante la semana se acercan a hacer las labores a la

finca las que viven más cerca, y el fin de semana se encargan las que tienen un viaje más largo hasta el lugar. Aun así, intentan encontrar un hueco siempre que pueden para encontrarse todas: ese día hacen la limpieza profunda, se cuadran las tareas y se reúnen para comentar todo lo relativo a su producción y a sus vidas. Lo más importante para ellas es que ese día hacen una comida especial y pasan todo el día en la finca, compartiendo, como dicen, “un día de campo”. Con los platos bien rebañados, empieza a detectarse un fino aroma a café. A la hora del tinto aparecen más personas en el lugar: hijos y maridos de algunas de ellas, amigos del pueblo y de otras asociaciones, y también la profesora Alba Luz, conocida en el pueblo por la labor pedagógica que desenvuelve desde hace tantos años en la Institución Educativa Santiago Pérez. Como una compañera más, pero con ese respeto a la erudición que se les atribuye a los docentes, las mujeres le ofrecen un vaso y la incorporan a la conversación. Dice la admirada profesora:

La mujer se ha ido empoderando día a día. Ha adquirido su lugar dentro de la sociedad. Antiguamente era el ama de casa, de un trabajo sin valoración. Entonces ahora, ya la mujer ha comenzado a ser parte de la sociedad, a ser parte del cambio, del desarrollo, de proponer, de tener liderazgo como lo tiene esta asociación. Yo hace rato que las vengo observando cómo trabajan, cómo vinculan la comunidad. Inicialmente tuvieron unas huertas y yo les veía el movimiento. Son mujeres muy trabajadoras y están bajo el lema del desarrollo de la región. Me parece que es un papel bien importante el de la mujer en la sociedad. Que más allá de ser madre de familia, también sea generadora de desarrollo.

Las buenas palabras que acaba de dedicar a las compañeras de mesa despiertan en ellas una alegría conmovedora. Las miradas lo dicen todo: por momentos como estos vale la pena todo el esfuerzo que hacen por seguir adelante con su proyecto.

Sobre sororidad resiliente

“En Colombia, los sectores que siempre hemos respaldado la paz hemos sido las víctimas”, afirma contundente Ángela Patricia. “No queremos volver al pasado. No queremos volver a esa época. Creemos en la paz y seguiremos luchando por ella”, remarca. Volver sobre sus propios pasos para asegurarse de que los que vienen tomarán otro camino y para empoderar a las que les tocó recorrer la misma senda que a ella. Ese rol de guía, de mentora inesperada, llegó sin que pudiera darse cuenta: brotó de ella de forma natural.

La verdad, dentro de mí nunca estuvo ser líder. Las circunstancias le van llevando a eso y le van mostrando para qué sirve uno. Me hubiera gustado poder lograr más, pero me siento satisfecha. Puedo decir con orgullo que yo posicioné y defendí propuestas. Eso para mí es más que gratificante, eso me deja una alegría porque para algo he servido. Sé que de cierta manera he logrado sembrar una semilla. Si en algún momento la fundación se retirara de acá sé que van a quedar mujeres empoderadas que van a poder empoderar a otras.

La cadena de sororidad resiliente ya está en marcha. Ángela Patricia y Yasmín se encontraron, y la simbiosis entre ellas ha hecho brotar vida de esa semilla plantada. Explica Yasmín:

Empecé a formar parte de la fundación porque una amiga del pueblo estaba metida. Patricia, que es la presidenta de la fundación, nos invitó a que abriéramos un grupo en Santiago Pérez. Me dijo que quería que yo fuera la líder de acá. Empezamos a buscar mujeres que quisieran trabajar y salir adelante. Y ahí vamos, trabajando todas.

La fuerza colectiva que han obtenido al evolucionar unas con las otras sirve de impulso para aquellas que arrancaron el proyecto y que ahora pueden volver la vista con la cabeza bien alta. Para

Mónica Andrea, una de las fundadoras, el grupo de Santiago Pérez tiene un vínculo especial:

Pertenezco a esta asociación desde hace tres años y medio. Fui fundadora en el municipio de Ataco, precisamente en el centro poblado que se creó. Fue con unas 50 mujeres, viendo las necesidades que tenemos como mujeres cabeza de hogar, como mujeres víctimas, que siempre nos han dejado de lado, salió la iniciativa de crear una fundación que fuera de mujeres. Hemos logrado algunos proyectos, nos hemos capacitado tomando diversos cursos. Hemos ido trabajando en grupos, hace unos años se dividió la fundación en comités, de los cuales quedo yo en el de Santiago Pérez, porque es donde me queda más cerca. Acá tenemos un grupo de 11 mujeres todas muy unidas, estamos trabajando y la visita que nos hacen nos da otra expectativa de la vida. En este grupo estamos muy hermanadas.

Que las mujeres desarrollen sus propias herramientas, luchen por sus propias iniciativas y ambiciones, es otro de los objetivos cumplidos por la asociación de mujeres. Rocío ha encontrado en Agromujervic ese lugar en el que exponer sus ideas, potenciarlas e intentar tirarlas adelante. “Me gustaría emprender un proyecto de ganado de leche. Nos implicaríamos todas, algunas tienen finca y nos organizaríamos y podríamos montarlo. Acá hay una empresa de lácteos, la misma nos puede comprar la leche”, cuenta Rocío al hablar de sus propios proyectos futuros.

Berracas que trazan la historia

Si algo tienen en común todos los niños que revolotean por la finca es su pasión por visitar a los marranos y alimentar a las cachamas. Esperan impacientes el momento. Cuando aparece Yasmín con el cesto de comida para los peces, no tiene tiempo ni de acercarse al lago: un corro de criaturas se abalanza sobre ella llevándose puñados del alimento para lanzar al agua. Los

oscuros animales chapotean en la superficie del lago, mientras los más pequeños disfrutan con el espectáculo. Relata Yasmín:

Trabajando con profesores del colegio, enseñamos a los niños a querer la tierra, a luchar por ella y que se enamoren más de nuestro pueblo, donde nacieron. Muchos se van, niños, jóvenes... No han vuelto al pueblo ya de adultos, ya que su visión hacia él es de peligro. Estamos enfocadas en las generaciones que vienen, dando ejemplo, que vean que esto hoy es una tierra de paz y prosperidad.

Para las mujeres de Agromujervic, la historia de desplazamiento ha sido un viaje de ida y vuelta. El amor por sus raíces las ha empujado, más tarde o temprano, a regresar al lugar en el que crecieron, el lugar del que no se fueron por voluntad propia.

En el sur del Tolima nació la guerrilla. Todo el mundo sabe eso. Pese a ello, hará unos diez años que estamos sin masacres acá. Fuimos muy pocos los que quedamos en el pueblo, y con el pasar de los años, fue regresando gente con ganas de seguir trabajando.

Las compañeras están frente al lago. Junto a Yasmín, escuchan las palabras de la presidenta del comité de la fundación en Santiago Pérez.

Tuvimos que empezar de cero. Y ahí vamos, la voluntad de Dios y ahí va uno trabajando y saliendo adelante. Por eso estamos organizadas acá como mujeres emprendedoras, y quiero que haya proyectos de educación, de producción, que haya recursos para uno poder trabajar, ayudarse entre todos. El proceso de paz... quiero que siga así como vamos. Por aquí esto era una zona de conflicto muy difícil. Acá en el pueblo quedaron solamente como cuatro familias. Nos tocó trasladarnos a Ibagué, a Bogotá... Quedó un pueblo fantasma. Ya después comenzó a regresarse la gente, porque ya no había tantas masacres. En el 2000, 2001, no

podía llegar nadie desconocido porque lo mataban, los echaban al río, desaparecían. Entonces marchamos a Ibagué. Hace ya unos diez años que regresamos otra vez acá al pueblo y estamos trabajando y luchándola por los hijos,

Sus amigas la miran y aprueban sus palabras. Reconocen conjuntamente su propia historia. Las miradas cómplices entre las compañeras alientan a cada una a contar. A hablar, ese ejercicio que nunca pudieron hacer en un espacio sano de comunicación. Aprendieron a callar, y ahora han aprendido a compartir relatos y vidas.

Mónica Andrea suspira con media sonrisa, dejándose llevar por el ambiente empático se aventura a narrar:

La visualización de nosotras es poder mejorar la calidad de vida de cada una de nosotras, tanto individual como colectivamente. Mi historia... yo no soy tolimense, soy desplazada de Caquetá. El 26 de septiembre de 2015 llegué a este caserío de Santiago Pérez. La verdad, con nosotros la gente ha sido amable, muy solidaria. Hemos tenido bastante ayuda moral, económica y con el cuidado de los niños. La de aquí ha sido una gente muy acogedora. Esperamos es que se concrete el proceso de paz, que sí se consiga y que sea efectivo del todo por aquí. La historia del Tolima es que es una zona roja y precisamente acá, en el corregimiento, sufrieron masacres. Y desde el momento que llegué, sentía que el Tolima estaba en paz, ha sido un proceso cálido, muy apaciguado todo. Me encantaría que siguiera así, o que mejorara. Incluso pertenezco a una asociación que nació de los diálogos de la paz. Pertenezco a Tolipaz y formo parte de Ataco Tolipaz

Alba Luz, profesora y voz de la experiencia, observa con orgullo la escena. Las herederas de la lucha hacen las cosas muy bien, y la docente no quiere dejar pasar el emotivo momento para aportar su sabiduría:

La historia de la violencia nos ha servido para muchas cosas. No solamente es el negativismo de la violencia, sino también la forma como la mujer ha ido cambiando sus perspectivas. Digamos de buscar la posibilidad de aportar a su hogar, pero desde su hogar. La producción casera también se puede sacar adelante. Yo conozco mujeres que también se han dedicado desde su hogar a trabajar la caficultura y sus productos, ser innovadoras y trabajadoras de todo su entorno.

Cada vez que habla una de las más adultas las mujeres escuchan atentamente. Ha sido de ellas de las que han aprendido todo. Miran todas al horizonte, al lago, a la nada. Hay ojos que brillan. En medio de la emoción, Ángela Patricia añade las últimas palabras:

Queremos empezar a tumbar el estigma que nos han tenido. Ataco es de gente trabajadora, luchadora, de gente honesta y humilde que tiene las ganas de salir adelante, de luchar. Contamos con gente muy servicial... La población es muy amable, humilde, berraca. La lucha de los que no somos tan jóvenes es ir contando la historia a nuestros hijos para que no se pierda. En el territorio hay mujeres que le ponen el alma, que son berracas y que sin duda marcan y marcarán la historia.

CAPÍTULO 9

FLOR MÚNERA: “LA GENTE AQUÍ NO ESTÁ PIDIENDO PLATA, LA MAYORÍA DE GENTE ESTÁ PIDIENDO VERDAD”



El sol radiante del mediodía daba una tregua a los días lluviosos en Ibagué, la capital del Tolima. La temperatura que se concentraba en las paredes era sofocante. El calor se había acumulado durante la mañana en el edificio y generaba una sensación de bochorno. Al llegar al despacho de Flor Múnera, ella tecleaba agitada un correo que debía mandar de inmediato para ultimar los trámites de traslado de uno de los presos por los que trabaja.

En su pequeño y humilde despacho, el único rayo de luz en toda la habitación se filtraba por una ventana situada en un lateral del cuarto. Un cuarto que tan solo conservaba un pequeño escritorio, un ordenador de sobremesa, tres sillas y algunos diarios y panfletos acumulados en una caja de cartón. Flor, una mujer de piel morena, pelo corto y que aparentaba no tener más de 60 años allí sentada, frente al ordenador, tenía una toalla colgada sobre el hombro que usó para secarse el sudor antes de levantarse, darnos la bienvenida y ofrecernos sus disculpas por

estar pendiente de aquellas gestiones. A su lado, dos hombres de edad mediana, que en un principio parecían ser trabajadores del lugar, se retiraron minutos después de nuestra llegada pidiéndole a Flor que se comunicara con ellos en cuanto supiera algo sobre su caso. Flor parecía claramente una mujer ocupada: tenía su teléfono móvil junto a ella y atendió dos llamadas de las cinco que recibí durante nuestra visita.

Flor Múnera, enfermera de profesión, es una de las miles de lideresas sociales colombianas que ha dedicado toda su vida a los demás mediante la lucha sindical y la defensa de los derechos humanos. Ella misma explica que tras iniciar, en 1969, su movilización sindical durante su etapa como enfermera y, tras 18 años de ejercicio sanitario en el Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, ingresó en 1975 en la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (cspp), una organización que ha trabajado desde su creación por la garantía de los Derechos Humanos de los colombianos procesados por delitos políticos y judicializados por participar en la protesta social. Todo ello mediante la asistencia jurídica y económica a los presos y la denuncia de la represión y el abuso del Estado contra las organizaciones de los trabajadores.

“Mi trabajo se basa en la defensa de las personas detenidas por razones políticas”

Flor explica con determinación en qué consiste su labor como defensora de derechos humanos en el cspp: “Nosotros hacemos un trabajo de defensa de las personas detenidas por razones políticas”. Casi de forma automática y ante la confusión que, según ella, suscita el concepto de “detenidos políticos”, subraya: “Muchas veces la gente cree que son detenidos políticos los paramilitares y resulta que para nosotros no. Definitivamente

quien está al lado del Estado no necesita protección ni necesita que le ayuden a reclamar sus derechos”. Para ella, quienes necesitan de su ayuda y la del Comité “son aquellas personas que de una manera u otra han luchado o continúan luchando dentro del Estado colombiano por el derecho a la tierra y a la lucha sindical”. Dos batallas en las que históricamente los colombianos han reclamado sus derechos al Estado, con la consciencia de que tienen todas las de perder.

La lucha sindical, que surge, según relata Flor, en 1925 en las bananeras de Urabá, la subregión colombiana ubicada entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y la Serranía del Darién que goza de una extraordinaria posición geográfica por ser un cruce estratégico entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. Esa lucha se inicia por el descontento de la población trabajadora ante las precarias condiciones salariales de las empresas agroindustriales. Las compañías bananeras retribuían a sus empleados con papeles que podían intercambiar por bienes en los llamados “comodatos”. “La gente nunca podía comprar afuera nada porque todo se lo vendían ahí mismo y mantenían como si estuviesen en una especie de cárcel porque de ahí no salían”, señala Flor.

En 1977, el cssp inicia su lucha por la defensa de derechos a raíz de la persecución y el encarcelamiento de la gente que reclamaba sus tierras y era juzgada por consejos verbales de guerra. Los trabajadores fueron arrestados en las guarniciones militares sin ninguna razón aparente. “Se empezaron a llevar a campesinos, sindicalistas y estudiantes. Ahí la situación se agranda y los trabajadores se unen”, todo ello, según cuenta Flor, para frenar esa situación y que fuera la justicia ordinaria la que juzgara, investigara y condenara, en última instancia, a todas las personas que luchaban por sus derechos.

Flor formó parte, durante sus inicios en el comité, de una de las grandes victorias para la historia del cspp y la defensa de los Derechos Humanos, cuando en 1979 la lucha se transformó en un movimiento nacional. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Bogotá presentó el “Informe de una misión de Amnistía Internacional a la República de Colombia” y logró que, en abril de 1980, Amnistía Internacional diese unas recomendaciones al gobierno colombiano con el propósito de garantizar una protección efectiva de los derechos humanos en el país. Tal y como afirma Flor: “se logró que el Estado entendiera que los civiles no podían ser juzgados ni condenados por la justicia penal militar”. Asimismo, las recomendaciones del informe instaban al establecimiento de garantías para la protección de los presos políticos contra la detención indiscriminada y la práctica de torturas llevadas a cabo en unidades militares fuera del control judicial ordinario. En la práctica, Amnistía Internacional mandaba al gobierno a concretar medidas que asegurasen el respeto a los derechos humanos de sindicalistas, campesinos e indígenas, más aún cuando pertenecieran a zonas rurales sometidas al control militar.

Una cosa lleva a la otra. La incidencia de Flor en la lucha sindical la condujo a adentrarse en un universo más grande: los derechos humanos. La llegada de Flor al Comité tiene lugar tras la necesidad de la organización de ampliar su ámbito de actuación a todo el territorio colombiano. El comité pretendía extender su actividad mediante la creación de seccionales distribuidas en varios departamentos del país, uno de ellos el Tolima. Flor había vivido toda su vida en el departamento y trabajaba como enfermera. Desde entonces, de forma paralela, luchaba por sus derechos y los de sus compañeros del sector. Las seccionales eran creadas por los trabajadores mismos y estudiantes que

eran judicializados y condenados por su trabajo en Derechos Humanos; y nacen tras la unión de diversos sindicatos: el sindicato de la energía eléctrica, el sindicato bancario y el sindicato de salud, al que Flor pertenecía entonces. Flor llega así a ese nuevo espacio “más importante” en el que, según ella, “se unen tanto la defensa de los derechos de obreros sindicales, como la de todos los derechos civiles y políticos de la gente”.

Una marca de por vida

Como toda lucha de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, la trayectoria de Flor ha estado también marcada por la represión, la estigmatización y varios episodios de violencia hacia ella y hacia sus compañeros de labor. Su discurso fluido y su tono de voz contundente y aparentemente inquebrantable —propios de una mujer segura de sí misma— se entrecortan al tropezarse con los recuerdos de los crímenes más atroces de lesa humanidad que ha tenido que vivir en primera persona por ser defensora de derechos humanos y lideresa social en Colombia.

Ante la pregunta de cómo ha cambiado su vida tras dedicar gran parte de ella a defender a los más vulnerables en contextos políticos como el colombiano, Flor hace una pausa para referirse con los ojos sumidos en el recuerdo a lo que para ella ha supuesto el cambio más drástico en su vida: ser testigo de crímenes como la desaparición forzada, la detención, el exilio y, tras un silencio que parece decirlo todo, el asesinato de varios de sus compañeros. “Tenemos compañeros que han sido asesinados. Eso ha sido una de las cosas que más lo marcan a uno en este trabajo. Perder a todos estos compañeros que, de alguna manera, lo han acompañado a uno”.

Para Flor, el Estado ha sido uno de los actores que más ha vulnerado y transgredido los derechos de su población con la invención, por ejemplo, de empresas privadas con el único objetivo de asesinar a líderes sociales o la creación de las fuerzas paramilitares que fueron, en palabras suyas, “una clara muestra de lo que ha sido la represión por parte del gobierno”.

Aún con la voz quebrada, Flor afirma que todos quienes trabajan en la defensa de los Derechos Humanos en el país tienen claro que “cada uno de los gobiernos del Estado colombiano ha tenido la mezquindad de arrebatarse derechos a su pueblo”. Ella, a su pesar, tiene la convicción de que las causas sociales por las que se iniciaron las luchas en el país, hacen más de 60 años, continúan siendo las mismas por las que hoy lucha la población colombiana. La educación y la salud continúan siendo privilegios que solo una pequeña parte de los habitantes se puede permitir y la privación o la dificultad de acceso a ellos son la principal razón de la perpetuación del conflicto entre el Estado y una parte de su población.

Los gobiernos son los que siempre han estado en la mira de quitarle los derechos al pueblo y el pueblo ha tenido que estar dando las peleas que siempre ha dado. Y por esas luchas que ha dado pues ha pasado todo lo que ha pasado en este país. Un país que de todos los del mundo ha sido en el que más ha durado la guerra interna.

A pesar de todo esto, Flor advierte que:

Nosotros sabemos que los acuerdos de paz son muy importantes y cualquiera los tiene que defender, pero también sabemos que no se acaba la guerra con eso porque hay muchas otras organizaciones insurgentes que siguen dando la pelea armada y el movimiento social tampoco se está quedando quieto.

Flor expone una de las realidades latentes en el país: la gran cantidad de organizaciones armadas afincadas en el territorio y la imparable movilización social en contra de todas ellas por el daño que han causado, y aún causan, en el país hacen imposible que la paz pueda apenas vislumbrarse únicamente tras la firma de unos acuerdos de paz.

Caminar por el filo de la navaja

Las incesables amenazas a líderes sociales y la ola de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia son dos grandes vacíos en el proceso de implementación del acuerdo de paz en el país. Las personas que trabajan por la defensa o promoción de los derechos sobre la tierra y el territorio denuncian actos de corrupción y se convierten en opositores de diversos proyectos e intereses del gobierno o de otros poderes en Colombia. Al defender los derechos humanos, los líderes y lideresas se sitúan inmediatamente en el punto de mira de organizaciones criminales y de diversos grupos armados ilegales.

Según el informe *Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia* realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, un total de 60 630 personas fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado durante los últimos 45 años. Entre 1996 y 2005, se registraron 32 249 de las víctimas por desaparición forzada, más de la mitad de los casos documentados, lo que supuso el momento más crítico en cuanto al fenómeno se refiere.

Flor tuvo que padecer las consecuencias de ejercer como líder y defensora de los derechos humanos en Colombia en ese periodo. “A todos nos da miedo, porque uno sentir que en cualquier momento lo van a asesinar...”. Flor hace una pequeña pausa en

su relato para retomar con fuerza una historia del pasado que le cambió la vida: “En el 80... no... en el 96... sí, en el 96...”. Mira hacia arriba como si buscara en sus recuerdos aquella historia que hubiese querido olvidar ya, y prosigue:

...tuve una situación muy grave a principio de año, un intento de desaparición forzada y después una persecución muy fuerte directamente por parte de organismos de seguridad del Estado hasta dictar una orden de captura en mi contra que me obligó a irme del Tolima y a estar por fuera de mi tierra 20 años.

Flor tuvo que marcharse, abandonar su hogar, su familia y su tierra para evitar que la detuvieran, la secuestraran o la privaran de su libertad. Para esa época, Flor trabajaba todavía en el Hospital como enfermera y encabezaba desde el sindicato de salud la lucha por los derechos colectivos de los trabajadores. Desde el hospital también había iniciado un acompañamiento en defensa del campesinado y su lucha por la tierra. Las amenazas y la propia judicialización materializada en la orden de captura en su contra la obligaron a huir, a permanecer 20 años fuera del Tolima, a tener que exiliarse fuera de Colombia durante cuatro años, a alejarse de la tierra que la vio crecer y por la que tanto había luchado. Era su única opción para mantenerse a salvo.

Aquí hay una cosa bastante grave y es que usted anda por el filo de la navaja. Siempre está señalado. Usted es de las farc, del eln o del epl, pero usted no es defensor de derechos humanos ni líder social. Y por eso lo matan... por eso lo meten a la cárcel.

Flor fue investigada en esos años de incremento de desapariciones forzadas. Estaba acusada de formar parte de la guerrilla:

En ese entonces a mí me dijeron que yo mantenía en las montañas del Tolima, en el sur y en el norte con el eln y las farc llevándoles todos los

medicamentos del hospital, (...) decían que yo sacaba las medicinas del hospital para curar a los heridos.

“Me volví como una guerrera”

Las líderes sociales en Colombia han permitido que, desde su labor callada, ardua y constante, el tejido social no se termine de deshilar en un contexto lleno de violencia. En Flor, la idea de ser líder social es prácticamente un legado que su madre le dejó, una idea que le inculcó, seguramente casi sin quererlo, “desde chiquita”, dice. Al pensar en sus inicios como líder, esboza una sonrisa nostálgica y se da cuenta de que está a punto de desenterrar recuerdos de su vida y de su infancia que, con el paso del tiempo, han dejado de ser insignificantes para convertirse en el origen de todo.

Mi madre fue muy peleonera, toda la vida peleaba por tener la junta de acción comunal activa, porque la gente defendiera sus derechos, porque el agua no la dañaran, porque la tierra no la quemaran (...), y nosotros, todos, sin excepción —fuimos 11 hermanos—, teníamos alguna cosa que hacer. El que no era líder en el colegio, con los otros chinitos en las fincas cogía un liderazgo.

Hija de una madre que enviudó a temprana edad, y al crecer entre la figura de sus 10 hermanos, todos hombres, Flor dice que se vio obligada a aprender a “guerrear” y a defenderse desde bien pequeña. “Como yo no conocí a mi padre sino a mis hermanos, y ellos fueron muy peleoneros, me volví como una guerrera y eso hizo que yo despertara”. Desde que era una niña Flor empezó a cuestionar la necesidad de ciertas acciones y reivindicaba en contra de estas sin saberlo:

Tampoco nunca me dejé pegar de mi madre. A mí, si me pegó dos garroteras, no me pegó más porque yo me le volaba y me subía en un palo

alto, y allá me quedaba trepada. Y le decía: mamá, siendo usted mamá de nosotros, ¿por qué nos va a pegar? Usted no tiene que pegarnos.

Ni siquiera en la escuela Flor dejó que los profesores, que, en su época, les pegaban “por no hacer bien la tarea”, abusaran de su posición de poder. Tampoco dejó que le dijeran lo que tenía que hacer:

Me pasaban al tablero y yo empezaba a hacer las cosas y a veces uno no está para hacerlas, aunque sepa. Y entonces yo hacía el número grande. El profesor me preguntaba ‘¿Por qué hace el número grande?’, y yo más grande lo hacía. El profesor volvía a preguntarme: ‘¿Por qué?’, y entonces yo lo hacía chiquitico. Hasta que un día se paró y me pegó en la espalda y saco yo la almohadilla que tenía para borrar el tablero y se la puse en la cara. Salí corriendo y dije: de aquí en adelante no me jode nadie.

Flor continúa hoy su trabajo como defensora de derechos humanos y acompaña, desde el Comité, a las organizaciones que hacen resistencia o están estigmatizadas en las diversas regiones y municipios del país. Además, “nosotros acompañamos todas las luchas de los estudiantes, las luchas de obreros sindicales y, por supuesto, las luchas de campesinos”, añade.

Los derechos de las mujeres: una lucha de todos

Las mujeres siempre hemos estado como en la sombra del compañero, del esposo... siempre allá como escondiditas. Como que es la que no tiene el derecho sino... mejor dicho se da por bien servida por tener un compañero que le dé sus hijos, porque son lo mejor que hay para una mujer. Pero realmente, sí. La mujer sí debe organizarse. Pero organizarse sin desconocer que la lucha es de hombres y mujeres, eso me parece muy importante.

Flor reniega en un principio de la vertiente feminista que predica que la lucha es una lucha únicamente de mujeres y considera que la lucha más acertada es la que se practica conjuntamente entre hombres y mujeres para pelear por lo que verdaderamente se quiere: defender en un país como Colombia, en el que “la discriminación, por ejemplo, en el tema de derechos civiles y políticos es muy marcada”, remarca Flor.

Quizás por su larga trayectoria como lideresa social y su trabajo con mujeres, Flor dice haber aprendido que cada detalle significa un avance para su lucha y la de todas las mujeres colombianas. Para ella, el acuerdo de paz que firmaron las farc y el Estado colombiano fue muy importante para las mujeres:

Lo más importante es que se reconoció que la mujer fue botín de guerra, que fue totalmente atropellada por todos los actores del conflicto armado para pagar muchas veces las consecuencias de lo que podían hacer los hombres. Era como un objeto de venganza. Incluso lo sigue siendo todavía.

El papel de las mujeres en la lucha por la paz, según Flor, es cada día más relevante y la voz de todas es cada vez más escuchada. La lideresa recalca que a pesar de que “la mujer siempre ha estado a la espalda del compañero y siempre ha estado muy alejada de todos estos procesos, hoy las mujeres han despertado en términos de empezar a reclamar”. Ella vuelve a señalar que lo que se logró en las mesas de negociación por la paz en La Habana fue verdaderamente significativo. “Hemos conseguido espacios muy importantes para discutir y ponernos al frente de nuestros derechos”.

Flor recuerda que la situación que viven las mujeres en el país no es algo actual, que todos los feminicidios que se conocen actualmente “no son cosa del presente”, sino que es una situación

que se ha perpetuado a lo largo de la historia de la humanidad y apunta que:

Antes pasaba mucho más, pero eso era con una venda tanto en la boca como en los ojos, porque si usted decía algo ya la muerta era usted al otro día. No es que no pasara, sino que ahora el hecho de que la mujer se haya empoderado de sus derechos y tenga ese mínimo respaldo ha hecho que la mujer tenga otro espacio más en la lucha social y política.

Para continuar su trabajo por el reconocimiento del campesinado e incidir en otros procesos como la construcción de paz y el empoderamiento de la mujer en el territorio, Flor y los demás componentes del Comité han organizado y liderado varios proyectos enfocados en esa dirección, como es el caso de la Escuela Manuel Quintín Lame. Entre carcajadas que destellan de orgullo, cuenta que el personaje que le da nombre al colegio fue un indígena de mucho renombre que terminó alzado en armas para defender a sus indígenas.

En la escuela tenemos 40 o 50 personas trabajando y el 80 % o, incluso más del 80 %, son mujeres. Es una escuela de liderazgo social para que la mujer se empodere porque es que la mujer no ha tenido la posibilidad de decir ‘la finca es mía’, sino simplemente ‘voy a sembrar la cebolla y el tomate para el caldo, pero es la finca de mi marido’ y nosotros queremos que la mujer también tenga derecho a la propiedad de su finca.

La escuela es para Flor una institución que da fuerza a las propuestas de defensa del territorio, pero, a su vez, supone una oportunidad para las mujeres en la promoción de su autonomía económica y la inclusión de sus propuestas en proyectos como la Escuela.

“No defendemos el Medio Ambiente, defendemos el Ambiente completo”

No somos un país que necesite oro, porque para vivir no necesitamos oro. Tenemos clarísimo que el agua es la vida y si para extraer el oro tienen que acabar con el agua pues ahí tenemos que seguir dando la lucha.

La lucha social de Flor también incide en la protección del medio ambiente como una extensión inherente a su defensa de los derechos humanos. El extractivismo al que, según Flor, el gobierno colombiano se aferra, es otra de las actividades que cuestiona y a la que dedica su trabajo. No sólo por los daños ambientales que ocasiona, sino por las consecuencias tan negativas sobre la población y por los conflictos sociales que acarrea.

El gobierno se empeña en que la minería debe ser un motor económico del país, pero las alertas de movimientos ambientalistas, de defensores de derechos humanos y de grupos de juristas señalan que el modelo extractivista sólo supone la destrucción, la miseria y la explotación de muchos pueblos colombianos, además de provocar daños irreversibles en el ambiente. “Hace 15 años yo empecé a trabajar con una organización que se llama Tierra Digna, que estaba dando una pelea por el río Ranchería, en la Guajira, exigiendo los derechos de los ríos”. A partir de ese momento, y tras la creación del espacio político, Empresas y Derechos Humanos, que Flor considera “muy importante para hacer muchas cosas en el aspecto jurídico y llegar a Naciones Unidas con unos buenos informes”, se desarrolla su interés por la defensa del Medio Ambiente.

Gracias a la Universidad del Tolima que “ha tenido esa preocupación por el ambiente y siempre ha tenido espacios y semilleros sobre el tema”, continúa Flor, nace el Comité Ambiental en Defensa de

la Vida y su red de comités, del que la lideresa forma parte. “El Comité Ambiental tiene cosas muy bonitas”, indica Flor al hablar sobre las actividades que realiza el colectivo.

En primer lugar, hace todo ese recorrido nómada que llamo yo, que es acompañar los distintos departamentos que están dando la lucha por la defensa del territorio. Pero además trabaja en el ámbito jurídico por los derechos de la tierra, los derechos del campesinado, los derechos del agua y todos esos derechos que ahora pueden defenderse con nuevas herramientas, pues yo, siendo defensora hace 46 años, no tenía hasta hace pocos años esas capacidades que hoy tengo para defender el Ambiente. Nosotros no lo llamamos Medio Ambiente, porque el ambiente es completo.

Así es como, una vez más, Flor muestra su preocupación por defender la vida y concluye: “somos defensores de la tierra y somos defensores del agua porque el agua es la vida”.

No hay familia que no haya sufrido las consecuencias de la guerra

Los primeros años de la vida de Flor transcurrieron en el pueblo de su padre, Manzanares, un municipio situado en el departamento de Caldas, en el que, durante las décadas de inicio de La Violencia en Colombia, habitaban mayoritariamente simpatizantes del partido conservador colombiano, los “godos”, como se les conoce de forma coloquial. Sin embargo, la familia de Flor, de origen campesino, simpatizaba con la corriente política más liberal.

Flor cuenta que, desde entonces, fueron expulsados y vivieron muy de cerca la violencia:

Hubo un desplazamiento de todos aquellos que fueran liberales y mi papá, a pesar de estar en esa zona, era liberal. No sé por qué fue liberal allá, pero lo era, y mi madre era una persona de aquí del Tolima, de una zona que era un poco más liberal que conservadora. A mi papá lo mataron allá y tuvimos que irnos.

Flor mantiene la entereza y el vigor de su discurso, aún a pesar de la desdichada historia de su familia. Tras el asesinato de su padre a manos de los “godos”, Flor y su familia vivieron, como históricamente han vivido muchas familias en el país, un desplazamiento.

Ella reafirma que a lo largo de la historia del conflicto:

Colombia ha sufrido una cantidad de desplazamientos incontables, porque a la gente le toca moverse de su lugar de origen. Ellos tenían que dejar todo lo que tenían y correr para otro lado y, como decimos aquí, le tocaba volver a levantar en otro lugar.

Casi sin dar descanso a sus palabras Flor vuelve a su familia y explica cómo ha impactado la guerra en su entorno más cercano:

Nosotros somos parte de esa situación de desplazamiento y de asesinatos. De mis hermanos, uno fue asesinado por los Chulavitas, hace muchos años, y esas han sido las consecuencias del conflicto armado. Yo creo que no ha habido una familia en Colombia, digamos como llaman, de estrato medio, estrato 1, 2 o 3 que no haya sufrido las consecuencias de la guerra.

Flor afirma que todo el que trabaja en derechos humanos llama víctimas a “todas las personas que sufran un ataque por parte del Estado, de sus agentes o en complicidad de ellos”. La activista del cspp es certera: todos, incluida ella, son víctimas del conflicto armado en Colombia. “Sufrí un desplazamiento, sufrí la muerte

de mi hermano, sufrí la ida de otro hermano para la guerrilla de las farc y la muerte de otro que se fue también y lo mataron estando en la guerrilla”, confiesa. La naturalidad con la que brotan las palabras de su boca aterra. Tanto como que dejan entrever la misma convivencia con el dolor adoptada en el país.

Para ella es importante reconocerse como víctima y por eso forma parte del Movimiento Nacional de Crímenes del Estado (Movice), un movimiento en el que convergen varios procesos organizativos de víctimas de crímenes de Estado para reivindicarse como víctimas. “Allí estamos todas aquellas que consideramos que, de alguna manera, el Estado ha sido responsable de nuestro sufrimiento y de lo que nos ha pasado en esta guerra”, declara Flor.

Para Flor ha sido imposible aceptar que las personas que han formado parte de La Violencia en Colombia sean consideradas víctimas. Sin ningún atisbo de dudas sostiene: “yo no puedo aceptar que hoy sean aquellos que quemaron la gente viva, que la estrangularon, que la cortaron con sierra, los que se consideren víctimas”. Y cerrando los ojos, como excusándose, sigue: “... De pronto hasta allá no llega mi capacidad como defensora de derechos humanos. Son personas que hoy están arrepentidas... sí. De pronto. No sé...pero para mí no son víctimas. Fueron victimarios y seguirán siéndolo”.

No hay reconciliación sin verdad, ni verdad sin justicia

Durante más de 50 años, las farc y el Estado colombiano permanecieron en guerra y los intentos por lograr un acuerdo de paz desde los diversos gobiernos nacionales fueron en vano y sirvieron —según diferentes analistas— para reavivar la fuerza de las guerrillas. Así, el primer intento de alcanzar la paz en

Colombia, liderado por el presidente Belisario Betancur (1982-1986), tuvo lugar en la población de La Uribe, municipio del Meta y muy cercano al cuartel general de las farc, Casa Verde. En ese mismo campamento guerrillero, el 28 de marzo de 1984 tuvieron lugar los Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua, donde las farc y el gobierno colombiano de Betancur se comprometían al cese bilateral del fuego y a la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto. A pesar de la tregua pactada, el acuerdo no contempló la entrega de armas por parte de la guerrilla y aunque esta sí empezó a organizarse políticamente, conformando el partido político de la Unión Patriótica (UP), no dejó de realizar, con las armas en mano, secuestros y desplazamientos forzosos a líderes de la oposición.

Años después, en 1998, llega el otro gran intento de alcanzar la paz en Colombia bajo otro gobierno conservador, esta vez, el de Andrés Pastrana (1998-2002). Durante su mandato se inician conversaciones de paz con la guerrilla y se concede a las farc el control de la “zona de despeje” de San Vicente del Caguán: un refugio de 42.000 kilómetros cuadrados conformados por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. La zona de despeje fue el sitio de concentración de la agrupación guerrillera durante el proceso de paz y el lugar en el que se instaló una mesa de diálogo que, luego de tres años de pocos avances y, a pesar del interés de la sociedad civil por superar el conflicto, terminó por romperse y propiciar el incremento de la confrontación militar, entre la guerrilla y las fuerzas militares en Colombia.

Durante la primera década del siglo XXI, bajo el doble gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Colombia refuerza todo su sistema de orden público y, con la bandera de la “seguridad

democrática” —el primer plan de gobierno presidencial que no hacía parte de los partidos conservador o liberal, en toda la historia democrática colombiana—, se establece el objetivo de eliminar militarmente a las farc. Entre tanto, el gobierno de Álvaro Uribe, a pesar de usar estrategias de terrorismo de un Estado materializado en desapariciones forzadas y en miles de casos conocidos como “falsos positivos”, logra diezmar a las farc, reducir su poder operacional y consumir acciones de combate con la mayoría de los líderes históricos de la guerrilla. A pesar de eso, no logra derrotarlas por completo.

Para eso habría que esperar hasta el año 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), cuando los diálogos de paz se retoman formalmente en La Habana, Cuba. Tres años después, el 23 de septiembre de 2015, Santos viaja a la capital cubana para firmar un acuerdo sobre Justicia Transicional; uno de los asuntos más delicados del proceso, según el informe *Proceso de Paz en Colombia*, elaborado por el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). En este contexto, el gobierno colombiano solicita al Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, en el que trabaja Flor, un concepto acerca de la justicia. En sus palabras:

Quando estaban en la negociación, las farc y el gobierno nos pidieron, como Comité de Solidaridad, que diésemos un concepto frente al tema de justicia. Nosotros hicimos un documento para La Habana y estuvimos una semana allá explicando un poco lo que pensábamos que podía ser la justicia. Y la justicia implica muchas cosas. La justicia tiene la verdad, tiene la reparación... pero también tiene una cosa muy importante que son las garantías. Que no se vuelva a repetir, que esos crímenes que han pasado a lo largo de estos 60 años jamás los volvamos a padecer.

Al hacer un recorrido por los componentes inquebrantables de la justicia, Flor ladea la cabeza, alza la mirada y gesticula como

quien recuerda algo muy importante: “La búsqueda de la verdad y el perdón”, apunta. En una sociedad en la que el odio y el temor son elementos constitutivos para la existencia de quienes viven en ella, la consecuencia inevitable es que varios de los actores que la conforman, incluido el Estado, pisoteen una y otra vez las normas de convivencia.

Para Flor, cuando se habla de la reconciliación del país y la reconstrucción de una sociedad que ha padecido toda la vida los estragos de la violencia, conocer la verdad y hacer justicia es imprescindible. Por eso, afirma que:

que uno muchas veces podría decir que perdona, pero ese perdón viene sin poder olvidar, entonces es un perdón que nunca va a ser completo. Porque yo puedo perdonar a la persona que me hizo tanto daño, pero no puedo olvidar que a mi familia le hizo tantos males. No. ¿Y qué se necesita? Lo que el país ha pedido es que si realmente conociéramos quién ha sido el que ha dicho que hagan las cosas, yo creo que el país estaría más sanado, porque aquí no sabemos quién ha ordenado. Apenas tenemos indicios. Podemos decir que fue el comandante de la brigada 13, de la brigada 17, ¿pero a ese quién le ordenó que lo hiciera? Hay alguien más allá que no hemos podido encontrar.

Para un país lleno de color en sus calles y de vitalidad en su gente, las desapariciones, secuestros y asesinatos suponen, la sombra de la que nunca ha podido escapar. De acuerdo con las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, entre 1958 y 2018, el conflicto colombiano supuso la muerte de 261.619 personas. Alrededor de 215.000 eran civiles y casi 47.000, combatientes¹. Flor hace alusión a la realidad de las cifras y admite que en un proceso de reconciliación es esencial

1 Recuperado de <https://centrodememoriahistorica.gov.co/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado/>

reconocer las muertes que ha dejado la guerra interna del país, así como averiguar quiénes son los responsables:

Lo que nos pasa con todos los líderes sociales y toda la gente que han asesinado. Es que yo no me he inventado ese nombre, esa persona existía. Es verdad que existía, es verdad que era líder social, es verdad que era dirigente campesina, es verdad que era defensora de derechos humanos, era líder estudiantil, estaba protestando por las políticas del Estado. Y la mataron por eso. Entonces, si nosotros no tenemos esa verdad, no creo que haya perdón.

La observación que hace Flor sobre los acuerdos de paz firmados en 2016 deja entrever cierta exhalación de esperanza, respecto a la situación del país: “¡sí va a haber una reconciliación! El hecho de que en estos 4 años hayan disminuido tanto los asesinatos, las muertes en combate y todo eso que pasaba cuando estaban agarrados a plomo, lo dice”. Sin embargo, su entusiasmo se esfuma rápidamente:

pero yo le digo y le repito una cosa: las causas sociales que iniciaron la guerra en este país, la guerra interna que tenemos, no han desaparecido. Siguen allí. Y como siguen allí, pues las cosas van a seguir así; no hay remedio si no hay esa voluntad política, que llamamos algunos, de que quien gobierna reparta la arepita bien.

“La necesidad de una reparación integral” es, para Flor, uno de los puntos fundamentales para que las víctimas del conflicto puedan sentirse reparadas. En otra de sus reflexiones, Flor señala que:

“Yo no necesito que me digan que me van a dar una casa, porque con eso ya quedé reparada. No. La reparación es integral y en la reparación están incluidas la verdad, la justicia y esas garantías de no volver a repetir. Esa es la única manera”.

Pero, así como defiende que la justicia es parte imprescindible de la reparación de las víctimas, suscribe el pensamiento de la CSPP sobre aquella:

el comité piensa que la justicia no son 40 años de cárcel, piensa que la justicia no es ponerles grilletes y esposas a los victimarios. Tampoco. Flor Múnera y el Comité piensan así. Los victimarios van a seguir siendo victimarios y como tales van a tener que pagar, pero hay otras formas como la justicia restaurativa. Hay otras formas de reparar el daño causado.

La paz exige verdad

Flor pone su mano bajo la barbilla y, mientras sostiene así su cabeza, baja la mirada y piensa... ¿Qué es lo que necesita el país para vivir realmente en paz? ¿Qué es lo que aún lastra los acuerdos de paz en Colombia? Un instante después, levanta su mirada y se aprecia en sus ojos la certeza de su respuesta:

La voluntad de quienes gobiernan. Que verdaderamente tengan una voluntad de cumplirlos. Los acuerdos son muy buenos, pero si el Estado no cumple con lo que está escrito, pues nada. Va a seguir lo mismo. Porque el Estado no tiene voluntad, no quiere repartir la torta bien repartida, quieren seguir favoreciendo a los mismos, a las multinacionales que vienen a acabar con nuestra tierra, que es lo más duro.

Según reafirma Flor, el gran ausente de las responsabilidades derivadas de la guerra y, por tanto, corresponsable del desarrollo del propio conflicto, es el Estado. Más que cumplir con sus obligaciones, parece que los distintos gobiernos que ha tenido el país se han encargado, uno tras otro, de ensombrecer y desdibujar todo compromiso expresado en los diálogos de paz. “Colombia es el país que firma todos los acuerdos internacionales, los pactos... todo eso está muy bien. Pero para cumplir, nunca cumple,

entonces, la misma cosa. No tiene voluntad política”, comenta Flor. Y continúa advirtiendo que cuando se denuncia la falta de consideración de las víctimas del conflicto armado, la respuesta del Estado es alegar que ya hay una ley para todas ellas —la Ley 1448 de 2011— y que fueron incluidas en los acuerdos de paz:

Sí. Nadie niega eso. ¿Pero se cumple? No. No se cumple. El problema es el cumplimiento y la voluntad que tenga el gobierno de decir: ‘las víctimas están aquí y les voy a dar lo que ellas realmente se merecen como víctimas’. Pero eso no ha pasado.

Ahora bien, si la reconstrucción del pasado a través de la memoria histórica se ha convertido en la base para la reconstrucción del país, es incuestionable —para no volver a repetir la propia historia— la necesidad de construir una memoria colectiva de la sociedad, que recoja los testimonios de los diversos actores del conflicto en Colombia. Flor atribuye la dificultad de incluir la voz de las víctimas en la construcción de la memoria histórica: al hecho de que la memoria del país es inexistente. Para ella, por el momento

la memoria histórica no va a quedar contada toda. Nadie de los que van a ir a la Comisión de la Verdad o a la Justicia Especial para la Paz para declarar los crímenes que cometieron (que sean agentes del Estado o aquellos colaboradores del Estado) van a contar toda la verdad. Vamos a quedar en las mismas.

Según Flor, desde el gobierno y bajo su cobijo muchos agentes del conflicto no van a contar jamás lo que verdaderamente sucedió y achacarán todos los crímenes de guerra a las guerrillas y a las fuerzas paramilitares. Convertirán la reconstrucción de la memoria en una misión imposible:

si no se puede reconocer y decir realmente que eso pasó, a la memoria histórica le va a faltar algo, es decir, esta mesita con tres patas no va a estar bien derecha, siempre va a estar torcida; eso va a pasar con la memoria histórica.

La lideresa es consciente del papel del ejercicio de la narración y de la construcción de memoria, como factor de no repetición:

por la memoria histórica tenemos que contar lo que pasó en este país... porque si se nos olvida, pues nos tocará repetir otra vez la historia, pero yo creo que es muy importante que nosotros logremos dejar todo eso escrito. Yo he ido como diez veces a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pero no a contar lo mío, sino lo que yo hago con las víctimas. Porque a mí sí me duele que las víctimas se queden ahí, aparte y con tanto dolor.

De acuerdo con el informe *De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC)*, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica², las raíces del paramilitarismo en el Tolima son profundas. Desde el principio de los años 50, los tolimenses vivieron el nacimiento de los primeros grupos de autodefensa que se enfrentaron a las guerrillas liberales de la época, con ayuda del Ejército; grupos que, treinta años después (a finales de los años 80), se aliaron con los narcotraficantes del Valle y Antioquia. No fue hasta años más tarde cuando se escindieron en los dos grandes grupos paramilitares: el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Frente Omar Isaza de las Autodefensas del Magdalena Medio (acmm). Con el crecimiento de los conflictos por la tierra, la ampliación de la capacidad extorsiva de las farc y el cultivo de amapola en la parte montañosa

2 Este documento puede consultarse en <https://centrodememoriahistorica.gov.co/de-los-grupos-precursores-al-bloque-tolima/>

y fría de la cordillera central, las autodefensas entraron en la zona estratégica y lograron fortalecerse. Comenzaron entonces los conflictos entre ambos grupos de paramilitares por tomar el control del negocio del narcotráfico y las farc se incorporaron al combate entre las dos bandas paramilitares, en los territorios de Rioblanco, Chaparral, Ataco, Coyaima y Planadas. Flor revela que la convivencia con el paramilitarismo en la región norte del departamento también implicó mucho sufrimiento para los tolimenses:

Si ustedes van un poquito hacia al norte se van a dar cuenta del dolor de la gente y de todo lo que la gente ha sufrido, sobre todo en el momento en que entró el paramilitarismo. Porque allá la gente convivía y, hay que decirlo, convivía con la guerrilla.

En un primer momento —cuenta Flor— la gente de aquellos municipios acataba las normas de la guerrilla y las respetaba, porque creían que a falta de un gobierno que se preocupase por ellos, eran buenas; pero después “llegaron los paramilitares a tumbar cabezas”.

Flor y el CSPP trabajan, también, por la reconstrucción de esta parte de la historia. Junto al Centro Nacional de Memoria Histórica elaboraron un libro sobre los precursores del paramilitarismo en el sur del Tolima. “Es tan doloroso”, afirma Flor, tras hablar de él:

Es muy doloroso ver cómo la gente contaba lo que les pasó con esa tristeza de ver que, bueno, yo lo cuento para que lo pongan ahí y ya. Pero ¿y todo lo que a mí me pasó? ¿Todo lo que me hicieron a mí y a mi familia? ¿Dónde está el familiar que no encuentro hace 10 años?.

La firme lideresa hace una pausa rápida para retomar el aliento, y continúa:

ojalá nuestro país algún día se reconcilie, pero va a ser muy, muy demorado. Porque nosotros, los que trabajamos en la defensa de derechos humanos, acompañamos a las víctimas y hacemos esfuerzos, porque la gente cuente y alivie su dolor. Pero el gobierno continúa sin tener esa capacidad de entender que la gente necesita que le ayuden a eso, que la gente aquí no está pidiendo plata, la mayoría de gente está pidiendo verdad.

CAPÍTULO 10

VENUS QUIROGA “POR ALGO ESTAMOS AQUÍ Y LLAMAMOS A LA RECONCILIACIÓN. ¿ESO QUÉ QUIERE DECIR? ¡QUE HEMOS PERDONADO!”



Llegar hasta Venus no ha sido nada fácil. Parecía una mujer reservada, desconfiada, exigente. Después de dos encuentros previos en su casa, antes de realizar la entrevista, e incluso minutos antes de la conversación pactada, no sabíamos con certeza si accedería a hablar delante de la cámara. Venus rehúye de ellas. Así nos lo hizo saber en nuestro primer encuentro. Aunque conversaba con nosotras de forma amable, estaba muy atenta a las notas que tomábamos con la libreta, y hasta se alteraba con cualquier movimiento en falso que realizáramos con el móvil. Más tarde entenderíamos su recelo a las cámaras y grabaciones. Era comprensible. En su etapa como docente fue víctima de una grabación de voz no consentida. Desde esa vez, hace muchos años, mantiene su desconfianza ante cualquier persona que quiera grabar su voz o registrar en cualquier formato su historia, su vida, su narración, sus palabras. Sin embargo, su

reticencia para expresarse ante las cámaras contrasta con su buen ánimo para conversar, para generar confianza a partir del diálogo y más cuando es acompañado de un chocolate caliente y pandebonos, unos panecillos típicos en Colombia. Venus explica, con nostalgia, anécdotas de su historia, de su vida. Relatos conversados sobre sus viajes por Europa, sin mirar el reloj y ausentes de interrupciones tecnológicas.

El espíritu viajero de Venus se evidencia en la decoración de su salón colmado de recuerdos, de esencias de los países visitados. En lo alto de una cómoda reposa un plato de cerámica con el escudo y la bandera de España, mientras que en otro estante colecciona numerosas figuras de porcelana de mujeres, entre las cuales se distinguen algunas sevillanas. También, en la pared de la sala, hay colgadas fotografías que ella misma había tomado de joven, durante su etapa como fotógrafa profesional. Enmarcada sobre la pared que hay al lado de la ventana del salón destaca una de las fotografías con las que Venus ganó un premio en su juventud: las flores que brotan de un árbol coloreadas de un rosa pálido que transportan al observador hacia un campo de cerezos. Pero no son los viajes ni la fotografía lo que han caracterizado la vida de Venus Quiroga. Lo que ha ocupado la mayor parte del tiempo y del esfuerzo vital de su liderazgo ha sido la lucha por la defensa de los derechos humanos en Colombia.

“El día a día está siempre enfocado a los derechos humanos”

Venus confiesa que ha pasado toda la vida luchando y que, desgraciadamente, aún no ha conocido la paz, en sus más de setenta años de vida. Ella se presenta como docente —experta en pedagogía— y Coordinadora de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar (regional Tolima).

A pesar del cargo que ocupa, con alta visibilidad y notoriedad, ella no cree ser una líder social, aunque es consciente de que los demás sí la ven como tal:

Yo no me considero lideresa, aunque muchos lo catalogan así. Me presentaban como líder. Yo me asusté, nunca me habían dicho que yo era líder. Pero una se pone a pensar que tiene esa aceptación en los grupos donde interactúa, y entonces dice, será que sí soy líder.

La Corporación Reiniciar es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Reiniciar fue fundada en 1992, en Bogotá, por un grupo de defensores de derechos humanos de la región del Magdalena Medio colombiano, que se vieron obligados a desplazarse tras recibir amenazas. La Corporación representa la decisión de dar continuidad a la defensa y promoción de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en cualquier lugar o circunstancia.

Las acciones de Reiniciar se centran en el acompañamiento de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Además, denuncia ante el Sistema Interamericano varios casos de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellos el genocidio contra la Unión Patriótica (UP); uno de los casos más destacados de persecución política en el continente. Reiniciar aparece en el Departamento del Tolima a partir de 2006, con ocasión de uno de los primeros casos conocidos de “falsos positivos” en la parte sur de la región (Rioblanco). La zona de actuación que ocupa Reiniciar en el departamento se concentra, principalmente, en las comunidades del sur y del suroriente tolimense, las regiones más sacudidas por el conflicto

armado en el departamento y en las cuales se concentra la mayor cantidad de sus víctimas.

En municipios como Planadas, Ataco, Rioblanco y, especialmente, Chaparral, la violencia del conflicto, el control social que ejercían las guerrillas y los paramilitares, junto a los combates entre la fuerza pública y las farc: fueron realmente crudos. Según el informe *Conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario*³, realizado por la Fundación Ideas para la Paz, las acciones de la guerra sin pausa en la región propiciaron el abandono masivo de tierras, el aumento considerable de homicidios, el reclutamiento de menores y las víctimas por minas antipersona, entre otros tipos de violencias.

Entre los factores que incidieron en el gran impacto que tuvo la guerra en la zona sur del Tolima, cabe enumerar la ubicación geoestratégica del departamento y su condición de corredor estratégico que conecta diferentes zonas del país. Asimismo, contar con un relieve apto para el resguardo y el abastecimiento de las guerrillas, o, el hecho nada minúsculo, de que en la vereda Marquetalia (Planadas) fuera la región donde nacieron parte de las farc.

Hija de la guerra

Venus se expresa con facilidad y entereza a pesar de ser la primera entrevista que concede ante una cámara. No es un asunto fácil. Hablar de temas traumáticos, como haber sido testigo de la crueldad de la guerra, supone un acto de valentía.

3 Que puede descargarse aquí: <https://www.ideaspaz.org/publications/posts/519>

Ni el físico ni el entorno en el que se mueve Venus denotan, a primera vista, una vida “complicada”. Viste de forma elegante, sin ninguna intención de pretenciosidad, y siempre la acompañan unos pendientes y un collar de perlas blancas, que contrastan con su piel trigueña. En los tres encuentros que tuvimos llevaba las uñas pintadas de rojo intenso; un sutil toque que aportaba fuerza en unas manos finas y delicadas. En su salón, con unas privilegiadas vistas de las cordilleras que rodean Ibagué, la capital del Tolima, reinan muebles y sillas de estilo victoriano. Sus relatos, sin embargo, muestran una vida donde la lucha, la pobreza y el sufrimiento han sido los indiscutibles protagonistas; en ellos, está inmersa una triste constatación “yo no he conocido la paz”.

La guerra de Colombia es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y, en sus más de 50 años de existencia, no hay ningún colombiano cuya vida no se haya visto afectada por el conflicto armado; en esa medida, todos somos víctimas. Un aspecto desalentador del que dan fe las cifras, que hablan por sí solas. Según el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad⁴, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh), el conflicto en Colombia causó, hasta 2012, 218.094 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi seis millones de desplazados, además miles de crímenes de violencia sexual, secuestros, ejecuciones extraoficiales e incontables tragedias personales.

Tanto Venus como su familia fueron víctimas de la crudeza de la guerra que se desató en la región del sur del Tolima. Ella recuerda cómo sus familiares, en las décadas del cuarenta y cincuenta del siglo xx, tuvieron que sufrir el desplazamiento

4 Documento que puede consultarse aquí: <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/>

forzado, persecuciones e incluso asesinatos perpetrados por las fuerzas irregulares conservadoras que, espoleadas por los líderes del partido que enviaban frases incendiarias desde lejos y, desde las ciudades, fueron bautizados como los “Chulavitas”.

Los Chulavitas fueron bandas armadas formadas en Colombia durante los primeros años del periodo conocido como “La Violencia”. Una época del siglo xx caracterizada, tal y como señala el nombre, por la extrema violencia, y en la que predominaron tanto asesinatos como agresiones en todo el país. Se denominaron Chulavitas porque en sus filas se encontraban campesinos conservadores procedentes de la vereda Chulavita, ubicada en el municipio de Boavita, departamento de Boyacá. Representaban la fuerza de choque del gobierno conservador de Laureano Gómez (1950-1951) y su *modus operandi* era el hostigamiento, la tortura y las masacres indiscriminadas contra todos aquellos que pensaban diferente a los conservadores y eran identificados como comunistas o liberales.

El padre de Venus, que era alcalde de su municipio, fue la primera víctima familiar del conflicto, a manos del grupo armado conservador. Venus relataba durante nuestro primer encuentro lo que le había ocurrido a su padre, a partir de las memorias que él había dejado y que ella había escrito en un documento titulado *Un instante en la vida de*. Su padre fue perseguido y herido de gravedad en más de 3 ocasiones por los Chulavitas, pero en todas logró escapar con vida. Es admirable la entereza con la que Venus relata esos hechos, su pasado, su historia, pese a tratarse de su propio padre. Quien escucha el relato de Venus puede caer en una atmósfera extraña. No es difícil viajar, como lo hace Venus, a infancias cada vez más lejanas, hasta dar con las noches en las que las abuelas cuentan y narran historias. Las abuelas, en sus cuentos, maquillan con cuidado las partes

tristes para que los niños no tengan miedo. Las vivencias de Venus, desafortunadamente, no fueron invenciones ni cuentos con finales más felices; contrario a eso, los recuerdos de hechos reales la persiguieron durante décadas, en forma de pesadillas.

La lideresa de la Corporación Reiniciar reflexiona sobre el concepto de víctima. Declara que todos los colombianos y colombianas son víctimas del conflicto armado: “a excepción de la oligarquía”, a quién ella no duda en considerar como “los victimarios”. Pero recalca que los victimarios también son “víctimas de su propio mecanismo, pues en Colombia también se han eliminado familias del poder. Al final, víctimas somos todos porque estamos llevando ese peso enorme de la desigualdad”.

“Toda la vida lo que yo he conocido ha sido esa lucha por el poder entre liberales y conservadores”, describe Venus en una frase que explica el origen del conflicto colombiano. Si bien Colombia ya se vio inmersa desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX en conflictos internos marcados por altos niveles de violencia y enfrentamientos entre liberales y conservadores, la máxima expresión de violencia entre los dos universos ideológicos dominantes se produjo a partir de 1948, año en que el candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliécer Gaitán, fue asesinado. Sin embargo, encontrar un origen único del conflicto armado es algo en lo que ni historiadores ni investigadores se han puesto de acuerdo. Son tantos los frentes abiertos en el país que es difícil consensuar una fecha clave o específica o un único motivo que pueda tomarse como el inicio de la guerra.

El informe elaborado por el cnmh reconocía la necesidad de entender al conflicto, y a la memoria de la guerra, como algo diverso y no hegemónico: “En un contexto de conflicto abierto como el colombiano, la memoria no puede ser sino

esencialmente controversial: la memoria es y seguirá siendo un campo de tensiones dentro de la sociedad y entre la sociedad y las instituciones”. Por eso, contar las diversas versiones, y promover su comprensión y aceptación son una tarea marcada como vital tanto por los Acuerdos de Paz como por las recomendaciones de cientos de organizaciones sociales que trabajan con las víctimas del conflicto en Colombia. La diversidad de miradas sobre el origen y el desarrollo de la guerra en el país es planteada en el informe como un antídoto en contra del autoritarismo.

El poder de la memoria se asegura así en su pluralidad. Según Gonzalo Sánchez, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica para el año 2013:

cuando se la reconoce en su diversidad, la memoria es una de las prácticas con mayor vocación democratizadora. De hecho, la memoria es hoy en día en Colombia un lugar desde el cual se enuncian los reclamos y deudas pendientes, pero también desde el cual se tramitan demandas sociales y comunitarias de muy variada índole.

El reconocimiento de la pluralidad queda patente en el propio informe ¡Basta Ya! del cnmh. El texto señala el inicio del conflicto en 1958, con la entrada en vigencia del Frente Nacional. No obstante, la fijación histórica de la fecha no resultó convincente para los miembros de las farc ya que, según ellos, muchos sucesos políticos y armados que explican la guerra civil se produjeron en años anteriores, incluso desde la década del treinta, pero sobre todo, a finales de la década del cuarenta.

Otros historiadores participantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas como Jorge Giraldo Ramírez, profesor de la Escuela de Humanidades de EAFIT, establecen el inicio

del conflicto armado a finales de los años 70, momento en que el Frente Nacional sufrió un declive. Asimismo, un punto en el que los historiadores coinciden es que en la década de los 80, la guerra se recrudeció con la expansión del paramilitarismo. Múltiples miradas para una guerra compleja y de larga duración

Narrar para vivir

Desde bien pequeña, Venus tuvo que ser testigo de la expresión de la violencia entre liberales y conservadores. Los constantes enfrentamientos vividos la marcaron tanto a ella como a toda su familia; un sufrimiento que la ha hecho más sensible para querer ayudar y compartir con otros esas vivencias, las cuales, según Venus: “lo hacen a uno ser más humano”. “Lo que yo vi en mi niñez fue algo espantoso. Una familia que se desintegró completamente para poder sobrevivir”, confiesa. Esta vez, aunque se expresaba aún con la entereza que la caracterizaba, se percibía en su voz la vulnerabilidad de una niña que fue testigo de sucesos atroces. En reiterados momentos, mordía su labio inferior, en un intento por contener la rabia y la tristeza que la invadían junto con sus recuerdos. ¿Como puede salir uno adelante tras haber sufrido la crueldad de la guerra durante años?, se pregunta.

Para Venus, la respuesta es escribir sus vivencias y narrarlas. Hacerlo le produce un efecto terapéutico. Cuando habla de ello, su semblante cambia, y adopta una actitud más activa; se muestra incluso risueña... “Escribir es una vía de escape”, admite. Venus ejemplifica lo terapéutico con el caso del exterminio de la Unión Patriótica:

Los casos más emblemáticos yo los tengo escritos. Porque era un escape, lo que llamamos nosotros hacer el duelo. La gente no quiere enfrentarse

a la realidad, y la única forma de poder tener paz con uno mismo es sacar eso que nos está haciendo tanto daño.

La Unión Patriótica (UP) fue una organización política colombiana de izquierda, nacida en 1985, con la intención de desarrollar una propuesta de paz para el conflicto armado en Colombia. Según el artículo “Unión Patriótica, verdad, justicia y reparación”, realizado por Diana Cubides, Celia Durán, y Melissa Ríos y publicado en la revista *Inciso* de la de Universidad La Gran Colombia⁵, el partido político UP fue concebido por “la sociedad, sectores políticos y los mismos grupos armados” y es el fruto de las negociaciones adelantadas entre las farc y el gobierno colombiano en la década de los ochenta. De hecho, los Acuerdos de “La Uribe”, el primer acuerdo político logrado entre las farc y el gobierno colombiano, firmado en 1984, reconocía en su punto número 6 que las farc se organizarían como fuerza política y que el gobierno les otorgaría: “las garantías y los estímulos pertinentes” para el desarrollo de su organización política, en el marco de las leyes y la Constitución Política colombiana.

No obstante, desde el inicio del partido, sus militantes empezaron a ser perseguidos, amenazados, desaparecidos y asesinados. La violencia contra la UP dejó a 4153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas a manos de grupos paramilitares, fuerzas de seguridad del Estado y narcotraficantes. Venus dedicó gran parte de su carrera profesional y de su actuación como defensora de los derechos humanos a investigar y denunciar los crímenes cometidos contra la UP, al respecto agrega que: “Los familiares no querían saber nada de los asesinatos porque decían que no les iban a devolver a sus seres queridos, pero, al final,

5 Este documento puede revisarse leerse a través del siguiente link <https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/82>

sacábamos a flote del subconsciente el dolor y conseguimos ese alivio espiritual”.

Cuando los brazaletes que luce Venus golpean la mesa de cristal del salón, sus palabras son enfáticas, rotundas. El sonido metálico retumba en la sala cuando afirma que las víctimas que cuentan lo ocurrido hacen un proceso de sanación. “Están sacando de lo más profundo de su ser todo eso que les está haciendo daño. Y es una forma de paz consigo mismas, de tranquilidad, de poder llegar a la tolerancia”, remarca. Venus hace silencio por un momento, pero no puede contener una risa que pasa a explicar: “Tolerancia, pero después le doy duro”, ironiza. Su frase evidencia cómo algunos sectores de la sociedad colombiana —los poderosos—, pese a ofrecer públicamente su perdón y su ánimo de reconciliación, se niegan a deponer sus armas, debido a su pensamiento cargado de violencia.

El relato de las vivencias que Venus escribió en *Un instante en la vida* de demuestra la importancia de la narración como función terapéutica para las víctimas. Hace casi diez años inició su ejercicio de catarsis donde dejó escritos algunos de los episodios más violentos que vivió a lo largo de su infancia. En sus memorias, la abuela de Venus aparece como su propia heroína. A ella agradece el hecho de haber superado sus traumas de infancia ligados a la violencia vivida.

Asimismo, para Venus, en la sociedad colombiana el machismo y la exclusión a la mujer son problemas plenamente activos. Tan solo en febrero de 2020, 46 mujeres fueron asesinadas en el país, según datos del Observatorio de Femicidios en Colombia. Por eso, la activista de los derechos humanos en el Tolima recalca que su accionar se centra especialmente en la defensa de los derechos de la mujer: “Las mujeres tienen una afectación por

partida doble: una, cargar con el peso del machismo, otra, enfrentar la realidad de sacar adelante sus hijos. Son unas guerreras, eso téngalo por seguro”, subraya. Pero, por más de que su eje de acción sean las mujeres, Venus no menosprecia la necesidad de que los hombres y las mujeres luchen unidos, en el sentido que:

Lo que hemos ganado como mujeres ha sido también por el esfuerzo y el trabajo de muchos hombres. Tenemos casos hermosos de hombres que han dado la vida por proteger a otras mujeres, dentro de este esquema machista que todavía no hemos podido superar.

Reconciliación y perdón van de la mano

La conversación sobre el relato de las víctimas deriva en reflexiones acerca de la necesidad de afrontar el duelo provocado por el sufrimiento. La voz de Venus denota un convencimiento total cuando reconoce que el rencor no sirve para nada, y que la reconciliación lleva implícito el perdón. Un sentir evidenciado en palabras, como: “Hemos perdonado, por algo estamos aquí, por algo llamamos a la reconciliación, a la unión, por algo queremos vivir en paz. ¿Eso qué quiere decir? ¡Que hemos perdonado!”

El primer paso de —como víctimas del conflicto— para poder superar lo ocurrido es perdonar, pero la reparación también juega un papel clave. Venus asegura que las víctimas del conflicto armado necesitan una reparación económica, una restitución del nombre, de la verdad y, sobre todo, una memoria histórica: “Es lo que se conoce como reparación integral”, explica.

La reparación integral como derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del DIH ha sido reconocida a partir del conjunto de normas del derecho internacional, que

imponen a los Estados obligaciones en materia de respeto y garantía a los propios derechos humanos. Sin embargo, la reparación de las víctimas supone, hoy día, uno de los mayores desafíos a los que Colombia se enfrenta dentro del proceso de paz. Se trata de un reto gigantesco. La Unidad de Víctimas, como organismo institucional que gestiona los programas de reparación, ha registrado un total de 8.970.712 víctimas, de las cuales más de 7 millones han sido categorizadas como sujetas de atención y/o reparación.

La reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que hasta el año 2005 había sido desatendida por el Estado colombiano, constituye un tema fundamental. Según el estudio de la investigadora Claudia Martínez Sanabria denominado *La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de la justicia transicional*⁶, la negación del derecho a las víctimas ha implicado el incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en diversos tratados de derechos humanos. El olvido de la aplicación de sus obligaciones ha significado para el Estado millonarias condenas internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reiterado la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones, así como de garantizar la debida reparación a las víctimas.

Venus advierte que otra forma de reparación es “que la memoria sea tenida en cuenta en los centros de enseñanza, en los colegios, en las universidades... Para que se sepa qué fue lo que pasó y la juventud no vuelva a pasar por lo mismo”. No obstante, lamenta que Colombia no tenga memoria... “Si el país tuviera realmente memoria, no estaría repitiendo la misma historia”,

confiesa con rabia. A Venus le aterra la idea de que alguien, en un futuro, tenga que ser testigo del sufrimiento que ella vivió en carne propia y apunta: “Yo me considero hija de la violencia. Si pudiéramos hacer un relato de todo lo que recuerdo desde que era niña, entonces eso sería para no repetir lo vivido”.

De su voz se desprende una mezcla entre tristeza e indignación cuando habla de la paz en Colombia. “La paz empieza por justicia social, y ¿qué es lo que nosotros vemos en las calles? La pobreza absoluta”. De su voz reverbera un tono de convicción y de empoderamiento, características que reflejan su papel como lideresa social.

Atenerse a las consecuencias

Ser líder social hoy en Colombia implica una serie de riesgos que no todo el mundo está dispuesto a correr. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de enero a marzo de 2020 fueron asesinados 71 líderes sociales en Colombia. Además, la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que en 2019 se reportaron más de 1300 amenazas a defensores de derechos humanos. Los y las líderes sociales deben soportar amenazas de muerte, llamadas telefónicas intimidatorias y todo tipo de acosos por defender los derechos humanos. Como lideresa social, Venus Quiroga también ha vivido experiencias similares debido a que, en su trabajo de defensora, tuvo que enfrentarse al ejército en su labor de denuncia. “Todo el que se atreva a desafiar al Estado lleva las de perder” o “Aténgase a las consecuencias”, le decían.

Saber quién está detrás de los crímenes es, aún hoy, para los colombianos: una incógnita. Hay que señalar, sin embargo, que las zonas donde se han producido más crímenes en los últimos

años coinciden con los territorios donde existe una presencia elevada del narcotráfico. Según recalca, a finales de 2019 el entonces Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y —desde febrero de 2020 hasta el final del período presidencial de Duque— el Fiscal General de la Nación en Colombia, Francisco Barbosa, los crímenes ocurren en municipios con alta presencia de grupos armados, donde además existe, una lucha por el control de las rutas del narcotráfico. Asimismo, de acuerdo con informes presentados por la Universidad Nacional de Colombia, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Comisión Colombiana de Juristas, otro elemento que debe considerarse a la hora de tratar los crímenes contra líderes sociales es la falta de garantías de seguridad por parte del Estado colombiano. Según los informes, casi la mitad de los líderes muertos han sido asesinados en sus viviendas, lo que Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, califica como una “actuación metódica y selectiva”.

Las cifras de impunidad en los casos de los líderes son también sorprendentes. Los reportes de las investigaciones demuestran que casi el 90 % de los casos queda sin esclarecer, y en los supuestos donde aparecen evidencias claras se ven implicadas organizaciones paramilitares (en el 17,12 % de los casos), disidencias de las farc (7,39 %), así como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (5,45 %). Un dato⁷ que demuestra, en parte, la falta de implicación por parte de las instituciones públicas colombianas en resolver los asesinatos de líderes y lideresas sociales.

7 Ver el informe “¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Octubre de 2018.

Pese a los escalofriantes datos, no se perciben atisbos de duda en la voz de Venus cuando afirma que “llega un momento en que uno pierde completamente el miedo”. Parece no haber otra alternativa cuando toda su vida gira alrededor de los derechos humanos en un panorama en el que sus defensores son amenazados y asesinados de forma sistemática. Con media sonrisa comparte el momento en que tres coroneles tuvieron que ser expulsados de una Mesa de Transparencia por pelearse con ella. “¡Cállese mujer!” ordenaban. Pero ella no cesó en su lucha. En la Mesa de Transparencia exponían los casos de violencia contra campesinos, por lo tanto, el enfrentamiento contra el ejército era directo. Al respecto, la experimentada defensora de los Derechos Humanos, pregunta:

¿Cuántos asesinatos nos llevamos? Van poco a poco, hasta que acaban con ellos. La violencia en Colombia no ha terminado y esto va para largo, y lo mismo pasa con los líderes sociales. Todo aquel que vaya en contra del establecimiento lleva las de perder.

Su dictamen parece dejar poco espacio para la esperanza en Colombia, y menos aún para los defensores de los derechos humanos. Ella misma parece reflexionar en sus palabras. Pese a todos los obstáculos que se presentan para allanar el camino hacia una paz que parece inalcanzable, argumenta, las mujeres no pierden la esperanza; se empoderan y alzan sus voces para intentar una reconciliación nacional más que necesaria para sanar heridas. Venus anima a la gente, como la lideresa social que es, a “salir a las calles precisamente para eso, para conseguir un cambio estructural del sistema”.

En los tres encuentros que tuvimos Venus repetía con énfasis la misma frase que incita a la reflexión y que deja claro que ella, que su trabajo, no es caja de resonancia de ningún actor político

ni armado. “Tengo muy claro mi papel de defensora de derechos humanos. Yo no me he dejado manosear por nadie”, dice con absoluta determinación.

Segundos antes de que la cámara deje de grabar, Venus se recuesta en el respaldo de su silla victoriana. Adopta una postura más relajada y con una sonrisa que le atraviesa el rostro, dice: “me gustaría saber qué barbaridades he dicho”. Tras risas cómplices del equipo de cámaras que revoloteó por todo el salón en la mañana cálida de Ibagué, Venus Quiroga toma su teléfono móvil y comparte con el equipo su mayor hobby: asistir a bailes de salón. “Es gracioso —dice— porque bailamos con personas de ideologías totalmente opuestas”. Venus lleva su mochila de líder social a todas partes, no es algo que uno pueda ponerse y quitarse como si fuera un sombrero, pero encuentra huecos para disfrutar del baile y de la música folklore con la que tanto disfruta. En sus pasos y vueltas de los bailes, vuelve a viajar, y a olvidar, durante algunos instantes, las marcas en el alma que le ha dejado el conflicto armado.

CAPÍTULO 11

MUJERES EN PIE DE PAZ. LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEMORIA DE LAS MUJERES SUPERVIVIENTES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO DESDE SUS TERRITORIOS



Se abre el telón en un pequeño teatro de barrio de Bogotá. En el escenario se puede ver a mujeres que interpretan a lideresas sociales en su trabajo cotidiano por la comunidad. Escuchan las necesidades de ancianos, niños y otras mujeres. Crean redes de soporte mutuo.

La obra avanza hasta su punto de no retorno. Una de las lideresas es asesinada y otra de ellas es abusada sexualmente. Quieren callarlas, amedrentarlas. Los grupos armados que llegan al pueblo se apoderan de las tierras y quieren que las mujeres salgan de allí. Candelaria, la protagonista de *La Comadre*, se despide de sus cul-

tivos, de su casa, de su tierra, se convierte en desplazada después de que los hombres armados asesinan a Pascual, su pareja.

Desplazada y en la gran ciudad, Candelaria busca el contacto y la complicidad, el comadreo de otras mujeres víctimas del conflicto armado. Juntas, tejen las maneras de retomar el proceso organizativo que habían iniciado en su añorada tierra de origen.

Candelaria protagoniza la trama de la obra de teatro que la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE)⁸ —integrada dentro de la Asociación Nacional de Afrocolombianos (AFRODES)— ha creado y representado de forma colectiva en numerosas ocasiones y escenarios, desde que se ideó, a principios de 2019. Según informa la coordinadora nacional de La Comadre, Luz Marina Becerra, hasta diciembre de 2019 la habían representado 5 veces. Una de ellas, en las oficinas de ACNUR en Bogotá.

“El nombre de la obra, ‘La Comadre’, reivindica lo que somos en las comunidades, en nuestras comunidades de origen, las comadres juegan ese papel de hermandad, de solidaridad, de lucha... Entonces, cuando salimos desplazadas y llegamos a las ciudades, queremos retomar esas luchas para ver cómo hacemos vivibles las violaciones de derechos humanos y cómo mantenemos nuestras prácticas culturales ancestrales en las ciudades”, explica Luz Marina.

La obra de teatro es una de las nuevas estrategias que La Comadre ha diseñado para visibilizar lo que sus integrantes, mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, han sufrido. Con esto, la coordinadora nacional de La Comadre remarca que:

8 El portal web puede consultarse a través del siguiente link <https://lacomadreafrodes.wixsite.com/lacomadre>

Hemos construido una obra de teatro a través de nuestras propias historias de vida para llevar nuestro mensaje a la sociedad colombiana, sobre todo a las ciudades ajenas al conflicto. Para que sientan qué es lo que vivimos nosotras. Creemos que es necesaria una obra así porque sentimos que hemos entrado en un proceso de ‘anestesiamiento’ y naturalización de la violencia.

El otro mensaje que las mujeres de AFRODES comunican con la obra es lo que para una comunidad significa la pérdida de una lideresa: “Queremos que la gente se dé cuenta de lo que pasa cuando asesinan a una líder. No es solamente la pérdida humana, sino es el rompimiento de un proyecto social comunitario, es un daño colectivo”, afirma Luz Marina. Y no esconde su orgullo: la obra está generando más impacto de lo que nos esperábamos, hasta el punto de poder mostrarla en muchos sitios a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es lo que queremos, que la gente del país se sensibilice y se movilice para decir no más al conflicto, pero también que se vea a nivel internacional, ya que después del Acuerdo de Paz muchos países han quitado los ojos de Colombia porque se creen que ya no hay conflicto armado.

Pero Luz Marina, junto con muchas otras lideresas y líderes, así como organismos de defensa de los derechos humanos y de seguimiento de conflictos armados, denuncian que la paz firmada hace cuatro años aún no se ha acabado de materializar. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz se han asesinado 198 excombatientes en proceso de reincorporación, según reportaba la Misión de Verificación de la ONU en Colombia en mayo de 2020⁹.

La violencia no ha terminado. De hecho, tanto el accionar de las bandas criminales conocidas como “BACRIM” —grupos paramilitares que continuaron con las acciones armadas aún después

9 Esto puede constatarse a través del portal: <https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-de-la-misi%C3%B3n-de-verificaci%C3%B3n-de-la-onu-en-colombia-0>

del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2003—, como los grupos guerrilleros disidentes del proceso de paz, exigen que se deba hablar de “posacuerdos” y aún no de “posconflicto”, tal y como apuntaba el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2017¹⁰.

La lideresa de La Comadre también resalta la ampliamente conocida conexión entre la violencia y el narcotráfico, que afecta en un porcentaje más alto a las comunidades negras debido a las condiciones de pobreza que sufren de forma más frecuente:

Lo más triste es que el conflicto se ha recrudecido en las comunidades negras; las mujeres siguen sufriendo por el reclutamiento de sus hijos, porque estos grupos les entregan un arma. Son sus hijos los que están siendo vinculados a la venta y consumo de drogas, y son asesinados.

Más de medio siglo de conflicto armado ha dejado un rastro de 9.014.766 víctimas. De estas, más de 4,5 millones se identificaron como mujeres. En Colombia, las mujeres representan la mitad del total de víctimas de la guerra, según las cifras de mayo de 2020 presentadas por el Registro Único de Víctimas (RUV)¹¹. Pese a la indudable afectación de las mujeres en la guerra, su participación en las negociaciones y acuerdos de paz en la historia reciente de Colombia ha sido residual. La lucha por su inclusión en la mesa de La Habana fue también para ellas un camino lleno de obstáculos.

Según señala Anabel Garrido Ortolá¹², investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, tan solo cuatro mujeres participaron

10 Recuperado de <https://noticias.caracoltv.com/colombia/no-se-puede-hablar-aun-de-pos-conflicto-sino-de-posacuerdo-comite-internacional-de-la-cruz-roja>

11 <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

12 En la siguiente dirección: <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/60270/4564456553349>

en los cuatro acuerdos realizados entre el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y los grupos guerrilleros. De manera que ellas solo representaron el 7,14 % del total de negociadores. Adicionalmente, en los 18 acuerdos alcanzados durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), la participación de las mujeres fue de tan solo el 1,97 %, es decir: tres mujeres entre 149 hombres.

En el periodo de Álvaro Uribe (2002-2010), la exclusión de las mujeres fue total: en la firma de 12 acuerdos negociados con 64 hombres, no había ni una sola mujer. Una ausencia que, tal y como reflexionan las investigadoras Lina María Céspedes-Báez y Felipe Jaramillo Ruiz, mandaba el mensaje de que la guerra era un asunto de hombres.

Por último, en las primeras mesas de negociación del más reciente Acuerdo de Paz alcanzado, firmado en 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las farc, Timoleón Jiménez (Timochenko), también hablaron solo voces masculinas. Parecía que otra vez las mujeres iban a ser excluidas de la esfera política, que su sufrimiento de la guerra volvería a ser invisibilizado, ignorado. Pero mujeres de todas partes del territorio, víctimas supervivientes cansadas de ser tratadas como sujetas pasivas, lo impidieron.

Una silla para las mujeres en la mesa de paz

A mediados de 2012 en Colombia soplaban vientos de esperanza: se empezaban a escuchar palabras como “paz”, “negociación” y “alto al fuego”. Hacía dos años que Juan Manuel Santos (2010-2018) había relevado a Álvaro Uribe (2002-2010) en la Presidencia de la República. La política uribista de “Defensa y Seguridad Democrática” había dejado, en sus 8 años de doble mandato,

más de 2,4 millones de nuevos desplazados¹³ vinculados al auge del paramilitarismo, e incluso al accionar irregular de las fuerzas del orden. El nuevo gobierno quería intentar una estrategia de diálogo para poner fin al conflicto con las farc y aprovechar que la insurgencia había sufrido golpes muy importantes, luego de ocho años de la intensificación de las acciones armadas para doblegar militarmente a las farc.

El 4 de septiembre de 2012 Juan Manuel Santos confirmaba que las negociaciones con las farc comenzarían hacia el mes de octubre en Oslo tras seis meses de “conversaciones exploratorias”. Ambas partes firmaron una hoja de ruta constituida por cinco puntos, a saber, el problema de la tierra, el abandono de las armas, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida política —que actualmente conforman la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común—, la solución de la problemática del narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto.

En el artículo 3 de la resolución 339 del 19 de septiembre de 2012, que establecía las reglas de funcionamiento de la mesa de conversaciones, el Gobierno colombiano designó a sus plenipotenciarios, que eran todos hombres. “Alegando una supuesta neutralidad, ignoraban la necesidad de aplicar una perspectiva diferencial de género para evaluar los abusos del pasado”, afirman Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez, investigadoras de la Universidad Simón Bolívar.

Según María Vilellas, investigadora de la Escuela de Cultura de Paz de la Universitat Autònoma de Barcelona, la ausencia de las mujeres

13 Recuperado de <https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/9713>

en los diálogos de paz se debe a que “ha habido una falta deliberada de esfuerzos para integrarlas en procesos de paz formales”. Delante de la vulneración de sus derechos de participación y representación, las mujeres, organizadas, recordaron al gobierno colombiano los compromisos internacionales que había suscrito en materia de igualdad de género y derechos humanos.

“Cuando se instala la mesa de negociación de paz en un primer momento, las mujeres recurren a la [resolución] 1325 para denunciar que no había presencia de mujeres en ella, y buena parte de la emergencia de lideresas viene de ese momento”, explica Luz Piedad Caicedo¹⁴, subdirectora de la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad fue aprobada por unanimidad el 31 de octubre de 2000. La resolución reconoce el impacto desproporcionado y único de los conflictos armados en las mujeres y los niños, y hace un llamado a adoptar una perspectiva de género en los procesos de paz. La normativa se focaliza también en la importancia y el derecho a la participación de las mujeres en los procesos de paz.

Según Caicedo, la resolución 1325, que conmemora su vigésimo aniversario en el año 2020, fue impulsada por los movimientos feministas, aunque el hecho de que sugiera el aumento de mujeres en los ejércitos hace que sea muy criticada por algunos sectores feministas. Además, pese a salir de una de las “estructuras duras” de la ONU —el Consejo de Seguridad—, es un documento débil porque “insta”, pero no obliga.

14 En <https://somosperiodismo.es/historias/una-silla-para-las-mujeres-colombianas-en-la-mesa-de-paz/>

“Como dicen las abogadas, no es un instrumento que tenga dientes, y eso dificulta cómo exigir su cumplimiento”, comenta Caicedo. Muy crítica, la subdirectora de la Corporación Humanas denuncia que “ni siquiera la ONU se la ha creído, ya que la propia organización no cumple las cuotas mínimas de participación de mujeres”. No obstante, Caicedo reconoce que al menos estos documentos les permiten “exigir unos mínimos”.

Por su parte, el organismo estadounidense especializado en política exterior Council on Foreign Relations (CFR) asegura¹⁵ que cuando las mujeres participan en los procesos de paz, hay un 64 % menos de probabilidades de que los acuerdos fallen. Adicionalmente, hay un 35 % más de probabilidades de que esos acuerdos permanezcan en el tiempo. Sin embargo, las cifras de participación femenina en las negociaciones de paz son muy bajas, tanto como su representación en los acuerdos alcanzados. De 1.187 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2017, solo en un 19 % de ellos se hace referencia a las mujeres, y solo el 5 % de los pactos se refieren a la violencia de género durante el conflicto.

En este contexto de pugna internacional feminista por conseguir la inclusión de las mujeres en los procesos de paz, nace en Colombia Mujeres por la Paz. En su acta de conformación, fechada en octubre de 2012, las mujeres le exigieron al Gobierno y a las farc que no se levantaran de la mesa de conversaciones hasta que no se hubiese firmado el compromiso de poner fin a la guerra y construir la paz, tal y como recogen Fernández-Matos y González-Martínez. Dos meses más tarde, el 4 de diciembre de 2012, Mujeres por la Paz elaboró el manifiesto “*La paz sin las*

15 En la siguiente fuente de búsqueda <https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/why-it-matters>

*mujeres ¡No va!*¹⁶, que expresaba la necesidad de que las mujeres asumieran un rol protagónico en las negociaciones entre el Gobierno y las farc.

De acuerdo con los planteamientos de María Villellas, las mujeres se encuentran con un doble desafío por delante: primero, conseguir tener presencia en las mesas de paz, que se tienen por espacios de masculinidad hegemónica tan marcados por el género como las guerras. Segundo, una vez en las mesas, lograr que se incluya la perspectiva de género en los acuerdos.

Los reclamos de Mujeres por la Paz y los de tantas otras organizaciones de mujeres fueron parcialmente escuchados. En 2013, más de 400 mujeres se reunieron en la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y, como respuesta, el gobierno colombiano nombró dos mujeres plenipotenciarias en las mesas de diálogo de La Habana. Al año siguiente se creó la Subcomisión de Género adscrita a la mesa de negociación de La Habana, la primera en el mundo de este tipo, después de la creada en el proceso de paz fallido de Sri Lanka (2003).

La presencia de mujeres en las negociaciones de La Habana abría, así, la posibilidad de imaginar nuevas agendas que incluyesen las necesidades de las mujeres. Nuevas agendas de construcción de paz que no fueran excluyentes, pues, como señala María Villellas, “desde la perspectiva feminista, los procesos de paz llevados a cabo hasta el momento han sido insuficientes porque el final de los conflictos armados, para muchas mujeres, no ha significado automáticamente el fin de la violencia”.

16 Esta información puede consultarse en https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/121/la_paz_sin_las_mujeres_no_va_el_proceso_de_paz_colombiano_desde_la_perspectiva_de_genero

La importancia de la perspectiva de género en los Acuerdos

En 2014, las mujeres ya habían logrado tener un par de sillas en las negociaciones, así como una Subcomisión de Género, y 36 de las 60 víctimas del conflicto armado que viajaron a La Habana para dar sus testimonios y ofrecer recomendaciones a la Mesa de Negociaciones, fueron mujeres. Sin embargo, la participación de colombianas en el proceso de paz no significaba automáticamente un cambio sustantivo en el contenido y la perspectiva de los acuerdos.

Estebana Ortiz, lideresa social colombiana y experta en equidad de género, exiliada en Barcelona después de ser amenazada de muerte, considera necesario “aplicar la perspectiva feminista a la percepción del conflicto armado para conseguir la paz; un proceso de paz que permita crear nuevos discursos, cuestionar el patriarcado y aplicar la lógica y la ética feministas en los acuerdos”.

Según Ortiz, para lograr unos acuerdos reparativos y con perspectiva de género, “las víctimas deberían tener un rol protagonista dentro de una mesa de negociación, recogiendo su memoria, ya que ellas le pondrían conciencia, pecho y mente a los hechos como tal”.

En el caso del Acuerdo de Paz colombiano de 2016, la importancia de la presencia de las mujeres en el proceso fue señalada por quienes participaron en la mesa de conversaciones de La Habana. Esta es una de las conclusiones del texto *La paz sin las mujeres ¡No va! El proceso de paz colombiano desde la perspectiva de género*, publicado en 2019 por Fernández-Matos y González-Martínez.

Asimismo, la Corporación Humanas y la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, constataron el papel fundamen-

tal de las mujeres en la inclusión de temas relevantes en la mesa de diálogo. A través de entrevistas a las mujeres que participaron en la mesa de negociación, las organizaciones aseguraban que:

el proceso de paz y el Acuerdo Final habrían sido diferentes sin su participación, pues sin las mujeres las discusiones sobre la igualdad de género, la importancia de la voz de las mujeres en la construcción de la paz y el tratamiento diferenciado de menores de edad seguramente no se hubiesen dado.

Además, en el punto sobre víctimas del Acuerdo se garantizaba que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respondería a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y de género.

Diferentes mujeres víctimas-supervivientes entrevistadas en marzo de 2020 en el departamento del Tolima valoran positivamente los Acuerdos de Paz. Aun así, matizan algunos aspectos y, sobre todo, consideran indispensable que se trasladen del papel a la realidad. Leonoricel Villamil, lideresa de la organización Voces de Mujeres Rurales Urbanas por la Paz de Gaitania, oriunda de Gaitania —un municipio ubicado en el sur del Tolima y marcado históricamente por el desarrollo del conflicto—, resaltó la importancia de los acuerdos para la gente del campo:

Estoy agradecida con el gobierno de Santos que, en medio de las discordias, y que a muchos no les gustó, se puso los pantalones y tuvo ese acuerdo de paz, en el cual los que nos hemos visto beneficiados somos los campesinos, los que vivimos la guerra. Porque el que está en la ciudad no sabe qué es una guerra, no sabe qué es un conflicto y qué es vivir en el campo.

A su vez, Flor Múnera, defensora de los derechos humanos e integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,

considera que es fundamental que se incluya la perspectiva de género en los acuerdos de paz. Según ella:

es muy importante lo que se firmó para las mujeres, y sobre todo tan importante es que la mujer fue botín de guerra, fue totalmente maltratada por todos los actores del conflicto armado. Nosotras pagábamos muchas veces las consecuencias de lo que podían hacer los hombres.

Sin embargo, pese al reconocimiento que les ha supuesto que los Acuerdos de La Habana hayan incluido en uno de sus principales puntos la equidad de género, Leonoricel opina que ellas, las mujeres víctimas-supervivientes, solo están representadas en parte...

En parte sí, porque hemos trabajado para que la paz continúe, y la inclusión de la equidad de género ha sido vital para nosotras salir a reclamar y mostrar que lo podemos hacer. Pero en parte no, porque nosotras también hemos sido afectadas por el gobierno nacional, y en eso uno no ve justicia, uno no ve nada. Por eso, nosotras hacemos parte y reclamamos el esclarecimiento de la verdad, que tanto los Acuerdos como la JEP [la Jurisdicción Especial para la Paz] recogen. Si usted cuenta la verdad, está sanando. Y a eso es a lo que nosotros hacemos un llamado.

Para Luz Piedad Caicedo¹⁷, uno de los principales logros del movimiento feminista colombiano por la paz fue la transversalidad del enfoque de género, una mirada que, de acuerdo con ella, irritó a los sectores más conservadores del país:

Que se incluyera la perspectiva de género en los seis puntos de los Acuerdos de Paz fue lo que llevó también a que fuera rechazado en el referendo.

17

Ver: <https://eldiariodelaeducacion.com/educacion-por-la-paz/2020/12/02/una-silla-para-las-mujeres-colombianas-en-la-mesa-de-paz/>

Las iglesias y la derecha hicieron campaña en contra (...) Hablaban de la trampa de Santos, e hicieron una dura campaña en contra de los acuerdos, argumentando que estos querían imponer una ‘ideología del género’.

Mara Viveros Vigoya, investigadora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), coincide con Caicedo, y explica que “se ha creado un enemigo común, conocido como ‘ideología de género’, que corrompe a los niños y niñas y destruye los valores familiares, basándose en noticias falsas sobre la presunta distribución de manuales de educación sexual en los colegios”.

Según argumentan Viveros Vigoya y Rodríguez Rondón en su artículo “Hacer y deshacer la ideología de género²¹⁸”: “se trata de una estrategia de desinformación que utiliza el pánico moral para deslegitimar los conocimientos sobre las relaciones de género y sexualidad y los derechos alcanzados por las luchas del movimiento feminista”.

El enfoque de género de los acuerdos después de La Habana

Es conocido el resultado de la intensa campaña mediática en contra del proceso de paz. El primer redactado de los Acuerdos de Paz fue rechazado en el referéndum del 2 de octubre de 2016, donde el “No” ganó al “Sí” por una diferencia del 0,4 % (53.726 votos), y con una abstención de más del 60 % del electorado.

Después de la derrota del Sí, los signatarios hicieron modificaciones en los acuerdos originales para incluir propuestas de los

18 La lectura de este documento puede efectuarse a través de: <https://www.scielo.br/j/sess/a/3xbQvLcxB3nvdVwqngSgWHg/?format=pdf&lang=es>

partidarios del “No”, entre ellas, las que afectaban a los temas relacionados con los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. “Se borraron los términos GÉNERO y LGTBI de los acuerdos, así como se ha borrado de otros textos de la ONU, sustituidos por ‘mujeres’”, afirma Caicedo.

El propio expresidente Juan Manuel Santos así lo aseguró a los líderes religiosos¹⁹: “Vamos a sacar todo aquello que amenace a la familia, que amenace a la Iglesia y vamos a buscar una frase, una palabra, que no les dé temor a los creyentes”. En el nuevo acuerdo final, firmado el 12 de noviembre en La Habana, las menciones al enfoque de género se redujeron de 144 a 55. A pesar de los recortes, los acuerdos continuaban reconociendo que “el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos”, también en palabras de Santos.

Muchas feministas están de acuerdo con la afirmación de Santos y aseguran que el Acuerdo conserva el enfoque de género y, sobre todo, su gran logro: el punto 5, relativo a las víctimas del conflicto. Pero, pese al reconocimiento que mereció el proceso de paz por su perspectiva de género, según recoge el Council of Foreign Relations²⁰, finalmente las mujeres solo supusieron un 33 % de los participantes de las mesas de paz de las negociaciones finales, es decir, conformaron el 20 % del equipo negociador del gobierno y el 40 % del de las farc.

En el posacuerdo aún hay mucho por hacer para que el enfoque de género sea más que un enunciado, tal y como destacan los

19 Recuperado de https://elpais.com/internacional/2016/10/12/colombia/1476237985_601462.html

20 Ver en <https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/>

dos informes de seguimiento al enfoque de género realizados por el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, ONU Mujeres, la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) y el gobierno de Suecia.

Tras comparar los niveles generales de implementación del Acuerdo con los niveles de implementación del enfoque de género, el último de los informes²¹, publicado en agosto de 2019, concluye que “aún persiste una brecha entre ambos, con mayor rezago en el inicio e implementación de las medidas para la igualdad de género”. Por lo que respecta al análisis cualitativo, el documento destaca que “los mayores avances en los últimos meses se han presentado en el Punto 5 (Derechos de las Víctimas) mientras que, en otros puntos del Acuerdo (puntos 1, 2 y 4) se han evidenciado pocos avances”.

En los campos y ciudades muchas víctimas denuncian que los acuerdos no se cumplen, y mantienen su continua lucha por una paz que las incluya.

Cartografía de las colombianas por la paz

Desde la costa pacífica a la costa atlántica, desde las áreas rurales más impactadas por el conflicto armado, hasta los barrios de concentración de población desplazada, en las grandes ciudades, las campesinas, las amas de casa, las ganaderas, las productoras, las empresarias, las profesionales, las mujeres indígenas y negras, las lideresas con todos los acentos posibles —en un país diverso— llevan décadas luchando por ser escuchadas y reparadas. Ellas reclaman también el fin de las hostilidades.

21 Este documento puede consultarse en https://kroc.nd.edu/assets/345128/120519_informe_genero_digital.pdf

Ahora, las víctimas-supervivientes empoderadas reclaman que se cumpla lo pactado en los acuerdos de paz. Además de las organizaciones y lideresas que hablan directamente en este reportaje, a lo largo del territorio hay cientos de redes de mujeres de soporte mutuo, algunas que probablemente no tienen ni nombre, pero que hacen también una función de reconstrucción del tejido social y que aseguran el empoderamiento de las víctimas.

Según señala María Villellas en su artículo “La participación de las mujeres en los procesos de paz. Las otras mesas”²², tras haber sufrido el impacto de la violencia, las mujeres pueden comprender mejor a las otras víctimas. Además, por el hecho de ser mujeres y compartir luchas contra el patriarcado y la discriminación, también son capaces de empatizar con las mujeres “enemigas”.

Asimismo, para Nancy Arias, lideresa de la Mesa Departamental de Víctimas del Tolima, las mujeres víctimas-supervivientes del conflicto son las personas más indicadas para realizar esta labor por su capacidad de empatía y mediación. En sus palabras:

Las mujeres no nos enfocamos tanto en el roce de estar agarradas por pequeñas cosas. Los hombres viven buscando en todo momento el enfrentamiento. Por el tema del machismo es como que no son capaces de bajar la cabeza y pedir perdón, reconocer que la cagaron. Mientras que las mujeres sí.

Leonorcel Villamil también destaca cómo desde el territorio donde habita, en el corregimiento de Gaitania, las mujeres han demostrado su capacidad para construir paz, pese a los prejuicios machistas que las infravaloran:

22 Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5565208>

Creen que las mujeres no somos capaces de administrar y de manejar cosas y se equivocan, porque las mujeres somos más conscientes y organizadas, y lo hemos demostrado. De hecho, lo hemos demostrado en el corregimiento, en el municipio de Planadas, donde hemos trabajado incansablemente en el proceso de paz al que nos vinculamos sin miedo. Ya los miedos los vivimos en la guerra... Que no vayamos a retroceder [en la paz] por nada en el mundo, aunque nos toque intermediar a nosotras. Estamos acá paradas, con la frente en alto, para que no vuelva a ocurrir.

La construcción de paz y la lucha de las víctimas-supervivientes se remonta hasta antes del último proceso de paz. Un ejemplo de las muchas organizaciones de mujeres de todo el país que llevan años en defensa de los derechos de las víctimas-supervivientes es Narrar para vivir, una asociación de mujeres víctimas del municipio de Montes de María (fundada en el año 2000). Mujeres que cuentan relatos:

Aquellas que fuimos tomadas como botín de guerra decidimos organizarnos como una estrategia de resistencia civil de las mujeres y como forma de contrarrestar el dolor de la pérdida de los familiares, el sentido de la vida y duelos postergados. Realizamos encuentros basados en la confianza, acompañamiento psicosocial, la fuerza de la palabra y la tradición oral que va de generación en generación, con tal de salir de ese estado victimizante, reconstruyendo nuestros proyectos de vida y aportando a la reconstrucción del tejido social de las comunidades como gestoras de paz.

De la misma forma que Narrar para vivir, muchas de las asociaciones y redes de soporte mutuo están conformadas por mujeres víctimas de violencia sexual. Al comparar los datos generales y los desglosados por género del Registro Único de Víctimas de marzo y abril de 2020²³, se extrae que las mujeres

23 Según: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

constituyen el 51 % de las víctimas de desplazamiento forzado, el 47 % de las de homicidio y el 89,2 % de las de violencia sexual, dentro del conflicto armado colombiano.

Sobrevivir la guerra en el cuerpo y contarlo

El texto *La paz sin las mujeres ¡No va! El proceso de paz colombiano desde la perspectiva de género* (2019), recoge que “todos los actores del conflicto —Estado, guerrilla y grupos paramilitares— emplearon la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra; sin embargo, manejaron distintas modalidades”.

De acuerdo con las autoras del texto, Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez, los distintos grupos armados compartieron algunas modalidades de violencia sexual: “la más significativa de las cuales fue la violación: todas las partes en el conflicto violaron mujeres”. Por ejemplo, Luz Ángela Yate, actual gobernadora del resguardo indígena de Chenche Balsillas, situado en Coyaima (Tolima), fue violentada sexualmente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como muchas otras mujeres de su comunidad durante el conflicto armado. Al respecto, confiesa:

Mi comunidad fue azotada del 2000 al 2005, hubo muchas mamitas que se tuvieron que ir. Acá, tuvimos la entrada primero de la guerrilla y luego de las AUC. Ellos violentaron muchas mujeres, nos violentaron, porque yo soy una víctima más de eso. Y por eso **me siento fortalecida**. En mí, el miedo que tenía ya se me fue, pero es algo que a uno le queda marcado como mujer.

La gobernadora indígena, que lucha actualmente “por formar y hacer parte de una asociación de víctimas”, ha tenido el valor

de contar lo que le hicieron, y ahora trabaja porque las demás mujeres del resguardo también puedan explicar sus experiencias:

Esa es la idea mía para este año como líder de mi comunidad: buscar la forma de hablar con esas mamitas que tuvieron ese tipo de problemas, impulsar que ya no tenemos que tener ese miedo por eso que nos sucedió, sino que hay que comentarlo, ir a los entes en donde nos escuchen.

De igual manera, Luz Piedad Caicedo, quien además de subdirectora de la Corporación Humanas es antropóloga y politóloga, explica que “hay una parte de la violencia sexual que se instrumentaliza para castigar y desplazar a la población, pero hay otra parte que está naturalizada. Los soldados se creen que es seducción lo que realizan cuando van con un fusil en la mano”.

Caicedo cuenta que en el año 2005 decidieron organizarse para “formar un organismo que velara por la justicia de las mujeres víctimas de la violencia sexual, pero no solo en la guerra sino también en el contexto ordinario”. Así, la función de su organización es representar en los juicios a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y brindarles asesoría legal porque, según lamenta Caicedo, “la desinformación que tienen sobre sus derechos es lamentable”.

“Esta es nuestra forma de construir paz —continúa Caicedo—, apoyando a las víctimas, pero también asesorándolas en términos legales, para que empiecen a conocer sus derechos y no ignoren que la violencia sexual es un delito muy grave”. Un trabajo de asesoramiento legal, acompañamiento emocional y apoyo formativo y político similar al que hacen la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.

Sororidad para resistir el desplazamiento forzado

Otro de los principales hechos victimizantes del conflicto armado colombiano es el desplazamiento forzado, resistido por las mujeres supervivientes, cuando construyen redes de soporte. Más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia han generado el desplazamiento de más 8 millones de personas dentro de las fronteras nacionales, según los datos del Registro Único de Víctimas de mayo de 2020.

De hecho, a finales de 2019 Colombia registró el mayor número de personas desplazadas internamente a nivel mundial, y también fue el segundo país del mundo en número de acogida de refugiados, con 1,8 millones, según datos de la ACNUR²⁴, donde se incluye a los venezolanos desplazados en el extranjero.

De las víctimas del conflicto en Colombia, las personas desplazadas son el mayor grupo, y las mujeres y niñas —que representan más de la mitad del total de las personas desplazadas— son particularmente vulnerables. Según informaba Adri Villa, asistente de protección comunitaria de ACNUR, a mediados de 2018: “hay una profunda interconexión entre la violencia sexual y el desplazamiento”.

Adicionalmente, según constata el informe del Consejo Noruego para Refugiados apoyado por ACNUR *Buenaventura, Colombia. Realidades Brutales. Desplazamiento Forzado y Violencia Sexual Basada en Género*²⁵, publicado en 2014: “la agresión a la mujer es una forma de control, de superioridad por parte de un grupo armado ilegal y sobre todo una estrategia para apropiación del territorio, dado que generalmente la víctima de violencia sexual se ve obligada a desplazarse”.

24 <https://www.acnur.org/5eeaf5664>

25 <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9760.pdf>

Pero la vinculación entre violencia sexual y desplazamiento forzado no acaba aquí. Según los datos recogidos por la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Corporación Sisma Mujer, en 2009, el 52 % de las mujeres han sufrido algún tipo de maltrato físico, con posterioridad al desplazamiento forzado y el 36 % han sido forzadas por desconocidos a tener relaciones sexuales.

Las trabajadoras humanitarias explican que las mujeres desplazadas, preocupadas por necesidades inmediatas como encontrar comida y alojamiento y alejadas de las redes de apoyo de sus familias, son particularmente vulnerables a la explotación sexual mientras buscan cobijo en los márgenes de la sociedad.

Una de las cifras de personas desplazadas forzosamente hace referencia a Heidi Johanna Rojas, quien actualmente vive con sus dos hijos, su pareja y su madre en la vereda La Cabaña, en el municipio de San Sebastián de Mariquita (norte del departamento del Tolima). Ella es la cara de una de las cifras de desplazamiento forzado. Heidi Johanna narra las consecuencias de la llegada de los paramilitares a su comunidad y explica las afectaciones personales que le supuso el desplazamiento forzado:

Yo salí desplazada en el 2005. Me hicieron ir de mi casa porque decían que nosotros teníamos que ver con la guerrilla. Para evitar malentendidos nos tocó salir (...) Sí me considero víctima, porque en ese entonces yo vivía bien acá. Como pobres, pero no nos hacía falta la comida o el techo. Y que llegue de la noche a la mañana un grupo de gente que te diga que te tienes que ir para evitarles inconvenientes y tienes hasta tal plazo y si no, te atienes a las consecuencias... Eso me marcó, aparte de ver que lo citaban a una para una reunión y en la misma cogieron a un muchacho y delante de toda la comunidad lo ultimaron ahí, en la escuela. Yo decía, si eso pasó delante de la comunidad, qué le pueden hacer a una. [Cuando se desplaza] una deja de vivir muchas cosas, esos años en los que me fui no pude estar con mi mamá.

Desde su regreso a La Cabaña, Heidi ha focalizado sus esfuerzos en que las mujeres adultas de su comunidad puedan estudiar en la vereda y también en crear una asociación de mujeres para producir y comercializar el aguacate y su producto derivado, el guacamole. De este modo, busca conseguir una autonomía para ellas y también ser un modelo para sus hijos.

Igual que Heidi, para sobrevivir a la condición de desplazamiento forzado, muchas mujeres se organizaron, tejieron redes de soporte mutuo y de sororidad. Una de las formas de organizarse y resistir a la situación adversa que viven es asociarse en proyectos productivos. La Cooperativa Agropecuaria de Mujeres del Valle Encantado – COAGROMUVE, ubicada en el municipio de Montería (Córdoba), es un ejemplo de los cientos de casos de uniones de mujeres en Colombia que sueñan iniciativas juntas. COAGROMUVE, liderado por la nominada al Nobel de la Paz María Zabala, consiguió que el Estado colombiano les adjudicara, en 1998, la finca “La Duda - El Tomate”, siendo así las primeras mujeres que lograron ser propietarias de una finca otorgada por el Estado.

Según menciona Yusmidia Solano Suárez, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, las mujeres del Valle Encantado han logrado que, en su finca, de 128 hectáreas, no imperen los grupos armados, que los paramilitares les devolvieran los jóvenes que habían reclutado y, a su vez, que este lugar sea denominado “la última cuna de las Amazonas”, es decir, un lugar en el que gobiernan las mujeres.

Otro ejemplo similar en Montería es la Asociación de mujeres la Esmeralda-Nuevo Horizonte (ASOESMERALDA), una organización de mujeres campesinas víctimas del desplazamiento, fundada en 1998, cuando 45 mujeres desplazadas por la violencia fueron reubicadas en una finca de Montería. Las mujeres de

ASOESMERALDA se autoorganizaron para salir de la precariedad material y sacaron adelante su comunidad rural en paz. En su empoderamiento como campesinas desplazadas han realizado todo tipo de labores y han conformado diversos comités, como el de ecología, agricultura, ganadería, huertas caseras y fondo rotatorio, como explica la profesora Solano Suárez, en su artículo *Procesos de resistencia y reconstrucción colectiva emprendidos por mujeres desplazadas por la violencia en Colombia*²⁶.

La Asociación Olla Comunitaria, también en Montería, es otro proyecto comunitario impulsado por la Organización Mujeres Siempre Unidas del Medio Sinú, para alimentar a la población desplazada que llegaba a la capital de Córdoba. El colectivo ha obtenido logros importantes en el desarrollo de proyectos productivos y de una guardería para las niñas y niños de las socias y de otras madres trabajadoras de la comunidad.

Similar a la Olla Comunitaria, en Ibagué (Tolima) opera la Asociación de Mujeres Desplazadas Semillas de Amor (ASMUDSA), una organización que tiene como misión entregar, mensualmente, víveres y ayuda económica a las personas necesitadas de la comunidad: “para poder ayudar a muchas mujeres madres solteras y necesitadas, huérfanos y viudas”.

Otros de los cientos de ejemplos de la organización de las mujeres que trabajan a favor de las víctimas del conflicto en Colombia son: la Liga de Mujeres Desplazadas (que trabaja en los municipios de Turbaco, Carmen de Bolívar y Cartagena), la Liga Internacional de Mujeres por La Paz y La Libertad Colombia (en Bogotá), la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida (en Mocoa, Putumayo), la Asociación de Desplazados “Revivir al futuro” (en

Soacha, Cundinamarca) o la Asociación Yo Mujer (en Bogotá). La larga lista de asociaciones de mujeres desplazadas recorre todo el territorio nacional.

Mujeres afrocolombianas e indígenas, testimonios de la afectación diferencial

Luz Marina Becerra es otra víctima de desplazamiento forzado y de violencia sexual que se organizó con otras mujeres para reclamar sus derechos y trabajar por la paz. Su asociación, la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (COMADRE) —integrada dentro de la Asociación Nacional de Afrocolombianos (AFRODES)—, nació en el año 2000 con el objetivo de ofrecer una alternativa autónoma en el acompañamiento diferencial, con un **enfoque étnico y de género**, a las mujeres negras.

A nivel personal, Luz Marina explica que se vinculó a AFRODES porque ella misma ha vivido afectaciones diferenciadas en el conflicto colombiano: “En mi familia hemos puesto diferentes muertos... Yo soy víctima del reclutamiento de mis hijos, de desapariciones familiares, de violencia sexual... en una sola mujer se concentran varios hechos victimizantes”. Desde el momento en que ella se vincula a la organización de mujeres asume la coordinación del área de género: “A partir de este proceso empiezo a ver y a identificar las afectaciones diferenciadas de las mujeres negras”, explica Luz Marina. Según datos de ONU Mujeres, las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectadas de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto: de 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5 % eran mujeres.

“Con este objetivo —continúa Luz Marina— en el año 2001 empiezan las primeras capacitaciones que dedicamos a la **formación de mujeres como sujetas de derechos**, en la ciudad de Bogotá. Después se propone hacer encuentros regionales en Cali, Tumaco, Quibdó, Bogotá y luego uno nacional. Hoy en día, La COMADRE tiene presencia en 23 territorios colombianos”.

Según Becerra, “uno de los fallos después de la firma de los acuerdos de paz es que no ha habido un proceso de atención psicosocial idóneo que ayude a superar las violencias del conflicto”. Por eso, desde la organización que coordina, llevan a cabo “dos propuestas de sanación desde los saberes y prácticas ancestrales”. La lideresa explica que

una de las propuestas, muy solicitada, se basa en la narración de las violencias sufridas por las mujeres, y busca ser un espacio de sanación para las mujeres de las bases de la COMADRE, un lugar que combine la psicología occidental con nuestras prácticas ancestrales de escucha.

“Las mujeres aún están muy afectadas, necesitan narrar todo esto que han vivido. Para sanar y reconstruir memoria. Cuando explicamos nuestras experiencias, nos trasladamos a nuestro territorio y sentimos paz”, cuenta Becerra. Luz Marina recuerda cómo la iniciativa de sanación surgió a partir del diálogo entre las mujeres que conocieron mientras realizaban el *Informe a la Corte Constitucional sobre la situación de las mujeres afrodescendientes víctimas del conflicto armado*²⁷, elaborado junto a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), para documentar el Auto 009 de 2015 de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, que reconoce la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad.

A finales de mayo de 2020, la Comadre entregó un nuevo informe, en este caso, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el *Informe de afectaciones, daños, resiliencia y resistencias de las mujeres afrodescendientes de La Comadre-Afrodes*²⁸. Tal y como advierte la Comisión:

el proceso de investigación colectiva que emplearon las mujeres de La Comadre muestra las afectaciones de un racismo estructural con violencias basadas en género como lo son la explotación laboral, sexual, el desplazamiento, desaparición forzada y la estigmatización por ser mujer negra.

Víctimas organizadas: “¡hasta que la ley nos repare!”

Las mujeres víctimas-supervivientes también han unido sus fuerzas para incidir en la legislación, entendida como fuente de restitución y garantía de derechos. Así, los cambios legislativos en favor del reconocimiento y la reparación de las mujeres víctimas-supervivientes del conflicto han sido en gran parte fruto del trabajo de incidencia de las propias organizaciones de mujeres.

La sentencia T-025 de 2004, por ejemplo, abordaba la situación de los desplazamientos forzados en Colombia y declaraba un “estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno, al constatar la vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de la población desplazada en el país”. Sin embargo, en la sentencia no se reconocían los peligros y las violencias específicas que sufren las mujeres desplazadas, por el hecho de ser mujeres.

28 La información detallada se halla en: <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/lienzos-y-bocetos-de-las-mujeres-negras>

Organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Casa de la Mujer promovieron en 2007 un foro, junto con magistrados de la Corte Constitucional, para abordar la afectación particular de las mujeres víctimas de desplazamiento forzoso. Con este y otros actos de reivindicación, lograron que en 2008 la Corte Constitucional de Colombia denominase las mujeres desplazadas como sujetos de especial protección, en el Auto 092²⁹ de seguimiento a la sentencia T-025. Fue la primera vez que la Corte Constitucional dictó un auto que reconocía los riesgos específicos que sufrían las mujeres en el conflicto armado y en el desplazamiento forzoso.

Según Luz Marina Becerra, el Auto 092 es clave porque “reconoce 10 facetas de género del desplazamiento forzado, así como los riesgos específicos de género en el conflicto armado y le ordena al gobierno que haga 13 programas específicos para solucionar los vacíos en la política pública en estos ámbitos”. La coordinadora nacional de la COMADRE destaca que uno de estos “es un programa específico de protección de las mujeres negras por la triple afectación que vivimos: el programa de Protección de los derechos de las mujeres afrodescendientes”.

Voces académicas como las de Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez también coinciden en la importancia del Auto. Lo consideran “un fallo histórico porque por primera vez una corporación de justicia analizaba la situación de las mujeres como colectivo frente a un hecho como el desplazamiento forzado”, según destacan sus publicaciones.

Respecto a la implicación de las víctimas, son relevantes los espacios de participación que abre la Ley de Víctimas y Restitución

29 Aquí un breve resumen de dicho pronunciamiento: <https://www.womenslinkworldwide.org/files/1272/resumen-del-auto-092-2008.pdf>

de Tierras de 2011 (Ley 1448)³⁰. En su título VIII, la Ley establece la creación de las Mesas de Participación de Víctimas, a nivel nacional, departamental, municipal y distrital. Adonái Rincón y Nancy Arias, hacen parte de esas mesas.

Pese a los avances que la Ley 1448 supuso, muchas de las afectadas por el conflicto aseguran que no tiene en cuenta la voz de las víctimas. Luz Marina Becerra menciona que “la 1448 tenía grandes vacíos y no reconocía lo que habían sufrido las comunidades étnicas”.

Aun así, los esfuerzos que las instituciones parecen hacer en materia de reparación son limitados, pues muchos no consideran el **proceso de revictimización** al que las mujeres pueden verse expuestas. Este escenario agudiza los impactos emocionales en la salud física, en el deterioro de la calidad de vida de las familias y, principalmente, en el hecho de poder reconstruir una ruta de vida.

Además, se observa una distancia considerable de lo decretado a lo materializado. Las leyes son buenas, pero las propias mujeres advierten de que no se cumplen. Según numerosos autores y organizaciones defensoras de derechos humanos, en Colombia se ha dado una inoperancia e ineficacia de los organismos del Estado encargados de brindar atención en salud física y mental oportuna. Organismos que, además, no han apoyado con todos sus recursos a la población víctima en la reconstrucción de condiciones para el goce pleno de sus derechos, según destaca la investigadora Liz Arévalo, en su artículo “Atención y reparación psicosocial en contextos de violencia sociopolítica: una mirada reflexiva”³¹.

30 Provisión que puede consultarse, aquí: <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf>

31 Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-885X2010000200003&script=sci_abstract&tlng=es

Por su parte, Amnistía Internacional³² reafirma también la inoperancia después de los acuerdos de paz de 2016. En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (de los años 2017 y 2018), afirma que:

las víctimas del conflicto armado exigían garantías de acceso a la justicia, así como garantías del derecho a la verdad, a la reparación y, en especial, a la no repetición de los abusos cometidos —como los desplazamientos forzados y la violencia sexual— para las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en peligro. Aún no se habían satisfecho esas demandas, y la viabilidad a largo plazo del acuerdo de paz se veía amenazada porque no se había llevado ante la justicia a quienes habían perpetrado crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos.

Como contrapartida, el mismo informe destaca que “las organizaciones de mujeres lograron que el acuerdo de paz estableciera que los sospechosos de haber cometido delitos de violencia sexual debían comparecer ante los tribunales de justicia transicional”.

Que se cumpla lo pactado

La falta de aplicabilidad de la reparación de las víctimas llega hasta nuestros días. Desde la firma de los pactos de La Habana, las demandas de reparación de las víctimas se han centrado en pedir el cumplimiento íntegro de los acuerdos. Además, muchas víctimas denuncian³³ que en el Plan Nacional de Desarrollo impulsado bajo el gobierno de Iván Duque no son reconocidas como lo recogen los propios acuerdos.

32 Para objeto de profundización, véase: <https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civircrm/persist/contribute/files/Informeannual2018air201718-spanish%20web.pdf>

33 En <https://pacifista.tv/notas/dia-victimas-ivan-duque-ley-conmemoracion/>

En septiembre de 2019, más de 500 organizaciones sociales y ONG presentaron un informe tras el primer año del presidente Duque en el poder. Tal y como subraya Amnistía Internacional³⁴: “sostenían que el Estado estaba imponiendo un programa de reforma agraria, sustitución de cultivos y ayuda a las víctimas distinto al establecido en el acuerdo de paz, y que estaba reduciendo los fondos para la implementación del acuerdo”.

A su vez, dichas organizaciones “también hicieron hincapié en que el gobierno no promovía legislación para aplicar las disposiciones del acuerdo, en que sus propuestas legislativas eran contrarias a dicho acuerdo y en que estaba socavando el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, según el propio reporte de Amnistía Internacional.

Posteriormente, en noviembre y diciembre de 2019, cientos de miles de personas salieron a la calle a manifestar su descontento por las posibles medidas de austeridad del gobierno de Iván Duque, así como para demandar que el gobierno cumpliera plenamente las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo de paz, y que hiciera más por impedir los homicidios de activistas sociales y exmiembros de las farc-EP.

Una de las víctimas-supervivientes que se ha organizado en su territorio para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz es Leonoricel Villamil, la única mujer miembro del Concejo de Planadas, el principal municipio cafetero del sur del Tolima. Leo, como se le conoce en el pueblo, dedica su acción política a luchar por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres rurales.

34 Consultar el portal <https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/>

Villamil es impulsora de la organización Voces de Mujeres Rurales Urbanas por la Paz de Gaitania, el corregimiento de Planadas donde ha vivido toda su vida y donde se ubica la famosa vereda Marquetalia, un lugar simbólico, puesto que es allí donde se inicia la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). A causa del conflicto armado Leo perdió buena parte de su familia. Cuando su hijo fue asesinado, en 2015, se dio cuenta en primera persona del dolor que la violencia causaba y decidió que las mujeres tenían que organizarse para poner fin a las muertes:

Quando perdí a mi hijo dije ‘¿Qué está pasando?’ Sentí en carne propia lo que vivía la otra, entonces les hice un llamado, las recogí y les dije: ‘Bueno mujeres aquí nos toca empoderarnos, participar, incidir, insistir y darnos a conocer para que nos visibilicen y sepan cuál es la vida y qué es lo que nos han tocado vivir’. De ahí ellas me acogieron, me escucharon y hemos participado en todo el proceso de paz de nuestro territorio.

Muy cerca de la finca paterna de Leo, también dentro de los terrenos del municipio de Planadas, se encuentra el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) El Oso, bautizado como “Marquetalia, Cuna de la Resistencia”, donde Yuliana Cepeda, antigua exguerrillera vive junto a su hija y otros excombatientes con sus familias. Ella también denuncia el incumplimiento de los pactos.

A los quince años Yuliana decidió ingresar a las farc. Después de los Acuerdos de Paz entregó las armas con la esperanza de conseguir una sociedad más justa por la vía pacífica. Ahora está decepcionada de la implicación del Estado en el proceso y denuncia el incumplimiento de los acuerdos sobre reincorporación de excombatientes: “Esto no es una reincorporación como la que se firmó. No estamos pidiendo todas las ayudas y que seamos la niña de los ojos del gobierno, no.

Solamente que cumplan. Cumplan porque yo pienso que, mal o bien, nosotros nos ganamos ese acuerdo”, afirma la exguerrillera.

Yuliana también critica las pobres condiciones de vida del ETCR donde viven y la manera como se llevan a cabo las capacitaciones enmarcadas en los procesos de reincorporación, ya que, aunque instruyen, no dan los recursos para luego llevar a cabo los proyectos productivos derivados del proceso educativo. “Yo digo, si vienen unas capacitaciones de cómo criar a un marrano, pues démosle el marrano. Para que ellos aprendan, pero no, eso no es así lamentablemente”, denuncia Cepeda.

Adonáí Rincón, lideresa de la mesa de víctimas de Rioblanco, también denuncia la persistencia de la violencia debido a la falta de cumplimiento:

el conflicto armado ahora cambió de nombre. Los señores de las farc hacen su dejación de armas, a ellos no les cumplen, entonces algunos están retornando a las armas. Cuando dejaron las armas, los paramilitares tampoco les cumplieron. Sigue el conflicto, pero ya con otro nombre. Las farc ya no se van a llamar farc, se dicen disidencias y hasta que el Estado no cumpla, siempre va a haber conflicto porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo.

La paz que defienden las mujeres

Las víctimas-supervivientes entrevistadas comparten una idea de paz expansiva, que va más allá del cese de hostilidades bilateral y recoge la necesidad de la igualdad de género y la erradicación de la pobreza, así como la necesidad de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Se trata de una concepción de paz alineada con la propuesta de “paz positiva” que planteaba Johan Galtung, el politólogo noruego pionero en los estudios de paz

y conflictos, y que, posteriormente, Birgit Brock-Utne desarrolló desde una perspectiva feminista, para hacerlo inclusivo.

De igual manera, desde el ámbito local, Venus Quiroga, apunta al concepto de paz positiva como única posibilidad para superar la violencia en Colombia. La coordinadora regional de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, habla con resignación: “Yo hasta ahora, con los años que tengo, no sé qué es vivir en paz en Colombia, son períodos de calma, pero no hay realmente paz, porque la paz empieza si hay justicia social”.

Para Venus, la causa victimizante final, que hace víctima a toda Colombia, es la desigualdad:

Víctima somos todos en Colombia, a excepción de la oligarquía, [pues] ellos son los victimarios, pero también los victimarios son víctimas de su propio mecanismo. Obviamente que las represiones no son gratuitas. Aquí también se han eliminado familias del poder. Pero no pasa nada, entre ellos continúa el dominio económico, político... Víctimas somos todos porque estamos llevando ese peso enorme de la desigualdad.

En la misma línea, Ángela Patricia Arias, víctima de desplazamiento forzado que impulsa actualmente proyectos productivos comunitarios junto con otras mujeres y trabaja en la pedagogía por la paz, en el municipio de Ataco (Tolima), considera que “aportarle a la paz no es solamente decir ‘quiero paz y la apoyo’, sino trabajar para erradicar la pobreza”.

Ángela Patricia explica que ella trabaja para crear oportunidades de vida en su municipio, uno de los factores por los que nació la violencia: “muchos de nuestros jóvenes tomaron las armas por falta de oportunidades (...). Yo pienso que, si nosotros le

apostamos al tema productivo, a la erradicación de la pobreza, es una manera muy importante de apoyar la paz”.

Otra característica común de la paz sobre la que las víctimas-supervivientes hablan es su carácter local. Desde la finca donde Ángela trabaja con mujeres víctimas-supervivientes, afirma que “la paz no es de un gobierno, es de la comunidad y de aquellos que hemos vivido y sentido en carne propia la violencia”.

Al estar condicionada a dinámicas locales, la paz requiere de una construcción diferencial según las necesidades de la población local. Por eso, como menciona la periodista colombiana Patricia Lara, la existencia de organizaciones constructoras de paz desde los territorios y para los territorios es una condición indispensable para el éxito del proceso de paz.

Para la gobernadora indígena Luz Ángela Yate, la paz también requiere de un sentimiento de comunidad y unión, así como de un compromiso con la mediación y la ayuda mutua:

la paz para mí será que vivamos todos en comunidad, en unión. Tener una unidad en la que nosotros y nosotras podamos contar con nuestras compañeras y compañeros en todo momento. Pero también ser escuchados, para que cuando nosotros tengamos algún tipo de problema violento, que vengan a mediar, a intermediar por nosotros, junto con las guardias y los compañeros mayores, que ellos son quienes tienen el conocimiento y la sabiduría.

Las mujeres víctimas coinciden en que la paz no viene sola, sino que requiere de un esfuerzo colectivo. Para Yuliana Cepeda, la paz es posible solo si la construimos entre todos. A su modo de ver

para que la paz se construya hay que poner mucho compromiso de todas las partes (tanto el campesino, como el concejal, como el gobernador,

como el presidente, fuerzas militares, medios de comunicación...). De nada sirve que yo en mi territorio esté trabajando por la paz, cuando un medio de comunicación está diciendo otras cosas.

El pesimismo es, por tanto, un factor que también es común en muchas de las mujeres entrevistadas. A pesar del esfuerzo y de las energías puestas durante los últimos ocho años, temen que sus iniciativas se ahoguen por las propias problemáticas sociales que alimentan la pobreza y la desigualdad y que son desoídas por las instituciones colombianas. Adonái Rincón cree, por ejemplo, que Colombia puede tener paz, pero denuncia que la paz actual que, en teoría, debe ser estable y duradera: “ya no es estable y ya está terminando”.

Por su parte, Norby Pulido, lideresa del municipio de Villarrica (Tolima), es todavía más pesimista pues cree que la paz en Colombia no es posible: “Si me dice un año atrás, sí. Pues porque todo estaba muy reciente y decíamos que, si cumplían los acuerdos de paz, maravilloso. Pero ahora que se están volviendo a organizar las guerrillas ya una lo ve como imposible”. Aun así, las mujeres persiguen el sueño de la paz. La paz para ellas, pero sobre todo para sus hijas e hijos, tal y como expresa Ángela Patricia Arias, cuando señala que:

En Colombia, los sectores que siempre hemos respaldado la paz hemos sido las víctimas, las que hemos vivido la violencia en carne propia. No queremos que nuestros hijos tengan que vivirlo, queremos que tengan oportunidades de estudiar, un mejor futuro, ser personas de bien (...). Nosotras desde el grupo de mujeres seguiremos apoyando la paz, que sea una paz incluyente, que no se quede en las cátedras y capacitaciones (...). Falta mucho por hacer en el territorio, pero seguiremos trabajando para que sea una realidad.

Una de las vías principales por las cuales las mujeres víctimas-supervivientes defienden la construcción de la paz es a partir de la narración de lo vivido, una práctica que tiene el potencial de transformar tanto a la narradora como a la sociedad, siempre y cuando ella esté dispuesta a escuchar.

La transformación de las víctimas narradoras

Hubo un tiempo en que el silencio era el mecanismo de supervivencia de las mujeres víctimas. Entre los valles, las calles a medio asfaltar, las veredas, los plátanos, los granos de café y las humildes cocinas, se escondían los relatos sobre vulneraciones de derechos de mujeres supervivientes del conflicto. Sin embargo, poco a poco las voces de las mujeres se han alzado y, con ellas, se ha desencadenado un proceso de transformación, tanto externo como interno.

Una de esas voces es la de Estebana Ortiz, defensora de derechos humanos, miembro activo de la organización afincada en Barcelona, Mujeres Pa'lante, y experta en equidad de género exiliada en España. Ortiz reconoce que

la narración provoca que la mujer se reconozca, se forme y se protagonice. Ese empoderamiento como mujer en el reconocimiento como una sujeta de derechos, que exige que sus valores sean respetados (...) Cuando la mujer reconoce todo esto, empieza a proteger lo que ella es y se vuelve rebelde en esa autoprotección.

La lideresa exiliada remarca que, para ella y para muchísimas mujeres: “formar parte de organizaciones de mujeres ha supuesto un crecimiento personal enorme”. Según cuenta Ortiz:

En el conflicto armado en Colombia, en las comunidades donde se documentaron muchos casos, se pasó de ver a una víctima que tenía miedo de

abrirte la puerta para contarte su historia a —después de todo un proceso de narración, de documentación de casos y de atención psicosocial— ver a esa misma víctima, organizada con otra, y con otra, llena de mucha fortaleza, denunciando públicamente al paramilitar o a todo aquél que realizó el hecho criminal

De acuerdo con ella, la narración tiene una doble función:

Como víctima, te permite compartir esa impotencia y ese dolor al narrarlo, y también estoy convencida de que esa narración se convierte en un instrumento que te permite tenerlo en la mano para que garantices tu derecho vulnerado. [...] El objetivo colectivo es la sororidad, que en el caso de las víctimas es esa parte psicosocial que te ayudará a fortalecerte internamente, y después poder ejercer ese papel protagonista de reivindicación del derecho. El colectivo te permite hacerte fuerte.

Norby Pulido, desplazada forzosamente de Villarrica (Tolima) a causa del conflicto, describe también el acto de empoderamiento que se circunscribe a la narración: “De repente, como una fortaleza. De que sí se puede, de que podemos, de que hubo mucho tiempo que estuvimos sometidos y que ahora pues tenemos voz y voto y podemos opinar y ayudar para que todo esto cambie”.

Como propone Juan David Villa Gómez, investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, el autorreconocimiento de las violencias e injusticias sufridas a través del relato de las experiencias es una de las claves del potencial transformador: de las mujeres víctimas en supervivientes defensoras de los derechos humanos.

De víctimas a defensoras de derechos humanos

Estebana Ortiz prosigue con su relato, y pone el ejemplo de Marta Díaz, lideresa del capítulo Atlántico del Movimiento Nacional

de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que ha sido amenazada de muerte en reiteradas ocasiones. De acuerdo a sus vivencias, relata: “Un ejemplo del proceso de empoderamiento es Marta Díaz: el mismo dolor, el mismo duelo la lleva a ser protagonista de una organización con todas las madres, abuelas, hijas, esposas de falsos positivos. Llevándola finalmente a exigirle al Estado que ella debe ser protegida”.

Las mujeres coinciden en destacar que, pese al dolor de recordar y pese al miedo a las consecuencias de alzar la voz, es necesario narrar y romper el silencio. Bajo esa consideración, para Adonái Rincón, lideresa de la Mesa de Víctimas de Rioblanco, las mujeres

nos quedamos calladas para sobrevivir; porque el miedo insuperable, entre otras cosas, hizo que nos calláramos. Pero ahora que tenemos la oportunidad de decir las cosas, pues las contamos. Cuando las cosas están mal hechas, hay que decirlo y no participar de ellas. Ni se participa, ni se queda callado, porque si me quedo callada estoy participando con el silencio.

A su vez, las víctimas-supervivientes son conscientes del potencial transformador de su relato. Heidi Johanna Rojas, víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, abunda en el sufrimiento que le suponía recordar y contar. Un dolor que intenta superar para alcanzar mejores beneficios y proyectos productivos para su comunidad.

El relato de Heidi Johanna habla de la conservación de la memoria:

Es muy duro uno acordarse, cierto, porque volverlo a narrar son como momenticos que a uno le tocan (...). Aunque es duro uno recordar todo lo que pasó, pienso que estas vivencias son lo que hace que la historia se

cuente. Y no ha sido nada fácil, porque en realidad uno volverse a acordar de tener que agarrar su maleta, carretera abajo... Uno ve que es muy poco el que quiere hablar. Y mucha gente en vez de hablar quiere olvidar. La verdad me da miedo, yo le digo. Si usted me lo pregunta personalmente, yo lo único que le pido a Dios es que esto llegue a manos de quien pueda interesar, pero para el bien de la comunidad.

Pero para poder contar, las entrevistas han resaltado la necesidad de la construcción de espacios de confianza y seguros, donde sus relatos obtengan una escucha activa de parte de otros actores de la comunidad. Luz Ángela Yate, gobernadora del resguardo indígena de Chenche Balsillas y superviviente de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, habla del miedo a contar y del sentimiento de desprotección, aún más grande entre las víctimas-supervivientes de violencia sexual, así como de la importancia que tiene para su comunidad indígena hablar, ser escuchados y creídos. La gobernadora indígena describe que:

hay muchos compañeros que están desplazados. Hay muchas compañeras que fueron víctimas de acceso carnal y hay ese miedo a contar. Siempre lo hemos tenido. Para nosotras es muy importante contarlas, pero también muy difícil. Yo he estado en consejos de seguridad en los cuales he denunciado que llegaban panfletos para mí y ellos decían que no era verdad. También hemos estado buscando la forma de protección, pero entonces dicen que no nos creen. Nos dicen que nos van a hacer unas pautas para que denunciemos acá o allá, pero qué pasa, si yo voy y denuncio allá, tardo más en hacer esa denuncia que en que vengan a hacerme algo.

Asimismo, Venus Quiroga, víctima-superviviente y coordinadora de Reiniciar (regional Tolima), insiste en la necesidad de recoger la memoria del conflicto y resalta la función sanadora de la narración:

La memoria, sí, para que no se vuelva a repetir o para hacer duelos. Esa es la historia que se tiene que recoger. Cuando se sienta una persona víctima del conflicto y cuenta todo, está haciendo sanación. Está sacando de lo más profundo de su ser todo eso que le está haciendo daño. Y vuelvo y repito, sin necesidad de llamársele perdón, es una forma de paz consigo mismo, de tranquilidad, de poder llegar a la tolerancia.

Las víctimas-supervivientes distinguen entre narración y reparación. Así, pese a reconocer el poder de la narración y el testimonio, Estebana Ortiz matiza que no ve la memoria histórica como una vía de reparación, pero sí como una “descarga emocional, que permite que se conozcan los hechos y que logra que la víctima exija sus derechos”. Para la activista de Mujeres Pa’lante, la reparación se conseguiría solo cuando las víctimas sean escuchadas y se tomen las acciones consecuentes que acaben con la impunidad

Constructoras de memoria histórica

A nivel comunitario las narraciones de las víctimas son una herramienta para escribir una memoria histórica colectiva que subvierta la visión hegemónica del victimario, tal y como defienden expertas y expertos en gestión de la memoria histórica. Los proyectos de recuperación de memoria desde el territorio sirven para superar los vacíos narrativos de la historia contada a través de canales oficiales.

La Ruta Pacífica de las Mujeres, una de las organizaciones de mujeres colombianas por la paz con mayor incidencia en la defensa de los derechos de las víctimas, sostiene que “las consecuencias de la violencia en las mujeres son impactos que necesitan escucharse y exigen un reconocimiento, porque son parte de la historia colectiva, de una verdad social que quiere ser compartida”. Las mujeres víctimas así lo expresan, sobre todo

con el objetivo de garantizar la no repetición de la violencia y de asumir el papel de la memoria como prevención.

Desde la finca colectiva donde lleva a cabo un proyecto productivo junto con una decena de compañeras en Ataco (Tolima), Ángela Patricia Arias —víctima de desplazamiento forzado—, defiende que “la lucha de los que no somos tan jóvenes es ir contando la historia a nuestros hijos para que no se pierda la historia”.

En la misma línea, Venus Quiroga opina que Colombia se encuentra en un periodo de rescatar la memoria, porque para ella el país no la tiene: “si tuviera realmente memoria, no estaría repitiendo la misma historia. Lo que nos toca es eso, reconstruir la memoria para no repetir la historia”, remarca. Ella ha escrito sus vivencias para no olvidarlas, acto que le permite exteriorizar el dolor guardado por décadas dentro del cuerpo:

Yo creo que es una especie de escape, el escribir. Y eso lo digo porque a nosotros nos tocó aquí levantar la historia económica, política, cultural de la Unión Patriótica. Todo ese desastre tan bárbaro que fue el exterminio de la Unión Patriótica aquí en el Tolima. Y una manera de sacar eso a flote es ir escribiéndolo. Los casos más impactantes, más emblemáticos, yo los tengo escritos. Casualmente por eso, porque era un escape. Lo que llamamos nosotros, y le decimos a las víctimas, hacer el duelo.

Cuando Ángela Patricia decide contar sus vivencias a su hija, o Venus las pone por escrito, para que se conviertan en fuente de memoria, las narradoras contribuyen a contrarrestar y deconstruir la historia escrita desde las visiones de los victimarios. A su vez, Estebana Ortiz cuenta que, para ella “es muy importante explicar todo esto a las jóvenes, ya que la intención es formar multiplicadoras de los derechos”.

Porque, como sostiene la lideresa de Rioblanco, Adonái Rincón, es muy importante que sean las mujeres las que cuenten el conflicto: “contar las cosas a través de nosotras las mujeres, que lo hemos sentido más. Porque los hombres, obviamente también han sentido, pero por su machismo esconden muchas cosas”.

Para Luz Ángela Yate estamos ante el momento de escuchar a las que no han sido escuchadas. La gobernadora del resguardo indígena, Chenche Balsillas, destaca que en esta tarea la labor de las personas mayores —que sufrieron durante décadas el conflicto— es fundamental, pues “llegó la hora de que la verdad sea contada desde nuestros propios abuelos y de nuestras propias abuelas porque ellas son las que saben”.

Desde la otra orilla del Tolima, en la vereda La Colonia de Villarrica, Norby Pulido explica que se dio cuenta “de la importancia de la región y de llevar la historia a otro lado contada de una forma diferente a la que lo han hecho normalmente”. Para Pulido, hija de campesinos que sufrieron en los bombardeos de Villarrica la crudeza del conflicto armado ya en tiempos de La Violencia (entre 1930-1960), la historia necesita recurrir a las fuentes de las víctimas que vivieron los hechos en el campo, en las regiones. Según la víctima-superviviente y lideresa local en Villarrica

la historia no ha sido verdaderamente contada, y las personas que conocen la verdadera historia ya se están acabando. Nosotros podemos hablar de historia, pero no puede ser la verdadera. Siempre vamos a omitir o vamos a aumentar algunas cosas. Por temor, y porque no han tenido en cuenta a los verdaderos historiadores. Estamos hablando de una guerra de hace más de 50 años. Y existe el temor por la persecución.

Por otra parte, las mujeres también establecen un vínculo entre memoria histórica, justicia, paz y reparación. Como en el caso de

Flor Múnera, defensora de derechos humanos y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien reconoce que hace falta una memoria histórica bien construida, una memoria jurídica para la paz:

Aquí se cometieron crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, asesinatos y desapariciones que ofendieron a la humanidad. Pero si no se puede hacer eso, si no se puede reconocer y decir realmente que eso pasó, a la memoria histórica le va a faltar algo. Es decir, esta mesita con tres patas no va a estar bien derecha, siempre va a estar torcida, eso va a pasar con la memoria histórica.

Más que narrar

Cuando parece que el poder de las palabras resulta insuficiente para contar lo ocurrido, las víctimas buscan otras estrategias para narrar, otros lenguajes para explicar y transmitir sus vivencias. Tejer, pintar, escribir obras de teatro, hacer poesía, producir música, bailar, o actuar son algunas de las técnicas que las mujeres víctimas-supervivientes utilizan para representar su dolor.

Según relata el informe *Memorias en tiempos de Guerra*, realizado por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)³⁵, al reconstruir y representar las memorias dolientes “se movilizan sentidos, se ubican hitos espaciales y temporales y se le da un significado, un propósito y un futuro al acto y al trabajo de la memoria”.

Luz Marina Becerra, lideresa de la Coordinadora de Mujeres Afrodescendientes en Resistencia (La Comadre), describe en qué

35 Este material puede consultarse en: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Memorias-en-tiempo-de-Guerra.pdf>

consistieron las jornadas de sanación de la Comadre, durante las cuales las víctimas-supervivientes compartieron sus vivencias de diferentes maneras:

La primera jornada de sanación fue cantar los alabaos —cantos a los muertos, canciones de funeral cantados casi siempre por mujeres y sin el acompañamiento de instrumentos—, algo que en las ciudades no se ha permitido hacer. La segunda jornada fue hablar de las hierbas, la medicina ancestral con la que nos curábamos cuando estábamos en nuestros territorios rurales. La tercera jornada fue hablar de los mitos y leyendas, y la manera que nos inculcaban valores de respeto, solidaridad, cuentos... Finalmente, la cuarta jornada fue con juegos.

Los esfuerzos colectivos establecen relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, y entre los dolores de las víctimas, los hechos y sus responsables. Un aspecto preponderante para el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR, que puede evidenciarse cuando transcriben un fragmento del canto abalao, originario del pacífico colombiano, en el informe *Memorias en tiempos de guerra*:

Ay salve, ay salve oh tierra madre,
luego que arrancan al negro del África
madre tierra y acá lo traen de esclavo,
a labrar ríos y selvas, ay salve, ay
salve oh tierra madre...Nuestra vida defendimos,
nos unimos en palenques,
cimarrones nos volvimos, ay salve,
ay salve oh tierra madre...de la tierra se
adueñaron y a los negros masacraron...
del mal acaparamiento en tierra de
pocas manos, es lo que vivimos...
y ahora vienen con plata y tecnología a
robarse nuestras tierras y a acabar con nuestra vida...

No podemos olvidar
lo largo de este alabado,
son más largos tantos años.

Luz Marina retoma su relato y describe sus programas de incidencia:

tenemos un programa de cuidado al cuidador, siguiendo una estrategia de reparación desde la reconstrucción de la memoria. Las cuidadoras, además de tener sus propias historias de violencia, quizás llevan quince o dieciocho años escuchando y documentando historias desgarradoras de violencia que han sufrido otras compañeras, pero no han hecho trabajo de sanación propio.

Al igual que La Comadre, gran parte de las organizaciones de mujeres sobrevivientes al conflicto armado destacan la importancia de narrar las experiencias traumáticas que han vivido. La asociación Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz ayuda a las mujeres a expresar las situaciones que las hicieron víctimas por medio de la elaboración de bordes en telas, una actividad que les ha ayudado a sanar el dolor que ha dejado en ellas la guerra.

Otra de las iniciativas que realizan las mujeres de la organización es la creación de tapices con retazos de tela y dulces típicos de la zona para presentar y curar el sufrimiento ocasionado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando, en el 2000, irrumpieron en María la Baja (Bolívar) y asesinaron a 13 campesinos.

Por su parte, un ejemplo adicional de organización de mujeres narradoras y tejedoras de memoria, es el de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón (Antioquia). La asociación nació en el año 2001 y se propuso reivindicar la

memoria de los familiares sobre los distintos hechos victimizantes, con proyectos como el Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón y el Archivo Digital por la Paz y la Esperanza de Sonsón. A su vez, Estebana Ortiz destaca que desde su condición actual de víctima

se necesita una fuerza ‘*supermayor*’ que obligue a la institucionalidad a no vernos como enemigos a los que hacemos ese trabajo de recuperación de los testimonios, porque hay países a los que les interesa tener el tejido social fracturado, pues se sostienen de esta manera. Así, todo aquel que aporte a esta construcción del tejido social, se convierte en su enemigo.

Para Estebana la narración de las víctimas puede verse como una esperanza. Sin embargo, asegura que debe existir “un factor en redes y organizaciones mundiales, a nivel internacional, para lograr unos objetivos. Las luchas tienen que volverse internacionales, o si no, nos seguirán matando”.

Defensoras en peligro

Solo en 2020, más de cien líderes sociales han sido asesinados en Colombia, según las cifras publicadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz³⁶, a mediados de mayo.

“Después de una marcha, después de una protesta, después de una denuncia... esperas el golpe. Tienes que cuidarte mucho”, declara Estebana Ortiz, defensora de derechos humanos especializada en violencia de género, quien tuvo que exiliarse en España a mediados de 2018 después de ser amenazada de muerte. Ortiz relata que, cuando residía en Colombia

36 Diarios, como El Universal, hicieron eco de estas cifras: <https://www.eluniversal.com.co/colombia/100-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-en-2020-segun-indepaz-jb2838931>

coordinaba el **proyecto de organizar y formar a los garantes de la Ley 1257 [Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres]**, en los 23 municipios del departamento del Atlántico. Organizaba y formaba a los grupos de mujeres víctimas de violencia de género, hacíamos pactos simbólicos entre las dos partes anteriores y entregamos un documento de propuesta de mejora, o de garantía de aplicabilidad de la Ley 1257.

Originaria de Barranquilla, en el norte de Colombia, Estebana militaba en diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y también hacía parte de la Red de Mujeres. A raíz de su experiencia en casos de violencia de género, explica que cuando la Gobernación del Atlántico necesitaba a una experta en equidad de género, la contactaban. Ella asumió el riesgo de coordinar un proyecto de equidad de género con funcionarios públicos:

Asumo el riesgo de confrontarme a ellos cuando, con los casos en la mano, les expongo que no están cumpliendo la Ley 1257, que protege a las víctimas de la violencia de género. (...) Imagínese decirle a un abogado, que conoce las leyes escritas mejor que yo, que en la práctica no lo está haciendo como debe hacerlo, demostrándoselo a partir de casos concretos con víctimas. Imagínese ese riesgo. Ganarse enemigos por la no aplicabilidad de la ley. Yo lo asumí porque es una orden de aquí [y lleva su índice al corazón].

Estebana cuenta cómo se vio obligada a exiliarse en España:

La gente me iba avisando, ‘que me iban a buscar, que me iban a buscar...’, pero yo continuaba. Hasta que llegó un día que yo no llegué a casa. Salí de un taller con una comunidad, y en el camino, como cumplía años, las amigas me ofrecieron una comida y me fui con ellas a comer. Pero ellos pensaban que iría directa a casa, y allí en la casa me estaban esperando.

Preguntaron a mi madre con nombre y apellidos por mí. Entraron a mi casa, a mi cuarto. Por fortuna mi hijo no salió de su cuarto, pero le dijeron: ‘Hoy te quedas sin mamá’. Y a mi madre le dijeron ‘hoy te quedas sin nuera’, porque como ella es blanquita y yo soy morena, se pensaron que era mi suegra. Miré el teléfono y tenía muchas llamadas perdidas de mi mamá. Pensé, ‘¡ay que pesada!’, porque ella me controlaba mucho. Aparté el teléfono e intenté continuar con mis amigas, pero ya otros conocidos me avisaron de lo que había ocurrido. Finalmente, esa noche me fui con unos amigos que me ofrecieron refugio y me fui para Bogotá, también allá tengo una hija estudiando. Pero en la ciudad me dijeron que no me podía quedar en el país, y ya tuve que brincar hacia Madrid. Y de Madrid a Valencia, y de Valencia a Barcelona. Desde ese día de mi cumpleaños no pude volver a mi casa. Pero todas mis compañeras de las diferentes organizaciones me han ayudado mucho. Sin ellas no habría tirado adelante mi familia.

De su experiencia de desplazamiento forzado, de su exilio, Estebana remarca que se resistió mucho tiempo a irse porque se sentía necesaria en su comunidad. “Imagínese el dolor de estar aquí cuando siento que allí necesitan centenares de Estebanas. ¿Por qué tengo que huir de mi país? ¿Por estar haciendo el bien?”, se pregunta Ortiz, que asegura que conoce al menos 30 lideresas exiliadas.

Desde que reside en Barcelona, Estebana se ha integrado a Mujeres Pa'lante³⁷, un colectivo de expatriadas fundado por exiliadas colombianas que, como reza su lema, son conscientes de que “lo importante es saber que al llegar hay una mano de mujer que nos acompaña”. Uno de sus objetivos principales es “romper el cliché de la mujer migrante víctima”.

37 Cuyo portal web figura en la siguiente dirección: <http://www.mujeespalante.org/>

Desde que se formó, alrededor del año 2007, Mujeres Pa'lante ha creado una cooperativa de trabajo que ofrece cursos, asesorías y acompañamiento para mujeres migrantes, además de un servicio de catering y diferentes talleres de fortalecimiento personal. En cuanto a trabajo por la paz, la organización promueve la solución pacífica de los conflictos y la formación en mediación entre las mujeres a través de una amplia oferta de cursos de negociación femenina.

Las cifras de la vergüenza

Según recoge la subdirectora de la Corporación Humanas, Luz Piedad Caicedo, entre febrero de 2018 y marzo de 2019 se registraron más de 400 amenazas a lideresas. Caicedo denuncia que “los programas de protección de mujeres no funcionan”, y que por eso “hay mujeres que, pese a serlo, no quieren ser llamadas lideresas”.

Luz Marina Becerra, lideresa de la Coordinadora de Mujeres Afrodescendientes en Resistencia (La Comadre), coincide con Caicedo y asegura que

las mujeres que luchan por los derechos humanos y la paz siguen viviendo la estigmatización por el trabajo de liderazgo en su territorio, son violentadas sexualmente... Sufrimos porque el Acuerdo de Paz generó mucha esperanza en casos de mujeres, pero vemos que esta paz que habíamos soñado no ha llenado las expectativas, porque el conflicto continúa.

De igual manera, Estebana Ortiz suscribe las palabras de sus compañeras y se pregunta:

¿Qué ha traído toda esta lucha por los derechos humanos y sociales a las mujeres? Amenazas, aumento de los feminicidios... La denuncia

empodera a las víctimas, pero a la vez la pone en peligro a ella y a los defensores de derechos humanos que la acompañan. Las defensoras de derechos humanos somos **víctimas colaterales del conflicto armado**, ya que en la medida que vas ganando ese protagonismo te vas convirtiendo en víctima como lideresa social.

Las cifras oficiales corroboran las palabras de las lideresas, y evidencian que la desprotección que sufren los líderes y las lideresas sociales que luchan por la paz y los derechos humanos en el territorio continua. La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que, en 2019, se reportaron más de 1.300 amenazas a defensores de derechos humanos.

Adicionalmente, el informe del Instituto de Estudios por el Desarrollo y la Paz (Indepaz) *Todos los nombres, todos los rostros*³⁸, denuncia que 702 líderes sociales y defensores y defensoras de la vida y del territorio fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. Además, según el informe de la Fundación Ideas para la Paz *Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental. Tendencias en la pandemia*³⁹, entre enero y abril de 2020 “las agresiones a líderes sociales aumentaron un 10 %, y los homicidios un 53 %”.

De igual forma, en su informe de 2017/2018 de la situación de los derechos humanos en el mundo⁴⁰, Amnistía Internacional (AI) también encontró un aumento del número de homicidios de mujeres, en puestos de liderazgo en Colombia. Estebana Ortiz, igual que reconocidas académicas feministas como Judith Butler, considera que el empoderamiento de las mujeres está

38 Recuperado de <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/08/SEPARATA-DE-ACTUALIZACION-mayo-Informe-Todas-las-vozes-todos-los-rostros.-23-mayo-de-2019-Indepaz-Marcha-Cumbre.pdf>

39 Este puede consultarse en https://ideaspaz.org/media/website/FIP_SFC_DINAMICAS.pdf

40 Ver en <https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/6700/2018/es/>

relacionado con el aumento del feminicidio en Colombia, y en la costa Caribe colombiana, en particular:

Te dicen ‘la mató el marido’. Sí, pero la mató el marido por toda la presión social que el mismo sistema hace. Porque esa mujer sale a un proceso organizativo. Esa mujer ha de salir a una reunión semanal, o si ya está en el nivel departamental ha de viajar, o si ya está a nivel nacional, ha de agarrar un avión. Entonces termina el marido asesinándola por la presión que el mismo Estado te hace.

Por su parte, Luz Piedad Caicedo destaca que, pese al aumento de feminicidios, sigue siendo mayoritario el asesinato de líderes hombres, pero ahora las mujeres son más visibles. Según las cifras del informe de la Comisión Colombiana de Juristas publicado en diciembre de 2018 ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo⁴¹, el 83,65 % de las víctimas de violaciones del derecho a la vida, registradas en el período del post acuerdo, pertenecían al género masculino, el 14,78 % al femenino y el 1,55 % a la población LGTB.

Desamparadas por la impunidad

Las cifras de asesinatos de líderes sociales demuestran una clara falta de garantías de seguridad por parte del Estado colombiano, no obstante, los resultados de algunas investigaciones realizadas recientemente permiten ir más allá.

Según el informe que el Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michel Frost, publicó en marzo de 2020⁴²,

41 Recuperado de https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/cuales_son_los_patrones.pdf

42 Este documento puede consultarse en <https://daccess-ods.un.org/tmp/8851954.34093475.html>

la tasa de impunidad sobre asesinatos de personas defensoras de derechos humanos está alrededor del 95 %. Además de la preocupación por tan altas tasas de impunidad, Michel Frost reprueba de manera rotunda las declaraciones de algunos dirigentes políticos, funcionarios públicos, personas influyentes, y también del sector privado y miembros de grupos armados ilegales, que estigmatizan a los **y las defensoras**, bajo calificativos de “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollados” o “informantes”.

Flor Múnera, luchadora sindical y defensora de derechos humanos, quien tuvo que salir desplazada de Tolima por un orden de captura proveniente de organismos de seguridad del Estado, y quien posteriormente se exiliara por su implicación en las luchas campesinas, también destaca el peligro y la **estigmatización** que reciben las personas defensoras de los derechos sociales en Colombia.

Hoy, desde Ibagué, la capital del Tolima, Múnera es la portavoz de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSP), y transmite el dolor que le producen todos los compañeros que ha tenido que enterrar:

Hemos padecido —explica Flor— uno de los crímenes más atroces de esta humanidad, la desaparición forzada. Tenemos compañeros que han sido desaparecidos, detenidos, exiliados y asesinados y ha sido una de las cosas que más le marcan a uno en este trabajo, es como perder todos esos compañeros que lo han acompañado.

En relación con la impunidad, el Programa Somos Defensores consultó a la Fiscalía General de la Nación con respecto al estado de las investigaciones de 563 casos de homicidios registrados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH). Los resultados muestran que tan sólo el 8,5 % de los casos se

encuentra en la fase de ejecución de penas y la mayoría de los casos (el 64 %) se encuentran en estado de indagación.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI)⁴³ denuncia que muchas amenazas de muerte contra activistas se atribuyeron a grupos paramilitares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las autoridades no identificaban a los responsables de las muertes que seguían a las amenazas.

La situación de indefensión e impunidad hace que algunas de las lideresas no se atrevan a denunciar, como Estebana Ortiz, que recela de la escasa protección proporcionada por los organismos estatales:

Yo como víctima, en mi caso, no pude hacer una denuncia. Hacer una denuncia de la naturaleza de mi caso en mi país es bastante arriesgado, ya que no se tiene claro quién es el enemigo, y como se filtra mucha información en las redes gubernamentales, la denuncia muchas veces facilita información a tus perseguidores. Por eso la mayoría de las líderes preferimos no denunciar. Por riesgo.

La desconfianza que siente Estebana hacia el sistema judicial colombiano no es un caso aislado. La lideresa exiliada recuerda el caso de dos compañeros y una compañera del departamento del Atlántico que denunciaron, pidieron protección y fueron asesinados. “El compañero Cuero, de Malambo; Brenda en Barranquilla... y así ha pasado con muchos. Se corre más riesgo denunciando”, insiste Ortiz.

De otro lado, los informes de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) denuncian que casi la mitad de los líderes muertos han sido

43 Documento citado con antelación

asesinados en sus viviendas, lo que Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la CCJ, califica como una “actuación metódica y selectiva”. Bonilla denuncia que “sectores del Estado han sido cómplices de la estrategia paramilitar que continúa siendo el principal victimario de líderes”.

El informe de la CCJ ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo publicado en diciembre de 2018⁴⁴ identifica los presuntos grupos de victimarios responsables de los asesinatos, amenazas y ataques. Atribuye un 17,12 % de los hechos victimizantes a los paramilitares, un 13,62 % a grupos armados sin identificación, un 7,39 % a desertores y disidentes de las Farc y un 4,28 % al Ejército Nacional.

El informe de la CCJ también recoge que, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, la organización política que ha sufrido mayor número de asesinatos de sus líderes es el movimiento político Marcha Patriótica. La investigación de la Comisión Colombiana de Juristas evidencia que “persisten condiciones para que continúen las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra las comunidades afectadas por la minería de carbón a gran escala y los megaproyectos hidroeléctricos, contra sus organizaciones y sus líderes(as)”, a la vez que devela relaciones entre empresas mineras e hidroeléctricas con el paramilitarismo.

Todas estas violaciones han quedado impunes tras actuaciones irregulares. Según sostiene el documento de la CCJ, cuando un fiscal empieza a investigar los vínculos entre megaproyectos y los asesinatos, puede acabar trasladado. Tal fue el caso documentado de la fiscal que investigaba la relación entre el asesinato selectivo de campesinos acusados de auxiliar a las guerrillas de las farc-EP

44 También, citado con antelación

y el ELN —y el desarrollo del proyecto Hidroituango— quien fue trasladada un año después de la Unidad Nacional de Justicia y Paz al departamento del Caquetá.

Además, el informe de la Comisión Colombiana de Juristas también resalta que

desde finales de 2017 se comenzaron a conocer hechos de corrupción al interior del Comando General de las Fuerzas Militares, relacionados con la desviación de recursos reservados de inteligencia y contrainteligencia para la adquisición ilegal de equipos de inteligencia y seguimientos ilegales a defensores de DDHH y otros sectores sociales (...) [Según los autores de la investigación] esto puede abrir la posibilidad de plantear como hipótesis que los usos ilegales de la inteligencia estatal han tenido origen en los más altos niveles de planeación de las instituciones militares del Estado y pueden obedecer a la continuación atávica de la lógica del “enemigo interno” inscrita en la doctrina de las fuerzas armadas, lógica que fundamentó miles de crímenes de Estado.

De acuerdo a Bonilla⁴⁵, coordinador del informe de la CCJ, la explicación al aumento de asesinatos de líderes “se encuentra en el hecho de que la implementación a cabalidad del Acuerdo supone transformaciones sociales que ponen en riesgo el rol y la posición hegemónica de ciertos grupos de poder que transitan entre la legalidad y la ilegalidad”.

El retroceso de la lógica de la paz

En los últimos años, diversas investigaciones periodísticas han revelado funcionamientos internos de las Fuerzas Militares

45 Leer este comunicado en <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/asesinatos-de-lideres-sociales-metodicos-y-selectivos-segun-investigador-camilo-bonilla-articulo-834889/>

contrarios a la lógica de la paz, que recuerdan dinámicas practicadas durante los 2000, con un alto riesgo de vulneración de derechos humanos y asesinatos de civiles. Una investigación conjunta del *The New York Times* y *El País*⁴⁶ develaba, en mayo de 2019, que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión, ya que el mayor general Nicacio Martínez Espinel, entonces comandante del ejército de Colombia, ordenó a sus tropas duplicar la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla.

Según recogen las entrevistas a militares realizadas por los dos diarios, debido al incremento de la demanda de resultados surgió un nuevo patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos que evoca las dinámicas de los casos de “falsos positivos”, de la década de 2000. Entre 2002 y 2008, un estimado de 5.000 civiles o guerrilleros fueron asesinados fuera de combate, según las Naciones Unidas.

Tal y como ocurrió hace diez años, de nuevo se alienta a los comandantes para que realicen operaciones cuando aún no están seguros de sus objetivos y, una vez más, se ofrecen incentivos a los soldados que aumentan sus muertes en combate. Adicionalmente, de acuerdo a las declaraciones recogidas por *The New York Times* a inicios de 2019, los militares colombianos recibieron órdenes de “hacer lo que sea”, incluso el uso de grupos paramilitares, para obtener información sobre bandas armadas rivales.

A esta polémica orden, ya retirada, se le suman la trama de espionaje contra más de 130 abogados de derechos humanos, periodistas, corresponsales extranjeros, opositores y hasta el ex

46 Este material se encuentra disponible en <https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/espanol/america-latina/colombia-ejercito-falsos-positivos.html>

secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, según reveló la revista *Semana* en mayo de 2020, así como las denuncias de violaciones colectivas contra menores⁴⁷ pertenecientes a comunidades indígenas, que obligaron al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, a comparecer ante los medios de comunicación.

Luz Ángela Yate, gobernadora del resguardo indígena de Chenche Balsillas, confirma en voz propia la desprotección que siente de los organismos oficiales: “Muy frecuentemente no nos escuchan, no nos creen, y por eso nos da miedo salir a denunciar. Es muy difícil contar estas cosas, porque al Estado no le interesa mucho lo que nosotras podamos decirle”.

Los Acuerdos de Paz contemplaban la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), como “un espacio en el que participaban entidades del Gobierno y sociedad civil y que fue altamente valorado por líderes y organizaciones sociales, por su importancia para aportar una solución a la violencia en los territorios”, tal y como recuerda el Programa Somos Defensores en su informe anual 2019⁴⁸ titulado *La Ceguera*. A su vez, mediante el Decreto 1314, en agosto de 2016 se creó la Comisión Intersectorial de Garantías para Defensoras y Lideresas (CIG Mujeres).

Sin embargo, con el cambio de Gobierno el espacio se transformó. En su informe de 2020, Michel Frost afirmaba que, aunque —por Decreto— la CNGS se debe reunir una vez al mes, solo se había citado dos veces desde el cambio de gobierno.

47 Información recuperada de: <https://elpais.com/internacional/2020-07-04/el-ano-horrible-de-las-fuerzas-militares-de-colombia.html>

48 Disponible en <https://drive.google.com/file/d/1jYXd8GjrDjOERyTOIG5gDA4A55UE-qYVN/view>

Ante la situación de riesgo e indefensión en la que se encuentran los y las defensoras, organizaciones de mujeres como Sisma Mujer han tomado la iniciativa de protegerse entre ellas. Así, en agosto de 2016 Sisma Mujer entregó al Estado y a la comunidad internacional el Programa de Garantías para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos⁴⁹, una propuesta construida junto con otras 58 organizaciones defensoras de derechos humanos y, en palabras de sus miembros, “en algunos apartados con el gobierno, en otros, a pesar del mismo”.

Las mujeres colombianas, sujetas históricas y políticas

El movimiento de mujeres y feministas de Colombia ha superado todas las adversidades que el propio conflicto y la ausencia institucional les ha generado. A pesar de los miles de obstáculos ha logrado mucho más que la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos y la agenda colombiana para la paz.

Tal y como argumentan las investigadoras de la Universidad Simón Bolívar, Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez⁵⁰, las colombianas “mandaron un mensaje claro a la sociedad, esto es, que son sujetas políticas, conocedoras de sus derechos y están dispuestas a ejercerlos; están preparadas y conocen los problemas del país”. Las politólogas concluyen: “el mensaje que han dejado es contundente, si la paz no va con las mujeres, tampoco lo hacen la democracia ni la justicia”.

49 Puede consultarse en: <http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf>

50 Recuperada en https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/121/la_paz_sin_las_mujeres_no_va_el_proceso_de_paz_colombiano_desde_la_perspectiva_de_genero

Estebana Ortiz destaca, en la misma línea que “no hay paz posible sin justicia social ni sin seguridad vital”, una idea que ha sido comprobada en cientos de investigaciones realizadas en el país. Por ejemplo, Juliana Martínez, actual secretaria de las Mujeres de la ciudad de Medellín, sitúa el foco de la desigualdad en los orígenes del conflicto. Para ella “el conflicto sociopolítico que vive Colombia desde mediados del siglo xx tiene sus raíces en la exclusión y la desigualdad social de las que se ven más afectadas las mujeres”.

La lideresa de La Comadre, Luz Marina Becerra, resume el espíritu de la movilización de las mujeres que continúan en pie de paz: “Valoramos lo que pasó en La Habana, pero la paz va más allá de entregar las armas. Tiene que ver con la materialización de los derechos”.

[1] Ley 21 de 1991 (Marzo 4) Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.

[2] “Ley 89 de 1890 (Noviembre 16) “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada” (sic). Dicha ley determina las facultades de autogobierno de los cabildos.

[3] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, mayo 19, sentencia de Jhon Fredy Rubio Sierra y otros, página 169.

[4] En 2014 el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena firmaron el “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”, según recoge la Mesa Permanente de Concentración con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

[5] En 2017, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las organizaciones indígenas firmaron unos acuerdos que pusieron fin a la Minga Indígena Nacional que las comunidades habían iniciado para, entre otras cosas, exigir el cumplimiento real de los Acuerdos de Paz.

Este documento hace parte de una colección de dos libros resultado de la investigación “Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional” (2019) en donde la Corporación Unificada Nacional de educación Superior CUN liderará el proceso editorial de la mano de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad del Tolima en el marco de cooperación y el proyecto Factores de persistencia de la violencia en el sur del Tolima (Colombia), rearme y reincidencia de combatientes (2002-2020) desarrollado en 2021. Presenta los relatos derivados del trabajo en campo, de las mujeres participantes. Enfatizando en la necesidad de rescatar las narrativas que se tejen alrededor del conflicto armado y particularmente desde las mujeres víctimas-sobrevivientes, ya conceptualizado en el primer libro.



cun

Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior

IGLADA.MINEDUCACION